



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
MAESTRÍA EN HISTORIA ECONÓMICA
Y DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS

NEOLIBERALISMO REFORMADO:

**ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS
POR LA CONCERTACIÓN (1990-2010) EN POS DE CONTINUAR
LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS HEREDADAS POR EL RÉGIMEN
MILITAR Y SU DISCURSO COMUNICACIONAL BASADO EN LOS
LINEAMIENTOS DE LA TERCERA VÍA**

**TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN HISTORIA
ECONÓMICA Y DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS**

Banyeliz Arlette Muñoz Alveal

DNI: 95.315.421

Profesión: Licenciada en Comunicación Social y Periodista

Especialista en Comunicación Política (FSOC-UBA)

Profesor guía: Eduardo Madrid

Buenos Aires, 2017

CONTENIDO

RESUMEN.....	6
INTRODUCCIÓN	7
ESTADO DE LA CUESTIÓN.....	11
CAPÍTULO I: NACE UNA DOCTRINA: EL NEOLIBERALISMO.....	16
I. Antecedentes históricos.....	16
II. El despertar de la ideología.....	20
III. Principales fundamentos teóricos.....	21
IV. La instalación del sistema económico en Latinoamérica y en el mundo.....	24
i. Rol de la Cepal y el desarrollismo.....	24
CAPÍTULO II: ANTECEDENTES EN CHILE	27
I. Chile y el liberalismo económico en sus inicios	27
i. Crisis del modelo exportador	30
ii. Solución norteamericana: Money Doctors	31
II. Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)	33
III. Los años cincuenta	35
i. El problema: alta inflación	36
ii. Ayuda de expertos del país del norte: misión Klein-Saks.....	38
IV. La guerra contra el desarrollismo.....	43
V. Convenio entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica	46
i. La Escuela de Chicago	49
ii. Las razones del acuerdo	51
VI. Triunfo político de Salvador Allende.....	53
VII. La Guerra Fría y sus consecuencias en Chile.....	59
VIII.El camino de los neoliberales al poder (1970-1974).....	62
CAPÍTULO III: LA DICTADURA Y EL MODELO	64
I. El Ladrillo	64
i. Antecedentes	64
ii. Diagnóstico observado	66
iii. Visión de los efectos de las políticas promovidas por Allende	68
iv. Objetivos del programa	70
v. Políticas económicas especificadas	71
II. Ausencia de un proyecto concreto.....	75
III. Principales reformas neoliberales impulsadas.....	78

i.	Contexto económico.....	78
ii.	La Junta Militar	79
iii.	Triunfo neoliberal sobre los desarrollistas	81
iv.	Cambios impulsados	82
v.	El neoliberalismo en áreas estratégicas	85
CAPÍTULO IV: LA TERCERA VÍA		87
I.	Consideraciones preliminares	87
II.	Aproximaciones del término	88
III.	Antecedentes históricos.....	92
i.	Estado y Estado de Bienestar	95
ii.	La socialdemocracia.....	96
iii.	Un mundo dividido.....	97
iv.	El caso inglés.....	98
IV.	Anthony Giddens: su análisis y la teorización del concepto	99
i.	Socialdemocracia y neoliberalismo.....	101
ii.	Fundamentos históricos del concepto.....	102
iii.	La política de la Tercera Vía	103
iv.	Valores de la doctrina.....	105
v.	Estado y la sociedad civil	105
vii.	Funciones del estado	106
viii.	Sociedad civil	107
ix.	El estado social inversor.....	108
x.	Estrategias de inversión social	112
V.	Análisis de la temática.....	115
i.	Principales líneas de acción de la tercera vía	115
VI.	Latinoamérica y la Tercera Vía.....	121
VII.	Caso chileno: discursos presidenciales.....	126
i.	Patricio Aylwin Azócar (1990-1994).....	126
ii.	Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000)	140
iii.	Ricardo Lagos Escobar (2000-2006).....	145
iv.	Michelle Bachelet Jeria (2006-2010)	159
VIII.	Análisis Actual	163
CAPÍTULO V: LOS ACTORES QUE AVIVARON EL MODELO		164

I.	Así nace el proyecto concertacionista	164
II.	Partidos que lo componen y sus principales postulados.....	167
i.	Partido Demócrata Cristiano (DC):.....	167
ii.	Partido Socialista (PS):.....	169
iii.	Partido por la Democracia (PPD):.....	171
iv.	Partido Radical Social Demócrata (PRSD):	173
III.	Las elites empresariales.....	175
i.	Su rol en la historia.....	178
ii.	La Concertación y los empresarios	181
IV.	Políticas impulsadas por las cuatro administraciones	185
i.	Primer periodo presidencial: Patricio Aylwin.	185
ii.	Segunda administración: Eduardo Frei Ruiz Tagle.....	196
iii.	Tercera Administración: Ricardo Lagos Escobar.....	200
iv.	Cuarta administración: Michelle Bachelet	209
CAPITULO VI: EVALUACIÓN DE SUS POLÍTICAS.....		218
I.	Análisis de sus medidas.....	218
II.	Resultados sociales.....	220
III.	Ámbito laboral	227
IV.	Resultados redistributivos	227
V.	Apertura comercial.....	228
VI.	Inversión extranjera directa.....	233
VII.	Educación de mercado	240
VIII.	Libertad de elección: la salud.....	242
IX.	Privatización: el caso del agua	244
i.	Problemática del asunto	245
ii.	Normativa vigente	247
iii.	Mercado de las aguas	248
iv.	Defensa del modelo.....	249
v.	Efecto lobby	250
CAPÍTULO VII: ¿POR QUÉ SE DECIDIÓ CONTINUAR EL MODELO?		251
I.	Contexto mundial	251
II.	Situación local	253
CONCLUSIONES		257

ANEXOS.....	263
I. Entrevista a Rolf Lüders.....	263
II. Entrevista a Gabriel Salazar.-.....	266
III. Entrevista a Patricio Navia.....	268
IV. Consulta vía mail a Alfredo Jocelyn-Holt.....	270
BIBLIOGRAFÍA.....	271

RESUMEN

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) se sucedieron sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que dejaron profundas secuelas en la sociedad chilena. Pero, a la vez, también se caracterizó por alterar completamente la estructura económica de Chile dada la instalación del neoliberalismo, que fue profundizado, ampliado y consolidado por la Concertación, una coalición de partidos políticos de izquierda, centroizquierda y del centro, que agrupó a los principales sectores de la oposición al régimen militar de Pinochet, a quien derrotó en el plebiscito nacional del 5 de octubre de 1988. Dicho bloque estuvo compuesto por la Democracia Cristiana (DC), el Partido Por la Democracia (PPD), Partido Radical Social Demócrata (PRSD) y el Partido Socialista (PS), quienes gobernaron desde 1990 hasta el 2010, siendo sus máximos representantes: Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010). Todos ellos promovieron, de la mano del neoliberalismo, una retórica en el mensaje centrado en “crecer con igualdad”, con un foco en lo “social”. Por lo anteriormente expuesto, este trabajo tiene como propósito describir y analizar cómo dicho bloque continuó y profundizó el modelo económico heredado por el régimen militar, y bajo qué paradigma teórico-político lo llevaron a cabo.

INTRODUCCIÓN

El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó un hito en la historia de Chile. Ello por tratarse del golpe de Estado más violento sucedido en los últimos años. El régimen militar, una terrible dictadura encabezada por Augusto Pinochet, rigió por 17 años en el país. Durante ese tiempo se sucedieron sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos, que dejaron profundas heridas en la sociedad chilena.

Pero, también, se caracterizó por alterar completamente la estructura económica, política y social de Chile, donde un grupo de economistas egresados de la Universidad Católica, con posgrados en la Universidad de Chicago, dieron un nuevo giro a ella, rompiendo con los modelos de desarrollo económico industrializadores (ISI) que habían existido previamente. Iniciándose, de esta forma, una serie de reformas que se acogieron a la debutante ideología neoliberal, que propone al mercado como un principio vector de toda la vida social, cuyos fundamentos se sustentan en la libertad de elección individual y en un Estado subsidiario restringido de sus funciones dirigenciales de desarrollo.

En efecto, los Chicago Boys, nombre acuñado a este grupo de jóvenes, hicieron eco sobre las enseñanzas del economista Milton Friedman, académico de la institución norteamericana, artífice de esta doctrina y padre ideológico de ellos, quienes propusieron a la Junta Militar impulsar un revolucionario programa, que abarcaba una serie de tópicos. Entre ellos, privatizaciones, reducción de gasto fiscal y de promoción y facilitación de la inversión de capitales extranjeros. En definitiva, lo que pretendían estos economistas era lograr decaer bruscamente la inflación (que en ese tiempo era altísima), apoyar la recomposición del capital privado y su apertura al mercado mundial, impedir la oposición de los sindicatos o posibles resistencias colectivas (Gaudichaud, 2015).

Ahora bien, a nivel global, este sistema, consolidado en los años 90 (tras las pautas que recomendó el Consenso de Washington, formado por el FMI, el Banco Mundial, y por el Tesoro de los Estados Unidos, en temas como estabilización macroeconómica, liberalización económica -con respecto tanto al comercio como a la inversión-, la reducción del Estado, y la expansión de las fuerzas del mercado dentro de la economía interna), gozó de una suerte de “luna de miel”, pues hubo muchas naciones que avalaron e impulsaron medidas económicas en base a esta ideología.

De hecho, durante esa década, distintos gobiernos de la región aplicaron la receta neoliberal, tal es el caso de Argentina, con Carlos Menem; Bolivia, con Jaime Paz; y Perú, con Alberto Fujimori; siendo Chile uno de los países que más profundizó la ideología, dado que el país se convirtió en una suerte de “ratón de laboratorio” para los promotores de esta doctrina¹. Además, todos sus gobiernos decidieron continuar y seguir ahondando en el modelo. En todo caso, se reconoce que su consolidación se produjo a partir de 1990, y no bajo la dictadura, convirtiéndose en la principal sociedad neoliberal de la región latinoamericana (Gómez, 2007). Dicha premisa conforma una de las presunciones centrales de nuestra temática.

Pues bien, este conglomerado político se destacó por la práctica de acuerdos con la oposición de ese entonces, denominada Alianza por Chile, compuesta por la UDI, y RN, y también con los empresarios, con el propósito de definir las principales políticas económicas, conocida como “política del consenso”, que en realidad estuvo más cerca de las demandas de las corporaciones, que las del conjunto de la sociedad, y, en consecuencia, alejado de las posiciones programáticas de la Concertación (Huneus, 2014).

Así, los 20 años de gobernabilidad de este grupo de centroizquierda apuntaron, en la práctica, a mantener el modelo. Pero, en la teoría, su discurso comunicacional se orientó hacia lo social. Por ende, se cree que pretendieron darle al neoliberalismo “un rostro más humano”. De ahí nuestro concepto de una doctrina “reformada”, puesto que dichas administraciones quisieron estamparle un “toque social” al sistema impuesto.

Dentro de sus medidas promovidas destacan la apertura económica al mercado mundial, que hizo perder vigor al sector industrial chileno, permitiendo que el mayor dinamismo de la actividad económica se centrara en la producción y en la exportación de recursos naturales, bajo la dirección de los grandes grupos económicos locales y del capital internacional. En lo relativo a las importaciones, los aranceles cada vez se fueron minimizando más, hasta llegar a un nivel cercano a cero, como lo son hoy en día. También hubo una mayor inversión privada extranjera directa en el país, entre otras iniciativas.

¹ En Chile el modelo económico se comenzó a aplicar desde el 73, y las pautas del Consenso de Washington fueron formuladas posteriormente. Es por eso que se reconoce que el país en los 90 venía con una base “sólida” en lo que respecta a la aplicabilidad de las recomendaciones de los organismos internacionales.

Cabe destacar que esta agrupación de partidos se identificó dentro de la familia de las ideologías socialdemócratas de Tercera Vía, articulada en torno a una visión de mundo que combina en su núcleo las ideas de democracia liberal, dignidad de las personas y justicia social (de origen socialcristiano) y modernidad/modernización como vector de aspiración hacia una “buena vida” en una sociedad mejor (Brunner, 2015).

En conformidad a lo enunciado, la relevancia de la presente investigación se ubica en un plano histórico, teórico, disciplinar y político. En consecuencia, ella se centrará en responder: ¿cómo y por qué los gobiernos democráticos de la Concertación profundizaron, ampliaron y consolidaron el modelo económico promovido por la dictadura militar? Así, también pretende establecer ¿de qué forma y con qué tipo de procedimientos lo llevaron a cabo? (normativas legales); ¿Quiénes la apoyaron? (actores involucrados); su discurso comunicacional (¿en qué se respaldó?), entre otras variables.

Las hipótesis que guiarán el presente estudio, están dadas en:

- Que el régimen militar estableció las bases estructurales del modelo bajo una reforma constitucional (1980), que no fue alterada “sustancialmente” durante los mandatos concertacionistas.
- Que entre 1990 y 2010 las distintas administraciones de la Concertación profundizaron el modelo económico heredado a través de distintas iniciativas legales.
- Que sus gobiernos tuvieron una retórica discursiva comunicacional orientada hacia lo social, con un énfasis en los lineamientos de la Tercera Vía (puesto en la teoría). Pero, sin embargo, su aliado estratégico, como corriente de desarrollo, fue bajo el alero del neoliberalismo, ampliado y profundizado por ellos (llevado a la práctica).
- Que durante esa época hubo un consenso ampliado entre las distintas fuerzas políticas, ya sea por la centroderecha (Alianza por Chile) y la centroizquierda, (Concertación) para promover distintas reformas, de corte neoliberal, impulsadas por el Ejecutivo, como las privatizaciones.
- Que el empresariado chileno también juega un rol clave: muchas veces promoviendo el lobby para empujar o modificar iniciativas que se ajusten a sus requerimientos.

- Que el modelo económico heredado y profundizado en democracia ha dejado grandes secuelas en la estructura social y económica del país.

La investigación se abordará en forma documental. Así, se indagará en los distintos programas de gobierno, y sus discursos anunciados frente al Congreso Pleno (para así observar su postura, su discurso ideológico y su estrategia comunicacional), las leyes sancionadas, artículos de opinión, recopilación e indagación de fuentes de prensa digital y escrita. Al mismo modo, se entrevistará a personajes del periodo, que han formado parte de esta transformación política. Entre ellas, historiadores, economistas, y ex autoridades gubernamentales, entre otros, de modo de sustentar nuestro proyecto académico.

Es importante aclarar que esta investigación descriptiva de hechos no debe entenderse como un análisis comparativo respecto a la estrategia neoliberal en los distintos periodos que se constituyó, en el sentido de evaluar los resultados de ambas fases de la historia ni tampoco pretendemos llevar a cabo un estudio sobre la factibilidad o no de la doctrina de la Tercera Vía en Chile, como tampoco evaluar las medidas sociales de la Concertación, aunque sí expondremos los distintos debates teóricos respecto a esto, de modo de dar un contexto y sustento a nuestro análisis, al constituir parte fundamental de todo este entramado de hechos. Por eso, enfatizamos que nuestro foco -de modo de acotar la compleja temática- es centrarnos en estudiar el por qué y el cómo de la continuidad de este, sumando el manejo comunicacional de los centroizquierdistas, basado en los lineamientos de la Tercera Vía.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

El siguiente estado de la cuestión recorre una selección de diferentes referentes teóricos que han discutido respecto al desarrollo del neoliberalismo en Chile, y, también, en lo concerniente a cómo este modelo caló hondo en la sociedad mientras gobernó la Concertación.

Sin embargo, es importante reconocer que dicha fuerza política de centroizquierda le quiso estampar un sello social, que muchas veces lo replicó en su discurso y programas de gobierno, pero también en las distintas iniciativas impulsadas; eso sí, sin descuidar las bases estructurales del modelo heredado; de ahí a referirse a él como un neoliberalismo con “aspecto social”, o como bien sintetizamos en nuestro título: un neoliberalismo “reformado”.

Si bien no son muchos los autores que han abordado esta temática, al tratarse de una etapa relativamente reciente de la historia de Chile, expondremos las distintas visiones encontradas en relación a la construcción histórica conceptual “de lo social” del modelo y también de “continuidad” de este.

Uno de los que más ha analizado esta temática es Manuel Garretón, un sociólogo, politólogo y ensayista chileno, que obtuvo el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, quien se ha caracterizado por hacer diversas investigaciones en el área de sociología política, democratizaciones y transiciones, Estado y sociedad, regímenes autoritarios, actores y movimientos sociales.

De hecho, en su obra *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado* hace una investigación analítica y descriptiva respecto a los gobiernos de la Concertación desde la perspectiva de dos grandes corrientes de pensamiento: neoliberalismo y progresismo.

Este último lo observa como una respuesta que surgió de los sectores de centroizquierda en el mundo y en la región para superar el orden neoliberal.

“El progresismo fue la respuesta que surgió de los sectores de centroizquierda en el mundo y en América Latina para superar ese orden neoliberal en democracia y devolverle al Estado y a la sociedad el predominio sobre el mercado y los grandes intereses capitalistas nacionales y transnacionales. En nuestro país fue la Concertación de Partidos por la Democracia, es decir, una coalición de centroizquierda la que buscaba encarnar, principal aunque no exclusivamente, los principios progresistas, a diferencia de lo ocurrido en otros países, donde este proyecto fue enarbolado mayoritariamente por los sectores de izquierda (...) Pese a las significativas y progresistas transformaciones introducidas en la sociedad chilena por los gobiernos de la Concertación, ellos no lograron superar o reemplazar el modelo neoliberal ni tampoco el modelo político de democracia incompleta, sino solo corregirlos parcialmente, con lo que el carácter progresista quedó limitado” (Garretón, 2012).

A su vez, vislumbra que el modelo concertacionista consistió:

“En la búsqueda de correcciones parciales de los modelos socioeconómico y político en un sentido progresista, por medio de un método político de acuerdos con la entonces oposición de derecha. A través de esta estrategia de acción política, se mejoró sustantivamente la situación heredada de la dictadura, pero al mismo tiempo se consolidaron los rasgos fundamentales de los modelos socioeconómico neoliberal y político de democracia incompleta” (Garretón, 2012:10).

Otro punto que expone es respecto al concepto del discurso político de la Concertación, relativo a los lineamientos de la Tercera vía, que este autor lo identifica dentro de la corriente progresista.

“El progresismo, noción que Anthony Giddens identifica con el modelo de la Tercera Vía, fue y ha sido un proyecto de la centroizquierda para la modernización de la socialdemocracia. En tal sentido, se trataría de una respuesta para encarar las drásticas y aceleradas transformaciones en el seno de las sociedades contemporáneas, de las cuales la más importante es la globalización” (Garretón, 2012).

“El debate sobre el progresismo (no exento de polémicas) se plantea en torno a los resultados del balance del modelo económico neoliberal tras dos décadas de reformas estructurales y tiene lugar en sectores de la izquierda renovada que asimilaron, al menos en el discurso, la propuesta europea de la socialdemocracia o la Tercera Vía. Es el caso, por ejemplo, de un sector de la coalición de centroizquierda chilena denominada la Concertación”, (Garretón, 2012).

Respecto al aspecto “corregido” o “reformado” del modelo:

“Hablamos de progresismo limitado en un doble sentido. Estructuralmente, porque los dos pilares del modelo de sociedad heredados de la dictadura, el papel predominante del mercado con la generación de desigualdades y la institucionalidad democrática incompleta, fueron corregidos, pero no superados o reemplazados por una nueva relación Estado-sociedad ni por una nueva Constitución. Ideológicamente, porque el proyecto mismo de la Concertación no privilegió ni puso como prioritario el componente antineoliberal. Es decir, más allá de una vocación antineoliberal en su origen, no hubo un horizonte ideológico ni un modelo de superación de la sociedad postpinochetista. Ello se expresó en la coexistencia de un modelo y aspiraciones de corte más socialdemócrata que apuntaban a la idea de un Estado o sistema de protección, por un lado, con uno más liberal y una conducción ortodoxa consecuente, en general cristalizada en los ministerios de Hacienda, de corte más ortodoxamente liberal, por otro” (Garretón, 2012).

Otro autor que encara esta característica “social” del modelo es la del economista y ex miembro del Partido Socialista chileno, Gonzalo Martner, quien hoy se desempeña como director del Centro de Políticas para el Desarrollo de la Universidad de Santiago de Chile. Martner ha realizado diversos estudios en relación a la temática política y social de Chile, como *Democracia y Orden Económico* (Santiago, 1985), *Las Políticas Sociales de los Gobiernos Progresistas* (Santiago, 2009), *Chile en la Concertación 1990-2010* (Santiago, 2009), *Estudios sobre Bienestar II* (Santiago de Chile, 2016), entre otros.

En su análisis denominado en *Chile en la Concertación 1990-2010* pone énfasis en las teorías y la importancia relativa al Estado de bienestar y a la seguridad social en el mundo.

“La seguridad social tradicional puede definirse como una combinación de seguro social frente a los riesgos socioeconómicos que enfrentan los trabajadores asalariados y de asistencia social para personas en necesidad, en que el Estado provee transferencias de ingresos o acceso a bienes específicos que se relacionan con la ocurrencia de eventos no controlables asociados a riesgos contingentes que enfrentan los individuos: la enfermedad, la invalidez, la vejez sin ingresos, el desempleo”, (Martner, 2009).

A su vez, despliega una serie de datos estadísticos que muestran “las mejoras” que consagró este conglomerado político, dando cuenta de una serie de cuestiones referentes al carácter reformado del modelo, puesto que evidencia que los gobiernos democráticos de la

Concertación avanzaron en distintas medidas que fueron dándole un aspecto social a él. Entre ellas, políticas públicas de superación a la pobreza, una mejora en la distribución de los ingresos, ampliación de una serie de beneficios sociales para las clases postergadas, entre otros.

“A partir del año 1990, se agregaron sucesivas transformaciones en los dispositivos de ayuda y seguridad social, hasta conformar un esbozo de sistema de protección social. En 2002 se reemplazó el subsidio de desempleo por un seguro de desempleo, se modificó la estructura de la asignación familiar, se amplió el subsidio único familiar primero y se estableció un bono solidario en 2003; a su vez, en 2008 se cambió la pensión asistencial por una pensión básica y un aporte solidario. Más ampliamente, se estableció el Programa Chile Solidario, concebido para que las familias con menores ingresos pudieran “construir un puente hacia sus derechos” por medio de una relación directa con el Estado, con un sistema de monitoreo de las situaciones familiares y de sus progresos, con instrumentos flexibles y prioridad en el acceso a los sistemas de apoyo social”, (Martner, 2009).

Un estudio bastante interesante es el del historiador Manuel Gárate, quien en su obra *La Revolución Capitalista de Chile* (basada en su tesis doctoral para la Escuela de Altos Estudios de Paris), hace un barrido histórico que emprende desde los orígenes del pensamiento liberal económico en el país, desde mediados del siglo XIX; pasando por las transformaciones económicas implementadas durante el régimen de Pinochet (1973-1990), que dieron la base del modelo; hasta llegar al principio del siglo XXI, con el surgimiento de una sociedad de mercado en Chile. Su trabajo historiográfico destaca por sus distintas contribuciones a la hora de entender el desarrollo económico del país, así como también logra dilucidar el porqué de la naturalización de las políticas pro mercado en Chile, después de la dictadura

Dentro de él, sigue la línea de los autores mencionados anteriormente, en el sentido de la continuidad del modelo, pero con un aspecto más social.

“La estrategia cautelosa de la Concertación, en términos de políticas económicas redistributivas, se vio compensada por la expansión de la economía, sobre todo, entre 1990 y 1997. Los beneficios del crecimiento permitieron la puesta en marcha de diversos programas asistenciales y de un aumento sostenido del gasto social, aunque sin cambiar mayormente ni el estatus ni la situación de precariedad laboral de la mayor parte de los trabajadores

asalariados del país, actores fundamentales de la recuperación democrática y de la gobernabilidad durante los primeros años de la transición política. Siguió primando el principio de la flexibilidad laboral, a pesar de los intentos por cambiar la legislación, los cuales siempre se encontraron con la enconada oposición del empresariado y de los partidos de derecha. Los equipos económicos de la Concertación no insistieron mayormente en el punto debido a las buenas cifras económicas y el cúmulo de elogios que el modelo chileno recibía desde el exterior, especialmente de las instituciones de crédito internacional y de las agencias calificadoras de riesgo. La vía chilena al desarrollo parecía haber fortalecido su política social sin romper las reglas básicas del modelo liberal”, (Gárate, 2012).

Por su parte, el destacado economista y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Ricardo Ffrench-Davis, quien también tiene una vasta cantidad de estudios sobre la economía nacional, destacándose por ser uno de los fundadores de la Corporación de Investigaciones Económicas para América Latina (Cieplan), y también por su rol como Asesor Regional Principal de la Cepal, cargo que ocupó hasta 2014: hoy es académico en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Sus aportes se conciben dentro del aspecto crítico y constructivo; dentro de ellos figura *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile*, que habla respecto de las políticas económicas en Chile, durante y después del régimen militar.

En su análisis también hace referencia respecto al carácter de continuidad del régimen sobre el modelo heredado, y su énfasis en lo social.

“Los gobiernos de la Concertación decidieron evitar los cambios radicales en las políticas económicas vigentes y buscaron “un cambio en continuidad”, rompiendo así con la tradición de varios gobiernos precedentes, caracterizada por su naturaleza refundacional. Para lograr este objetivo, el gobierno del Presidente Aylwin se esforzó en obtener el apoyo de los sindicatos e incorporar a los trabajadores en el proceso de toma de decisiones macrosociales. Este fue dirigido a beneficiar a aquellos grupos más perjudicados por los efectos del largo periodo de ajuste recesivo en los años ochenta” (Ffrench-Davis, 2003).

Todos estos estudios, desde distintas corrientes de pensamientos, y también desde variadas disciplinas de formación, como economistas, sociólogos, políticos, e historiadores, logran dar un enfoque historiográfico contextual respecto a la temática abordada.

Finalmente, podemos decir que los teóricos abordados ponen sobre la mesa diferentes perspectivas teóricas de análisis, como el “progresismo limitado”, “el neoliberalismo corregido”, la importancia del Estado de bienestar; y también respecto al porqué de la continuidad del modelo, que conducen a analizar el manejo discursivo, político y económico que tuvo Chile entre 1990 y 2010, en un sentido descriptivo e histórico.

CAPÍTULO I: NACE UNA DOCTRINA: EL NEOLIBERALISMO

I. Antecedentes históricos

La economía neoclásica es una corriente de pensamiento económico que tiene sus bases en las ideas de Adam Smith, quien planteó en su obra *La riqueza de las naciones*, tres principios básicos del liberalismo económico: la libertad personal, la necesidad de la propiedad privada (que permitiría el mejor uso de la riqueza) y el rol del mercado. Se trató de un texto de cinco volúmenes, que apareció en los albores de la Revolución Industrial.

Según fundamenta Germán Gutiérrez en *Ética y Economía de Adam Smith y Friedrich Hayek* su trabajo se encuentra precedido de los intensos debates relativos al impacto de la llamada entonces “sociedad comercial”, vale decir, en las costumbres del debate ético desarrollado en Escocia e Inglaterra sobre virtud y comercio. Una época histórica, donde despegó el capitalismo en Inglaterra, y que correspondió al auge del mercantilismo de fines del siglo XVII y primera mitad del XVIII, y el auge de la reflexión social, política, jurídica, antropológica y ética de la llamada ilustración².

Por su parte, los periodistas chilenos, Manuel Délano y Hugo Traslaviña, en su obra *La Herencia de los Chicago Boys*, aseguran que Smith no rechazaba por completo la injerencia estatal y el *laissez-faire* (expresión francesa que significa “dejen hacer, dejen pasar”, que se refiere a una completa libertad en la economía) no era sinónimo de total falta de restricciones. En ese sentido, sus bases teóricas postulan que la búsqueda del beneficio personal de un individuo permite una promoción de los intereses sociales, es decir, una

² Gutiérrez, Germán. (1998). *Ética y economía en Adam Smith y Friedrich Hayek*. México: Universidad Iberoamericana. Página 22

“mano invisible”, que correspondería al mercado (como escenario de la libre competencia) conducirá al bienestar social³.

Pues bien, la corriente neoclásica comenzó a tomar fuerza a partir de 1870 y modificó sustancialmente a la ciencia económica. De hecho, su influencia fue decisiva para la formación actual del pensamiento económico y también para el desarrollo de las políticas económicas de algunos gobiernos, como es el caso de Chile, que mantiene las bases vigentes hasta la actualidad.

Dentro de los impulsores de esta corriente, se encuentran Carl Menger, que trabajó en Austria; Stanley Jevons, que la abordó en Inglaterra; y Léon Walras, que la impulsó en Francia. Otro gran contribuyente a la economía neoclásica fue Alfred Marshall. A su vez, cada uno de ellos dio lugar a posteriores discípulos que se pueden agrupar en diferentes subescuelas, entre los cuales están: Eugen von Böhm-Bawerk, Friedrich von Wieser, Wicksell, Von Mises (influenciados más por la escuela austríaca).

A mediados del siglo XX el keynesianismo se convirtió en una de las políticas económicas más importantes en el mundo. Su propulsor fue el economista británico John Maynard Keynes, que elaboró una serie de diagnósticos respecto a la coyuntura económica del periodo en diversos escritos; previos y posteriores a la Gran Depresión que atravesó el mundo en 1929; uno de ellos fue la *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*, publicado en 1936, donde se mostraba en contra de la corriente general que defendía el laissez-faire y el equilibrio presupuestario. En esa línea, Keynes postulaba que la crisis derivada de la ausencia de la demanda podía y debía ser afrontada por los Estados mediante un mayor gasto.

Uno que adoptó los planteamientos de Keynes fue Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, quien asumió en 1932, tras la crisis de 1929, ocupando el cargo como presidente durante 4 mandatos seguidos, y quien pudo dar alivio a su deprimida economía, bajo las pautas establecidas por el economista europeo. No obstante, la maquinaria bélica ligada a la II Guerra Mundial hizo el resto, en el sentido que el Estado norteamericano dio más oportunidades laborales a sus trabajadores, y de una u otra forma, tuvo un rol

³ Délano, Manuel y Traslaviña, Hugo (1989). La herencia de los Chicago Boys. Ornitorrinco. Santiago. Pág. 17.

trascendental en el impulso de la economía de aquellos años, reactivándola y dándole oxígeno con dichas políticas. De hecho, la producción en el quinquenio siguiente llegó a doblarse en Estados Unidos y el paro de los trabajadores descendió a tasas importantes, gracias a las políticas aconsejadas por el economista británico.

En efecto, esto llevaría a que las políticas de Keynes fueran promovidas en gran parte del mundo; entre ellos, Latinoamérica, que desarrollaría políticas basadas en la importancia del Estado en el dinamismo de la economía. Asimismo, su acertado diagnóstico de aquellos años, llevó a que él tuviese un rol importante en las decisiones económicas, como por ejemplo, participar de forma decisiva en la Conferencia de Bretton Woods, origen del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

No obstante, sus principales postulados también fueron objeto de crítica por diversos intelectuales. Uno de ellos fue el economista austriaco Friedrich Von Hayek que en su libro *Camino de servidumbre*, planteaba una dura opinión en contra del Estado de bienestar propuesto por Keynes.

La investigadora argentina y licenciada en Relaciones Internacionales, Mariana Calvento en su artículo denominado *Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación con las temáticas sociales y sus efectos en América Latina*, destaca que esta obra lanzada por Hayek daba el puntapié inicial a lo que conoce como neoliberalismo, como una respuesta teórica y política contra el Estado intervencionista y de bienestar.

Así, con el propósito de contrarrestar sus efectos en el mundo, Hayek convocó a quienes compartían su orientación ideológica a una reunión en Mont Pèlerin, en Suiza, donde asistieron no sólo adversarios del Estado de bienestar europeo, sino también enemigos del New Deal norteamericano. Entre ellos, Milton Friedman, Kart Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Eukpen, Walter Lippman, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga.

“Allí se fundó la Sociedad de Mont Pèlerin, que —según Perry Anderson— se tradujo en “una suerte de franco-masonería neoliberal, altamente dedicada y organizada con reuniones internacionales cada dos años. Su propósito era combatir el keynesianismo y el solidarismo reinantes, y preparar las bases de otro tipo de capitalismo, duro y libre de reglas, para el futuro” (Anderson, 1999: 15-16). Para los concurrentes, la situación presente, que se resumía

en el avance del totalitarismo, planteaba una seria amenaza a los valores fundamentales de la civilización: propiedad privada y el mercado competitivo. Para esta sociedad esos valores representaban las instituciones que mejor garantizaban la preservación de la libertad”⁴.

Asimismo, complementa, que Von Hayek impulsó una importante labor como formador de los lineamientos de dicha corriente, dado el rechazo que le provocaba toda clase de intervención estatal, pero, particularmente, la promovida por la teoría keynesiana, en el sentido que atentaba contra los valores fundamentales de la civilización, como por ejemplo, la propiedad privada y el mercado competitivo.

En consecuencia, para Hayek el “socialismo y la libertad no eran compatibles” y el papel del Estado en un sistema capitalista “debía permanecer limitado”. Es más, Calvento precisa que Hayek no dudó en comparar el Estado de bienestar con la dictadura, ya que para él la planificación que dicho Estado representaba generaba la “supresión de la libertad”. Y, como partidario del neoliberalismo, abogaba por la libre competencia de las fuerzas de la sociedad, como medio para coordinar los esfuerzos humanos.

Asimismo, tal como lo hacía Smith, plantea que él no rechaza de plano la intervención estatal; la apoya solo en ciertos aspectos. No obstante, da primacía al resguardo de la libre competencia y la propiedad privada. En otras palabras, el Estado debía garantizar un marco sólido para asegurar la iniciativa privada; como por ejemplo, normativas claras para los inversionistas, garantizar la libertad de elección en los ciudadanos, etc.

Al igual que Calvento, el historiador económico Mario Rapoport en *El ojo de la tormenta* da cuenta que después de la posguerra serían las ideas keynesianas las que se impondrían en el mundo, y las cuales se vislumbraban como una alternativa real de “soluciones concretas”, puesto que se constituyeron como un medio para mejorar las condiciones de vida.

No obstante, asegura que dichos postulados cambiarían a partir de la década del 70. Precisamente, tal como previamente lo adelanta Calvento, Milton Friedman—un estadístico, economista e intelectual estadounidense, de origen judío, que se desempeñó como profesor

⁴ Calvento, Mariana. (2006). Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación con las temáticas sociales y sus efectos en América Latina Revista de Ciencias Sociales Convergencia: Toluca. Pág. 42 y 43.

de la Universidad de Chicago. Liberal y defensor de su doctrina sobre el libre mercado- y su par austriaco Friedrich von Hayek, pasarán a convertirse en los principales referentes de una nueva corriente económica procurará reemplazar el paradigma keynesiano: el neoliberalismo⁵.

II. El despertar de la ideología

La famosa crisis de la década del 70, que incluyó la desvinculación del dólar con respecto al patrón oro –el cual fue establecido en Bretton Woods al finalizar la guerra- representó una gran oportunidad para promover esta doctrina. Pues, según rememora Rapoport, uno de los principales males que afectaba a la economía mundial era la estanflación, vale decir, el estancamiento con inflación.

Para frenar la inflación, Friedman sostenía que lo necesario era controlar la emisión de la moneda, dado que para él toda expansión de la oferta monetaria -superior a la de los bienes- redundaba en un aumento de los precios, pero no produce crecimiento. De igual forma, el economista de la Universidad de Chicago observaba la intervención del Estado como “contraproducente” porque la libertad de los mercados garantiza el equilibrio de la economía.

No obstante, para Rapoport dicho argumento dista de ello, ya que la realidad demostró que se requirió de la participación activa para imponer esas políticas, como se pudo ver en los gobiernos dictatoriales de Augusto Pinochet, en Chile, y de Rafael Videla, en Argentina. En síntesis, para el economista trasandino los neoliberales no les interesa el pleno empleo sino la estabilidad de los mercados y de la moneda, que es lo que los empresarios necesitan a fin de rentabilizar sus inversiones⁶.

Por otro lado, Calvento pone énfasis que en década de los setenta, con la llegada de la gran crisis del modelo económico de posguerra (aumento de la deuda externa y elevada inflación) la corriente neoliberal comienza a adquirir cuantiosos adeptos. De hecho, según detalla, Von Hayek y sus seguidores, al analizarla, consideraban que dicha crisis respondía al poder excesivo poder de los sindicatos y también del movimiento obrero, los cuales

⁵ Rapoport, Mario (2013). En el ojo de la tormenta: la economía política argentina y mundial frente a la crisis. Argentina: Fondo de Cultura Económica. Página 29.

⁶ Ibídem. Pág. 31 y 32.

habían socavado las bases de la acumulación privada con sus presiones reivindicativas sobre los salarios y para que el Estado aumentase cada vez más los gastos sociales.

Pues bien, la solución que proponían los intelectuales que promovían la doctrina, era un Estado con dos funciones opuestas: fuerte para debilitar o quebrar el poder de los sindicatos; y limitado en relación con los gastos sociales y a las intervenciones económicas. En definitiva, lo que se pretendía era avanzar hacia la estabilidad monetaria, para lo cual era indispensable una disciplina presupuestaria. ¿Y cómo? a través de la reducción del gasto social y la restauración de la tasa de desempleo, de modo de minimizar el poder de los sindicatos⁷.

III. Principales fundamentos teóricos

Délano y Traslaviña sostienen que lo que hizo Milton Friedman fue volver a dar un nuevo impulso a las ideas de Smith y lo hizo en su obra *Libres para elegir, hacia un nuevo liberalismo económico*, escrito en colaboración con su esposa Rose Friedman, en 1979, que, según los autores, se trata de una crítica a la intervención estatal y gubernamental en los mercados y una defensa acérrima a la libre iniciativa individual.

A su vez, reconocen que para el economista norteamericano la base de la prosperidad tiene que ver con una combinación entre la libertad de mercado y la libertad política. De hecho, a juicio de él, sobre ello se construyó el bienestar en Estados Unidos y Gran Bretaña, los dos mayores exponentes del capitalismo mundial desde el siglo XIX. Ahora bien, respecto a los principales problemas económicos de dichos países en los años 60 y 70, obedecieron, según Friedman, justamente al predominio de las políticas gubernamentales intervencionistas y reguladoras de los mercados.

“Las ideas motrices de Friedman son dejar al mercado actuando sin restricciones, eliminando las trabas a la libre competencia. Se debe frenar tanto el déficit fiscal, como el gasto público y la emisión de dinero, que son las causas de la inflación crónica y, en consecuencia, el rol del Estado debe disminuir”⁸.

Bajo ese contexto, podemos observar que la obra de Friedman hace una férrea defensa respecto a los valores de la libertad, rememorando lo que significó la libertad de Estados

⁷ Calvento, *óp. cit.*, p. 25.

⁸ *Ibíd.*, p. 18.

Unidos en 1776, al igual de lo que significa la libertad de elegir entre las personas. Asimismo, elabora un acucioso análisis de la obra de Smith *La riqueza de las naciones* poniendo sobre la mesa cuestiones claves, como los ingresos, la libertad, y el mercado, entre otras aristas.

Es más, Friedman destaca que Smith en *La riqueza de las naciones* analiza la forma en forma en la que el sistema de mercado podía combinar la libertad de los individuos en la persecución de sus objetivos con una amplia colaboración y cooperación, necesarias en el campo económico para producir nuestras necesidades básicas, como la comida, el vestuario y la vivienda.

Añade, también, que su idea clave era que las partes de un intercambio pueden lograr un beneficio, siempre que la colaboración sea estrictamente voluntaria. “Ningún intercambio se producirá a menos que ambas partes logren ese beneficio. Ninguna fuerza externa, ni coerción, ni violación de la libertad son necesarias para lograr la colaboración de individuos que pueden beneficiarse”, asevera. A juicio de Friedman, Smith afirmó que el individuo que “persigue únicamente su propia ganancia” es “dirigido por una mano invisible para producir un resultado que no formaba parte de su intención”. No obstante, para Friedman tampoco es siempre malo que no sea parte de su intención. “Persiguiendo su propio interés, consigue frecuentemente que beneficie a la sociedad más que cuando realmente persigue ese objetivo”⁹.

Sobre la crisis del 30, tiene una visión bastante particular, puesto que asegura que parte de la responsabilidad de ella tiene que ver en un ámbito que era exclusiva competencia del Estado desde el inicio de la República, como es el dinero, de la cual, sostiene, nunca se admitió. Es más, a su juicio, la interpretación de aquella época es que se trató del “fracaso del capitalismo de libre mercado”, con lo cual la gente se alineó a los pensamientos de los intelectuales, quienes tenían una visión totalmente distinta respecto a las responsabilidades de los individuos y del gobierno. Así, sobre este último, reconoce que se le atribuyó el concepto de Estado protector cuya obligación es ayudar al resto. No obstante, para Friedman su rol ha sido “decepcionante”¹⁰

⁹ Friedman, Milton. (2008). Libre para elegir. España: Gota a gota ediciones.

¹⁰ *Ibíd.*, p. 8 y 9.

En tanto, Calvento indica que en el contexto de crisis de los años 70 este economista cumplió un rol bastante significativo. De hecho, con su obra *Capitalismo y libertad*, se adhirió en la Universidad de Chicago a las ideas de Hayek y sostenía que el poder gubernamental era necesario pero peligroso; por lo que dicho poder debía ser limitado y descentralizado. A su vez, él remarcaba la importancia y la necesidad de la existencia de un gobierno. Veía en él al determinador y árbitro de “las reglas del juego”.

“La amenaza fundamental a la libertad es el poder de coaccionar, ya esté en manos de un monarca, de un dictador, de un oligarca o de una momentánea mayoría. La preservación de la libertad requiere la eliminación de esa concentración de poder en la mayor medida posible y la dispersión y distribución de cualquier poder que no pueda eliminarse —un sistema de checks and balances. Al sustraer la organización de la actividad económica del control de la autoridad política, el mercado elimina esta fuente de poder coercitivo. Le permite al poder económico ser un balance contra el poder político en vez de un refuerzo (...) El mercado le garantiza al individuo la libertad de aprovechar al máximo los recursos que están a su disposición, siempre que no interfiera con la libertad de los demás de hacer lo mismo. Pero no garantiza que tendrá los mismos recursos que otro (...) Y no hay nada que pueda evitar que conduzcan a una gran disparidad en riquezas e ingresos. (Friedman, 1966)¹¹.

En síntesis, para Calvento esta corriente de pensamiento neoliberal se ha orientado a darles una importancia secundaria a las cuestiones sociales, como la pobreza y desigualdad social, puesto que privilegia ante todo la “preeminencia del principio de propiedad privada” y “la libertad individual”. Por lo tanto, llegaron a considerar que pese a que las desigualdades podían producirse por el sistema económico que defendían, estaba en manos de cada uno procurar su seguridad y mantenimiento. Simultáneamente, admite que esta doctrina promueve un Estado limitado, quedando evidenciado esta problemática en los aspectos sociales.

En línea con lo anterior, la periodista canadiense Noemi Klein en su libro *La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre*, dice que Friedman en esa obra diseñó lo que se convertiría en el manual del libre mercado. Pues bien, dentro de sus fundamentos postulaba que los gobiernos debían eliminar todas las reglamentaciones y regulaciones que dificulten la acumulación de beneficios. En segundo lugar, establecía que ellos deben vender todo

¹¹ Friedman, Milton (1966), *Capitalismo y libertad*, Madrid: Rialp

activo que posean que pudiera ser operado por una empresa y dar beneficios. Y en tercer lugar, que debían recortar drásticamente los fondos asignados a programas sociales; vale decir, acabar en cierta forma con el Estado Bienestar que en varios países del mundo se impulsó.

Bajo ese contexto, reconoce que la visión de Friedman avanzaba en articular un planeamiento en orden de que si los impuestos debían existir, tenían que ser bajos; pagando todos (ricos y pobres) una misma tasa fija. Por otro lado, creía que las empresas debían vender sus productos al mundo y los gobiernos “no debían hacer el menor esfuerzo por proteger a las industrias o propietarios locales”. Por el lado de los precios, sostenía que ellos debían ser establecidos por el mercado. A su vez, consideraba que el salario mínimo no debía existir. Y en el ámbito de las privatizaciones, el economista proponía la privatización de muchas áreas; entre ellas, educación y salud.

En resumen, Klein asegura que el economista norteamericano abogaba por el abandono del New Deal, de modo que pretendía que “los trabajadores devolvieran sus medidas de protección sociales y que el Estado abandonara los servicios que ofrecía a sus ciudadanos. Así, su visión coincidía al detalle con los intereses de las grandes multinacionales, que por naturaleza ansiaban nuevos grandes mercados sin trabas”¹².

IV. La instalación del sistema económico en Latinoamérica y en el mundo

i. Rol de la Cepal y el desarrollismo

Luego de la crisis del 29 que afectó al mundo y también a la región, la pobreza comenzó a ser una constante en Sudamérica, y llegó a representar un grave problema. Así las cosas, es importante destacar el rol que cumplió la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la cual fue creada en 1948 y que se desarrolló como una escuela de pensamiento especializada en el examen de las tendencias económicas y sociales de mediano y largo plazo de los países latinoamericanos y caribeños, donde la influencia del pensamiento keynesiano y las escuelas historicista e institucionalistas centroeuropeas fueron decisivas en los primeros años.

¹² Klein, Noemí (2007). La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre. Barcelona, España: Paidós Ibérica. Páginas 88 y 89.

Una de las corrientes que surgió al alero de esta organización fue el desarrollismo, dado que algunos economistas y sociólogos de dicha entidad, como el argentino Raúl Prebisch y el brasileño Celso Furtado, se fueron dando cuenta que en América Latina existían circunstancias sociopolíticas que obstaculizaban el desarrollo y condicionaban la aplicación de los supuestos puramente económicos de las teorías clásicas. El desarrollismo fue puesto en marcha en Argentina durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962), de modo que tuvo gran influencia en el resto de la región entre 1950 y 1980 impulsando los modelos de sustitución de importaciones, especialmente en Chile, Uruguay, Brasil República Dominicana y México.

Por ende, el modelo desarrollista, promovido por ese organismo, logró enfrentar los problemas sociales que acaecían en ese periodo. Dicha política económica se sustentó bajo la idea de que los Estados tienen la capacidad de producir un desarrollo económico y social por medio de una modernización industrial acelerada, de modo que el objetivo lograr un modelo que condujera a la autosustentación económica.

En la práctica, este planteamiento implicó orientarse, económicamente, al desarrollo hacia adentro, buscando reducir la vulnerabilidad frente a los acontecimientos económicos internacionales. Es más, el modelo desarrollista, en su conjunto, consiguió entre 1960 y 1980 que la población en condiciones de pobreza se redujera de 51% a 33% de la población total de América Latina¹³.

Así, para que este modelo tuviese éxito también fue necesaria la adquisición de capitales, los cuales se obtuvieron a través de fuentes internas y externas. Por eso, uno de los problemas para su desarrollo, fue la fuerte dependencia del sector exportador para obtener los bienes de capital necesarios para el desarrollo industrial. No obstante, debido mayormente a los embates de las variaciones en los precios internacionales, fue incapaz de cubrir los costos para la industrialización. Todo ello derivó en un desequilibrio de las balanzas de pagos.

“La crisis de la deuda caracterizó toda la década de los ochenta. En números concretos la deuda total de la región representó a 399% de las exportaciones totales de 1987, es decir, cerca de los U\$S 430 mil millones. El pago de intereses alcanzó para el mismo año 30% de las

¹³ Calvento. *óp. cit.* p. 50 y 51.

exportaciones. En Argentina, como en Chile y Uruguay, la problemática de la deuda externa, sumada a la imposibilidad de encontrar mercados para sus exportaciones, llevó a establecer medidas de austeridad que incluían “menores salarios reales, recortes en el gasto gubernamental, incentivos a la inversión privada, devaluación y menor proteccionismo”¹⁴.

Fue así que las ideas neoliberales comenzaron a emerger en la región, de modo de dar una respuesta a la coyuntura de la época, y se inclinaba por la no intervención estatal, la privatización y la liberalización.

En esa línea, Calvento menciona que 1989, en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, se realizó un encuentro promocionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por el Banco Mundial (BC), donde participaron funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, ministros de finanzas de los países industrializados, presidentes de prestigiosos bancos internacionales y reconocidos economistas, que dio como resultado un conjunto de “recomendaciones” que se daban a los países endeudados, mayormente latinoamericanos, al momento de solicitar renegociaciones de deudas como nuevos préstamos, el cual más adelante fue conocido como el Consenso de Washington, cuya paternidad se otorgó al economista John Williamson en 1989, que son resumidas de la siguiente manera:

- Disciplina fiscal
- Reordenamiento de las prioridades del gasto público.
- Reforma impositiva (fiscal)
- Liberalización de las tasas de interés
- Una tasa de cambio competitiva
- Liberalización del comercio internacional
- Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras directas
- Privatización de empresas del Estado
- Desregulación de los mercados (especialmente financieros)
- Derecho de propiedad asegurado y expandido a toda la población (especialmente del sector informal).

¹⁴ *Ibíd.*, p. 52.

En línea con lo anterior, el sociólogo chileno Manuel Garretón en su libro *Neoliberalismo Corregido y progresismo limitado* sostiene que recién comenzó a hablarse de neoliberalismo a partir de las experiencias económicas de las dictaduras militares de las décadas del setenta y ochenta que acontecieron en la región.

Sin embargo, se propagaría más adelante por otros gobiernos, de corte democrático, como parte de su estrategia de reformas estructurales que se establecieron bajo el Consenso de Washington. Estos gobiernos otorgarían mayor énfasis a políticas dirigidas a dar mayor predominio irrestricto del mercado; disciplina presupuestaria; cambios en las prioridades del gasto público; reforma fiscal; liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés; búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos; liberalización comercial; apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; privatizaciones; desregulaciones, entre otros¹⁵.

En el caso de Chile, el historiador Manuel Gárate Chateau, en su obra *La revolución capitalista de Chile* aclara que las pautas de Washington y las transformaciones económicas que él las denomina de “primera generación”, generaron que estas tuvieran un efecto menor en la conducción económica del país durante la década de 1990. En otras palabras, la receta que ellos promovían ya había sido efectuada por el país. Asimismo, menciona que una muestra evidente de la buena conducta de las autoridades económicas de Chile, respecto a los organismos internacionales de crédito, es que dos ministros de Hacienda de la Concertación fueron llamados para ocupar puestos de alta responsabilidad en Washington, específicamente en el FMI¹⁶.

CAPÍTULO II: ANTECEDENTES EN CHILE

I. Chile y el liberalismo económico en sus inicios.-

Para entender todo este entramado de hechos, es relevante escarbar en la historia del país. Una historia que se divide en varios periodos, pero que tomaremos desde la Independencia, recorriendo diversos pasajes importantes de su historia económica, hasta llegar hasta el principio del siglo XXI, donde observaremos la importancia del liberalismo económico en

¹⁵ Garretón, Antonio. (2012). *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*”. 1º Edición, Santiago: Editorial Arcis-Clacso-Prospal. Página 10.

¹⁶ Gárate, Manuel. (2012). *La Revolución capitalista de Chile (1973-2003)*. 2ª ed. Santiago. Universidad Alberto Hurtado. Pág. 339 y 338.

sus inicios y también el papel de algunos sectores que hasta el día de hoy cumplen un rol trascendental, como los medios de comunicación, las asociaciones gremiales, los empresarios, los partidos políticos y la incidencia externa.

De acuerdo a Gárate, a comienzos del siglo XIX, en el plano educativo, se prefirió una formación en los autores de la teoría clásica liberal, sin embargo, lo que primaba en esa época era el peso de la doctrina mercantilista. A su vez, comenta que el curso de economía política estaba originalmente incluido en el plan de estudios del Instituto Nacional de 1813, aunque este debió cerrar sus puertas a causa de la reconquista española.

Posteriormente, la entidad volvió abrir en 1819, por lo cual la enseñanza de la economía política se hizo obligatoria para todos los estudiantes de Derecho, especialmente a partir de la obra del economista francés, Jean-Baptiste Say, *Traité d'Économie Politique* (Tratado de Economía Política), originalmente publicada en 1803, quien se destacó por ser uno de los principales exponentes de la Escuela Clásica de economistas; admirador de la obra de Adam Smith. Say ganó reconocimiento en toda Europa por ser autor de la conocida *Ley de los mercados* o *Ley de Say*: “la oferta crea su propia demanda”.

Es así que a través de dicha obra las ideas de la teoría clásica comienzan a difundirse en Chile, a partir de la traducción española de Juan Sánchez Rivera, en 1821. Es más, precisa que durante la década de 1820 se comienza a observar en la prensa y en los discursos públicos la aparición de argumentos basados en la obra de Say y otros economistas librecambistas. Entre ellos, el periódico El Telégrafo, que ya abogaban por una reducción de los aranceles a la exportación de metales, contradiciendo uno de los pilares de la doctrina mercantilista, la acumulación de activos en metálico. Se insistía, al mismo tiempo, en garantizar el valor de la moneda y en la reducción de las tarifas arancelarias, como método para combatir el contrabando¹⁷.

De igual forma, indica que por esa década había un pequeño grupo de chilenos influyentes que tenía conocimiento de los principios del liberalismo clásico gracias a la obra de Say y a la circulación de algunas copias de *La riqueza de las naciones* de Adam Smith. No obstante, reconoce que esas personas no tuvieron poder o la influencia suficiente para

¹⁷ *Ibíd.*, p. 26.

imponer estas ideas a nivel político y lograr una rebaja general tarifaria o terminar con el proteccionismo vigente desde 1811.

De hecho, según subraya, durante el último año de administración del Director Supremo Bernardo O'Higgins (1822), el alza de los aranceles alcanzó niveles nunca vistos para la época con el objetivo de favorecer la producción nacional. En esa línea, detalla que ni él ni sus ministros ni sus sucesores se inclinaron por la implantación de las nuevas ideas liberales en boga durante la década de 1820.

Sin embargo, revela que el arribo en 1828 del español, José Joaquín Mora, marcaría un punto de inflexión en el pensamiento liberal chileno. Se trataba de una persona que había tenido una experiencia directa con los pensadores clásicos ingleses de los años 1820. Fue intelectual liberal, periodista, poeta y político peninsular. Creía que solo siguiendo la doctrina de Adam Smith los países de América alcanzarían el ansiado desarrollo. Insistió, tal como lo había hecho Camilo Henríquez –un sacerdote, escritor y político chileno, héroe de la independencia, quien escribió varios ensayos, en particular la Proclama de Quirino Lemáchez, donde promovió la independencia chilena y la libertad social- en la necesidad de contar con un sistema de crédito público para aumentar la productividad de la economía chilena. Sin embargo, tras la revolución de 1829, el triunfo militar del bando conservador y la llegada del ministro Diego Portales al gobierno, pusieron fin a sus actividades en el país. Por lo que fue forzado a partir al exilio en 1831. No obstante, parte de su pensamiento económico quedó plasmado en las páginas de *El Mercurio de Valparaíso* de 1828.

Según expone Gárate, Mora defendía cuatro criterios básicos “smithianos” para la implantación de impuestos: se deben gravar los ingresos y no el capital (fuente de riqueza); se debe distinguir entre ingresos y entradas, descontando los costos y depreciaciones; el impuesto solo lo pagan quienes se benefician del gobierno; y los impuestos deben ser lo más bajo posibles para no desincentivar la producción¹⁸.

De igual forma, destaca que si bien en Chile durante esa época ya se conocían las ideas de la teoría clásica liberal, primaba en la élite criolla una visión pragmática de un país que aún no estaba apto para establecer el libre comercio. De modo que el argumento de ellos sostenía en que esa fórmula podría ser exitosa para países como Francia o Inglaterra, pero

¹⁸ Gárate, *óp. cit.*, p. 29 y 30.

no para un país tan joven como Chile. Poniendo énfasis en que para los pragmáticos, el proteccionismo se justificaba por el hecho de producir productos sin necesidad de gastar los metales necesarios para pagar tales importaciones.

Asimismo, el historiador sostiene que en la historiografía chilena hay un consenso en torno al arribo de las ideas de la teoría clásica liberal económica al país hacia mediados del siglo XIX, específicamente tras la llegada del catedrático francés de economía política, Jean Gustave Caurcelle Seneuil (1813-1892), a quien se le considera como el principal impulsor de la difusión de la economía política entre la elite chilena a partir del año 1855. Según el autor, este académico habría sido invitado durante el gobierno de Manuel Montt para establecer la cátedra de Economía Política en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile donde, en materia de política monetaria, él se mostraba partidario, desde un comienzo, de una legislación no intervencionista que dejara a libre juego de las fuerzas económicas el valor de la moneda.

i. Crisis del modelo exportador

El estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1919) marcó el inicio de la crisis del modelo exportador y la lenta transición hacia un esquema de sustitución de importaciones, el cual solo se profundizaría con la Gran Depresión de 1930. Este periodo de la historia del país se le conoce como República Parlamentaria, que se inició cuando estalló la Guerra Civil de Chile, que se extendió de 1891 hasta 1925, cuando se produjo el golpe de Estado de 1924, que implicó la clausura del Congreso, y la promulgación de la Constitución de 1925, que estableció el régimen presidencial. Se trató de un régimen de facto, donde si bien no existió el cargo del Primer Ministro, fue el ministro del Interior que se convirtió en el primer ministro de Estado.

Bajo ese marco, Gárate reconoce que la Primera Guerra Mundial afectó a la economía del país de una manera muy peculiar, dado que en un comienzo, incluso aumentaron las exportaciones debido al uso del salitre como insumo básico en la fabricación de explosivos. No obstante, se produjo una caída de hasta un 75% de las importaciones manufactureras y de bienes de capital (maquinarias, insumos metálicos y repuestos) con respecto a los años

anteriores al conflicto. Ello obligó a reorientar esa demanda hacia el mercado interno, el cual respondió con relativo éxito durante todo el desarrollo de la guerra¹⁹.

Así, desde fines del siglo XIX, la respuesta tradicional del Estado había sido recurrir a empréstitos, a lo cual se sumaba la inestabilidad monetaria ligada a las constantes devaluaciones que realizaron los gobiernos de la época, de modo que ello se convirtió en un problema político para las autoridades chilenas.

En efecto, las continuas alzas de precios y las devaluaciones terminaron por general un malestar generalizado en los sectores medios y obreros. En general, los grupos que dependían de un salario se vieron fuertemente perjudicados por la pérdida constante de poder adquisitivo. Este fue uno de los factores desencadenantes de la crisis social y política de 1924, donde los militares exigieron cambios profundos a la élite gobernante, especialmente en lo que atañe a las reformas sociales.

ii. Solución norteamericana: Money Doctors

Bajo ese contexto, es que ese estamento decidió presionar al Ejecutivo -encabezado por Arturo Alessandri (1920-1925)- para que invitara al economista norteamericano Edwin Walter Kemmerer, miembro de los Money Doctors, para remodelar el sistema bancario y monetario del país, puesto que estaban convencidos que podría aliviar la crisis social y terminar con la inestabilidad monetaria de la economía chilena.

De hecho, en su paso por el país - entre julio y octubre de 1925- Kemmerer ayudó a crear los proyectos de ley necesarios para reestructurar el sistema monetario y financiero. Estos incluyeron ley monetaria, que buscaba estabilizar el valor de la moneda y establecer el patrón oro como base de la unidad monetaria del país; la creación del Banco Central de Chile y la promulgación de la Ley General de Bancos (a través de la cual se creó la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras) y la Ley Orgánica del Presupuesto, todo esto en ese mismo año.

Posteriormente, el “doctor dinero” iría a Ecuador (1926), Bolivia (1927) y Perú (1931), y en todos los países ordenó las finanzas y aconsejó la creación de un Banco Central.

¹⁹ Gárate. *óp. cit.*, p. 57.

Tras las políticas impulsadas por la “Misión de Consejeros Financieros” el gobierno que le sucedió -de Carlos Ibáñez del Campo (1925 y 1929)- contó con gran holgura crediticia, pero también volvió a la economía chilena aún más dependiente del sector externo al aplicar medidas procíclicas y favorecer el ajuste automático.

Sin embargo, la Gran Depresión de 1929, que contagió al mundo entero, golpeó de sobremanera a Chile, cerrando las puertas al crédito y generando una enorme fuga de divisas, además de una crisis profunda y terminal de la industria salitrera. Es más, la institucionalidad económica liberal propuesta por el economista norteamericano no fue capaz de resistir la magnitud de shock externo, pues estaba diseñada para asumir un ajuste automático mediante la contracción económica y la deflación, según expone Gárate.

“Para la economía chilena, la mayor diferencia entre el efecto de la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión fue que la primera afectó principalmente a las importaciones, mientras que la segunda lo hizo tanto con las importaciones como con las exportaciones (...) el consenso liberal que se había instalado en la élite chilena desde la década de 1860 y que políticamente hizo crisis en 1920, pareció derrumbarse también desde su base económica con la Gran Depresión. Ello solo confirmó una tendencia mundial de descrédito de la teoría económica clásica. Los últimos refuerzos del consenso liberal-librecambista decimonónica se habían roto. Un nuevo paradigma de nacionalismo económico comenzó a tomar forma”²⁰.

Por su parte, Ricardo Ffrench Davis en *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile*, reconoce que la Primera Guerra Mundial encontró en el país en una situación de gran holgura económica. Esto, en parte, se debió al estímulo creado por el sector exportador, dado el auge del salitre en el periodo de guerra. No obstante, ello también contribuyó al debate respecto a que el Estado debía asumir responsabilidades en la promoción del progreso económico.

En línea con lo anterior, admite que al momento de ocurrir la Gran Depresión, la economía chilena era una de las más desarrolladas de la región, tanto en términos de sus ingresos per cápita como de la transformación productiva y social que estaba experimentando. Sin embargo, dicha crisis golpeó duramente a la economía local.

²⁰ Gárate. *óp. cit.*, p. 61.

Es más, el derrumbe del sector exportador fue estrepitoso, pero con el tiempo la economía nacional logró una recuperación significativa y, hasta comienzos de los años cincuenta, un ritmo sostenido de crecimiento industrial, que permitió en cierta forma paliar las restricciones impuestas por el quiebre del comercio exterior. Dicha expansión fue el resultado de políticas económicas que reaccionaron activamente frente a la crisis, impulsando nuevas estrategias de industrialización²¹.

En su segundo mandato (1932-1938), Arturo Alessandri Palma, emprendió la aplicación de una batería de políticas compensatorias, de modo que se intensificó una acción intervencionista del Estado que ya se venía insinuando desde la década anterior y que fue continuado en 1938 con el gobierno del Frente Popular –una coalición que estuvo integrada por los partidos radical, comunista, socialista, democrático y radical socialista.

Además participaron en él organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), el Frente Único Araucano y el Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCh)- el cual consagró más definitivamente el papel rector del Estado en la conducción del desarrollo económico y de la industrialización.

II. Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI)

Este modelo económico tiene su origen en los acontecimientos mundiales que afectaron al país a mitad del siglo XX. Entre ellos, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, que dejaron en evidencia la fragilidad de la política económica chilena, en relación a alta dependencia de productos importados, y también por su poca diversificada canasta exportadora, que en esa época predominaba en envíos de salitre y de cobre.

De esta forma, tal como señalábamos anteriormente, los gobiernos a partir de la década del 30, comenzaron a buscar alternativas de cambio para evitar que la economía del país quedara en manos del vaivén internacional, de modo que el Estado asumió un protagonismo fundamental, en línea con el mundo, dado que en esa época las políticas Keynesianas hacían eco en varios países que buscaban alzar el rol del Estado.

²¹Ffrench Davis, Ricardo. (2003). Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile. Santiago: LOM ediciones. Pág. 18.

Pues bien, los objetivos que se perseguían eran, por una parte, lograr la independencia de los mercados mundiales y, por otra, buscar reducir la vulnerabilidad externa. Un desafío bastante ambicioso, más tratándose del tipo de país que es Chile, el cual históricamente se desempeñó –y se desempeña- en la venta de materia prima al mundo.

No obstante, la única solución que se dejaba ver en ese entonces era promover la Industrialización por Sustitución de Importaciones dada la crisis que afectaba a todo el mundo, por ende, el país requería lograr su propio abastecimiento. Además, en la región, nuestros vecinos comenzaron aplicar las mismas políticas en orden de buscar un sustento económico en todo orden de estructuras.

Una de las medidas más importantes se dio durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, con la creación de la Corfo (Corporación de Fomento a la Producción) en 1939, institución pública financiada con ingresos de las exportaciones del cobre. Su propósito era desarrollar una estrategia de industrialización para Chile.

Para ello, se plantearon dos etapas de desarrollo. Una primera, de industrialización liviana, que desarrolló una industria productora de bienes de consumo como textiles, calzado, alimentos elaborados, metalúrgica, entre otros; que abasteció el mercado interno. Su finalidad era ahorrar divisas para poner en marcha la segunda etapa. Mientras que una segunda, de industrialización pesada, desarrollaría una producción de bienes de capital y tecnología, que permitiría industrializar al país e independizarlo definitivamente de los mercados extranjeros²².

No obstante, según indica Educar Chile, del Ministerio de Educación, este modelo fue importante para el país. Sin embargo, no logró concretar la segunda etapa de su plan debido a una serie de factores, como el aumento de la inflación, la poca incorporación tecnológica, el poco ahorro del Estado para invertir y el déficit fiscal, entre otros factores.

²² Educar Chile. (2012). Modelo económico de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). 4 de septiembre, de Ministerio de Educación Sitio web: <http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=217194>

LAS EMPRESAS MÁS IMPORTANTES CREADAS POR EL ISI

COMPAÑÍA	AÑO DE CREACIÓN
Empresa Nacional de Electricidad S.A (Endesa)	1944
Compañía de Aceros del Pacífico (CAP)	1946
Empresa Nacional de Petróleo (Enap)	1950
Industria Azucarera Nacional (Iansa)	1952
Empresa Nacional de Minería (Enami)	1960

Fuente: Educar Chile

Este modelo se profundizó durante las décadas de los cincuenta y sesenta como respuesta latinoamericana a la crisis de la economía mundial. Así, dentro de sus ventajas es que facilitó las condiciones para recuperar el crecimiento económico, construyó la infraestructura fundamental para el desarrollo, estableció un sistema público de cobertura universal para atender las demandas de salud y educación de la población. Sin embargo, nunca pudieron ser superadas la falta de capital, el déficit fiscal, los desequilibrios en la balanza de pagos, las devaluaciones y la alta inflación.

III. Los años cincuenta

Según los archivos de Memoria Chilena, de la Biblioteca Nacional, el pensamiento económico chileno imperante a mediados de siglo XX se encontraba hegemonizado por tres orientaciones: la política oficial instaurada a partir de los gobiernos del Frente Popular y caracterizada en lo fundamental por una industrialización de corte estructuralista-keynesiano con base en la sustitución de importaciones promovida estatalmente; la teoría surgida al alero de la Cepal y que promovía una lectura del desarrollo económico en países periféricos que hacía referencia al carácter dependiente de éstos respecto a los grandes países industriales del norte; y las diversas formas de marxismo, con prioridad en los aspectos productivos. Las tres compartían, sin embargo, la valoración del rol regulador del Estado en las economías nacionales, y descuidaban la relevancia de la política monetaria.

Asimismo, el periodo transcurrido entre 1938 y 1952 se conoce en Chile, desde la óptica de la historia política, como la época de los gobiernos radicales, donde por 14 años actuaron como bisagra entre las colectividades de derecha e izquierda.

Los presidentes que estuvieron bajo ese periodo, fueron Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), profesor y abogado de la U. de Chile, quien creó la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), la Empresa Nacional de Petróleo (Enap), la Empresa Nacional de Electricidad (Endesa) y el holding de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) ;Juan Antonio Ríos (1942 -1946), quien impulsó Chilefilms, la Empresa Nacional de Electricidad, Compañía de Manufacturas del Cobre, Compañía de Acero del Pacífico y el Ministerio de Economía; y Gabriel González Videla (1946-1952), quien incorporó a la mujer en la vida política, obteniendo plenitud del derecho a voto, el desarrollo de una fuerte política antártica con la determinación del Territorio Antártico Chileno y la creación de la Universidad Técnica del Estado.

Todos ellos pusieron en marcha el modelo económico de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Esta etapa correspondió a la denominada República Presidencial. Tenía su base ideológica en los principios de la Revolución Francesa, que se centraba en los postulados de libertad, igualdad, solidaridad, participación y bienestar.

i. El problema: alta inflación

Así, en Chile, como en el resto de América Latina, se comenzó a observar una preocupación respecto a los problemas que generaba el modelo económico keynesiano que primó tras la crisis de 1939, en donde el Estado asumió un rol clave en la economía.

De acuerdo a Javier Campos Gavilán en su tesis *Antecedentes del neoliberalismo en Chile (1955-1975): el autoritarismo como camino a la libertad económica en el país*, la inflación comenzó a convertirse en una problemática durante el segundo mandato de Ibáñez del Campo. En 1952, creció en un 40%; en 1954, un 64% y en 1955, un histórico 86%. Comenzaron a surgir serios problemas sociales, principalmente en los sectores bajos y medios de la población que vivían de sus salarios o pensiones y que eran por tanto, a quienes más afectaba la inflación. La situación, además, se veía acrecentada a causa de la escasa planificación económica y políticas macroeconómicas poco adecuadas que promovió el gobierno de turno, que repercutían en evasión tributaria y desajustes fiscales a

causa del elevado gasto fiscal debido a las presiones que tanto empresarios, como obreros ejercían sobre el Estado en demanda de mayores recursos²³.

En ese marco, Gárate reconoce que los bloques del ala derecha, que incluía a conservadores y liberales, comenzaron a cuestionar el modelo imperante en esa época. Dentro de ellos, destaca el rol que jugó el diario El Mercurio, de propiedad de Agustín Edwards, el cual diagnosticó una crisis profunda, cuyo comienzo coincidía con la instauración de las políticas del Frente Popular a partir de 1939, las cuales definió como socializantes y destinadas al fracaso. En esa línea, dice que según este matutino, las causas de este fracaso se encontraban en el intento del Frente Popular de mejorar artificialmente las condiciones de vida de la población sin un aumento paralelo y equivalente de la producción, lo cual derivó a la inflación.

“El deber del Estado es respetar la propiedad privada de los medios de producción, asentando en el amparo de las libertades económicas y políticas de la ciudadanía. Su fracaso como empresario y productor de riquezas, además de ser mal administrador, está dado por su falta de sentido comercial y la propia naturaleza de las fluctuaciones de los precios en el mercado”²⁴.

Desde esta óptica, Gárate expone que, según El Mercurio, el crecimiento desproporcionado del Estado y de su burocracia “absorbió recursos propios y legítimos de la empresa privada, con lo cual se contradecía los más básicos principios económicos”. En concreto, el diagnóstico del medio aseguraba que “el desorden social, las huelgas, y el peligro de Golpe de Estado solo se evitaría revirtiendo las políticas de los 20 años que antecedieron y volviendo al buen camino que dictaban las decisiones técnicas”.

De este modo, la empresa periodística dejaba claro en su editorial que lo óptimo era liberalizar la economía de las trabas artificiales que la mantenían constreñida por debajo de sus reales capacidades, lo que se solucionaría a través de un régimen de libre empresa. En efecto, a juicio de los editorialistas, la falta de un plan de desarrollo armónico de industria y

²³ Campos Gavilán, Francisco. (2013). Antecedentes del neoliberalismo en Chile (1955-1975): el autoritarismo como camino a la libertad económica. Santiago. Tesis de grado. Universidad de Chile. Facultad de Derecho. Página 17.

²⁴ Editorial, “Frenando el factor inflacionista fiscal”, El Mercurio, 08-08-1959, p. 3. Citado por: Soto, Á., El Mercurio y la difusión del pensamiento político económico liberal 1955-1970, Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, 2003

agricultura, que había afectado especialmente a la segunda, dio como resultado una falta crónica de divisas y el aumento constante de la inflación. Por ende, para ellos la intervención estatal debía ser reemplazada por las leyes de mercado y el Estado, limitarse a dar orientaciones generales y hacer inversiones en obras públicas²⁵.

ii. Ayuda de expertos del país del norte: misión Klein-Saks

Como mencionábamos, luego del periodo de los radicales, nuevamente se instala en el Ejecutivo, Carlos Ibáñez del Campo, durante los ejercicios 1952 y 1958, pero esta vez mostrando una conducción bastante errática, que lo llevó a forjar las alianzas políticas más diversas y a enfrentar una agitación social cada vez más fuerte frente a los problemas económicos. Es más, la inflación fue en aumento durante su administración y el plan de ajuste fiscal que aprobó a mediados de su mandato, activó más todavía la oposición de obreros y estudiantes.

El economista chileno Ricardo Ffrench Davis da cuenta que la elevada inflación que había en esa época fue lo que gatilló la decisión de buscar nuevas estrategias económicas²⁶.

En ese sentido, el libro *Reformas económicas e instituciones políticas: la experiencia de la Misión Klein-Saks en Chile*, editado por el economista Juan Pablo Couyoumdjian y de los autores Adolfo Ibáñez, Sebastián Edwards, Cristián Garay Vera, Rolf Lüders y Cristián Larroulet, analiza el ajuste económico impulsado en 1955 por Ibáñez, y, además, da cuenta respecto a los programas de estabilización económica que se impulsó durante su mandato, tal como fue la misión Klein-Saks.

Así, en una primera parte el historiador chileno Adolfo Ibáñez Santa María reconoce que los años centrales de la década de 1950 fueron muy “críticos”, dado que en 1955 la inflación era preocupante, alcanzando un nivel de 5% promedio anual²⁷.

De igual forma, el economista chileno Juan Pablo Couyoumdjian, en el segundo apartado de este trabajo, puntualiza que la inestabilidad monetaria de esa época había sido un problema de larga data en el país. Es más, durante este segundo tiempo de Ibáñez la tasa de

²⁵ Gárate. Op. Cit. Pág. 86.

²⁶ Ffrench Davis, *óp. cit.*, p. 21

²⁷ Larroulet, Cristián; Garay Vera, Cristián, Couyoumdjian, Juan Pablo; Lüders Schwarzenberg, Rolf; Ibáñez Santa María, Adolfo; Edwards, Sebastián. (2011). *Reformas económicas e instituciones políticas: la experiencia de la Misión Klein-Saks en Chile*. Santiago de Chile: Universidad el Desarrollo. Página 15-16

inflación alcanzó niveles hasta entonces nunca antes vistos en el país; y anualizada alcanzaba cerca de un 80%.

Del mismo modo, apunta que la falta de definición del ex mandatario en materias económicas se dilucidaban en la poca capacidad de conducir las finanzas públicas de su equipo económico, dado que durante sus seis años de gobierno Ibáñez tuvo 9 ministros de Hacienda y 14 ministros de Economía y Comercio, concentrándose la mayor volatilidad en la primera mitad de su período presidencial, haciendo hincapié en que su falta de decisión política constituyó una restricción fundamental para el avance y el desarrollo de los programas anti-inflacionarios que se desplegaron durante este periodo. Pues bien, la oposición que enfrentaba el gobierno, sumado a las divisiones dentro del propio Partido Agrario-Laborista, el principal sostén político del Presidente Ibáñez, aparecen como escollos importante para estas definiciones, especialmente cuando dentro de este mismo partido empezaron a surgir diferencias con las políticas del gobierno lo que constituiría un obstáculo adicional al trámite legislativo de las políticas propuestas por las sucesivas autoridades ministeriales²⁸.

Es en este contexto que el país estaba llegando a un punto de inflexión que hacía “necesaria” la implementación de un programa de ajuste global, tal como lo fue “Misión Klein-Saks”, que sería otra intervención norteamericana en la historia del país.

Couyumdjian refuerza la idea del rol del director de El Mercurio, Agustín Edwards, quien habría jugado un papel clave en términos de explícitamente apoyar la idea de contratar una misión de expertos extranjeros, y de recomendar a este equipo en particular, para asesorar al gobierno chileno en materias del manejo de la política económica. En efecto, con esta ayuda extranjera se produjo la unión por conveniencia entre el Presidente Ibáñez y los partidos liberales y conservadores.

De esta forma, se forjó una nueva coalición política para llevar a cabo un programa de ajuste económico. Así, la firma Klein & Saks establecida en Washington D.C. ofrecía suficientes garantías tanto a organismos internacionales e inversionistas preocupados del futuro de la economía chilena, como a los representantes de la derecha política chilena.

²⁸ *Ibíd.*, p. 63, 69 y 71.

Pues bien, la llegada de los economistas estadounidenses en septiembre de 1955 a Chile despertó un fuerte optimismo en relación a las posibilidades de salir de la crisis económica que afectaba al país. Según Couyumdjian, tal como lo anticipaba previamente, hacia esta fecha un nuevo equipo económico había asumido recién en el gobierno –dado los constantes cambios de gabinete- de modo que ninguna de las autoridades que habían contactado a la Misión Klein-Saks, previo a su visita al país, estaba en el equipo económico del gobierno, por lo menos en la primera línea del mismo.

Una mirada similar tiene frente a esto Gárate, quien pone énfasis en que en 1955 se produjo un giro importante en el gobierno Ibáñez, dado que su administración decidió abandonar las políticas nacionalistas y populistas. De tal manera que el gobierno forjó una alianza con la derecha para evitar, entre otras cosas, el descontrol de la inflación.

Sin embargo, los líderes de la derecha tenían bastante claro cuál era el modelo de desarrollo que aspiraban, razón por la cual decidieron contratar a los economistas norteamericanos Julius Klein y Julien Saks para elaborar un plan económico general, el cual constituyó la primera propuesta política económica ortodoxa de corto plazo y de liberalización paulatina de la economía chilena. En consecuencia, su ayuda respondía al difícil momento que atravesaba el país, por lo cual se decidió contratar a estos expertos que contaban con la experiencia para hacer frente a los problemas monetarios y financieros que agobiaban a la economía chilena. Es más, algunos la consideran el primer antecedente de aplicación del neoliberalismo en el país.

Así, según los técnicos norteamericanos, la economía chilena sufría un “desequilibrio entre el consumo y la capacidad productiva del país”. En ese sentido, Gárate argumenta que su visión monetarista se basaba en que: el déficit presupuestario obligaba a emitir dinero que no estaba respaldado con la producción, lo que terminaba elevando los precios. Esto, en la práctica, conducía a un nuevo aumento de las remuneraciones que a su vez acrecentaba el déficit fiscal, alimentando así el círculo vicioso.

Y, observaban, también, que el enorme tamaño del sector público, el gasto fiscal excesivo en remuneraciones, la burocracia y la baja inversión pública en el sector productivo, también afectaban a la economía local. Es así que para ellos las políticas económicas de los últimos dos decenios habían, a su juicio, desincentivado la inversión privada a causa de las

excesivas restricciones: fijaciones de precios, reajuste automático de salarios, control de las importaciones y del tipo de cambio, además de la protección de ciertas industrias artificiales respecto de la competencia extranjera²⁹.

“Las medidas aconsejadas por la misión se inscribieron en la línea de la ortodoxia clásica. En otras palabras, en primer lugar, debía atacarse el problema de la inflación disminuyendo el déficit fiscal y rompiendo la indexación (keynesiana) entre salarios y precios. Con ello se pretendía retornar a la libertad de negociación y remuneraciones, para así avanzar posteriormente hacia la liberalización del comercio exterior. Se propuso también eliminar los subsidios, los controles de precios y los monopolios públicos y privados”³⁰.

En esa línea, nuevamente reitera que uno de los principales defensores de las políticas que ellos promovían era El Mercurio, al considerar sus informes y recomendaciones de política pública como un primer paso hacia el saneamiento económico. Asimismo, apunta que el diario culpó al gobierno de Ibáñez y al Congreso Nacional de la prolongación de la crisis y de la falta de un programa global de transformaciones.

De esta forma, indica que la crisis económica y social de la década del 50, como el desgaste político del gobierno de Ibáñez, dieron la oportunidad a la derecha, por primera vez, desde 1938, de recuperar el poder a través de las elecciones de 1958, que dio como vencedor por mayoría relativa a Jorge Alessandri Rodríguez, con el 31,56 % de los votos.

En ese contexto, Ffrench Davis sostiene que la administración que le sucedió asumió con un programa de estabilización mucho más simple, de modo que le atribuyó gran importancia al logro de la estabilización a corto plazo, el cual se basó en un ancla cambiaria con el apoyo de abundantes créditos externos al gobierno. En efecto, reconoce que el programa tuvo un éxito inicial, pues efectivamente se logró reducir la inflación en los años 1960 y 1961, de modo que la tasa de inversión se incrementó y el ritmo de crecimiento industrial se aceleró. No obstante, el aumento de las exportaciones fue insuficiente frente a una gran expansión de las importaciones.

Así las cosas, admite que los desequilibrios crecientes de balanza de pagos fueron de tal magnitud, que las reservas internacionales se agotaron. Por ende, en medio de una crisis

²⁹ Gárate. *óp. cit.*, p. 88

³⁰ *Ibíd.*, p. 88.

cambiaría, su administración se vio obligada a devaluar, en 1962, de modo que se incrementaron las restricciones a las importaciones, y la inflación nuevamente comenzó a ser un tema.

Pues bien, según observa, la experiencia de este gobierno parece como un primer intento por modernizar la economía mixta y el régimen de Estado interventor, dado que se buscó limitar el papel directamente empresarial del Estado, con el propósito de que el sector privado asumiera una responsabilidad mayor, entendiéndose esto lo más cercano al modelo clásico keynesiano, lo que se complementó con una apertura moderada de las importaciones y diversos incentivos a las exportaciones³¹.

Según admite Gárate, el contexto internacional y la influencia de Estados Unidos en pleno periodo de la Guerra Fría -un enfrentamiento político, económico y social, que fue iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado bloque Occidental (occidental-capitalista) liderado por el país del norte, y el bloque del Este (oriental-comunista), dirigido por la Unión Soviética- convencieron al mundo conservador chileno de la necesidad de abandonar toda política de fortalecimiento y colaboración con el Estado y así reinstalar una economía liberal a partir del Estado.

En efecto, puntualiza que el discurso por la libertad se volvió también ideológico e intransable para este sector de la sociedad chilena, pues -a su entender- ya no había compromiso posible entre ‘libertad y comunismo’, de modo que entendía al capitalismo como la única opción viable frente al intervencionismo estatal socialista y el último resguardo de las libertades políticas democráticas.

Añadiendo en que en este nuevo escenario de “lucha internacional”, la derecha se abrió un camino para llevar a cabo su proyecto de modernización capitalista sin alianzas políticas ni transacciones. Les faltaba solo un apoyo teórico propio al interior del país, tan influyente como podía serlo la Cepal en aquellos años. Dicho programa no vendría de Europa, como había sido la tradición intelectual desde el siglo XIX, sino que de una universidad del medioeste de los Estados Unidos: la Universidad de Chicago³².

³¹ French-Davis, Ricardo. *óp. cit.*, 21 y 22

³² Gárate. *óp. cit.*, p. 89

IV. La guerra contra el desarrollismo

Tal como lo plantea Campos Gavilán, desde el fin de la segunda guerra mundial, la campaña del “buen vecino” por parte de Estados Unidos con Latinoamérica se intensificó. Así, en 1949, cuando asumía por segunda vez como presidente, Harry S. Truman, anunció su programa de colaboración exterior en que destacaba el denominado “Punto Cuatro” que se refería a un plan de cooperación técnica con América Latina coordinada a través de una agencia especial dependiente del gobierno norteamericano, que tenía como objetivo la preparación de profesionales y técnicos en los países en desarrollo.

En esta política, las universidades norteamericanas no se quedaron atrás y a partir de 1950 se iniciaron programas de cooperación en las que participaba directamente el gobierno de Estados Unidos, a través de la denominada Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) en conjunto a una o varias universidades del país receptor.

De acuerdo a la información que recoge Juan Gabriel Valdés, en su obra sobre la *Escuela de Chicago y los economistas de Pinochet*, en 1953 se nombró como director del programa “Punto Cuatro” en Chile, al académico Albion Patterson, quien tendría especial interés en la economía debido a su cercanía y amistad con el decano de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, Theodoro Shultz³³.

Por el lado de EE.UU., el presidente de ese entonces, Dwight Eisenhower (1953-1961), un republicano de línea dura, tenía plena convicción de no dar un giro hacia la derecha, como proponían los Chicago Boys; básicamente porque los servicios públicos y las garantías de los trabajadores eran demasiado populares y Eisenhower quería seguir manteniéndose en el poder. De hecho, Klein da cuenta que el mandatario estadounidense no tenía muchas ganas de revocar el keynesianismo en casa, pero sí estuvo más dispuesto a emprender medidas radicales para derrotar al desarrollismo en el extranjero, donde la Escuela de Chicago jugaría un rol fundamental.

Así, una de las mayores preocupaciones que tenía el Departamento de Estado de ese país era el creciente éxito de los nacionalismos económicos que se empezaron a forjar después de la crisis del 29, donde muchos países latinoamericanos apostaron por el modelo de

³³ Campos Gavilán, Francisco. *óp. cit.*, p. 26.

sustitución de importaciones³⁴, lo que se le conoció como desarrollismo, que, como anteriormente describimos, fue un conjunto de políticas económicas aplicadas por los gobiernos de distintos signos políticos de la región, quienes procuraron enfrentar los problemas del atraso, el estancamiento y la insuficiencia de las economías de la región.

No obstante, esta idea tenía bastante detractores, dado que a los terratenientes feudales del continente les gustaba el antiguo *statu quo*, que les permitía tener grandes beneficios, además, contaban con una gran cantidad de trabajadores que debían hacer el trabajo pesado en sus propiedades. Con todo lo que esta nueva corriente les generaba, se sentían amenazados al ver cómo sus trabajadores comenzaron a exigir una redistribución de la tierra; por otra parte, esa amenaza también la veían desde el plano gubernamental, dado que algunos gobiernos de turno mantenían el precio de sus cosechas bajo para que la comida no resultara demasiado cara.

De esta forma, según cuenta la periodista canadiense, las empresas extranjeras que operaban en la región plantearon dichas quejas a sus respectivos gobiernos. Entre ellas, que sus productos eran bloqueados en las aduanas, que sus trabajadores exigían mayores sueldos, y lo que más les generaba incertidumbre, era el hecho de que cada vez se hablaba más de la idea de nacionalizar desde las minas hasta los bancos, que eran propiedad de las empresas estadounidenses y europeas que operaban, con la finalidad de financiar el sueño latinoamericano de la independencia económica.

Así las cosas, Klein pone énfasis en que bajo la presión de estos intereses empresariales, surgió en los círculos de la diplomacia estadounidense e inglesa un movimiento que intentaba colocar a los gobiernos desarrollistas en la lógica binaria típica de la Guerra Fría. En ese sentido, ellos observaban que el nacionalismo del Tercer Mundo era el primer paso en el camino hacia el comunismo totalitario y había que acabar con él antes de que echara raíces.

Pues bien, según añade la investigadora, dos de los principales defensores de esta teoría fueron John Foster Dulles, el secretario de Estado de Eisenhower, y su hermano Allen Dulles, director de la recién creada CIA. Es importante recalcar que antes de ocupar cargo público, ambos habían trabajado en un bufete de abogados, el cual había representado a

³⁴ Klein. *óp. cit.*, 89.

muchas de las empresas que se vieron afectadas con el desarrollismo. Entre las que destacan J. P. Morgan & Company, la International Nickel Company, la Cuban Sugar Cane Corporation y la United Fruit Company.

De esta forma, los resultados de estas influencias fueron inmediatos, dado que la CIA lanzó sus dos primeros golpes de Estado: el primero fue, en 1953, cuando un complot de la CIA derrocó a Mossadegh en Irán y reemplazarlo por el brutal sha. El siguiente fue en 1954, en Guatemala, que según cuenta Klein, fue llevado a cabo por una petición directa de la United Fruit Company, puesto que dicha firma estaba indignada, dado que el presidente de ese entonces, Jacobo Arbenz Guzmán había expropiado tierras que no usaba (ofreciendo la correspondiente indemnización) como parte de su proyecto para transformar Guatemala “de un país atrasado con una economía predominantemente feudal en un Estado capitalista moderno”, según así lo consignó el mandatario en aquel momento³⁵

A juicio de la canadiense, la prioridad de los países hegemónicos era erradicar el desarrollismo, que cada vez avanzaba con más fuerza. En ese contexto, cuenta que ese era el tema principal que preocupaba en aquel entonces.

Por esa razón, dos estadounidenses se reunieron en Santiago de Chile, en 1953, uno era Albion Patterson, director de la Administración para la Cooperación Internacional en Chile --la agencia gubernamental que con el tiempo se convertiría en USAID- y el segundo Theodore W. Schultz, presidente del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. En particular, según comenta a Patterson, le preocupaba cada vez más la creciente influencia del economista argentino Raúl Prebisch, que entre 1950 y 1963 fue Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“Los dos hombres diseñaron un plan que convertiría Santiago, un semillero de la economía centrada en el Estado, en lo opuesto, un laboratorio para experimentos de vanguardia sobre el mercado, ofreciendo así a Milton Friedman lo que deseaba hacía tanto tiempo: un país en el que poner a prueba sus queridas teorías. El plan original era sencillo: el gobierno estadounidense pagaría para enviar a estudiantes chilenos a aprender economía en lo que prácticamente todo el mundo reconocía que era el lugar más rabiosamente anti «rosa» del

³⁵ Ibíd., p. 91.

*mundo: la Universidad de Chicago. Schultz y sus colegas en la universidad también recibirían dinero para viajar a Santiago, investigar la economía chilena y formar estudiantes y profesores en los fundamentos de la Escuela de Chicago*³⁶.

En ese sentido, lo que destaca Klein es que lo que diferenciaba este plan de los otros muchos programas de formación estadounidenses que becaban a alumnos latinoamericanos era su carácter netamente ideológico. Pues, al escoger a la Universidad de Chicago para formar economistas chilenos, se comenzaba de alguna forma a gestar la guerra contra el desarrollismo, de modo de inculcar a los estudiantes chilenos qué ideas debían aprender y cuáles otras no.

Simultáneamente, admite que se trató de una intervención muy evidente de Estados Unidos en los asuntos de Latinoamérica. Pues, según precisa, Albion Patterson se contactó con el rector de la Universidad de Chile, y le ofreció una donación con la que financiar el programa de intercambio. No obstante, el rector de la esa entidad rechazó la oferta y le planteó que sólo participaría si su organismo podía tener influencia sobre quién en Estados Unidos formaría a sus alumnos. Como no tuvo una buena acogida por parte de esta institución educacional, Patterson se contactó con el rector la Universidad Católica, quien aceptó la oferta y así nació lo que en Washington y Chicago se conocería como “el Proyecto Chile”, que según observa Klein se trató de “combatientes ideológicos” que ganaran la batalla de las ideas desarrollistas³⁷.

V. Convenio entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica

Pues bien, es en este contexto que la Universidad Católica comienza a jugar un rol trascendental en la historia de Chile. Durante ese tiempo, la Facultad de Economía de la Universidad Católica (UC) poseía escaso desarrollo académico. Por esta razón, en 1955 sus autoridades decidieron aceptar la invitación de la Administración de Cooperación Internacional (ICA), que era un organismo gubernamental de los Estados Unidos que operó desde el 30 de junio de 1955 hasta el 4 de septiembre de 1961, responsable de programas de asistencia extranjera y de "seguridad no militar". Fue el predecesor de la actual Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, representada en Chile por Albion Patterson -quien fuera director del programa- para establecer un convenio de colaboración e

³⁶ Klein, Noemi. *óp. cit.*, p. 91 y 92.

³⁷ *Ibíd.*, p. 83 y 84

intercambio académico entre esta Facultad y su símil de la prestigiosa Universidad de Chicago.

Pues bien, tras este convenio partieron a aquella ciudad un grupo de estudiantes que luego serían conocidos como los Chicago Boys, economistas en su mayoría egresados de la Universidad Católica, que a su regreso prontamente buscaron hacer eco respecto las metodologías aprendidas en los Estados Unidos.

Klein detalla que dicho convenio se inauguró oficialmente en 1956 y permitió que muchos chilenos cursaran estudios de posgrado en la Universidad de Chicago entre 1957 y 1970, con la matrícula y los gastos a cargo de los contribuyentes y de fundaciones estadounidenses. Asimismo, complementa que en 1965 se amplió el programa para incluir a estudiantes de toda Latinoamérica, con una proporción alta de argentinos, brasileños y mexicanos. Dicha expansión se financió con una donación de la Fundación Ford y posibilitó la creación del Centro de Estudios Económicos Latinoamericanos de la Universidad de Chicago.

En efecto, cuando llegaron los primeros estudiantes chilenos, Harberger impulsó el “taller de Chile”, donde los profesores de dicha entidad presentaban su diagnóstico “altamente ideologizado de los problemas de ese país y ofrecían sus recetas para solucionarlos”, según comenta. De esta forma, todas las políticas económicas de Chile se pusieron bajo lupa. Entre ellas, la red de seguridad social, su proteccionismo de la industria nacional, sus barreras arancelarias y su control de precios.

Según reconoce Klein, a los estudiantes se les enseñó a despremiar esos intentos de aliviar la pobreza y muchos de ellos dedicaron sus tesis doctorales a analizar de manera profunda el desarrollismo latinoamericano. Es más, cuenta que cuando el primer grupo acabó sus estudios, muchos de ellos llegaron a trabajar como profesores de economía en la Facultad de Económicas de la Universidad Católica, a la que convirtieron rápidamente en su pequeña Escuela de Chicago en el centro de Santiago. De hecho, contaban con el mismo programa educativo, los mismos textos en inglés.

En ese marco, Sergio de Castro, uno de los tres primeros estudiantes de la Universidad Católica, que fue becado para estudiar Economía en la Universidad de Chicago, llegando a

ser el intelectual más representativo e influyente de los Chicago Boys, fue nombrado decano de la facultad, de modo que ya no hacía falta que los estudiantes chilenos viajaran a Estados Unidos, puesto que cientos de ellos podían recibir una educación al estilo de la entidad educacional norteamericana y sin salir de casa³⁸.

A juicio de Gárate, los estudiantes que viajaron hasta Estados Unidos fueron cuidadosamente seleccionados por profesores de esta entidad. Dicho grupo no solo se reapropió de los conceptos, sino que los reprodujo por medio de la enseñanza y la investigación, pero también adaptando el modelo de transferencia hacia otros países de Latinoamérica, como Argentina y Colombia³⁹.

Déllano y Traslaviña plantean que el convenio entre la U. de Chicago y la UC contemplaba una duración de tres años, sin embargo, tras su “éxito” las autoridades de la UC solicitaron a los norteamericanos la prolongación del acuerdo por dos años más. De esta forma, expiró el 31 de marzo de 1961.

En concreto, detallan que fueron cerca de 30 las becas para los chilenos, de los cuales al menos 15 se harían notar años después como académicos, empresarios o ejecutivos de grupos económicos, y sobre todo, conductores de la economía del país. Asimismo, revelan que las becas fueron bastante “holgadas”, puesto que incluían desde los pasajes ida y vuelta a los Estados Unidos, hasta dinero para el sustento personal –alojamiento y alimentación- y para la compra de libros. Además, al terminar sus estudios en Chicago, eran llamados a tomar un cargo académico, con horario completo en la U. Católica⁴⁰.

Por otra parte, es importante reconocer, según destacan los académicos, que el grupo de economistas que fueron formados en la PUC, a partir de 1956, constituyeron un grupo minoritario respecto de la mayor parte de sus pares de la época, dado que hasta mediados de la década de 1960, incluso en los Estados Unidos, la teoría neoclásica monetarista era defendida por muy pocos, pues lo que predominaba era el paradigma keynesiano y el papel central del Estado en la economía.

³⁸ Klein, Noemi. *óp. cit.*, p. 88

³⁹ Gárate, Manuel. *óp. cit.*, p. 98 y 99.

⁴⁰ Déllano, Manuel; Traslaviña, Hugo. *óp. cit.*, p. 14.

De esta forma, los Chicago Boys formaron así un grupo de intelectuales que, apoyados por las matrices teóricas y por ciertos desarrollos analíticos de sus profesores (entre los que se contaban Milton Friedman, Friedrich von Hayek, Arnold Harberger, Robert Lucas Jr., George Stigler, Theodore Schultz, Gary Becker o Gale Johnson -muchos de ellos posteriormente galardonados con el Premio Nobel de Economía), participarían activamente en la consolidación del enfoque neoliberal en Chile primero, y de su aplicación práctica después del golpe de estado de 1973.

i. La Escuela de Chicago

Klein pone énfasis en que la Escuela de Chicago en 1950 representaba un “baluarte revolucionario” contra el pensamiento estatista hegemónico de ese entonces. Es más, comenta que Frank Knight, uno de los fundadores de la Escuela de Chicago, creía que los profesores debían enseñar a sus alumnos que cada teoría económica es una característica “sagrada” del sistema y no una hipótesis sometida a debate.

De esta manera, apunta a que el núcleo ideológico de Chicago era que la oferta, la demanda, la inflación y el desempleo, eran como las fuerzas de la naturaleza; vale decir, “fijas e inmutable”, de modo que ellas coexistían en perfecto equilibrio.

A su juicio, su paradigma planteaba que si las economías sufrían de altas tasas de inflación, la responsabilidad directa era de los políticos que hacían mal las cosas, por estar “mal aconsejados” y que habían permitido que entrase demasiado dinero en el sistema en lugar de dejar que el mercado alcanzase el equilibrio por sí solo. Así, sostenían, según la autora, que “del mismo modo que se autorregulan los ecosistemas, manteniéndose en equilibrio, el mercado, si se le dejaba a su libre albedrío, crearía el número preciso de productos a los precios exactamente adecuados, producidos por trabajadores con sueldos adecuados para comprar esos productos”⁴¹.

Para articular esta seguidilla de hechos, Gárate añade que la visión económica de Chicago tomó forma en 1930, cuando Keynes publica *The General Theory of Interest, Money and Employment* (1936), rebatiendo la clásica ‘Ley de Say’, bajo el argumento que en el largo plazo las reales fuerzas de la economía tenderían hacia el equilibrio del pleno empleo. A su

⁴¹ Klein, Noemí. *óp. cit.*, p. 79, 80, 81, 82 y 83.

vez, Insistía en la importancia del papel del Estado en asegurar un volumen global de demanda destinado a asegurar el pleno empleo.

En definitiva, lo que hizo Keynes con esta obra -tras décadas de desocupación persistente en Inglaterra y otros países capitalistas- fue ofrecer una explicación convincente sobre el origen del problema, pero también una serie de prescripciones que se aplicaron durante la guerra y posteriormente. De este modo, la tradición oral de la Universidad de Chicago apareció como una suerte de “bastión de resistencia” de aquellos pocos iniciados en los fundamentos de la verdad económica.

En esa línea, destaca que Chicago representa una articulación particularmente “coherente y vigorosa” de la economía ideológica. Así, la observa como una doctrina que combina una “vanguardia intelectual” del neoclasicismo en economía, así como una penetración de las nociones económicas en el pensamiento político. De igual forma, establece que existen tres elementos centrales detrás de la visión normativa de la economía de la Escuela de Chicago:

- El mercado
- El gobierno
- El monetarismo.

Pues bien, en su percepción, el mercado es entendido como el “marco natural de intercambio libre individual e informado de los seres humanos; y constituye el paradigma de la libertad y de la organización social libre y no coercitiva”.

Por otra parte, dice que para los economistas de la Escuela Chicago, la economía es -ante todo- la ciencia del mercado, de la elección de los hogares y de las empresas expresadas al interior del mismo; de un sistema racional cuya lógica responde finalmente a las decisiones libres e individuales de sus integrantes. En última instancia, el orden de la sociedad no proviene de la autoridad, sino que del mercado y del sistema racional/natural que implica⁴².

Por su parte, Délano y Traslaviña hacen hincapié en la que la ideología neoliberal que se enseña en Chicago tiene una visión global del mundo, pues concibe que sus principios se pueden aplicar a todos los ámbitos de la vida de un país. Dicha ideología trata de una crítica

⁴² Gárate. *óp. cit.*, p. 95, 96 y 97.

a la intervención estatal y gubernamental en los mercados y una defensa apasionada y lúcida de la libre iniciativa individual. A su vez, ponen énfasis en que para Friedman, la base de la prosperidad es una combinación entre la libertad de mercado y la libertad política.

En concreto, establecen que las ideas motrices del economista son “dejar al mercado actuando sin restricciones, eliminando las trabas de la libre competencia”; de modo que defendía la idea de frenar tanto el déficit fiscal, como el gasto público y la emisión de dinero, que son las causas de la inflación crónica.

En síntesis, plantean que en materia económica el neoliberalismo postula la propiedad privada individual, la reducción del tamaño e intervención del Estado, la privatización y descentralización de la actividad económica y social, y un rol preponderante del mercado, libre de distorsiones e interferencias, en todas las actividades humanas. Mientras que en el ámbito de lo social, este modelo requiere de la atomización de las organizaciones sociales, para impedir que la acción de "grupos de presión" sobre el Estado distorsione la acción del mercado. En el plano político, en tanto, enfatizan que el sistema antes reseñado se debe sostener y funcionar con eficiencia, independientemente de quién esté en el poder⁴³.

ii. Las razones del acuerdo

El propósito de dicho acuerdo no solo tuvo como objetivo promover a un grupo de profesores e investigadores bien entrenados en economía, sino también crear un tipo especial de economistas encargado de una misión específica: generar el conocimiento necesario para servir a los sectores modernos y dinámicos de la economía chilena.

De este modo, citando al economista Juan Gabriel Valdés, Gárate enfatiza que la transferencia ideológica realizada entre el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago y la Facultad de Economía de la PUC, fue un evento organizado entre las autoridades de ambas instituciones a través de ciertos actores claves, a quienes se sumaron un grupo de hombres de negocios (conservadores chilenos) que deseaban revivir las ideas del libre mercado a partir de mediados de los años 1950.

⁴³ Délano. *óp. cit.*, p. 16, 17 y 18.

En ese contexto, lo que se buscó fue combatir y contrarrestar lo que se percibía como una “concepción socialista” en la enseñanza de la economía en Chile (estructuralismo cepaliano), y así transformar la administración económica del país en el lapso de una década. De esta misma forma, comenta que el acuerdo de cooperación entre la Universidad de Chicago y la PUC no se habría realizado de manera tan expedita sin la participación de tres actores centrales: Albion Patterson, Theodore W. Schultz y Julio Chaná, quienes son llamados los padres de los Chicago Boys. No obstante, el verdadero mentor de ellos fue el profesor Arnold Harberger.

Análogamente, Gárate plantea que con ellos se produce la transferencia de un nuevo tipo de liberalismo económico en Chile, cuyo origen no está únicamente en los teóricos europeos clásicos ni tampoco en las costumbres y tradiciones del comercio internacional observadas en el país hasta aquel momento. A su juicio, tampoco tiene nada que ver con la teoría económica liberal inaugurada en la Universidad de Chile por el economista francés Jean Gustave Courcelle-Seneuil en los años 1850, sino que se trata de un tipo especial de concepción del liberalismo nacido en la época de entreguerras, como reacción al intervencionismo estatal democrático.

Asimismo, reconoce que los diferentes reportes de los académicos de dicha institución revelan la idea de que Chile serviría como un laboratorio de investigación sobre ciertos temas de especial interés para algunos profesores de este plantel, pero también para el estudio de la economía de los países en desarrollo⁴⁴.

“La formación económica importada en la PUC puso un énfasis especial en los aspectos más reconocidos del corpus neoclásico; es decir, la teoría de precios y monetaria, incluyendo el necesario efecto lateral de minimizar, sino directamente menospreciar todos aquellos elementos del conocimiento que no estaban incluidos en la definición profesional de la actividad del economista. Esto abarcó todas las explicaciones históricas, culturales, estructurales e incluso psicológicas, las cuales fueron consideradas como ajenas a la disciplina o, en la mayoría de los casos, simplemente descritas como pura y simple ideología. Esto tuvo claras repercusiones en la formación profesionalizante de los nuevos economistas de la PUC y en su aislamiento respecto de otras escuelas, pues el estructuralismo cepaliano se alimentaba fuertemente de referencias históricas y sociales como determinantes de las

⁴⁴ Gárate. *óp. cit.*, p. 108 y 109

estructuras económicas. El desprecio hacia la política económica chilena de fines de los años 50 se tradujo también en una crítica abierta al Estado chileno, los empresarios políticos, pero especialmente a los adversarios tradicionales de la CEPAL”⁴⁵.

Gárate establece que un elemento que ayudó a cimentar el proceso de transferencia fue el entorno social propio de la Facultad de Economía de la PUC. Pues, según detalla, se trató de un espacio constituido por un número muy limitado de estudiantes que, en su mayor parte, poseían varios rasgos en común: jóvenes del sexo masculino, provenientes de clase media/alta y con una sólida formación en inglés, producto de una educación secundaria en colegio privados y bilingües altamente selectivos.

En segundo lugar, precisa que si bien algunos se definían como “apolíticos”, gran parte de ellos simpatizaban con las ideas conservadoras o a lo más social cristianas, pero con una visión más individualista en contraposición al conservadurismo chileno tradicional. Asimismo, añade que muchos de ellos provenían de familias de inmigración europea relativamente reciente.

VI. Triunfo político de Salvador Allende

El 4 de noviembre de 1970, con la investidura de Salvador Allende como Presidente de Chile, se inició en el país el más ambicioso proceso de cambios sociales, económicos y políticos del que haya sido testigo Chile durante su historia.

El programa de la Unidad Popular, impulsado por Allende y conformado por el Partido Radical, Partido Socialista, Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario, el Partido de Izquierda Radical y la Acción Popular Independiente, incorporándose la Izquierda Cristiana y el MAPU Obrero y Campesino (escisión del MAPU), fue elaborado a lo largo de 20 años, desde su primera candidatura presidencial, en 1952. Ella buscaba responder a las aspiraciones de los trabajadores, de los campesinos, profesionales y capas medias.

Esta agrupación de partidos añoraba llevar a cabo reformas estructurales, y de poner fin al dominio monopólico sobre importantes sectores económicos abriendo paso al área de propiedad social. Como abanderado de la Unidad Popular, Allende no sólo se convirtió en

⁴⁵ *Ibíd.*, p. 110.

el primer mandatario socialista en el mundo en ser elegido democráticamente, sino también el primero en intentar en transitar al socialismo mediante la vía pacífica, también llamada vía chilena al socialismo.

De hecho, según versa el programa básico de Allende, consensuado por los partidos y movimientos que integran la UP:

“Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente (...) en Chile las recetas “reformistas” y “desarrollistas” que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo (...) los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los gobiernos burgueses, han logrado apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro y salitre. Controlan el comercio exterior y dictan la política económica por intermedio del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas industriales y de servicios; gozan de estatutos de privilegios, mientras imponen la devaluación monetaria, la reducción de los salarios y sueldos y distorsionan la actividad agrícola por la vía de los excedentes agropecuarios (...) En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanecer casi intacto. A los dueños del capital les interesa ganar siempre más dinero y no satisfacer las necesidades del pueblo chileno”⁴⁶.

Su programa básico de gobierno contemplaba la construcción de un Estado Popular y una economía planificada, en gran parte estatizada. Aunque la ley de nacionalización del cobre fue aprobada sin oposición en el Congreso, no ocurrió lo mismo con el intento de estatizar las grandes empresas. Y, al no contar con mayoría parlamentaria, el gobierno decidió echar mano de un olvidado, aunque vigente decreto, dictado durante la República Socialista de 1932, el cual le permitió expropiar cualquier industria que fuese considerada

⁴⁶ Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular. Candidatura Presidencial de Salvador Allende.

estratégica para la economía. También utilizó otros mecanismos como la compra de acciones, lo que le permitió controlar casi el 80% de las industrias y un número importante de bancos.

De la misma forma, el sector agrario profundizó el proceso de reforma agraria iniciado por el gobierno de Jorge Alessandri y acelerado por el de Eduardo Frei Montalva, logrando la expropiación de más de 4.400 predios, sin contar con las más de 2.000 tomas efectuadas por los trabajadores agrícolas.

En el área de la salud, se mejoró el equipamiento de los hospitales y se estableció un programa de distribución de medio litro de leche diaria a cada niño.

En educación, se impulsó la enseñanza preescolar, básica e industrial, además de ampliarse el acceso a la universidad. El proyecto más emblemático en esta materia fue el denominado Escuela Nacional Unificada (ENU).

No obstante, un proceso inflacionario afectaría las políticas económicas de su gobierno, que más adelante se vería agravado por severos problemas de abastecimiento, acaparamiento y sabotaje empresarial.

Ante esto, su administración debió enfrentar la oposición del Partido Nacional, al que luego se unió la Democracia Cristiana, que en sus inicios había apoyado la elección de Allende y su programa de gobierno. También se sumó el rechazo de gremios como el de médicos, comerciantes minoristas, camioneros y mineros de El Teniente.

En el frente interno, el gobierno se vio entrampado por la división entre los sectores que querían acelerar y profundizar el proceso revolucionario (Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR; Movimiento de Acción Popular Unitario, MAPU; y un sector del Partido Socialista, PS) y los que pretendían consolidar el proceso (Partido Comunista, PC; Partido Radical, PR; Movimiento de Acción Popular Unitario-Obrero Campesino, MAPU-OC; y un sector del Partido Socialista encabezado por el propio Allende).

El inesperado resultado electoral obtenido por la UP en las parlamentarias de marzo de 1973, no hizo más que consolidar la opción golpista en algunos sectores de la oposición. Aunque esta opción se vio frustrada el 29 de junio de 1973, en el fallido intento de golpe de estado conocido como “el tanquetazo”. Salvador Allende fue claro en que un contundente

apoyo popular daría viabilidad a su gobierno; por lo cual quiso convocar a un plebiscito, sin embargo, nunca llegó a efectuarse, pues el 11 de septiembre de ese año fue derrocado por las fuerzas armadas encabezadas por el general en jefe del ejército Augusto Pinochet, hecho que marcó el fin de la Unidad Popular.

Jorge Arrate, quien ocupara un cargo trascendental en su gobierno, como estar al mando de Codelco, en el libro *Allende: presencia en la ausencia*, destaca que el ex mandatario emprendió durante su gobierno un amplio programa de transformaciones. Entre ellas, la nacionalización del cobre, que tuvo grandes beneficios para el país. A su vez, menciona que dentro de las políticas que propendían a la igualdad social, destaca la reforma agraria, la cual correspondió a un tenso proceso, de modo que el latifundio, uno de los rasgos permanentes de la economía chilena durante siglos, fue erradicado por la Unidad Popular.

Otra medida que menciona fue la distribución del ingreso, ya que las alzas salariales y el bajo precio de los productos básicos provocaron un impacto a favor de los ingresos originados en el trabajo. No obstante, en el periodo final del gobierno, revela que el “esfuerzo igualador se vio frustrado por las elevadas tasas de inflación”.

En ese marco, menciona que por aquel periodo la economía pasaba por un difícil momento “de tensión”. A su juicio, la alta demanda popular, que superaba las posibilidades de la producción; sumado a la escasez de moneda extranjera para financiar importaciones; y la “guerra psicológica”, produjo que el resultado fuera un “acaparamiento” de los productos alimenticios y el mercado negro adquiriría auge creciente. Así las cosas, los trabajadores veían disminuido su poder de compra, en la medida que la espiral de precios se hacía incontenible⁴⁷.

Luis Corvalán, periodista y miembro del Partido Comunista, en esa misma obra, reconoce que Allende fue un consecuente luchador “antiimperialista e internacionalista”. Asimismo, añade que él apreció el papel que jugó la Unión Soviética “a favor de la paz mundial y de la lucha de los pueblos por su liberación”. Del mismo modo, apoyó resueltamente la

⁴⁷ Lawner, Miguel; Soto, Hernán; Shatan, Jacobo. (2008) *Salvador Allende: presencia en la ausencia*. Santiago de Chile: LOM Ediciones: CENDA. Pág. 30 y 31.

Revolución Cubana, desde el día de su victoria. De hecho, cuenta que con Fidel mantuvo una estrecha amistad hasta el fin de sus días⁴⁸.

Por su parte, Ffrench Davis revela que el gobierno de la Unidad Popular priorizó la intensificación de los cambios de estructura, en particular, en lo referente a la propiedad, de modo que se aplicó una política macroeconómica fuertemente populista. En ese sentido, su administración rebajó las tarifas de los servicios públicos, incrementó salarios público, y el tipo de cambio se mantuvo congelado.

A su vez, pone énfasis en que el PIB efectivo creció entre 8% y 9% en 1971. No obstante, explica que dicha expansión se efectuó con pérdidas de ingresos fiscales por atraso en las tarifas de servicios públicos, apreciación cambiaria, debilitamiento de la inversión pública y privada, y gran expansión monetaria. A su vez, se había completado la nacionalización de la gran minería del cobre y estatizado el sistema bancario y muchas otras empresas. Por último, fue un periodo en que proliferaban las tomas arbitrarias de empresas y tierras por parte de grupos de trabajadores o políticos.

Por otro lado, añade que la demanda agregada fue discordante con el ritmo de creación de nueva capacidad productiva, en tanto que los equilibrios macroeconómicos del sector externo, fiscal y monetario se deterioraron aceleradamente, el cual fue reforzado por el empeoramiento continuo de los términos de intercambio entre 1970 y 1972, y por el corte de flujos de capitales privados y del gobierno estadounidense. En ese marco, Ffrench Davis dice que se intentó cambiar el rumbo, pero la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos y la falta de gobernabilidad frustraron ese y varios intentos posteriores de rectificación⁴⁹.

“La producción efectiva descendió 4,1% (7,4% por habitante) durante 1972-73, a consecuencia de los desequilibrios sectoriales y cuellos de botella resultantes de la brecha externa, innumerables huelgas, la desmesurada dispersión de tipos de cambio múltiples, la distorsión de los precios relativos oficiales y del creciente mercado negro, y una aceleración inflacionaria. La inversión decreció, aun cuando fue suficiente para sustentar un incremento leve de la capacidad productiva (...) la distribución del ingreso mejoró, pero se deterioró

⁴⁸ *Ibíd.*, p. 50 y 51.

⁴⁹ Ffrench-Davis. *óp. cit.*, p.29.

posteriormente con la hiperinflación, de 700%, registrada en los cuatro meses previos al golpe y la merma parcial de producción en 1972-73”⁵⁰

El economista chileno fundamenta que esta política económica trajo efectos políticos negativos en la fase de contracción económica con inflación creciente. Asimismo, añade que los desequilibrios macroeconómicos se expresaron con toda mordacidad en el segundo año del gobierno. Según su apreciación, bajo ese contexto -de baja gobernabilidad y de la creciente incapacidad de lograr acuerdos- es que se desencadenó el golpe por parte de los opositores.

En palabras del académico de la Universidad de Chicago, Arnold C. Harberger, en *Milton Friedman: metodología, teoría y política económica*, comenta que la elección de 1970 marcó un hito en la historia del país, dado que Allende “movió al país bruscamente hacia la izquierda”. En esa línea, asegura que la agricultura “fue fraccionada por la confiscación legal de muchos de los grandes fundos, y también por la ocupación ilegal –de facto- impulsada por algunos grupos, mayormente conocida como la profundización de la reforma agraria”.

En el lado de la industria, indica que algunas empresas fueron nacionalizadas por ley, pero en la mayoría de los casos el control estatal se alcanzó por medio de la facultad legal de la “intervención”, de acuerdo con la cual los dueños originales mantenían la propiedad legal, mientras que la empresa era en realidad manejada por un “interventor” nombrado por el gobierno. El sector bancario, por su parte, fue directamente “nacionalizado”, al tiempo que se imponía el control de precios a más de tres mil productos, dando así origen a “mercados negros” de enorme magnitud.

En ese sentido, detalla que solo una pequeña fracción de los consumidores pudo acceder a los bienes y servicios a precio controlado, mientras que la mayoría tenía que pagar en el mercado negro un precio que a menudo era cinco o más veces mayor que el oficial. Del mismo modo, agrega que los chilenos de todos los niveles socioeconómicos se vieron afectados y el descontento fue generalizado. De hecho, según reconoce la Corte Suprema

⁵⁰ *Ibíd.*, p. 29 y 30.

de Chile como sus organismos legislativos emitieron declaraciones indicando que el gobierno se había excedido en sus facultades constitucionales⁵¹.

*“No hay ninguna duda de la existencia de un verdadero caos económico en Chile al momento del golpe militar (11 de septiembre de 1973) y estoy totalmente convencido de que el golpe no habría ocurrido si las políticas económicas del gobierno de Allende no hubiesen sido tan desastrosas (...) en mi opinión y en la de muchos observadores serios de la escena chilena, el caos económico predominante fue el único elemento lo suficientemente fuerte y omnipresente como para llevar al golpe de Estado de 1973. En estas condiciones, es fácil entender que muchos economistas chilenos apoyaran el golpe militar cuando ocurrió y que estuvieran dispuestos a ayudar en la reconstrucción y reforma económica que siguió. Cabe señalar que los principales líderes de la DC se aliaron, ciertamente en forma tácita, con los militares en septiembre de 1973, y lo hicieron hasta aproximadamente un año después”*⁵²

VII. La Guerra Fría y sus consecuencias en Chile

La Guerra Fría se trató de un conflicto ideológico entre la Unión Soviética (unión de repúblicas socialistas soviéticas, el cual tuvo un sistema político de partido único, dominado por el Partido Comunista hasta 1991, aunque era una unión federal de 15 repúblicas soviéticas subnacionales, el Estado soviético fue estructurado bajo un gobierno nacional y una economía altamente centralizada) y los Estados Unidos, que se llevó a cabo después de la Segunda Guerra Mundial, vale decir, desde 1947 hasta 1991.

Sus protagonistas fueron, por una parte, Joseph Stalin, quien gobernó como dictador desde mediados de la década de 1920 hasta su muerte en 1953, sirviendo como Primer Ministro de la Unión Soviética, de 1941 a 1953, y como Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1922 a 1952. Ideológicamente fue marxista y leninista, ayudó a formalizar dichas ideas, mientras que sus propias políticas y teorías se conocieron como estalinismo. Mientras por el lado de Estados Unidos, quien lideró dicho conflicto fue Harry S. Truman, presidente de ese entonces de Estados Unidos.

El resultado de este conflicto fue la victoria de este último. Pues bien, para recapitular es importante hacer énfasis en que el final de la Segunda Guerra Mundial, llevada a cabo entre

⁵¹ Lüders, Rolf. (2015). *Milton Friedman: La vigencia de sus contribuciones: Metodología, Teoría y Política Económica*. Santiago: Ediciones UC. Página 21.

⁵² *Ibíd.*, p. 22.

1939 y 1945, deja a las potencias vencedoras el deber de reunirse en cumbres internacionales. Así, en febrero de 1945, mientras la guerra seguía en marcha, Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Roosevelt se reúnen para negociar durante una semana en la pequeña ciudad de Yalta, en Crimea. En la oportunidad, los tres grandes excluyen a la Francia del general Gaulle, puesto que, al haber colaborado con Alemania, no reconocen que tenga su mismo estatus.

De este modo, el propósito de dicha junta era organizar el fin del conflicto, la transición hacia la paz en Europa, y también hacerle pagar el precio de la guerra a Alemania. Para lograrlo, estas tres naciones ocuparon Alemania y la dividieron en zonas, cada una de ellas estaría administrada por una de las tres potencias y otorgar uno de sus territorios a Francia. Dentro de los propósitos que buscaba conseguir esta medida era que el país alemán se vuelva inofensivo. A su vez, anhelaban establecer elecciones libres en todos los países liberados de Europa para reafirmar el derecho de cada pueblo a la autodeterminación.

Finalmente, los vencedores buscaban establecer un sistema de seguridad colectivo entre las naciones para evitar que tenga lugar otra guerra mundial. No obstante, aunque estaban todos los objetivos claros, rápidamente surgen propósitos hegemónicos de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, lo que produce un aumento de la desconfianza entre ambas naciones⁵³.

Luego de la muerte de Roosevelt, Harry Truman lo sucede en la presidencia. Su finalidad era aprovechar la supremacía estadounidense para tomar las riendas de las relaciones diplomáticas e imponer las reglas del comercio internacional. Así, dentro de ellas destacan los acuerdos de Bretton Woods en 1944, donde el dólar logra la hegemonía en los mercados mundiales, como moneda de referencia en las transacciones internacionales. Ello permite firmar acuerdos, como el GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) en 1947 para suprimir las barreras arancelarias y establecer el libre comercio a nivel mundial.

Por otra parte, por el lado de la Unión Soviética, ellos buscaban ampliar su esfera de influencia en Europa del Este y reforzar su posición estratégica en Asia. De esta forma,

⁵³50Minutos.es. (2016). La Guerra Fría: El largo conflicto que dividió al mundo en dos bloques: 50Minutos.es.

Stalin pone en marcha el socialismo en la Unión Soviética durante el periodo de entreguerras. Así, la potencia de su sistema ideológico- político y la fragilidad del mundo le permiten consolidar su posición y extender el comunismo sobre una base más amplia. En la práctica, lo que se dispuso Stalin fue instaurar gobiernos aliados en los diferentes países que él mismo ha liberado, firmar alianzas con los regímenes afines y apoyar a las guerrillas comunistas en algunas zonas estratégicas.

Lo cierto es que Estados Unidos tiene una larga de intervenciones en el mundo y Chile no fue la excepción. Es más, desde la época independentista ellos han tenido un rol fundamental a la hora de asesorar a los próceres patrios, como lo fue el cónsul estadounidense Joel Roberts Poinsett, y como también quedó plasmado en el capítulo anterior, sobre los asesoramientos económicos que venían del país del Norte. No obstante, también estaría en el ojo de las autoridades de esa nación las políticas socialistas impulsadas por Salvador Allende, que atentaban directamente contra los intereses de los grupos empresarios norteamericanos, como lo fue la expropiación de muchos grupos económicos, como la minería.

Sumado a ello, lo veían como un peligro para la región del sur, dado que no querían que sus ideas se contagiaran por el resto de la zona. De hecho, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, entre 1969 y 1974, fue el único presidente que no saludó a Allende cuando asumió el cargo como mandatario.

Según da cuenta un reportaje del medio digital de investigación periodística Ciper Chile, quienes revelan el contenido de las conversaciones secretas sobre Allende, entre el ex mandatario estadounidense y su consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, al cual trataban de “hijo de puta” y decían que querían “patear su trasero”, sosteniendo, además, que él tenía un “Estado fascista”, comparándolo hasta con Adolf Hitler, precisando que los chilenos “están actuando en esto como actuaban los nazis con el Reichstag”.

Dichas grabaciones, según versa el artículo, fueron descubierta casi 40 años después de que fueran subrepticamente grabadas, que fueron descubiertas tras la investigación sobre el caso watergate, que terminó con la dimisión del presidente. En esa línea, el periodista destaca que, de acuerdo a las transcripciones de las cintas, nada parece haber molestado

tanto a Nixon como la decisión del gobierno de Allende de iniciar la nacionalización de las empresas estadounidenses que habían dominado la economía chilena por décadas.

De modo, que él creía que las respuesta de Estado Unidos debía ser cortar a Chile todos los créditos bilaterales, incluyendo los préstamos bancarios para exportaciones e importaciones, bloquear los créditos multilaterales y evitar que Chile renegociara su deuda externa: “Quiero que sepas”, le dijo Nixon a Kissinger, “que no quiero hacer nada por Chile. Nada”⁵⁴. Es más, hasta en entrevistas públicas Nixon comentaba que no estaba de acuerdo con que Allende asumiera el poder. “Ya tenemos un país en Occidente, Cuba que exporta la revolución y no queremos otro: Chile”. Tiempo más tarde en otras entrevistas, declaraba: “Allende jugó muy inteligentemente. Lo hizo a la chilena y no a la cubana. Los chilenos son menos volátiles, que los cubanos en mi opinión. Pero, por otra parte, no había dudas que estaba todo lo que estaba en sus posibilidades para hacer de Chile un estado marxista”.

Cabe precisar, que una de las colaboraciones directas de Estados Unidos tiene que ver con la CIA (en inglés es Central Intelligence Agency; Agencia Central de Inteligencia), que durante los años 70 y 80, en plena guerra fría, orquestó un plan, denominado Operación Cóndor, que permitiría la coordinación y apoyo entre los gobiernos dictatoriales del cono sur, como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, de modo de acabar con la oposición política y democrática para convertirse en países dictatoriales, regresivos, abusivos y sanguinarios.

VIII. El camino de los neoliberales al poder (1970-1974)

La crisis política, social y económica que se venía gestando durante la administración de Allende, primer presidente socialista elegido democráticamente en el mundo, estalló el día 11 de septiembre de 1973. El control militar, presentado a la ciudadanía como un orden temporal que rápidamente daría paso a la constitución de un gobierno legítimamente elegido, terminó por quedarse con la dirección del país por 17 años.

⁵⁴ Kornbluh, Peter (2010). Las inéditas cintas de Nixon sobre Chile y Allende: El lenguaje del imperio. 15 de agosto, de Ciper Chile Sitio web: <http://ciperchile.cl/2010/06/30/las-ineditas-cintas-de-nixon-sobre-chile-y-allende-el-lenguaje-del-imperio/>

En ese contexto, Arnold C. Harberger revela las políticas económicas que surgieron tras septiembre de 1973 fueron principalmente producto de los Chicago Boys. Es más, dicho núcleo trabajó para ofrecer una plataforma de reformas económicas en la campaña presidencial de Jorge Alessandri Palma en 1970, de modo que ellos se mantuvieron en contacto durante los años de Allende, reuniéndose cada semana, revisando y actualizando sus sugerencias de campaña, con el propósito de lograr una agenda viable de políticas para sacar a Chile del caos económico que prevalecía entonces.

Fruto de ello, nació el “*El Ladrillo*”, un manuscrito que se preparó para el gobierno que viniera después de Allende y que fue entregado al almirante Toribio Merino, el responsable de los asuntos económicos en la Junta de Gobierno que asumió el poder en septiembre de 1973. Así las cosas, cuando se produjo el golpe militar, los Chicago Boys fueron aprovechados para ayudar a diseñar e implementar una serie de programas de ajustes y reformas durante la dictadura pinochetista. En esa línea, precisa que lo hicieron por alrededor de un año y medio, trabajando en puestos como subsecretarios en los principales ministerios y en la vicepresidencia del Banco Central, mientras que los militares ocuparon los cargos altos⁵⁵.

En ese marco, el portal Memoria Chilena destaca que durante la década de los sesenta y setenta, estos intelectuales buscaron refundar las bases ideológicas de la derecha económica y política desde diversos medios tradicionales como el diario El Mercurio, la revista Política, Economía y Cultura, la Facultad de Economía de la Universidad Católica, el Centro de Estudios Socioeconómicos (CESEC), la revista Qué Pasa (cuyo primer redactor económico fue precisamente De Castro), y a través de redes de trabajo informales con empresarios vinculados a la formación de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC).

⁵⁵ Lüders, Rolf (2015). *óp. cit.*, p. 22

CAPÍTULO III: LA DICTADURA Y EL MODELO

I. El Ladrillo

i. Antecedentes

Pues bien, como mencionábamos, una Junta Militar rigió por casi dos décadas en el país, llevando a cabo una completa reestructuración del modelo económico e implementando una serie de medidas que buscaban lograr reconstituir “el orden” en dicho ámbito.

Previo al golpe, un grupo de Chicago Boys trabajó en un documento que buscó sentar las bases nuevas de la economía chilena, denominándose: *El Ladrillo*. Un ideario económico neoliberal redactado entre 1972 y 1973 que pretendía establecer una política económica para la administración que sucediese a Salvador Allende, que finalmente se aplicó al régimen militar de Augusto Pinochet.

Según cuenta en el prólogo de este libro el economista chileno y miembro de los Chicago Boys, Sergio de Castro, quien fue profesor de la Universidad Católica, decano de dicha entidad, y durante el régimen, se convirtió en el principal líder de los economistas liberales que trabajaron en esa administración, el acuerdo entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago inscribió las bases de la educación en Ciencias Económicas. Es más, tales enseñanzas fueron plasmadas también en un curso de Economía, especialmente diseñado para dueños de compañías chilenas que fue dictado en las oficinas de la Sofofa, una sociedad gremial de empresas, donde recurrieron los empresarios más representativos e importantes del país.

De hecho, según recuerda, fueron estos mismos personeros los que propusieron que este grupo de economistas, egresados de esa universidad del país del norte, se hicieran cargo de la elaboración del programa económico para el candidato Jorge Alessandri Rodríguez, el cual tuvo como orientaciones fundamentales: la apertura de la economía; la eliminación de prácticas monopólicas; la liberación del sistema de precios; la modificación del sistema tributario; la creación y formación de un mercado de capitales; la generación de un nuevo sistema previsional; la normalización de la actividad agrícola nacional; y la protección de los derechos de propiedad.

Pues bien, el grupo empresarial que dirigía la campaña de Alessandri declaraba estar de acuerdo con las reformas planteadas. No obstante, también estimaban que ellas debían ser

mucho más graduales. Los Chicagos Boys, en tanto, entendían que la gradualidad llevaría al fracaso del programa. Así las cosas, es Salvador Allende quien asume el 3 de noviembre de 1970 la presidencia del país y no Alessandri. Pero, tras el golpe del 1973, los idearios del programa económico vuelven a resurgir con más fuerza, de modo de “de ayudar a sacar al país de la postración económica en que se había sumido”, según relata el economista.

Dentro del grupo que participó en la elaboración de este tratado económico estuvieron: Emilio Sanfuentes; Sergio Castro, Pablo Baraona, Manuel Cruzat y Sergio Undurraga. A inicios de 1973 se amplió este grupo y estuvieron presentes: Juan Braun, Rodrigo Mujica, Álvaro Bardón, Juan Carlos Méndez, Juan Villarzú, José Luis Zavala, Andrés Sanfuentes, José Luis Federici, Ernesto Silva, Enrique Tassara y Julio Vidal. Gran parte de ellos fueron docentes, empresarios e investigadores; más adelante asumieron importantes cargos, tanto en el ámbito privado como público.

Por lo general, las reuniones entre ellos se llevaron a cabo una vez por semana, pero a medida que transcurrió el tiempo aumentó la periodicidad.

“El caos sembrado por el gobierno marxista de Allende, que solamente aceleró los cambios socializantes graduales que se fueron introduciendo en Chile ininterrumpidamente desde mediados de la década de los 30, hizo fácil la tarea de convencerlos de que los modelos socialistas siempre conducirían al fracaso. El modelo de una economía social de mercado propuesto para reemplazar lo existente tenía coherencia lógica y ofrecía una posibilidad de salir del subdesarrollo”⁵⁶.

Así, según traza la introducción del mismo, este programa buscó plantear una fórmula “coherente e integrada de cómo lograr una economía descentralizada que permita utilizar los recursos con que cuenta el país a su máximo nivel de eficiencia”. Asimismo, desliza un diagnóstico relativo a las políticas impulsadas en las administraciones anteriores, poniendo énfasis que ellas surgieron a partir del año 30, época que se derrumba la economía mundial, y donde los países de Latinoamérica, promueven el modelo de Sustitución de Importaciones. De este modo, hacen hincapié en que dichas políticas han “inhibido” el ritmo de desarrollo de la economía chilena.

⁵⁶ Castro, Sergio. (1992). El Ladrillo: Bases de la política económica del gobierno militar chileno. Santiago: Centro de Estudios Públicos (CEP). Página 12.

Así, su programa constituye un “todo armónico y no es aplicable a parcialidades”, precisando que la aplicación parcial o limitada de él, podría dar origen a un sinnúmero de efectos no deseados. Es por ello que muchos han catalogado dicho planteamiento de shock, pues proponía reformar la estructura económica del país de largas décadas, como lo fue el modelo de sustitución de importaciones, pasando a uno de liberalización comercial total.

La obra impulsada por los egresados de Chicago se trata de un texto de 193 páginas y 2 capítulos; el primero centrado en el diagnóstico de la situación en Chile; y el segundo a las políticas que promueven en distintas materias, como política de descentralización, de comercio exterior, de precios, monetaria y fiscal, tributaria, mercado de capitales, previsión y seguridad social y redistribución del ingreso, entre otras.

ii. Diagnóstico observado

En el primer apartado de El Ladrillo los economistas reconocen que los problemas más sobresalientes de la economía chilena de ese periodo, tenían que ver con la baja tasa de crecimiento, con el estatismo exagerado, son la escasez de empleos productivos, inflación, atraso agrícola y la existencia de condiciones de extrema pobreza en importantes sectores de la población, lo que para ellos provocaron efectos poco deseados en el aspecto social y en las arcas fiscales, como la mala asignación de los recursos productivos, limitado desarrollo del sector externo, baja tasa de crecimiento de los recursos productivos, acción indebida de grupos poderosos, déficit fiscales, cambio frecuente de políticas económicas, mal uso del poder político y déficit de abastecimiento alimenticio.

De este modo, argumentan que la tasa de desarrollo económico desde 1940 no había tenido un buen desempeño. Es más, ratifican que fueron fluctuantes y muchas veces registraron un descenso en el producto per cápita, de modo a que llevó a que las ideologías populistas llegaron al poder, con un “esquema no probado”, el cual prometía el mejoramiento del nivel de vida de los chilenos.

En virtud de lo anterior, creen que por eso que se optó por expropiar monopolios y latifundios, de modo de asignar sus excedentes a la inversión social y a la redistribución de ingresos. Todas estas políticas ellos las califican como de un “fracaso rotundo y cada vez más evidente, de la receta marxista”. En efecto, según versa su obra, lo que ellos buscan era

rectificar el rumbo de la economía, de modo de entrar a la verdadera senda del progreso social, cultural y económico⁵⁷.

Una de las críticas que esbozan tiene que ver con el estatismo que dominaba en dicha época, y no solo en Chile, sino que en varias naciones de la región, el cual se comenzó a gestar desde fines de la década de los años 30. Así, dentro de ese estatismo, reprochan la acción del Estado en la “manipulación de las variables económicas; su burocracia; la creación de actividades estatales paralelas a la actividad privada, como lo fue en los sectores productivos o de servicios; las nacionalizaciones; el desarrollo de sistemas de planificación, los cuales proyectan en forma parcial, pero que según ellos buscan un control directo de variadas actividades; el aumento de la inversión estatal en áreas de reducida rentabilidad social; y la politización de las instituciones públicas”.

En definitiva, aseguran que estas políticas estuvieron relacionadas entre sí y fueron configurando un marco institucional extremadamente “anárquico”, en el sentido, que “limitó” las posibilidades de desarrollo del Estado.

En su visión respecto a la “manipulación de las variables económicas” dicen que eso se observó en el control de precios, la determinación de la tasa de interés y la fijación del tipo de cambio, entre otras. Y, según su apreciación, dichas injerencias generaron graves distorsiones en el sistema económico, como por ejemplo, en lo que respecta a la fijación del precio a ciertos productos, como es el caso de los alimentos, donde se establecieron costos más accesibles para la población; esto, para ellos, provocó un “deterioro” en su producción, lo que tradujo en una reducción de la disponibilidad real de alimentos. Lo mismo ocurrió con la fijación de la tasa de interés a un nivel artificial, de modo de abaratar el crédito, pues, trajo consigo la disminución del ahorro, y, en definitiva, malos resultados para el sector exportador.

Asimismo, sostienen que hubo inversión pública en actividades de escasa productividad, y una excesiva burocratización y politización de las instituciones, que para ellos constituyó una carga pesada para la colectividad. De igual forma, plantean que uno de los aspectos más “perniciosos” de la tendencia estatista tiene que ver con el proteccionismo industrial

⁵⁷ Castro, Sergio. *óp. cit.*, p. 28 y 29.

excesivo para inducir la sustitución de las importaciones, ya que desencadenó un efecto contrario al perseguido, en el sentido que solo se producían productos para mercados más pequeños, lo cual no instaba al desarrollo esperado⁵⁸.

A su vez, ponen énfasis en la dificultad de la economía de proveer de trabajo productivo y estable, con especial foco en los jóvenes que año a año se incorporan al mercado laboral. Así, para ellos la solución debe estar puesta a través de un cambio cuantitativo y cualitativo en el proceso educacional; por una obtención de una alta tasa de desarrollo económico que aumente por sí sola la demanda por trabajo; y por último, a través de políticas económicas que rebajen el alto costo del trabajo en Chile

En lo relativo a tópicos como el control de la inflación, el atraso agrícola, y también sobre la pobreza, opinan que las medidas que fueron impulsadas, como políticas salariales, de precios controlados, asignaciones familiares y subsidios de cesantía, no fueron las adecuadas para llegar los sectores que buscaban beneficiar. Es más, aseguran que el costo social de dichos programas fue relativamente alto, tal como es el caso de la política de alimentos baratos, donde muchos se beneficiaron de ellas; no obstante, insisten que a quienes perjudicó fue directamente a los campesinos y los pequeños agricultores⁵⁹

No obstante, también hacen hincapié en que las consideraciones referidas sobre el estatismo, no se refieren a la acción de que el Estado deba marginarse del todo; al contrario, estiman que le compete al Ejecutivo la dirección superior de todo el sistema económico, en el sentido de la fijación de metas globales, la determinación del marco institucional, el establecimiento de mecanismos de planeamiento y control, el desarrollo de la infraestructura y de aquellas actividades en que el beneficio social sea mayor que el beneficio privado⁶⁰.

iii. Visión de los efectos de las políticas promovidas por Allende

Según observan los economistas son varias las consecuencias que han tenido las políticas promovidas por las últimas administraciones que antecedieron al régimen militar. Una de ellas tiene que ver con la asignación de los recursos productivos, las que fueron otorgadas

⁵⁸ *Ibíd.*, p. 31 y 32.

⁵⁹ *Ibíd.*, p. 38.

⁶⁰ *Ibíd.*, p. 33.

de manera “errada”, dada las deficiencias de las políticas cambiaria, arancelaria, tributaria, y de precios.

Respecto al sector externo, percibían que este tuvo un limitado desarrollo, dado que las exportaciones se basaron fundamentalmente en la venta de materias primas, y dentro de ellas, el cobre jugó el rol más importante. De hecho, en 1972 la composición de las exportaciones en la minería era del 87,8%, donde 78,3% era el mineral rojo, seguido de hierro y salitre. En esa línea, ellos consideran que esta ventaja comparativa del país fue tomada como una desventaja para el resto de los sectores exportadores, ya que hizo posible la fijación artificial de los tipos de cambio a niveles muy inferiores al de un tipo de cambio real que podría determinarse en forma teórica, de acuerdo a la relación de costos internos con costos internacionales. De este modo, avizoraban que si la política cambiaria hubiera sido realista a un tipo de cambio de equilibrio, se habría expandido todo el sector exportador a una tasa más acelerada.

En ese marco, apuntan que el hecho de ser un país monoexportador creó una economía altamente dependiente. Y la incidencia de esto, según su visión, fue el surgimiento de problemas cíclicos de escasez de divisas, que, en consecuencia, justificaron políticas de corto plazo para acentuar la sustitución de importaciones, a través del aumento de tarifas aduaneras, que terminó por agravar las presiones por una fijación artificial del tipo de cambio. Y, por otra, aseguran que estas políticas desencadenaron un déficit en la balanza de pagos, que fue financiada con créditos extranjeros. Así, el resultado de esto fue una elevada la deuda externa y un aumento la dependencia externa, pagando elevados montos anuales que se realizaron por concepto de intereses y amortizaciones de la deuda externa.

Sin embargo, también aclaran que ello no implica que el país deje de utilizar recursos financieros del extranjero para acelerar su desarrollo, sino que deben establecerse políticas que permitan un uso más eficiente de ellos, principalmente para acelerar el desarrollo del sector exportador y así generar los recursos que permitan una economía más diversificada y menos dependiente de la suerte de un solo productos de exportación.

Otro punto que evocan es respecto a la baja tasa de crecimiento de los recursos productivos, de modo que ponen en evidencia que los controles que se hicieron en el mercado de

capitales y la tasa de interés, no permitieron la creación de instrumentos incentiven el ahorro nacional, que es la fuente de inversión.

Asimismo, señalan que el proteccionismo industrial y la interferencia del gobierno, a través de controles directos, condujeron a una estructura poco competitiva de la organización económica; de forma que ponen énfasis en que la apertura al comercio exterior, el aumento de la competencia y una decidida política antimonopolios son fundamentales para evitar o eliminar estas tendencias.

Por el lado de los sindicatos y su rol en la sociedad, son bastante críticos, y los califican como de una “organización bastante poderosa”, que les permitió exigir y obtener altos niveles de remuneraciones, que “limitó” el poder de absorción de empleo. De igual forma, plantean que el excedente desempleado fue empujado a otras actividades que recibían menores remuneraciones. Así, según su diagnóstico, fue la desocupación estructural la que creó presiones para que el gobierno absorbiera el desempleo, y, al hacerlo, generó el déficit fiscal, que a la larga fue el que originó las emisiones monetarias de que se nutre el proceso inflacionario que se desencadenó en el país.

Por último, ponen énfasis que las políticas económicas y el poder político del Estado, tenía un poder “excesivo”; a su vez, acusan de una falta de política agraria, en que el esfuerzo por industrializar el país fue a costa de la agricultura, que tuvo que proveer al sector industrial de insumos baratos y al país de alimentos, también baratos, que permitieran mantener los salarios industriales a niveles razonables. En ese sentido, plantean que estudios de la época demostraron que la mayoría de los productos agropecuarios tenían tarifas negativas de protección frente a la agricultura mundial; ello por las políticas cambiarias que permitieron importar dichos productos a precios subsidiados⁶¹.

iv. Objetivos del programa

Definido un diagnóstico respecto a la situación del país, los economistas también trazaron cuáles serían los propósitos a alcanzar de su programa; dentro de ellos:

- Obtener una tasa de desarrollo económica alta y estable, que asegure el pleno goce de los derechos ciudadanos a mayorías y minorías.

⁶¹ *Ibíd.*, p. 39-51

- Erradicar la extrema pobreza
- Garantizar la igualdad de oportunidades, especialmente en la educación, de modo que el acceso a ella dependa de la capacidad y del potencial creativo de cada individuo, con ello se incluye el acceso a la salud, a la seguridad social y al empleo; garantizado a través de la reforma del sistema previsional; obtención del empleo a través de actividades realmente productivas que contribuyan al desarrollo económico nacional.
- Alcanzar estabilidad en el nivel de precios y en las políticas aplicadas en general; minimizar la dependencia económica en todos aquellos aspectos que tenga incidencia en la independencia política del país.
- Realizar una descentralización del sistema económico y de diversas áreas; entre ellas, como educación, salud, sistemas asistenciales, que permita una participación efectiva de los usuarios.

v. Políticas económicas especificadas

En un primer planteo estiman que la economía debe avanzar en diversos puntos. Entre ellos, impulsar una política de descentralización que suponga el esclarecimiento de las funciones del Estado; la utilización del mercado para asignar eficientemente los recursos; independencia administrativa de las unidades económicas; desarrollo de organismos intermedios; efectiva participación; simplificación de los sistemas legales y de control estatal.

Así, declaran que las funciones básicas del Estado moderno deben ser tres: 1) que promueva condiciones esenciales para que la comunidad utilice en forma eficiente sus recursos y alcance un alto nivel de vida; 2) referido en velar para que el proceso de crecimiento conduzca a una distribución equitativa del ingreso y a la erradicación de la extrema pobreza; 3) un Estado que promueva políticas sociales y educacionales que aseguren la igualdad de oportunidades y la posibilidad de acceso, a todos los ciudadanos, a las ventajas económicas y culturales de la sociedad moderna.

Es así que apuntan que dentro de este marco de descentralización, la acción del Estado debe tender a ser “indirecta”, de modo de evitar distorsiones o imperfecciones que se produzcan en el sistema económico. Pues, según ejemplifican, cuando el Estado gestionó alguna

actividad, el nivel de control efectivo disminuyó notoriamente, tal es el caso de numerosas empresas estatales, que atrasaron sus balances en uno o dos años, imposibilitando cualquier análisis de su eficiencia relativa.

Por otro lado, en el ítem relativo sobre la utilización del mercado para asignar los recursos, determinan que uno de los problemas de la economía de ese entonces tenía que ver con el régimen de planificación centralizada, en que las decisiones de cómo asignar recursos estaban en manos del poder central, el cual controlaba no solo los mecanismos indirectos de orientación económica, sino que además, tendía a monopolizar la gestión de todas las unidades de producción, distribución o financiamiento. De este modo, ponen énfasis en que el sistema de mercados implica mecanismos claros⁶².

En lo que respecta a las políticas de comercio exterior, plantean que para dinamizar a la economía y transformarla en un sistema eficiente que permita dar solución justa se debe elevar el tipo de cambio a un nivel real, que para ellos era un requisito indispensable para lograr un traslado importante de recursos hacia industrias de exportación. De igual forma, proyectaron una rebaja de los aranceles del orden del 30%, tanto como para bienes finales como materias primas.

Sin embargo, estiman que la tarifa ideal sería del orden del 0% pues así no se discrimina en favor de ningún tipo de actividad económica. Así, para proteger a la industria nacional del posible dumping de los competidores externos, vale decir, de la práctica de vender un producto por debajo de su precio normal, proponían establecer un valor mínimo de aforo, de modo que los productos afectados por el dumping no ingresarían al país en condiciones de anormalidad de precios, de forma que debían pagar tarifas por su valor normal. Este aforo, según planteaban, se determinaría de acuerdo a un promedio móvil de los precios internacionales de los últimos tres a cinco años.

También su programa proponía abolir las prohibiciones de importación, siendo sustituidas por tarifas y por un impuesto al consumo para aquellos productos en que no se desee gastar divisas y en los cuales, por lo mismo, no se deban gastar recursos en producirlos internamente.

⁶² *Ibíd.*, p. 62-72

Por otro lado, pretendían crear mecanismos de promoción de las exportaciones. Entre ellas, subsidios para asesoría y costos fijos de comercialización en el extranjero y créditos de corto y largo plazo, los cuales empezarían a funcionar como resultado de las medidas que se proponen para crear un eficiente mercado de capitales, donde aconsejaban la intervención inicial del Estado para acelerar el proceso.

A su vez, querían instalar una política racional de endeudamiento externo y de inversiones extranjeras; además de políticas específicas en torno a los movimientos de capitales, de manera que proponían al Banco Central como regulador del mercado de divisas, de forma de establecer un área especial de cambios para ingresos y egresos de capitales foráneos y para turismo.

También buscaban implementar una política de precios, dado que la anterior política, según su diagnóstico, dejó efectos perjudiciales sobre el potencial de la economía, como llevar a una asignación recursos que significó una baja producción de artículos de primera necesidad (en especial de alimentos), baja actividad exportadora y creciente actividad en rubros sustitutivos de importaciones, de modo que los recursos productivos fueron incentivados a dedicarse a actividades que gozan de pequeñísimos mercados internos (a nivel internacional) y que, en consecuencia, sólo crecieron a bajas tasas que estos mismos mercados permiten.

Pues bien, su política de comercio exterior buscaba otorgar completa libertad de precios en todas aquellas actividades en que exista un nivel razonable de competencia interna y/o externa; establecer un control de precios eficiente en todas aquellas actividades en que existan monopolios y oligopolios no sometibles a la competencia externa; entre otros.

Sobre política monetaria y fiscal, dicen que ella tiene como propósito la mantención de un nivel de precios relativamente estable dentro de un ambiente de pleno empleo de los recursos productivos nacionales y de una alta tasa de desarrollo económico.

De este modo, sostienen que para exista estabilidad de precios urge que la política monetaria provea la liquidez necesaria para que se puedan transar con facilidad los bienes y servicios producidos en el país, a los precios vigentes en el periodo de que se trate. Por el contrario, si demasiado restrictiva, apuntan que la cantidad de dinero será insuficiente para

transar los bienes y servicios que constituyen el Producto Nacional, con lo que se crean deficiencias de demanda que presionan a los precios hacia abajo. En cambio, dicen que si es demasiado expansiva, entonces la cantidad de dinero será tan abundante que sobraré para transar el Producto Nacional a los precios vigentes.

Así, estiman que el exceso de demanda presionará a los precios hacia arriba como un medio para absorber el exceso de liquidez existente. Todo ello, según aseguran, incentiva la producción y el empleo más allá de las posibilidades reales de la economía y produce la presión inflacionario. De ello, desprenden que la política monetaria representa un difícil problema de equilibrio entre dos resultados inconvenientes: la deflación y la inflación, vale decir, un exceso de dinero produce inflación, y la falta de este, deflación, de forma que alcanzar el justo término medio permite el pleno empleo y, simultáneamente, la estabilidad de precios, por ende, todo ello requiere el trabajo coordinado de técnicos que trabajen bajo esos criterios, más que políticos⁶³.

En lo que respecta a política tributaria, se plantea como primer punto contribuir a que se obtenga una asignación de recursos lo más eficiente posible desde el punto de vista social; proporcionar los recursos necesarios para cubrir los gastos fiscales en que se decida incurrir, sin generar déficit ni superávit que no sean conscientemente buscados para realizar políticas anticíclicas; contribuir a una mejor distribución del ingreso, por la vía tributaria, en especial por los impuestos progresivos a la renta de las personas⁶⁴.

Un punto importante que plantean los Chicagos Boys, y que es eco del debate hoy en día en Chile, es la discusión en torno sobre el sistema previsional. Según su observación, el sistema previsional del periodo estaba en una etapa de crisis, y lo describen como un sistema “injusto, discriminatorio e ineficiente”. Dentro de los reproches que ellos le hacían, era respecto al alto costo de sostenerlo; discriminación o injusticias del sistema; baja eficiencia, que crea una gran discrepancia entre los fondos aportados y los beneficios recibidos. Así las cosas, estimaban que la reforma al sistema de seguridad social debía ser analizada de manera particular para las tres áreas que componen dicha estructura, como el sistema de salud público, la asignación familiar y el sistema de jubilaciones y seguros.

⁶³ *Ibíd.*, p. 72-92

⁶⁴ *Ibíd.*, p. 103.

En ese contexto, lo que ellos proponían era un nuevo sistema que contará con dos áreas: una de carácter estatal, financiado por la vía tributaria, que establecería una previsión mínima igual para todos los chilenos que cumplieran más de 65 años y que hubieran trabajado un número de años (25 o 30); y el otro, que sería en base a un sistema de ahorro que se depositaría mensualmente en una institución especializada, de acuerdo a un mecanismo contractual de administración delegada de esos fondos, los que podrían ser cobrados en forma de una pensión vitalicia sólo cuando alcance la edad de retiro. De esta forma, estimaban que dicha entidad administradora tendrá la obligación de invertirlos de manera tal, que asegurar que éstos mantendrán su valor real a través del tiempo (reajustabilidad), y que devengarán un interés⁶⁵.

De igual forma, establecían una serie de políticas relativas en las áreas de salud, educación y con especial énfasis en el desarrollo industrial chileno.

II. Ausencia de un proyecto concreto

No obstante, también es importante precisar que ello no significó que el plan elaborado por los Chicago Boys estuviese completamente zanjado y que los militares lo aplicarían de manera inmediata. Por el contrario, hubo posiciones nacionalistas e incluso corporativistas que disputaron su visión respecto a la continuidad económica que debería seguir el país. Según el historiador chileno, Manuel Gárate, fue necesaria una labor de convencimiento sobre los militares, especialmente respecto de Pinochet, quien fue el último en sumarse a la conspiración, puesto que la mayor parte de los oficiales golpistas eran cercanos al nacional-desarrollismo estatal, que estaba más vinculada con el ibañismo de corte populista.

De hecho, reconoce ellos no contaban con un proyecto económico consensuado ni menos un modelo fundacional de país. Es más, ello se fue dando de forma paulatina, dado que el objetivo inicial de los militares era “restablecer el orden social y económico, la unidad nacional y darle la fuerza suficiente al Estado chileno para resistir cualquier agresión externa o interna”. De esta manera, se entrevé que el único pacto que existía entre ellos fue dado por la necesidad de poner fin a la Unidad Popular, al cual se lo consideraba como un gobierno “caótico e ideologizado”⁶⁶.

⁶⁵ *Ibíd.*, p. 130.

⁶⁶ Gárate. *óp. cit.*, p. 159.

Es importante precisar que la mirada nacional-desarrollista y corporativista, estuvo representada por la figura del general de Ejército Carlos Ibáñez del Campo (dictador entre 1927 y 1931, y presidente constitucional entre 1952 y 1958), la cual reflejaba los tradicionales ideales de los militares chilenos: el orden, la unidad nacional en torno a la idea del pueblo, el progreso económico, una constante desconfianza hacia las élites y los partidos políticos y su idea de un Estado fuerte, además de un anticomunismo profundo.

A juicio de Gárate, su visión era esencialmente nacionalista, pero respetuosa de la propiedad privada y el capitalismo. A su vez, defendía un papel activo del Estado en sectores estratégicos, manteniendo distancia del liberalismo librecambista como así también de las corrientes socialistas más ortodoxas.

Asimismo, avizora que entre los oficiales existía un ideal de “justicia social”, heredado del ibañismo, que fue una de las corrientes que se gestó en varias naciones de la región, pero también una idea de participar del progreso del país, siendo parte de la lucha contra la miseria y el subdesarrollo. A su juicio, esta era la mejor manera de alcanzar la reforma en paz y así contrarrestar lo que denominaban como el “peligro marxista” y la “desintegración social”.

Pero, también, precisa que esta posición varió con el tiempo al agudizarse el conflicto Este-Oeste a partir de la década de 1950. Época en que Estados Unidos inició un programa de formación militar y apoyo en material bélico en América Latina con el objetivo de evitar que los países del continente pudiesen orientarse hacia el bloque soviético.

En ese contexto, Gárate destaca que los oficiales chilenos de la década de 1960 se enfrentaron a una nueva idea de la guerra y de las formas de definir y derrotar a los nuevos enemigos, pues se estaba frente a una nueva concepción de los objetivos nacionales y de la labor de la Fuerzas Armadas. En definitiva, se trató de una batalla ideológica, política y estratégica, que ponía al mundo castrense en el centro del conflicto político al interior de sus propias sociedades.

Simultáneamente, aclara que en ningún caso se preveía que el futuro régimen militar adoptase un modelo ultraliberal en lo económico y conservador en lo institucional, pues la

posición dominante dentro de la oficialidad seguía siendo, hasta 1973, el nacional-desarrollismo social de la década de 1930 y no el anticomunismo norteamericano.

Así las cosas, la gestación al atentado a La Moneda comenzó a tomar forma cuando un grupo de oficiales estimó que la “disciplina social debía ser recuperada”, puesto que el argumento de ellos se basaba en que el gobierno de turno había dejado de cumplir las tareas que les eran propias; como por ejemplo, impulsar el crecimiento económico y el desarrollo del país. Así, en palabras del propio Pinochet: “[las Fuerzas Armadas] deberían recuperar el nivel de progreso que tenía nuestro país, y que ha sido detenido y subvertido por el gobierno marxista de Allende durante tres años”.

En ese sentido, el historiador explica que lo que se intentó fue poner fin a lo que llamaron el estatismo de la experiencia socialista, pero sin acabar con la política económica que conocían desde hace cuarenta años.

Uno de los problemas principales que entrevió Gárate fue que ellos no tenían la menor idea de cómo hacerlo, vale decir, no sabían qué estrategia iban a utilizar para ejecutar un plan de acción para gobernar. Fue así que la necesidad de contar con asesoría técnica para enfrentar los temas económicos más urgentes se volvió un imperativo para estos improvisados ministros militares. Es ahí cuando hacen irrupción los asesores civiles y los economistas de Chicago. Según vislumbra, se trató de una colaboración puramente pragmática entre militares y tecnócratas neoliberales dada la gravedad de la situación económica del país, ya que era necesario poner en marcha el aparato administrativo lo antes posible, y en esto los civiles contaban con la experiencia de la cual no tenían los golpistas.

Según rememora, fue a través de la Marina, quien había encargado El Ladrillo en 1972 para una supuesta reconstrucción nacional, que los economistas próximos a la visión de Chicago entraron en el gobierno. El almirante José Toribio Merino fue el encargado del comité económico al interior de la Junta de Gobierno, y quien llamó a Sergio de Castro para que fuera asesor del Ministro de Economía (general Rolando González) el 14 de septiembre de 1973. Otro cercano a de Castro, Roberto Kelly, fue nombrado a cargo de ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional), lugar que posteriormente se convertiría en el centro neurálgico de las reformas neoliberales. Sin embargo, aún les tomaría algunos años y disputas con los militares desarrollistas el controlar el aparato económico del régimen

militar y convencer a Pinochet de aplicar un programa radical de transformaciones económicas.

Uno de los principales escollos que observó el investigador para el grupo de economistas neoliberales estuvo dado en el Comité Asesor de la Junta (COAJ), donde estaban excluidos, dado que era una instancia puramente militar creada por Pinochet, y donde las diferentes posiciones de los oficiales se expresaban de manera directa (aunque no pública) a los miembros de la Junta. Según cuenta, esta entidad permitió la existencia de cierto debate en torno a las políticas económicas, aunque siempre dentro del marco de la obediencia militar, especialmente respecto de Pinochet, quien actuaba como Comandante en Jefe del Ejército, Presidente de la República (desde 1974) y el miembro con más poder dentro de la Junta de Gobierno.

En suma, Gárate sostiene que entre 1973 y 1975 si bien se aplicaron algunas medidas económicas liberales, lo que primó fue un programa de “estabilización económica y de control gradual de la inflación”, cuyos rasgos fueron eminentemente pragmáticos. “Parte importante de los generales involucrados en el Golpe de Estado estaban de acuerdo con las medidas antiinflacionarias, así como en la devolución de las empresas estatizadas por CORFO durante la Unidad Popular (lo que se llamó la ‘normalización’). Pero en ningún caso se pretendía privatizar aquellas industrias estratégicas para la Seguridad Nacional, y que habían siempre formado parte de CORFO, pues creían en una economía mixta con una importante presencia del Estado”⁶⁷.

III. Principales reformas neoliberales impulsadas

i. Contexto económico

De acuerdo a una investigación de Xabier Arrizabalo en *Milagro o quimera: la economía chilena durante la dictadura*, da cuenta del desfavorable momento económico que atravesaba el país en ese momento.

De hecho, según expone, los datos de 1972 del Banco Central, presentaban una tasa negativa de crecimiento (-1,2%) dicha tasa culminó con una caída mayor al año siguiente (-5,2%). De igual forma, la tasa de inversión (medida como la participación de la formación

⁶⁷ Gárate. *óp. cit.*, p. 164.

bruta de capital fijo en el producto geográfico –o interior- bruto) se redujo desde un nivel de 15% en 1970 hasta, sucesivamente, un 14,6% en 1971, un 13,1% en 1972 y un 12,8% en 1973.

Asimismo, el desempleo aumentó de un 3,1% en 1972 a un 4,8% en 1973. Por el lado de la circulación, pone énfasis en que su expresión más clara es el proceso inflacionario desatado como consecuencia del “boicot” de los grandes grupos económicos nacionales y de la administración estadounidense a la política económica del gobierno y, particularmente, a la de controles de precios. Todo ello derivó a la profusión del contrabando y de los mercados negros. Además, el significado de la elevada inflación es grande por las implicancias que supone. Por ejemplo, una caída de las remuneraciones reales. El desabastecimiento provocado por todo ello alcanza una elevada magnitud⁶⁸.

ii. La Junta Militar

Augusto Pinochet Ugarte cumplió un rol trascendental en el cambio económico que buscaban impulsar los Chicagos Boys en el país. Nació en Valparaíso, y a los 17 años se embarcó en la carrera militar, pasando rápidamente por los rangos, hasta ser nombrado comandante en jefe en agosto de 1973 por el presidente Salvador Allende. Solo tres semanas después de su nuevo cargo, Pinochet encabezó el golpe patrocinado por la CIA contra el ex presidente, cuyo ataque culminó en los alrededores de La Moneda, con el suicidio del mandatario. Así, el nuevo gobierno militar se conformó por los comandantes en jefe de las tres fuerzas armadas, cuyo régimen se denominó como Junta Militar, con Pinochet como líder de ella. Al año siguiente, cambió oficialmente su título de Jefe Supremo de la Nación a la del Presidente de Chile.

En 1980 se celebró un plebiscito nacional para decidir si se adoptaba una nueva Constitución. Dicho documento fue aprobado por más del 67% del electorado, aunque se realizó sin registros electorales, sin acceso de la oposición a los medios de comunicación y sin control de ningún tipo sobre el acto. Cabe destacar que tras el golpe de Estado quedó suspendida la Constitución de 1925.

⁶⁸ Arrizabalo Montoro, Xabier. (1995). Milagro o quimera: la economía chilena durante la dictadura. España: Los libros de la catarata. Página 109.

Durante sus primeros años de vigencia, entre 1981 y 1990, de acuerdo a sus disposiciones transitorias fijadas por la Constitución, la Junta de Gobierno asumió las funciones legislativas y constituyentes, Augusto Pinochet fue ratificado en el cargo y los tribunales de justicia continuaron ejerciendo sus funciones como venían haciendo desde el inicio del régimen. Ocho años después se llevó a cabo otro referéndum que preguntaba a la ciudadanía sobre por otros ocho años en el cargo como mandatario, sin embargo, este fue rechazado por el 56% de los votos, lo que llevó a elecciones presidenciales y legislativas.

Así, el régimen militar rigió desde 1973 hasta 1990, cuyas bases teóricas de la política económica implementada desde 1974 se encuentran en el Ladrillo. Pues bien, el modelo neoliberal chileno se dividió en varias etapas. La primera de ellas comprendió los años 1974 a 1982, que se caracterizó por una férrea ortodoxia de los postulados liberales suscrito por los Chicago Boys, que se tradujo en una extrema liberalización de las importaciones, política antiinflacionaria, reformas del sistema financiero y la apertura comercial hacia el exterior.

De acuerdo a Gárate, los primeros dos años del gobierno militar estuvieron marcados por políticas de “desestatización” y control de la inflación, aunque, dentro de un marco autoritario pero gradualista, y que no apuntaba terminar con las estructuras creadas desde la década de 1930.

Sin embargo, la inestabilidad monetaria continuó agravándose a lo largo de 1974 sin producirse los efectos esperados en la reducción de la inflación. Ello facilitó que el discurso más extremo de los técnicos de Chicago, partidarios acérrimos de una reducción drástica del gasto público y el peso del Estado en la economía, hiciera eco en los miembros de la Junta de Gobierno, especialmente en el general Pinochet y en el almirante. Bajo ese contexto, surgió la idea de nombrar al ingeniero demócratacristiano Jorge Cauas como ministro de Coordinación Económica, un hombre cercano a los monetaristas y partidario de una política radical de liberalización de la economía⁶⁹.

No obstante, la crisis cambiaria de 1982 -1983, que se originó por la devaluación del tipo de cambio real, por la duplicación de la deuda externa y por un retroceso de las exportaciones, significó un giro en las decisiones económicas, por ende, se incorporó al

⁶⁹ Gárate *óp. cit.*, p. 164.

economista Hernán Büchi como ministro de Hacienda, quien inició una segunda etapa de flexibilización de las políticas económicas, más elástica y pragmática, de modo que aceleró e intensificó la privatización de las empresas estatales y de los servicios sociales, con el objetivo de reactivar la alicaída economía nacional. Asimismo, se redefinieron algunas funciones del Estado, con atribuciones subsidiarias y fiscalizadoras de los desequilibrios macroeconómicos.

iii. Triunfo neoliberal sobre los desarrollistas

De acuerdo a Gárate, la crisis económica internacional que enfrentaba el mundo, afectó considerablemente al país en 1975. Más sumando la caída en el precio del cobre y un aumento explosivo del valor del petróleo, que hizo perder vigor a la economía chilena. Roberto Kelly, a cargo de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan, hoy Ministerio de Desarrollo Social) presentó a la Junta de Gobierno un panorama para aquel año, mostrando cifras inflacionarias similares a las 1973, que generó que los militares dieran pie a un nuevo rumbo económico. En ese marco, el nuevo equipo monetarista defendía la idea de una política de shock para frenar la inflación, vale decir, de un ajuste mayor. Esto, en la práctica, se traducía en una reducción radical del gasto público y un cambio profundo en las relaciones laborales en favor del empresariado⁷⁰.

Mientras que el lado de los oficiales desarrollistas, representados en el Comité Asesor de la Junta y específicamente por el comandante de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh Guzmán, se opusieron al programa de Cauas, optando por la postura gradualista. Sin embargo, Pinochet favoreció a su ministro de Coordinación Económica, con lo que al mismo tiempo dio un golpe de fuerza frente al grupo original de generales que estuvo detrás del Golpe de 1973.

En definitiva, a juicio del historiador, la consolidación de Pinochet como cabecera del régimen se apoyó en este golpe de timón económico de 1975. Es justamente en este período (1975-1982) cuando se produce la apertura radical de la economía chilena y la aplicación del liberalismo económico más dogmático. Fue la época de la llamada política de shock, destinada a terminar con lo que quedaba del modelo de desarrollo anterior y al mismo

⁷⁰ Gárate. *óp. cit.*, p. 164.

tiempo aislar a los militares que aún creían en una vía desarrollista o incluso en una cierta restauración del Estado de Compromiso⁷¹.

Durante estos siete años, según destaca Gárate, se aplicó en Chile una política económica ortodoxa, caracterizada por la apertura al comercio internacional unilateral, la reducción drástica del gasto público, la fijación de un tipo de cambio nominal, la liberalización financiera, y especialmente el control estricto de las relaciones laborales. Así, el discurso de los civiles proliberalización, en cuanto a la eficiencia de las nuevas medidas, fue convenciendo también a una parte importante de la oficialidad militar liderada por Pinochet y Merino⁷².

Por otra línea, el estatismo del modelo anterior fue presentado como un lastre a la modernización del país y como una fuente constante de ineficiencias. A esto se sumó el hecho, no menor, de que la mayoría de los medios escritos de la época, como la empresa periodística El Mercurio, con su red de diarios como La Segunda, El Mercurio y diario Las Últimas Noticias, así como el otro grupo, La Tercera, estaba de acuerdo con las nuevas medidas, lo que creaba un ambiente propicio para las mismas y limitando al máximo el espacio de debate para cualquier otro tipo de alternativa.

De igual forma, plantea que el antipoliciticismo y antipartidismo de la oficialidad militar también ayudó a consolidar la posición de los economistas de Chicago, quienes se presentaron -desde el comienzo- como esencialmente ‘técnicos’ y absolutamente convencidos de alcanzar las metas de inflación a través de la aplicación integral de su tratamiento de shock.

Según observa el historiador, estas políticas implicaron un costo social enorme y la casi completa desarticulación del movimiento sindical. Sin embargo, las medidas terminaron por generar la “ansiada” estabilidad monetaria, la cual permitió al régimen acceder nuevamente a créditos internacionales.

iv. Cambios impulsados

Según precisa el economista chileno Ricardo Ffrench-Davis, en 1973 existían desequilibrios macroeconómicos que era indispensable corregir. Entre ellos, la

⁷¹ *Ibíd.*, p. 165.

⁷² *Ibíd.*, p.165.

“sobreintervención” de la economía, que tenía excesivos controles microeconómicos sobre empresas privadas y públicas. No obstante, también reconoce que lo que ocurrió en el país fue de una versión extrema del monetarismo dada la amplitud del papel asignado al mercado, por la privatización profunda de los medios de producción y por el cambio impuesto sobre la organización social del país. En efecto, las principales transformaciones económicas se localizaron en los campos fiscal, financiero, laboral, relaciones económicas con el exterior, y propiedad pública de los medios de producción⁷³.

Dentro de los cambios más importantes, destaca:

- **Reforma fiscal.-** Se impulsó una reforma impositiva y una reestructuración y reducción de la mayor parte del gasto público: se eliminó el impuesto al patrimonio y a las ganancias de capital y se redujo el gravamen a la renta de las empresas. Se estableció el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y se suprimieron las franquicias vigentes para bienes de consumo básico. Se buscó reducir la carga tributaria, concentrándola en impuestos de carácter “neutro”, pues cualquier diferenciación era considerada distorsionada de la asignación de recursos.
- **Reducción del gasto público.-** Como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) este se redujo más de un cuarto respecto de los niveles que había alcanzado hacia fines de los años sesenta. Se produjo una disminución de la inversión gubernamental, bajando en más de la mitad como porcentaje del PIB entre 1970 y 1979. El gasto público se redujo en los sectores productivos, en actividades de apoyo al sector privado, de aportes a empresas públicas y de obras de infraestructura. A su vez, el gasto social, principalmente en educación, salud, seguridad social y vivienda, aumentó su participación. Ello, según reconoce Ffrench Davis, fue proclamada, en forma reiterada por ellos, como un indicador del carácter social del modelo. Sin embargo, plantea que lo efectivo es que el gasto real por habitante se redujo y también disminuyó como proporción del PIB.

⁷³ Ffrench-Davis, Ricardo *óp. cit.*, p. 83 y 85.

- **Privatización de la banca.-** En el ámbito financiero, la mayoría de los bancos que en el régimen anterior se estatizaron, ahora pasaron a ser privatizados. De igual modo, las tasas de interés se liberaron totalmente, se eliminaron regulaciones respecto de los plazos de operación y del destino de los créditos y se autorizó el establecimiento de nuevas entidades financieras sujetas a escasas limitaciones. Por último, se redujeron gradualmente las restricciones sobre los movimientos de capitales con el exterior.
- **Comercio internacional.-** Eliminación de la totalidad de las restricciones distintas a las arancelarias, y los aranceles se redujeron rápidamente desde los altos niveles imperantes en 1973 (una tasa media simple de 94%) hasta un arancel uniforme de 10% para todo tipo de bienes, vigentes desde 1979. Asimismo, en virtud del proceso de liberalización del intercambio, se suprimieron los mecanismos, tales como las bandas de precios, dirigidos a atenuar la transmisión de la inestabilidad externa hacia la economía nacional. De igual forma, Chile terminó retirándose en 1976 del Pacto Andino.
- **Privatización de los medios de producción.-** En 1970, Corfo controló la propiedad de 46 empresas, número que se elevó a cerca de 300 en 1973. En 1980, en tanto, permanecían en el poder de esa institución solo 24 empresas, la mitad de las cuales estaba en proceso de licitación. La venta de empresas se efectuó, en una parte importante, en periodos de recesión y tasas de interés muy elevadas en el mercado interno. A consecuencia de ello, escasos grupos tuvieron la posibilidad de acceder a su compra. En ese proceso fue notoria la escasa participación directa de empresas transnacionales, en contraste con las expectativas oficiales de un vigoroso flujo de inversión extranjera directa. Sin embargo, un masivo incremento de créditos externos proveyó una fracción sustancial del financiamiento requerido por los grupos económicos nacionales para adquirir las empresas que se privatizaban.
- **Transferencia de propiedad.-** En el plano agrícola, la transferencia de propiedad tuvo un significado “dramático”, dado que después de 1973, alrededor del 30% de la tierras que habían sido expropiadas fue devuelto a sus anteriores propietarios, y entre un quinto y un tercio se remató entre no campesinos; y apenas un tercio de la

superficie fue asignada a campesinos. Paralelamente, hubo una expulsión masiva de campesinos de los predios en que residían antes y durante la reforma agraria.

- **Privatización del sistema previsional.**- El régimen de pensiones, financiado hasta entonces mediante un sistema de reparto, fue reemplazado por uno de capitalización individual en financieras previsionales privadas creadas por el nuevo sistema que proponían.

v. **El neoliberalismo en áreas estratégicas**

De acuerdo a Ffrench-Davis, el régimen le asignó un papel estelar a áreas estratégicas, como a la política antinflacionaria y el monetarismo extremo, más adelante lo haría impulsando una reforma financiera.

Sobre el primer punto, destaca que el control de la cantidad de dinero constituyó, hasta 1976, el instrumento de política monetaria en que descansó la acción antiinflacionaria. Pues bien, en los 12 meses que siguieron la inflación alcanzó el 400% anual, y en los meses de mayo a agosto, promedió 19% mensual (un 700% anualizado). En tanto, el déficit fiscal era del orden del 12% del PIB, fuertemente influenciado por el control de precios a que estaban sometidas las ventas de bienes y servicios de las empresas públicas.

De igual forma, detalla que el control de precios, que se extendía a amplias áreas del sector privado, involucraba una fuerte represión de las presiones inflacionarias y un extenso mercado negro. No obstante, tras el golpe se efectuó una liberalización de la mayoría de los precios controlados, que en consecuencia incrementó la inflación, elevándose a 88% en el mes de octubre, alcanzado el 590% en el curso del primer año de aplicación del modelo.

De acuerdo a la hipótesis oficial, era que los nuevos fijadores de precios –los empresarios privados- deberían tomar en consideración el comportamiento de la oferta monetaria para los efectos de definir el nivel de precios de sus productos. De este modo, se sostenía que por propia conveniencia restringían sus alzas de precios para poder mantener sus ventas en el mercado; y ello lo harían a medida que observaban la reducción del ritmo de expansión de la oferta monetaria⁷⁴.

⁷⁴ *Ibíd.*, p. 90 y 91.

Sin embargo, según analiza el economista, es que la información sobre oferta de dinero estaba disponible al público con algunos meses de atraso y con diversos indicadores contradictorios, y que los precios, dada la elevada inflación, se reajustaban con frecuencia, incluso más de una vez al mes. Bajo ese contexto, el principal punto de referencia para los agentes económicos resultó ser el comportamiento del conjunto de los empresarios, medida a través de la variación del índice oficial del precio al consumidor. Según indica el analista económico, esto era dado a conocer en los primeros días de cada mes respecto del mes precedente. Dentro que las consecuencias que conllevó esta práctica, fue que las tasas de inflación superiores al 300% persistieron hasta avanzado el tercer año de vigencia del modelo, a pesar de la restricción monetaria y un presupuesto fiscal ya equilibrado en 1975, y de una enorme brecha entre PIB potencial y efectivo (20% en el bienio 1975-76).

De igual forma, establece que la restricción monetaria, antes que influir sobre los precios, operó con mayor fuerza sobre el nivel de actividad económica, dado que durante 1975 la producción industrial cayó 28%, el PIB decreció 17% y el desempleo abierto, se empinó al 20%.

A su vez, explica que el precio que sí se ajustó para abajo fue el de los salarios, dado que hacia 1975 habían perdido cerca del 40% de su poder adquisitivo, en respuesta a la modificación de las normas de reajuste legal y uso de un IPC subestimado y a la represión drástica de la actividad sindical. En definitiva, para Ffrench-Davis la receta monetarista para controlar la inflación no funcionó de la manera prevista por los propugnadores del modelo⁷⁵.

En ese marco, el economista detalla que fue recién en 1976 que ellos reconocen que el control monetario resultaba “incapaz” por sí solo de frenar la inflación, de modo que se incorporó una segunda variable a la política antiinflacionaria, consistente en la “regulación del tipo de cambio condicionada a ese objetivo”.

Así, destaca que se inició un largo proceso en que se utilizó el tipo de cambio para desacelerar la inflación: reduciendo el costo de los bienes importados y procurando influenciar las expectativas de inflación. También menciona que se efectuaron revaluaciones cambiarias, que redujo la inflación a 100% anual luego de la primera

⁷⁵ *Ibíd.*, p. 92.

revaluación, y por debajo de 60% con la segunda. En definitiva, para el economista esto fue un tardío aprendizaje, de que la inflación no estaba siendo generada por exceso de la demanda y de expansión monetaria.

Otro punto que hace mención Ffrench-Davis es respecto a la reforma del sistema financiero. En 1973 los bancos comerciales en su mayoría estaban en poder del Estado, como resultado de la estatización de la banca impulsada por el gobierno anterior. Durante 1975, la mayoría de los bancos fueron licitados, volviendo al área privada. En único Banco que quedó en manos del Estado, fue el Banco del Estado, constituido en 1953, pero su participación en el mercado se redujo cerca del 50% a inicios del decenio 14% de los préstamos vigentes en 1981. Antes de 1974, se autorizó la creación de sociedades financieras privadas que podían captar y prestar recursos, determinando libremente la tasa de interés. En cambio, los bancos siguieron sujetos a un interés máximo legal hasta abril de 1975. De esta forma, estas discriminaciones, mientras permanecieron en el poder estatal, favorecieron durante ese periodo el auge de las nuevas sociedades financiera⁷⁶.

Por último, puntualiza en la apertura indiscriminada al exterior, de modo que sostiene que la liberalización de las importaciones suprimió toda selectividad en la política comercial. Así, reconoce que el elemento central de la reforma estuvo constituido por la rápida reducción de la protección con que contaban los sustitutos de importaciones en septiembre de 1973. Según expone, en 1974, se indicó que en 1977 ningún arancel sería superior a 60%. Luego en 1975, se definió que el rango arancelario estaría comprendido entre 10 y 35% y que se alcanzaría, mediante sucesivos ajustes, el primer semestre de 1978. Sin embargo, las rebajas finales se anticiparon, culminando ese proceso en agosto de 1977. Tres meses después, se anunció un programa de ajustes mensuales, en virtud del cual, desde junio de 1979 rigió el arancel uniforme de 10%⁷⁷.

CAPÍTULO IV: LA TERCERA VÍA

I. Consideraciones preliminares

Es importante precisar que el análisis expositivo de los distintos autores en este apartado de la investigación, busca ser un marco contextual respecto al concepto de Tercera Vía, y

⁷⁶ *Ibíd.*, p. 95.

⁷⁷ *Ibíd.*, p. 98

cómo los gobiernos democráticos de la Concertación, inspirados en la coyuntura de ese entonces, tal como la reformulación de los ideales políticos e ideológicos -que no solo se despegó en Chile, sino que en gran parte del mundo- se alinearon a este mensaje dada las nuevas necesidades de los ciudadanos.

De esta forma, nuestra investigación pretende dar a conocer los antecedentes históricos y teóricos del término; al mismo tiempo, expondremos los distintos discursos y programas de los gobiernos de la Concertación, en que los mandatarios de aquella época focalizaron su oratoria con un evidente mensaje que buscó plasmar la idea de un consenso entre el Estado y mercado, vale decir, un sistema “intermedio” o mixto, pero con énfasis en lo social.

No debe, entonces, buscarse en nuestra presentación un análisis respecto a la aplicabilidad o no de esta alternativa en Chile, sino que se trata de una descripción e interpretación de la problemática indicada relativa al mensaje inserto. Sin embargo, también expondremos el debate de distintos autores respecto a esta temática, de modo dar a conocer su percepción respecto a la factibilidad de ella.

II. Aproximaciones del término

Distintos referentes teóricos han ubicado al concepto “Tercera Vía” en una posición “intermedia”; vale decir, que hace alusión a la idea de integrar un sistema económico de economía mixta, donde se ubica al “centrismo” o “reformismo” como ideología. En otras palabras, se trata de una fórmula que propone aproximar valores sociales progresistas con elementos extraídos del conservadurismo, como la economía de mercado y el individualismo.

Dicho término entró en boga con el fin de la Guerra Fría, más precisamente con la disolución de la Unión Soviética y la aceleración de la globalización, y fue popularizado por los “nuevos demócratas” y el “nuevo laborismo”, liderados por Bill Clinton en Estados Unidos y Tony Blair en Inglaterra, respectivamente, haciendo eco en distintos países de la región; entre ellos, Colombia, con Juan Manuel Santos; Uruguay, con José “Pepe” Mujica; Brasil, con Juan Ignacio Lula da Silva; y en Chile con los gobernantes que sobrevivieron al régimen militar, quienes buscaron plegarse a este mensaje y promover una política en dirección a esa alternativa.

Es más, en un libro del mismo nombre, el sociólogo británico Anthony Giddens dio sustento teórico al término Tercera Vía, haciendo hincapié en la idea de combinar políticas asociadas históricamente con la izquierda y la derecha, así como un Estado garantista más que proveedor y un mercado autónomo, pero amoldado a los objetivos públicos.

Este planteamiento no acredita las filosofías de *laissez faire* -basada en la necesidad de una acción individual libre, sin obstáculos ni distorsiones estatales, como principio decisivo para el bienestar de la comunidad- como tampoco del mercado controlado por el marxismo. Más bien, lo que busca, es promover la profundización de la democracia, poniendo énfasis en áreas como desarrollo tecnológico, trabajo, medio ambiente, educación, y los mecanismos de competencia regulada, a fin de obtener progreso, desarrollo económico, desarrollo social, y otros objetivos socio-económico-políticos igualmente importantes.

De este modo, este proyecto nace con el propósito de sentar las bases de una nueva estructura económica y de una nueva filosofía política, que busca retomar los valores que fueron postergados por algunas administraciones de corte más neoliberal.

De hecho, según plantea, Alejandro L. Alonso, en *La Tercera Vía: Falacia o alternativa*, uno de los factores que empujó esta doctrina tiene que ver, en parte, por la distribución inequitativa de los bienes de consumo, que se evidenció de sobremanera con este sistema en muchas naciones, dada la desigualdad en la lucha competitiva del hombre por conseguir bienes, lo cual afectó gravemente a la sociedad.

Otros elementos que menciona tienen que ver con preocupaciones coyunturales de gran envergadura; entre ellas, el desempleo, las crecientes deudas de los Estados, y la consecuente precarización del nivel de bienestar de los ciudadanos, las cuales dieron sustento a este trazado ideológico. Así, para el investigador el horizonte central al que apuesta este sistema es lograr mayor inclusión, como sinónimo de igualdad; el desarrollo de un Estado inversor; y la educación y la familia como sustento del sistema⁷⁸.

De igual forma, Roberto Korzeniewicz y William C. Smith, en *Los ejes de la Tercera Vía en América Latina*, atribuyen a que el surgimiento de esta doctrina política se debe a un

⁷⁸ Alonso, Alejandro. (2001). *La Tercera Vía: Falacia o alternativa*. Buenos Aires: Longeseller

cuestionamiento profundo respecto a los mecanismos prevaletentes de regulación estatal de los mercados, que se dio mayormente después de los 70.

A su vez, establecen que la crisis económica, manifestada a través de las bajas tasas de crecimiento, llevó a la necesidad de reevaluar "la teoría económica del socialismo", ya que como Guiddens lo mencionó, "siempre fue inadecuada, subestimando la capacidad del capitalismo de innovar, adaptarse y generar crecimiento".

De esta forma, creen que la crisis del Estado benefactor y de la propia teoría keynesiana que sustentaba a la socialdemocracia, "habría sido precipitada por los procesos de globalización que surgieron en los 70, y también por el auge del neoliberalismo durante la década del ochenta"⁷⁹.

En suma, frente al desafío de los programas neoliberales de derecha que sostuvieron la hegemonía en varios países del orbe durante la década del 70 y 80, la Tercera Vía surge como una renovación de los ideales del socialismo y de la socialdemocracia, y que apunta a buscar soluciones estructurales para el bienestar de los ciudadanos. En definitiva, busca reasumir el aspecto social que abandonó el sistema capitalista y también apuesta por reconstruir el Estado de bienestar, destruido por los sistemas neoliberales.

Garretón, por su parte, asegura que el "progresismo" es una noción que Anthony Giddens identifica con el modelo de la Tercera Vía, y que fue y ha sido un proyecto de la centroizquierda para la modernización de la socialdemocracia. Por lo que, a su juicio, se trataría de una respuesta para encarar las drásticas y aceleradas transformaciones en el seno de las sociedades contemporáneas, de las cuales la más importante es la globalización. Según explica, dicha renovación, cuya máxima expresión es el "New Labour" de Tony Blair (reemplazado como Primer Ministro del Reino Unido por el también laborista Gordon Brown, y luego por gobiernos conservadores), tiene como antecedentes teóricos los trabajos de Anthony Giddens y John Gray.

De acuerdo al sociólogo, su aporte obtuvo una alta repercusión en la socialdemocracia europea, estableciéndose vínculos con el Partido Demócrata estadounidense y proyectándose a algunas experiencias de países en desarrollo. En Europa, en tanto,

⁷⁹ Korzeniewicz, Roberto y William C. Smith (2000). Los dos ejes de la tercera vía en América latina, en Colombia Internacional. Página 42

menciona que el pensamiento progresista estuvo dirigido por dos objetivos principales: la recuperación electoral y la formulación de soluciones a la crisis del keynesianismo. Así, ante el fundamentalismo del libre mercado, el progresismo se desarrolló principalmente como respuesta al neoliberalismo: desde allí se colocó al Estado activo como condición indispensable tanto para el desarrollo económico exitoso como para la justicia social⁸⁰.

Pues bien, el pensamiento progresista de la Tercera Vía se desarrolló, entonces, principalmente como una crítica a la derecha neoliberal, y en función de esta oposición definió su identidad. Sin embargo, observa que no logró formular un proyecto ideológico propio que le permitiera una mayor diferenciación ideológica con un pensamiento derechista renovado. En este sentido, la reflexión de Giddens, en el sentido de apuntar a la capacidad de inspirar que tenía la izquierda antes de 1989, de generar una visión de mundo deseable y un proyecto de sociedad, quedó sin contenido.

“Desde una mirada socialdemócrata, el pensamiento progresista se instala en una posición igualmente crítica, primero frente a la propuesta mercantilizadora del neoliberalismo y, segundo, frente a la de la Tercera Vía, calificada por ellos de psicologizante. Su modelo apuesta por el desarrollo de la solidaridad, que implica para toda la sociedad más igualdad y derechos sociales, dándole un estatuto sólido a la ciudadanía. Su preocupación fundamental está centrada en las transformaciones laborales y la pérdida de identidad en el trabajo, a partir de la crisis del trabajo asalariado y las consecuencias de la flexibilidad laboral sobre las subjetividades y los espacios de exclusión social. Señala que, desde el punto de vista social y político, la cuestión de fondo es cómo abordar el problema teórico y estratégico de la neutralización de las desigualdades que son incompatibles con la democracia”⁸¹.

Según da cuenta, este modelo apuesta por el desarrollo de la solidaridad, que implica para toda la sociedad “más igualdad y derechos sociales”, dándole un estatuto sólido a la ciudadanía.

En lo sustantivo, observa que lo busca es instituir un vigoroso sector público, pero que esté ligado con una próspera economía de mercado. En otras palabras, construir un tipo de sociedad pluralista, pero inclusiva; “una sociedad cosmopolita amparada en el derecho

⁸⁰ Garretón, Manuel Antonio. (2012). *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*. 1° Edición, Santiago: Editorial Arcis-Clacso-Prospal.p. 42 y 43.

⁸¹ *Ibíd.*, p. 43 y 44.

internacional, elemento decisivo para la recuperación de los intereses y bienes públicos.” Y, por otro, “edificar una economía que funcione libremente, pero con la presencia de un Estado que establezca una renovada atención a lo público”⁸².

III. Antecedentes históricos

Ahora bien, para entender de qué trata esta noción y cómo se fue gestando en el tiempo, es importante dar cuenta respecto a la historia de la socialdemocracia en el mundo, puesto que fueron los artífices principales de promover el concepto a fines del siglo XX.

Uno de los hechos claves que marcó el “vamos” a esta colectividad política tiene que ver con la Revolución Industrial (un sistema que transformó el mundo en el aspecto económico, social y tecnológico, que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa occidental y Norteamérica, y que concluyó entre 1820 y 1840), dado que marcó un antes y un después en el mundo. Sí, porque por primera vez veíamos cómo la capacidad humana creó nuevos instrumentos como mecanismos de trabajo, como la máquina de vapor, que tuvo un importante rol al mover máquinas y aparatos; la máquina de hilar, para el sector textil; y otros de suma relevancia, como el automóvil, el avión y el teléfono, que facilitaron el desplazamiento y la comunicación de las personas.

Pues bien, la coyuntura de ese entonces dio por finalizada la etapa de la sociedad agrícola y feudal para dar paso a una sociedad industrial y capitalista. Así, la producción maquinista creó las condiciones para la producción y el consumo en masa, característicos de época actual, e hizo surgir las fábricas, dando origen al proletariado (termino que viene de la entrada proletario y alude a aquella clase social más baja, existente durante la edad moderna, la cual se ve forzada a prestar servicios a la burguesía a cambio de una remuneración por carecer de los medios de producción).

Por otra parte, en contraposición y como respuesta a este sistema industrial y capitalista que nace tras la Revolución Industrial, surgió más adelante un bloque que propuso una economía centralizada en el poder del Estado y en la cosa pública: el socialismo. Una teoría, doctrina o práctica social que promueve la posesión pública de los medios de

⁸² *Ibíd.*, p. 45.

producción y un control colectivo y planificado de la economía en pro del interés general de la sociedad.

Su camino político y económico fue imponer una sociedad sin clases para llegar a un sistema comunista, de modo que el mundo se dividió dos grandes bloques (socialista y capitalista), lo que generó grandes confrontaciones mundiales, disputa permanente por mercados, territorios e ideas.

En efecto, se trató de un sistema originado en Europa a partir del siglo XVIII, como oposición al liberalismo económico y al capitalismo, y que sostiene que los medios de producción deben estar en manos de la sociedad y no de los individuos. En la práctica, significa que el Estado, en representación de la sociedad, controle por lo menos los principales medios de producción.

En consecuencia, la Revolución Industrial fue el puntapié inicial de ambas doctrinas e implicó una profunda transformación en la economía y sociedad británica, la cual fue pionera en liderar este proceso de apertura tecnológica y de vanguardia al mundo.

Es así que en la primera mitad del siglo XIX, el empleo de la palabra socialismo se volvió frecuente por parte de los pensadores radicales de la época, quienes se oponían férreamente al capitalismo naciente, puesto que consideraban que sistema generaba una creciente desigualdad social.

En hechos concretos, una acción forjada a desplazar este sistema fue la conformación, en 1864, en Londres, de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o Primera Internacional de los Trabajadores (PIT): una organización que agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e italianos republicanos. Sus fines eran la organización política del proletariado en Europa y el resto del mundo, así como un foro para examinar problemas en común y proponer líneas de acción. Colaboraron en ella Karl Marx, Friedrich Engels y Mijaíl Bakunin.

Sin embargo, las grandes tensiones, fruto de las diferencias programáticas existentes entre, por una parte, Karl Marx y los partidarios del socialismo científico, y, por otra, de Mijaíl Aleksándrovich Bakunin (anarquista ruso) y los partidarios del anarquismo colectivista, llevaron a la escisión entre ambos sectores: marxistas y bakuninistas. Los primeros

proponían la formación de una internacional de partidos obreros fuertemente centralizados, con un programa de mínimos basado en la lucha por conquistas sociales y laborales concretas, y uno de máximos basado en la lucha por la revolución social a través de la conquista del poder del Estado. Mientras tanto, los segundos postulaban un modelo revolucionario basado en la organización asociativa-cooperativa (federalismo social) que pregona el poder de decisión por medio del consenso. En consecuencia, ambas posturas no llegaron a un buen término, con lo cual en 1876 se disuelve oficialmente este congreso.

Años más tarde, en 1889, se constituyó la Segunda Internacional, con fuerte presencia de los partidos social demócratas europeos, en especial el alemán y el austriaco. Su sede se estableció en Bruselas. Si bien la Primera Internacional albergó a una amplia gama de tendencias, la Segunda Internacional, una vez expulsados los anarquistas 1893, adoptó una clara orientación socialista marxista, la cual fue integrada por una serie de partidos socialistas de distintas nacionalidades. Dentro de sus objetivos estaban la búsqueda de una legislación que mejorara las condiciones de vida de los trabajadores (subsidios de desempleo y protección social). Asimismo, uno de los rasgos de este grupo fue la instauración del Primero de Mayo, como el día internacional del trabajo.

De esta agrupación, por un lado, se dio origen a la socialdemocracia o socialismo reformista. Y, por otra, se dio origen a la revolucionaria, que triunfó en Rusia, y dio lugar al comunismo, o socialismo revolucionario. De hecho, la revolución bolchevique, triunfante en Rusia en 1917, abrió un nuevo camino para la izquierda internacional.

Más adelante, en 1919 se organizó la Internacional Comunista o la también denominada Tercera Internacional que buscaba impulsar la revolución mundial según el modelo ruso. En tanto, la Cuarta Internacional fue creada en 1938 por León Trotsky, un firme opositor a Stalin, que sufría exilio en México. El trotskismo logró adhesiones en distintos movimientos guerrilleros latinoamericanos y en grupos estudiantiles y universitarios europeos, en especial durante la década del 60. En consecuencia, el socialismo como sistema económico, fue adoptado por distintos países, cada uno de los cuales le imprimió características propias del modelo original, basado en la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción.

Según Alonso, la aparición de estas experiencias modificó el mapa de la izquierda y puso en aprietos el modelo hegemónico propulsado por la URSS. Entre ellos, el desarrollo de una nueva potencia socialista: China, que rompió el monopolio de la URSS como único centro del socialismo e introdujo tensiones entre las potencias. Asimismo, se estableció un modelo de economía mixta se aplicó a un país de la órbita socialista (Yugoslavia). También apareció el eurocomunismo. Por último, el surgimiento en América Latina de experiencias que se apartaron de las formas típicas del capitalismo –sobre todo a través de una política intensiva de nacionalización de empresas, pero sin alinearse decididamente con la URSS⁸³.

i. Estado y Estado de Bienestar

Otros de los ejes importantes que es necesario mencionar, es respecto a la concepción del Estado y cómo el mundo apostó por avanzar hacia un Estado con mayor protagonismo en los aspectos de la justicia social.

Pues bien, en su sentido más amplio, la nación puede definirse como un grupo humano vinculado estrechamente entre sí por lazos de sangre, origen, raza y, también, por aquellos vínculos espirituales como la religión, la lengua, la historia.

Ahora bien, cuando esta estructura alcanza una forma superior y se da un orden social, político, jurídico y económico, se habla de Estado, que es la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y población. Su objetivo principal es el bien común, que consiste en crear las condiciones de crecimiento e igualdad de oportunidades para que todas las personas que integran la nación alcancen el mejor nivel de bienestar posible.

El Estado se compone de cuatro elementos fundamentales, que son la población, el territorio, la soberanía y el conjunto de normas. En suma, el Estado se define como la organización política, dotada de poder soberano e independiente, que integra la población de un país. Asimismo, hace referencia a la organización social, política, coercitiva y económica, conformada por un grupo de instituciones, que tienen el poder de regular la vida en sociedad.

El filósofo Max Weber, en 1919, definía al Estado moderno como una "asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de

⁸³ Alonso, Alejandro. *óp. cit.*, p. 25.

un territorio la violencia física legítima como medio de dominación y que, con este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas”⁸⁴. Por ello, se hallan dentro del Estado instituciones tales como las fuerzas armadas, la administración pública, los tribunales y la policía, asumiendo el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras, como las relaciones exteriores.

Bajo ese concepto, un término que toma importancia es el referido al Estado de Bienestar que nació en la mitad del siglo XX, como consecuencia de la dura experiencia de la crisis generalizada producto de la Gran Depresión de 1929. Este surgió inspirado en los postulados del economista John Maynard Keynes, el cual parte de la idea de que el gobierno debe ejecutar diversas políticas sociales que garanticen el bienestar de los ciudadanos en áreas como salud, educación y seguridad, entre otras.

La aplicación de este sistema se sustenta en una política redistributiva de los recursos estatales. Vale decir, se refiere al conjunto de acciones y ejercicios por parte del Estado (a través del gobierno) en búsqueda de una mayor atención a la redistribución y bienestar general de la población. Fue una política social de gran ayuda para los países más afectados por las distintas crisis que ha atravesado el mundo, y además, también fue una política social muy demandada en la época de posguerra. De hecho, tales políticas hicieron eco en Latinoamérica y gran parte de los países promovieron políticas sociales en pos de las necesidades de las personas; entre ellas, seguridad laboral, más y mejor salud, asignaciones familiares, pensiones y educación.

ii. La socialdemocracia

A partir de la Segunda Internacional surgió un socialismo reformista que proponía alcanzar sus objetivos, en forma pacífica, y dentro de un sistema parlamentario democrático. Este movimiento reunió partidos políticos progresistas que se agruparon bajo el nombre de: socialdemocracia. Se trató de una doctrina y movimiento político surgido en Europa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que si bien tiene su raíz en el marxismo clásico, se presenta como una propuesta teórica y práctica moderada.

⁸⁴ Weber, Marx. (1979). *El político y el científico*. Madrid: Alianza, 5ª ed. p. 92

La cuna de este conglomerado se encuentra en Europa Central, donde Alemania destaca como país pionero en la promoción de esta ideología. El Partido Obrero Socialdemócrata Alemán (1869) fue el primer partido de esta tendencia. No obstante, también figuran partidos políticos socialdemócratas surgidos a finales del siglo XIX en países del Este y Norte de Europa. Tales son los casos de Dinamarca (1878), Bélgica (1885), Noruega (1887), Austria (1889), Suecia (1889), Hungría (1890), Polonia (1892), Bulgaria (1893), Rumania (1893), Holanda (1894) y Rusia (1898).

Desde sus orígenes, el movimiento socialdemócrata se ha caracterizado fundamentalmente por su capacidad de transformación y voluntad de adecuarse a las exigencias de la coyuntura. A pesar de esta tendencia transformadora, puede afirmarse que la esencia de esta doctrina se ha mantenido durante toda su evolución: la búsqueda de los medios necesarios para alcanzar las mayores cuotas de libertad, igualdad y bienestar entre los miembros de una sociedad. Asimismo, existen valores que también han permanecido como rasgos característicos del paradigma socialdemócrata. Tal es el caso de la justicia social, la solidaridad, la responsabilidad, el humanismo y el progresismo.

Según expone Alejandro Alonso, los partidos socialdemócratas se abocaron a la defensa y justificación del Estado de Bienestar, dejando de lado actitudes típicamente marxistas, como la necesidad de la nacionalización de las fuerzas económica y de desprecio del parlamentarismo, institución que Marx consideraba una mera fachada burguesa para la dominación de clases⁸⁵.

iii. Un mundo dividido

Tras el triunfo del comunismo en la Rusia zarista de 1917, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques: el capitalismo y el comunismo, representado, en una parte, por los Estados Unidos, que postulaba la libre competencia, y por la otra, por la Unión Soviética, que sostenía una política de planificación y control desde el Estado, para el desarrollo de sus políticas sociales y económicas. Sin embargo, en 1961 la construcción del Muro de Berlín profundizó y separó simbólicamente y concretamente el mundo en dos bloques del Este y Oeste. No obstante, 28 años después fue derruido el Muro de Berlín, con lo cual se decretó la virtual desintegración del bloque soviético.

⁸⁵ Alonso, Alejandro. *óp. cit.*, p. 30

En esa línea, Alonso dice que el fin de la bipolaridad supuso el triunfo de la teoría liberal, representada por el país del norte; en detrimento de la otra, el estatismo marxista, de la Unión Soviética. En consecuencia, al desaparecer esta ideología, el mundo quedó a merced de los llamados “fundamentalistas de mercado”. Es en ese contexto, que distintos sectores comenzaron a postularse alternativas para contrarrestar los efectos de dichas políticas económicas. Entre ellas, la Tercera Vía, impulsada por Anthony Giddens⁸⁶.

iv. El caso inglés

Para adentrarnos en la experiencia práctica de este concepto, es necesario entender el caso del Reino Unido, un país que ha sido gobernado históricamente por el Partido Conservador, quien desde sus 183 años de existencia (fue fundado en 1834) ha gobernado esta nación durante 100 años. El otro bloque político que le sucede es el Partido Laborista, el cual fue fundado en 1900, y desde entonces ha gobernado durante 28 años. Lo anterior, dado que durante una de las administraciones conservadoras, como la de Margaret Thatcher, se produce un punto de inflexión, que hace que los laboristas realicen una profunda reflexión respecto a la coyuntura de los últimos años y propongan una Tercera Vía para promover políticas en todo ámbito de estructuras, ya sea medioambientales, económicas, educacionales y sociales.

Margaret Thatcher, quien ejerció como primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990, siendo la persona en ese cargo por mayor tiempo durante el siglo XX y la primera mujer que ocupó este puesto en su país, derrotando al laborismo, y sumergiéndolo en un profundo debate interno que duró varios años. Más aún, cuando la administración de ese entonces decidió cambiar de rumbo económico de su país, y promovió el neoliberalismo como política dominante. De hecho, aplicó una fuerte política monetarista, privatizó empresas estatales, de la educación y de los medios de ayuda social, que le valieron el sobrenombre de la Dama de Hierro.

De acuerdo a Alonso, en esa prolongada introspección, el Partido Laborista, después de 18 años de reacción al gobierno conservador, comenzó a gestar una profunda transformación ideológica. Es más, con el liderazgo de uno de sus miembros, Tony Blair, se comenzó a idear esta postura de una “Tercera Vía”. De hecho, dentro de su lema hacían alusión:

⁸⁶ *Ibíd.*, p. 45

“economía de mercado con conciencia social”, que para Alonso, es un “postulado que encierra la base de un nuevo concepto político”⁸⁷.

Andy Thornley, director del Departamento de Planificación Urbana en la London School of Economics and Political Science, en su libro *El caso británico: del thatcherismo a la Tercera Vía*, reconoce que el neoliberalismo thatcheriano hizo retroceder el papel del Estado y dio absoluto protagonismo al mercado libre. Es por eso que el Nuevo Laborismo de Tony Blair pretende unir socialdemocracia y liberalismo en una Tercera Vía que busque tanto logros sociales como objetivos económicos. Pues bien, esta doctrina se basa en el consenso y en la conciliación con tintes cristianos. También se basa en el desarrollo de las regiones y de la democracia local mediante políticas de descentralización. Esta nueva aceptación de lo colectivo y también la preocupación por una sociedad más ecológica le otorga al urbanismo una mayor legitimidad. Las políticas de solidaridad social y las nuevas formas de democracia local deberían favorecer al urbanismo⁸⁸.

IV. Anthony Giddens: su análisis y la teorización del concepto

El sociólogo inglés Anthony Guiddens fue quien teorizó dicho término en su libro *La Tercera vía. La renovación de la socialdemocracia*. Pues bien, en cinco capítulos, el teórico hace un análisis respecto a la coyuntura global y pone énfasis en ciertos tópicos que deben ser resueltos con este nuevo sistema, en que mercado y Estado interactúan en pos del “bien social”, como lo son las áreas de inclusión y de fortalecimiento de la educación.

Así, apunta a que los gobiernos deben fomentar las inversiones en favor de la gente; de modo que la “búsqueda debe estar centrada en brindar al individuo las posibilidades de obtener una realidad decente y humana que le permita desarrollarse honestamente en la vida”. Además, avala la necesidad de una economía competitiva, ya que, de lo contrario, la sociedad se quebraría y sería incapaz de funcionar de forma efectiva.

En la introducción de su obra el sociólogo realiza una reflexión respecto a diversas áreas; entre ellas, el futuro de la política socialdemócrata; de la quiebra del consenso el bienestar (que predominó en los países industrializados hasta finales de los años setenta); el “descrédito” definitivo del marxismo; y los profundos cambios sociales, económicos, y

⁸⁷ *Ibíd.*, p. 48

⁸⁸ Thornley, A. (2003). *El Caso Británico: del Thatcherismo a la Tercera Vía*. Urban 8, 94-99.

tecnológicos que contribuyó a que esto ocurriera. De este modo, opina que la socialdemocracia puede no solo sobrevivir, sino prosperar en el mundo, tanto a nivel ideológico como práctico. Sin embargo, aclara que solo se podrá llegar a ese triunfo si los socialdemócratas están dispuestos a ello.

Por eso, insta a la formación de una Tercera Vía, que según explica, se trata de un término que “no tienen particular significación en sí mismo ni por sí mismo”, ya que ha sido utilizado muchas veces en la historia de la socialdemocracia, y también por escritores. Para él, este concepto ha acabado asociándose a las convicciones políticas de Tony Blair y el Nuevo Laborismo, las cuales han sido comparadas con las de los Nuevos Demócratas en Estados Unidos⁸⁹

De igual forma, precisa que los orígenes del socialismo están ligados al primer desarrollo de la sociedad industrial; y que su principal oponente, el conservadurismo, cobró forma en respuesta a la Revolución Francesa. En ese cuadro, sostiene que el socialismo comenzó siendo un cuerpo de pensamiento opuesto al individualismo, donde la crítica al capitalismo vino después. A su vez, destaca que el socialismo fue antes que nada un impulso filosófico y ético, pero que sin embargo, fue Marx quien le proporcionó una teoría económica elaborada, que busca exponer las limitaciones del capitalismo para humanizarlo o acabar con él.

En su análisis, también sostiene que uno de los errores del socialismo fue su poca capacidad de renovar, poniendo énfasis en que su teoría económica “fue siempre inadecuada”, pues no supo mirar a su oponente, al capitalismo, que siempre innovó y se adaptó a generar una productividad creciente. Así, según argumenta, los socialistas no lograron captar la importancia de los mercados como proveedores de información, que para el sociólogo, son los que ofrecen datos esenciales a compradores y vendedores.

En ese sentido, también destaca que a mediados de los años 70 -bastante antes de la caída de la Unión Soviética- la socialdemocracia se vio crecientemente desafiada por las filosofías de libre mercado, en particular por la ascensión del thatcherismo o del reaganismo, que proponían una doctrina revolucionaria en cuanto a las posturas económicas

⁸⁹ Guiddens, Anthony. (1999). La tercera vía: la renovación de la socialdemocracia. Taurus Ediciones. Página 7, 8

dominantes, como lo es el neoliberalismo, que tuvo un fuerte impacto en Reino Unido, Estados Unidos, Australia, y Latinoamérica, con los casos de Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia y Uruguay.

Asimismo, reconoce que el socialismo y el comunismo ponían igualmente un gran énfasis en el papel del Estado para general solidaridad e igualdad. A su vez, el colectivismo se convirtió en uno de los rasgos principales que distinguían a la socialdemocracia del conservadurismo, que ideológicamente acentuaba mucho más la dimensión del “individuo”. Una actitud colectivista ha formado parte también durante mucho tiempo de la ideología demócrata cristiana en los países continentales. En esa línea, apunta que gran parte de esto fue retrocediendo desde finales de los años setenta. Es por eso que los socialdemócratas tuvieron que responder al reto del neoliberalismo, pero eran más importantes los cambios que ocurrían en los países occidentales y que ayudaron a dar al thatcherismo su soporte ideológico⁹⁰.

i. Socialdemocracia y neoliberalismo

En su obra, el teórico inglés también hace una definición respecto al concepto de socialdemocracia, a la cual la describe como una teoría con una fuerte intervención del Estado en la vida social y económica. Asimismo, indica que en ella el Estado predomina sobre la sociedad civil. También la califica como colectivista; donde lidera una economía Keynesiana de demanda, más corporativista; que cuenta con un papel restringido de los mercados: economía mixta o social; que genera pleno empleo; que propone un fuerte igualitarismo; que cuenta con un Estado de bienestar de gran extensión; de modernización lineal; que posee débil conciencia ecológica; internacionalista; y perteneciente al mundo bipolar.

Mientras que al thatcherismo o neoliberalismo (la nueva derecha) la distingue, como una doctrina en que se minimiza el poder del gobierno; que cuenta con una sociedad civil autónoma; con un fuerte fundamentalismo de mercado; que posee un autoritarismo moral, más un acusado individualismo económico. Además, señala que en esta teoría el mercado de trabajo se desregula como ningún otro, hay una aceptación de la desigualdad, es de un nacionalismo tradicional; cuenta con un Estado de bienestar como red de seguridad. A su

⁹⁰ *Ibíd.*, p. 47.

vez, también menciona que cuenta con una modernización lineal, con una débil conciencia ecológica, con una teoría realista del orden internacional, y también perteneciente al mundo bipolar

En este contexto, precisa que la oposición al Estado de bienestar es uno de los rasgos neoliberales más distintivos. Pues, para Giddens, esta política social es vista como el origen de “todos los males”, de manera similar a como lo fuera el capitalismo como para la izquierda revolucionaria.

El eje de los liberales es el crecimiento económico, de modo que para el sociólogo, por bienestar no deberían entenderse las prestaciones estatales, sino más bien, la maximización del progreso económico, y por consiguiente de la riqueza global. Por otra parte, a diferencia de la socialdemocracia clásica, esgrime que el neoliberalismo es una teoría globalizadora, de manera que ellos aplican a escala mundial la filosofía que les guía en sus compromisos más locales. Sin embargo, también expone que esta doctrina impulsada por Friedman se encuentra en una situación problemática, dado que sus dos mitades –el fundamentalismo de mercado y el conservadurismo- están en constante tensión. En consecuencia, para él el conservadurismo siempre significó un acercamiento cauteloso y pragmático al cambio social y económico⁹¹.

ii. Fundamentos históricos del concepto

Así, como hacía mención en su introducción, la Tercera Vía, fue una expresión que se comenzó a acuñar a fines del siglo pasado, y fue común entre los grupos de derecha en los años XX. Sin embargo, también aclara que ha sido mayormente utilizada por los socialdemócratas y socialistas, ya que a comienzos del periodo de posguerra ellos estaban convencidos de que habían encontrado una vía distinta al capitalismo de mercado norteamericano y al comunismo soviético. Es más, destaca que en el momento de su refundación, en 1951, la Internacional Socialista hablaba explícitamente de la Tercera Vía en ese sentido.

Sin embargo, también sostiene que 20 años más tarde, tal y como fue usada por el economista Checo Ota Sik y otros, se empleó para referirse al socialismo de mercado. De igual forma, complementa que al término de los ochenta los socialdemócratas suecos

⁹¹ *Ibíd.*, p. 24 y25.

utilizaron mayormente este concepto para referirse a una importante renovación programática. Vale decir, fue un concepto que se utilizó en diferentes épocas y en distintas coyunturas políticas y económicas, el cual buscaba ser una solución a las vías tradicionales de hegemonía imperantes, posicionándose como una tercera alternativa para enfrentar las articulaciones estructurales que sucedían en aquellos tiempos.

No obstante, será a fines del siglo XX que el concepto comienza a cobrar fuerza y lo hace de la mano del demócrata estadounidense, Bill Clinton, y el laborista inglés, Tony Blair a mediados de los 90, quienes, según reconoce Guiddens, encontraron un recibimiento “tibio” por parte de la mayoría de los socialdemócratas continentales, así como por los críticos de la vieja izquierda en sus respectivos países.

De igual forma, también admite que en su nueva versión, los críticos contemplan esta nueva doctrina, “como un neoliberalismo recalentado”. Es más, reconoce que en Estados Unidos observan una economía bastante dinámica, pero también a una sociedad con los niveles más extremos de desigualdad en el mundo desarrollado. Es más, Clinton prometió “acabar con el sistema de bienestar”, pareciendo imitar algunas actitudes de los conservadores neoliberales. Al llegar al poder, dicen sus críticos y el Nuevo Laborismo han preservado en las políticas económicas de Margaret Thatcher⁹².

“La Tercera Vía se refiere a un marco de pensamiento y política práctica que busca adaptar la socialdemocracia a un mundo que ha cambiado esencialmente a lo largo de las dos o tres últimas décadas. Es una Tercera Vía en cuanto es un intento por trascender tanto la socialdemocracia a la antigua como el neoliberalismo”⁹³.

iii. La política de la Tercera Vía

Pues bien, para Guiddens, la meta general de la Tercera Vía debe ir en pos de ayudar a los ciudadanos a adaptarse a las nuevas transformaciones sociales. Entre ellas, la globalización y también de temas relativos al medio ambiente. Por eso, el teórico apuesta en que esta opción debería adoptar una actitud positiva hacia la globalización. En ese sentido, enfatiza que la política de la Tercera Vía no debería identificar globalización con un apoyo universal al libre comercio. Pues, para el sociólogo, el libre comercio puede ser un motor del

⁹²Ibíd., p. 36 y 37.

⁹³Ibíd., p. 38.

desarrollo económico, pero “dado el poder social y culturalmente destructivo de los mercados, sus consecuencias más generales han de ser siempre examinadas”⁹⁴. Por lo que insta a mirar con precaución las políticas destinadas a la apertura de mercados.

Asimismo, reconoce que la política de la Tercera Vía debería mantener como preocupación esencial la “justicia social”. Por otro lado, dice que la igualdad y libertad individual pueden colisionar, pero las medidas igualitarias también aumentan a menudo la gama de libertades accesibles a los individuos. Así, para el sociólogo, la libertad debería significar para los socialdemócratas “autonomía de acción” que a su vez exige la implicación de la comunidad social. En ese sentido, precisa que la política de la Tercera Vía busca una nueva relación entre individuo y comunidad, y una redefinición de derechos y obligaciones.

En esa misma línea, precisa que los gobiernos tienen que asumir responsabilidades respecto a sus ciudadanos y también frente a los más débiles. De esta forma, cuenta que socialdemocracia a la antigua tendía a considerar los derechos como exigencias incondicionales.

A juicio del sociólogo, las prestaciones por desempleo deberían acarrear la obligación de buscar trabajo activamente, de modo que dependerá de los gobiernos asegurar que los sistemas de bienestar no desalienten la búsqueda activa. Asimismo, hace hincapié en que esto entenderse en el sentido de que ningún derecho -sin responsabilidad- debe aplicarse no sólo a destinatarios del bienestar, sino a todo el mundo⁹⁵.

Por otro lado, pone énfasis en que una segunda norma que debería considerar una Tercera Vía es que no hay autoridad sin democracia. Esto, porque para el teórico, la derecha por años ha rebuscado siempre entre los principales símbolos tradicionales como medios principales de justificar la autoridad, ya sea en la nación, el gobierno, la familia u otras instituciones. Sin más, está el caso de los gobiernos de facto de la región latinoamericana en los años 70 y 80, que llegaron al poder a través de vías dictatoriales, promoviendo modelos de desarrollo totalmente distintos a los que se venían ejerciendo, tal es el caso de Chile, Uruguay y Argentina, entre otros.

⁹⁴ *Ibíd.*, p. . 80.

⁹⁵ *Ibíd.*, p. 81.

Continuando con Guiddens, hace mención en que los pensadores y políticos de derecha han mantenido que sin tradición y formas tradicionales de respeto, la autoridad se desmorona, por ende, la gente pierde la facultad de diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. En consecuencia, la democracia nunca puede dejar de ser incompleta. Así, reconoce que los socialdemócratas deberían oponerse a esta concepción, pues en “una sociedad donde la tradición y la costumbre están perdiendo su fuerza, la única ruta para establecer la autoridad es la democracia”⁹⁶.

iv. Valores de la doctrina

Guiddens destaca que dentro de los valores que se deben admitir en esta nueva vertiente de pensamiento económico y social, están: la igualdad, protección de los débiles, libertad como autonomía, ningún derecho sin responsabilidad, ninguna autoridad sin democracia, pluralismo cosmopolita y conservadurismo filosófico.

v. Estado y la sociedad civil

Respecto a este ítem, el teórico social estima que la reforma del Estado y del gobierno debería ser un principio orientador básico de la política de la Tercera Vía; además de un proceso de profundización y extensión de la democracia. En efecto, para Guiddens el gobierno puede actuar en asociación con instancias de la sociedad civil para fomentar la renovación y el desarrollo de la comunidad. De igual forma, establece que la base económica de tal asociación es lo que se llama la “nueva economía mixta”. Así, reconoce que ella solo puede ser eficaz si las instituciones del bienestar existentes “se modernizan” completamente⁹⁷.

vi. Programa de la tercera vía

Dentro del planteo de Guiddens, el programa de la Tercera Vía considera un “centro radical”, un nuevo Estado democrático, es decir, Estados sin enemigos, una sociedad civil activa, una familia democrática, una nueva economía mixta, igualdad como inclusión, bienestar positivo, el Estado social inversor, la nación cosmopolita y la democracia cosmopolita.

⁹⁶Ibíd., p. 82.

⁹⁷ Ibíd., p. 85.

A su vez, dentro de su reflexión admite que los neoliberales quieren reducir el Estado, en tanto, los socialdemócratas, históricamente, han buscado insistentemente expandirlo. En esa estructura de las cosas, lo que plantea el teórico es que la Tercera Vía tiene que reconstruirlo e ir más allá de aquellos derechistas que dicen, por una parte, que el gobierno “es el enemigo” y de aquellos izquierdistas que dicen que el gobierno “es la solución”.

vii. Funciones del estado

Guiddens entrega una serie de planteamientos relativos al rol que debe tener el Estado con esta nueva doctrina filosófica. Entre ellas:

- **El Estado debe responder a la globalización.-** Dentro de ese tópico, el pensador dice que la democratización de la democracia implica antes que nada descentralización, pero no como proceso unidireccional. En ese sentido, hace hincapié en que la globalización da un impulso y una lógica fuerte a la devolución de poder hacia abajo, pero también a la atribución hacia arriba.
- **Aumento del papel de la esfera pública.-** Guiddens indica que ello implica una reforma constitucional dirigida a una mayor transparencia e imparcialidad, junto a la introducción de nuevas salvaguardas contra la corrupción.
- **Eficiencia administrativa.-** La reestructuración del gobierno, a juicio de Guiddens, debiera seguir el principio ecológico de “obtener más de menos” entendido no como una despedida de trabajadores, sino como una mejora del valor producido. Así, pone en entresaca que la mayoría de los gobiernos del mundo tiene todavía mucho que aprender de la mayor eficiencia de las empresas, por ejemplo, controles de objetivos, auditorías eficaces, estructuras de decisión flexibles y mayor participación de los empleados, siendo este último punto para Guiddens, un factor de democratización. “Los socialdemócratas deben responder a la crítica de que, sin disciplina de mercado, las instituciones estatales se vuelven indolentes y los servicios que proveen de mala calidad”.
- **Formas de democracias distintas.-** Según plantea, el gobierno puede restablecer un contacto más directo con los ciudadanos, y los ciudadanos con el gobierno, mediante los “experimentos de democracia” –democracia local directa, referendos electrónicos, jurados ciudadanos y otras posibilidades-. Sin embargo, aclara que

estos no sustituirán a los mecanismos de voto normales en el poder local y central, pero podrían convertirse en un complemento perdurable de ello.

- **Gestión del Riesgo.-** Ello con el propósito de que conserven su legitimidad.
- **La democratización de la democracia no puede ser solo local o nacional.-** Bajo esa premisa, el sociólogo sostiene que el Estado debe tener una perspectiva “cosmopolita”. Así también establece que la democratización ascendente no debiera detenerse en el nivel regional. La democratización descendente supone la renovación de la sociedad civil, y en conjunto. Giddens lo define como el nuevo Estado democrático (sin enemigos) y le asigna los siguientes calificativos: un Estado con devolución, con doble democratización, con una renovación de la esfera pública-transparencia, con eficiencia administrativa, mecanismos de democracia directa y el gobierno como gestor de riesgo.

viii. Sociedad civil

Otro punto que menciona el teórico social tiene que ver con respecto a la promoción de una sociedad civil activa -entendiéndose a la sociedad civil, como un concepto de la ciencia social, que designa a la diversidad de personas, con categoría de ciudadanos y generalmente de manera colectiva, actúan para tomar decisiones en el ámbito público- que es parte primordial de la política de la Tercera Vía.

Así, en contraste con la vieja izquierda, que tendía apartar las preocupaciones sobre una decadencia cívica, esta nueva política acepta que tales inquietudes son verdaderas. Así, complementa que la decadencia cívica es real y visible en muchos sectores de las sociedades contemporáneas, y no solo es solo un invento de políticos conservadores. De igual forma, establece que se observa un debilitado sentimiento de solidaridad en algunas comunidades locales y vecindarios urbanos, en los altos niveles de criminalidad y en las rupturas matrimoniales y familiares. Por otro lado, Giddens argumenta que la derecha tiende a negar que la escasez económica esté asociada a estos problemas. Por eso, para él es erróneo reducir la decadencia cívica a la economía, como hacía con frecuencia la vieja izquierda, que negar la influencia de la pobreza y el desamparo.

En definitiva, lo que teórico promueve es una renovación de la sociedad civil y que vaya de la mano con la asociación de gobierno y sociedad civil, renovación de comunidades

mediante el aprovechamiento de la iniciativa local, implicación del sector terciario, protección de la esfera pública local, prevención comunitaria del crimen y la familia democrática. Así y todo, postula que el Estado y la sociedad civil deberían actuar asociados cada uno para ayudar, pero también para controlar la acción del otro. Por eso, añade que el tema de la comunidad es fundamental para la nueva política.

ix. El estado social inversor

Según detalla Guiddens, la socialdemocracia clásica consideraba la creación de riqueza como casi “accesoria” a sus preocupaciones básicas por la seguridad y la redistribución económica. Los neoliberales, por su parte, hacían mucho más hincapié en la competitividad y en la generación de la riqueza.

En ese sentido, expone que la política de la Tercera Vía pone mucho énfasis en esas “virtudes”, que tienen una importancia decisiva dada la naturaleza del mercado global. No obstante, también admite que “no serán estimuladas” en el caso de dejar a los individuos a navegar en un “torbellino económico”. De esta forma, sentencia que el gobierno tiene un papel esencial que cumplir invirtiendo en los recursos humanos y en la infraestructura requerida para desarrollar una cultura empresarial.

“La política de la Tercera Vía, podría sugerirse, propugna una nueva economía mixta. Existían dos versiones diferentes de la vieja economía mixta. Una implicaba una separación entre el Estado y los sectores privados, pero con gran parte de la industria bajo control público. La otra era y es el mercado social. En casa una de ellas, los mercados permanecen en gran medida subordinados al gobierno. La nueva economía mixta busca en lugar de eso una sinergia entre sectores públicos y privados, aprovechando el dinamismo de los mercados, pero teniendo en cuenta el interés público. Requiere un equilibrio entre regulación y desregulación, tanto a nivel transnacional como nacional y local; y un equilibrio entre lo económico y lo no económico en la vida social”⁹⁸.

En ese marco, reconoce que una alta tasa de formación y disolución de negocios es característica de una economía dinámica. Sin embargo, también apunta a que este flujo no es compatible con una sociedad en la que predominan los hábitos inculcados, incluidos los producidos por sistemas de bienestar. Así, según admite, los socialdemócratas han de variar

⁹⁸ *Ibíd.*, p. 119 y 120.

la relación entre el riesgo y seguridad existente en el Estado de Bienestar, para construir una sociedad de tomadores de riesgo responsables en las esferas del gobierno, los negocios y el mercado del trabajo. De este modo, hace hincapié en que la gente necesita protección cuando las cosas van mal, pero también las facultades materiales y morales para superar grandes periodos de transición en sus vidas.

Un concepto que hace mención en reiteradas oportunidades tiene que ver con el término de igualdad, que ha de ser pensado minuciosamente. Así, sostiene que igualdad y libertad individual pueden entrar en conflicto, y de nada sirve pretender que la igualdad, el pluralismo y el dinamismo económico son siempre compatibles.

Por una parte, admite que la desigualdad creciente no es fácil de combatir. Por eso, insta a que los socialdemócratas no deberían aceptar, en cualquier caso, que altos niveles de desigualdad sean funcionales para la prosperidad económica, o que son inevitables. De este modo, indica que se debería apartar lo que en el pasado ha constituido a veces una obsesión con la desigualdad, al igual que reflexionar sobre qué es la igualdad. En definitiva, apunta a que la igualdad debe contribuir a la diversidad, no ponerse en su camino.

En esa línea, reconoce que muchos apuntan a que el único modelo de igualdad debería ser hoy en día a la igualdad de oportunidades, o meritocracia –esto es, el modelo neoliberal-. Sin embargo, también muestra su opinión respecto a este punto y remarca que esta postura no es defendible. Por una parte, menciona que si ello fuera alcanzable, una sociedad radicalmente meritocrática produciría profundas desigualdades de resultados, que amenazarían la cohesión social. En ese sentido, pone como ejemplo el tema de los mercados de trabajo, puesto si alguien es marginalmente más dotado puede disponer de un salario mayor que el otro.

Así las cosas, el teórico social dice que la nueva política define igualdad “como inclusión” y la desigualdad “como exclusión”. De este modo, pone énfasis en que en una sociedad en la que el trabajo sigue siendo esencial para la autoestima y el nivel de vida, su acceso se da en un ámbito principal de oportunidades. La educación es otro, y lo sería incluso aunque no fuera tan importante para las posibilidades de empleo, para las que es determinante.

Por otro lado, menciona que hay dos formas de exclusión se están manifestando en las sociedades contemporáneas: una es la exclusión de los que están abajo, aislados de la corriente principal de oportunidades que una sociedad ofrece. En la cúspide está la exclusión voluntaria, “la rebelión de las élites”: una retirada de las instituciones públicas por parte de los grupos más ricos, que eligen vivir separados del resto de la sociedad. Los grupos privilegiados empiezan a vivir en comunidades fortificadas, y se apartan de los sistemas públicos de educación y salud.

En consecuencia, para Guiddens inclusión y exclusión se han convertido en conceptos importantes para analizar y responder a la igualdad debido a los cambios que están afectando a la estructura de clase de los países industriales, a los que antes se hizo brevemente referencia.

Por otra parte, cree que la política de la Tercera Vía debería aceptar algunas de las críticas que la derecha hace al Estado de bienestar, dado que su fuerza motriz es la protección y la atención, pero no da suficiente espacio a la libertad personal. En ese marco, establece que algunas formas de institucionalización del bienestar son “burocráticas, alienantes e ineficientes”, de forma que pueden producir consecuencias perversas que socavan aquello para lo que estaban diseñadas.

No obstante, también reconoce que la política de la Tercera Vía no debería ver estos problemas como una señal para dismantelar el Estado de bienestar, sino como una parte de la “necesidad de reconstruirlo”.

Así, según sostiene, las dificultades del Estado de Bienestar son solo en parte económicas. En efecto, en la mayoría de las sociedades occidentales, el gasto proporcional en sistemas de bienestar ha permanecido bastante estable durante los últimos diez años. En el Reino Unido, por ejemplo, menciona que la porción del PIB invertida en el Estado de bienestar aumentó regularmente durante gran parte del siglo, hasta finales de los años 70. Desde entonces se ha estabilizado.

En este contexto, subraya que el gran aumento del gasto en seguridad social es una de las fuertes críticas que se hacen desde el neoliberalismo, dado que ven en él un desarrollo generalizado de la dependencia del bienestar. Pues bien, de acuerdo a su convencimiento

“tienen seguramente razón” al preocuparse de la cantidad de gente que vive de las prestaciones estatales, pero hay una manera más sofisticada de ver lo que está pasando. En ese sentido, opina que las reglas del bienestar devienen con cierta frecuencia ineficiente, u originan situaciones de riesgo moral. De este modo, enfatiza que no se trata tanto de que algunas formas de provisión del bienestar creen culturas de la dependencia como de que la gente toma ventaja racional de las oportunidades ofrecidas. Prestaciones establecidas para contrarrestar el desempleo, por ejemplo, pueden llegar a producir desempleo si se usan activamente como protección frente al mercado de trabajo.

En definitiva, para Guiddens el Estado de bienestar es más una mancomunidad de riesgos que de recursos. En ese sentido, pone como ejemplo que lo ha modelado la solidaridad de la política social es que “grupos por otra parte privilegiados descubrieron que compartían un interés común en distribuir de nuevo el riesgo con los desfavorecidos”. No obstante, asegura que el Estado de bienestar no está preparado para cubrir riesgos novedosos como los referentes al cambio tecnológico, la exclusión social o la creciente proporción de hogares monoparentales. Estos desajustes son de dos clases: cuando los riesgos cubiertos no se adecuan a las necesidades y cuando se protege a grupos equivocados.

Así, para el sociólogo la reforma del bienestar debería reconocer los argumentos sobre el riesgo: la gestión eficaz del riesgo (individual o colectivo) no sólo significa minimizar o proteger contra los riesgos, significa también aprovechar el lado positivo o energético del riesgo y suministrar recursos para la adopción del riesgo. De esta forma, subraya que la adopción activa del riesgo se reconoce como inherente a la actividad empresarial, pero lo mismo puede decirse de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, menciona que decidir ir al trabajo y renuncias a las prestaciones o aceptar un empleo en una determinada industria, son actividades de riesgo infundidas. Sin embargo, también apunta que tal adopción de riesgos es con frecuencia beneficiosa tanto para el individuo como para la sociedad.

A su vez, establece que el bienestar no es en esencia un concepto económico, sino uno “psíquico”, que atañe, como lo hace, al estar- bien. En ese marco, remarca que las prestaciones o ventajas económicas no son, por tanto, casi nunca suficientes por sí mismas para producirlo. Así, sugiere que las instituciones del bienestar deberían ocuparse de

promover mejoras psicológicas a la vez que económicas. Entre ellas, asesoramiento, que según el teórico, pueden ser más útiles que el apoyo económico directo.

Asimismo, indica que el principio guía es “la inversión en capital humano”, más que la provisión directa de sustento económico. En definitiva, precisa que en el lugar del Estado de bienestar se debería colocar al Estado social inversor, funcionando en el contexto de una sociedad de bienestar positivo. De igual forma, hace hincapié en que la idea de que el Estado de bienestar debería ser reemplazado por la “sociedad del bienestar” se ha repetido regularmente en la literatura reciente sobre temas de bienestar. Donde las instancias del sector terciario no están todavía bien representadas deberían tener un mayor papel en la provisión de servicios de bienestar. La distribución vertical de beneficios debería ceder paso a sistemas de distribución más localizados. Más generalmente reconocer que la reconstrucción de las provisiones del bienestar ha de integrarse con programas para el desarrollo activo de la sociedad civil⁹⁹.

x. Estrategias de inversión social

Poniendo énfasis en que son muchas las instituciones y servicios que están agrupados bajo el nombre de Estado de bienestar, se cuestiona respecto a la aspiración del Estado social inversor en relación a sus sistemas de seguridad. Así pues bien, destaca dos áreas provisión para la tercera edad y desempleo.

En relación a lo primero, Guiddens plantea que una perspectiva radical aconsejaría salirse de los límites entre los que se desenvuelve el debate acerca del pago de las pensiones. Así, reconoce que los compromisos con las pensiones de algunos países, como Italia, Alemania o Japón, superan con creces lo que pueden permitirse, incluso admitiendo un crecimiento económico razonable. Si otras sociedades, como Gran Bretaña, han evitado en cierta medida estas dificultades es porque han reducido activamente sus compromisos respecto a las pensiones estatales –en Gran Bretaña, por ejemplo, ajustando las pensiones a los precios medios en lugar de a los ingresos medios.

De esta manera, admite que un nivel adecuado de pensión estatal garantizada es una necesidad. También acepta que hay buenas razones para apoyar también a los programas de

⁹⁹ *Ibíd.*, p. 136, 137, 138 y 139.

ahorro obligatorio. En esa línea, señala que se debería avanzar hacia la abolición de la edad fija de jubilación y se debería también contemplar a la gente mayor como un recurso y no como un problema. De igual forma, pone énfasis en que la categoría de pensionista dejará entonces de existir, porque es separable de las pensiones como tales, de modo que sostiene que no tiene sentido retener los fondos de pensiones hasta alcanzar la “edad de jubilación”. La gente debería poder utilizar tales fondos como desee, no solo para dejar la fuerza de trabajo a cualquier edad, sino para financiar la educación u horas reducidas de trabajo, cuando estén criando niños pequeños.

Respecto al segundo punto, dice que el alto desempleo está ligado a prestaciones “generosas” que continúan indefinidamente, además, de pobres niveles educativos en el extremo inferior del mercado laboral, en fenómeno de la exclusión.

En ese contexto, apunta a que la postura de la Tercera Vía debería ser que la desregulación general no es la solución. De esta forma, indica que el gasto en bienestar debería permanecer en “niveles europeos y no estadounidenses”, pero habría que destinarse en cuanto fuera posible a la inversión en capital humano. De igual forma, plantea que los sistemas de prestaciones deberían reformarse cuando induzcan al riesgo moral, y debería estimularse una actitud de adopción de riesgos más activa, allí donde sea posible mediante incentivos, pero donde sea necesario mediante obligaciones legales.

En definitiva, para el sociólogo, las estrategias para la creación de empleo y el futuro del trabajo han de estar basados en una orientación hacia nuevas exigencias económicas. En efecto, postula a que las empresas y los consumidores operan crecientemente a escala mundial, siguiendo los criterios exigidos para los bienes y servicios. Por su parte, precisa que los consumidores compren a escala mundial, en el sentido de que la distribución es global y, por tanto, lo mejor ya no tiene conexión genérica con el lugar en que se producen los bienes y servicios. De esta forma, las presiones para cumplir estos criterios alcanzarán también cada vez más a las fuerzas de trabajo. En algunos contextos, tales presiones profundizarán probablemente los procesos de exclusión social. La inversión en recursos humanos está demostrando ser la fuente principal de eficacia de las empresas en sectores económicos claves.

“La empresa es una fuente directa de empleos. También estimula el desarrollo tecnológico y da a la gente oportunidades para el autoempleo en épocas de transición. La política gubernamental puede ofrecer apoyo directo al empresariado, ayudando a crear capital empresarial, pero también reestructurando los sistemas de bienestar para dar seguridad cuando los negocios arriesgados vayan mal –por ejemplo, dando a la gente la opción de declarar sus impuestos en ciclos de dos o tres años en lugar de anualmente”¹⁰⁰.

Por último, plantea que los gobiernos han de impulsar la educación durante toda la vida desarrollando programas educativos que comiencen los primeros años de un individuo y continúen incluso a una edad madura. Aunque el aprendizaje de conocimientos específicos pueda ser necesario para muchos cambios de empleo, más importante es el desarrollo de la competencia cognitiva y emocional. Asimismo, sostiene que en lugar de descansar en prestaciones incondicionadas, las políticas deberían orientarse a estimular el ahorro, el uso de recursos educativos y otras oportunidades de inversión personal.

Como conclusión, el sociólogo admite que a comienzos de los noventa, participantes en el debate sobre el futuro de la socialdemocracia hablaban del “aire de desilusión” que ha rodeado a la renovación socialdemócrata. En ese sentido, comenta que los socialdemócratas en Europa, y también en otras zonas del mundo, perdieron confianza a la vista del ascenso de la filosofía de libre mercado y el colapso del “socialismo actualmente existente” en Europa del Este. En efecto, Ronald Reagan y George Bush ostentaron el poder en Estados Unidos, mientras dos de los grandes partidos socialdemócratas, en Gran Bretaña y Alemania, pasaron largos periodos en la oposición. Aunque los socialdemócratas mantuvieron el tipo en Europa meridional, mantuvieron el tipo en Europa meridional, tanto electoral como conceptualmente “la socialdemocracia entró en un estado de depresión”.

De igual forma, asevera que una serie de acontecimientos clave, como la elección de Bill Clinton a la presidencia de Estados Unidos, en 1992, ayudaron a que cambiara la suerte. Por ejemplo, los triunfos de Wim Kok como primer ministro de Holanda, Lionel Jospin accedió al poder en Francia, Romano Prodi, en Italia. A su vez, la victoria del laborismo en el Reino Unido fue considerada también en muchos países como un nuevo comienzo.

¹⁰⁰ Ibíd., p. 147.

V. Análisis de la temática

Como hemos observado, la Tercera Vía busca redefinir los valores de la izquierda frente a un mundo cambiante, dada las políticas que han imperado en los últimos años, como el neoliberalismo, de modo que aparece como una respuesta para aliviar y dar oxígeno político y económico a esta seguidilla de hechos.

Es así que su búsqueda avanza hacia una sociedad que tenga alto grado de solidaridad y tienda al igualitarismo, de modo que resguarde los derechos de las personas más vulnerables, y que suprima las injusticias.

Para ello, se propone derribar problemas estructurales, como la pobreza y la escasez de empleo. Además, el fortalecimiento de la educación, mejorar el medio ambiente y proveer de salud a toda la población. En ese sentido, lo que proyecta es un mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, por lo cual, para llegar ello, se deben elaborar estrategias que impliquen la creación de empleo, un saneamiento económico y una mejora de la situación social.

En un marco, como la globalización, que se caracteriza por la expansión del mercado global, el crecimiento de los mercados financieros, y la revolución de las comunicaciones, esta propuesta apunta hacia una reestructuración de las instituciones básicas de la sociedad. Eso sí, es importante consignar que no se trata que la nueva izquierda esté en favor o en contra de la globalización, más bien, lo que busca es debatir los puntos negativos para optimizarlos, y los positivos para mantenerlos.

Ante esto, Alonso esgrime que las modificaciones que se están produciendo en el mundo del libre comercio, las innovaciones tecnológicas, el cambio de las estructuras familiares y las divisiones regionales que emergen en algunas sociedades requieren una intervención decidida de un Estado sólido, según los planteamientos de esta filosofía política.

i. Principales líneas de acción de la tercera vía

Alonso expone que ellas avanzan en las siguientes áreas:

- **Pobreza:** Guiddens propone reemplazar los programas convencionales contra la pobreza por enfoques basados en la comunidad, que permitan mayor participación democrática.

- **Participación ciudadana.-** Insta al incremento de la participación de los empresarios en acciones sociales.
- **Promueve la asociación del gobierno con entidades sociales.** Lo que Giddens llama “renovación de la sociedad civil” se logra mediante el aprovechamiento de la iniciativa social, la colaboración del sector terciario (área que agrupa las actividades que no se dedican a la producción de bienes sino a la prestación de servicios, como transporte, salud, comercio, turismo, ocio, cultura y administración), la protección del sector público, la prevención comunitaria del crimen y la valoración de la familia democrática.
- **Educación:** La inversión del Estado en la educación de los ciudadanos debe prolongarse durante toda su vida, desarrollando programas que comiencen en los primeros años y continúen en la edad adulta.
- **Trabajo.-** A su juicio, el capitalismo desarrolló el trabajo en términos de competencia “despiadada, generando situaciones de explotación inhumana”. Por eso, la doctrina de pensamiento propugna que los gobiernos impulsen políticas para que el lugar de trabajo sea compatible con la unión familiar. Con esta idea, propone crear nuevos ambientes laborales en lo que no se excluya la relación con el grupo de pertenencia primario del empleado. Esto permite una competencia óptima, porque ese individuo está contenido y no alejado de sus sentimientos, lo que lo induce a desempeñarse una manera eficaz. La atención focalizada en las pequeñas y medianas empresas estimula su crecimiento y fortalecimiento y las hace eficaces generadoras de trabajo y emprendimiento personales y grupales.
- **Preservación de la ecología.** La conservación del medio ambiente es una preocupación central de este planteo, que equipara el problema de la contaminación y la calidad de vida a las dificultades para solucionar la falta de empleo. Así, observa que el crecimiento ilimitado de la acumulación de la riqueza y los capitales ha fomentado una utilización perniciosa de la naturaleza, usufructuando los hábitats naturales para obtener réditos económicos. El desarrollo industrial apoyado o basado en nuevas autopistas, plantas destructoras de residuos, fábricas químicas e investigaciones nucleares es un ataque permanente a los ecosistemas.

En una visión bastante crítica de esta doctrina de pensamiento, Korzeniewicz y Smith plantean que esta filosofía política representa un futuro “promisorio” para una nueva socialdemocracia, declarando que su bosquejo solo representa “un abandono” de los ideales tradicionales de las fuerzas progresistas en favor de la incorporación de la ideología neoliberal como doctrina dominante.

Su enfoque versa respecto a que esta propuesta ofrece oportunidades para fortalecer nuevos actores postergados o previamente excluidos de la comunidad, para otros, tal vía socavaría a actores políticos que fueron de gran importancia en el apoyo histórico a la socialdemocracia.

Ahora bien, respecto a la posibilidad de que esta política se impulse en los nuevos tiempos, sostienen que este ha sido un debate que se ha dado fuertemente en los últimos años, principalmente entre los partidos socialdemócratas de Europa occidental y, en menor medida, entre los sectores centristas del Partido Demócrata estadounidense y algunos sectores más moderados de la izquierda latinoamericana.

De igual forma, reconocen que las características claves de la socialdemocracia de viejo estilo se encuentran en el crecimiento extendido del estado de bienestar, la regulación keynesiana de los mercados, la privatización de empresas públicas en sectores estratégicos, el predominio de estrategias de crecimiento interno que desconfían de los mercados mundiales, la organización de mercados laborales en torno a la meta de pleno empleo y una división de tareas domésticas y pagas entre mujeres y hombres, y la subvaloración del medioambiente. Por eso, frente a estas características, la tercera vía apunta a una profunda renovación, a través de innovaciones profundas en la organización de mercados y regulación a nivel mundial.

“(La Tercera vía) sugiere replantear al Estado, transfiriendo algunas de sus responsabilidades a agencias ubicadas “por encima” del Estado nacional (p. ej., al Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio o a los esquemas de integración regional y tratados de libre comercio) o “por debajo” (p. ej., municipalidades u organizaciones no gubernamentales, las ONG); creando modalidades innovadoras para la provisión de servicios y bienes públicos; incrementando la transparencia del Estado (atacando y previniendo la corrupción); mejorando la eficiencia administrativa del Estado (particularmente con respecto a áreas clave

*de tensión social, como en lo referente al crimen, o a las tensiones entre familia y trabajo); y creando nuevas formas de profundizar los procesos de democratización. Implícito en muchas de las reformas propuestas, se plantea la necesidad de reevaluar la relación entre seguridad y riesgo*¹⁰¹.

Así, según su visión, la tercera vía abandonaría la simple protección de los ciudadanos frente a la incertidumbre, por ejemplo, frente al desempleo, y, en cambio, buscaría mejorar la capacidad del Estado de preparar a los ciudadanos para enfrentar exitosamente situaciones de riesgo y la vulnerabilidad.

Por otro lado, también plantean que dicha doctrina, en cierta forma, valora el potencial del mercado para optimizar el uso de recursos, la distribución de la información y el crecimiento económico en general.

En síntesis, para estos teóricos esta filosofía profundiza un estado de inversión social, de profunda democratización y de integración plena en los procesos de globalización, generando una dinámica en la cual cada una de estas dimensiones se fortalecería en un círculo virtuoso. En definitiva, un compromiso amplio entre ricos y pobres, pero no como antes, es decir, sin el predominio del viejo estilo neocorporativista de concertación social entre capital, trabajo y Estado.

Igualmente, Aldo Ferrer, en el capítulo siete de su obra *De Cristóbal Colón a internet. América Latina y la globalización*, reconoce las políticas neoliberales -que prevalecieron en Europa Occidental en las últimas dos décadas- provocaron la “disminución del crecimiento económico, el aumento del desempleo y la inestabilidad de los mercados financieros y cambiarios”.

Por eso, el economista estima que el hecho de que haya triunfado la socialdemocracia en la Unión Europea reflejó el “descontento social” que fue generado por las políticas neoliberales que fueron impulsadas en administraciones, como las de Reino Unido. De esta forma, precisa que las propuestas de la socialdemocracia europea se expresan en la llamada Tercera Vía. Un término que sugiere la búsqueda de un rumbo distinto en lo que respecta, por una parte, al predominio del estado de bienestar bajo el paradigma keynesiano (Estado

¹⁰¹ Korzeniewicz, Roberto y William , Smith. (2000). Los dos ejes de la tercera vía en América latina. en Colombia Internacional., p. 42.

benefactor) y, por otra, un giro distinto respecto a las políticas hegemónicas del momento, como el neoliberalismo, de modo que dicha doctrina de pensamiento pretendió realizar una síntesis que buscó recoger lo mejor de ambas estrategias: el pleno empleo y la equidad social, de la primera; y la eficiencia y el despliegue de las fuerzas de mercado libre, de la segunda¹⁰².

A su vez, reconoce que son los gobiernos de los países más importantes de la Unión Europea continental, como Alemania y Francia, quienes –transformando las relaciones entre el Estado y el mercado- pusieron sobre la marcha ideas renovadoras y radicales, en pos de fortalecer la solidaridad social y proteger el medio ambiente. Así, su prioridad principal radica en compatibilizar la competitividad de las empresas en el orden mundial global con la elevación del bienestar.

Según observa Ferrer, su foco está puesto en “el fortalecimiento de la educación” y en la “capacitación para desarrollar y aplicar nuevas tecnologías”. Además de proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo sostenido, con buenas políticas de empleo y de bienestar social. Asimismo, cree que esta doctrina insta a que los países utilicen el andamiaje institucional establecido y controlado por instituciones de países centrales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el grupo de los 7, para concertar formas de cooperación. De hecho, menciona que uno de los acuerdos que se han impulsado respecta a cuestiones cambiarias, financieras y fiscales, cuyo foco es lograr estabilizar los valores de las monedas.

Es más, lo ejemplifica con el caso de la Unión Europea, con el Euro como moneda única, pues, en el terreno financiero, se propone reducir la tasa de interés para estimular la inversión, empleo, crecimiento; y no solo la estabilidad de precios. De igual forma, señala que en materia fiscal, la intención es armonizar las políticas nacionales para reducir el déficit estructural promoviendo el crecimiento y la ocupación. En su análisis, avizora que tanto la política fiscal, como la monetaria, recuperan la responsabilidad de “regular” el

¹⁰² Aldo Ferrer. (1999). De Cristóbal Colón a Internet: América Latina y la globalización, Bs.As: Fondo de Cultura Económica.

ciclo económico, de modo que plantea la necesidad de “evitar” la competencia de rebajas impositivas entre los países para atraer inversiones.

Otro de los puntos que destaca tiene relación con el término de “equidad”, al cual describe como “la condición necesaria para el crecimiento y la estabilidad”, dado que aumenta la demanda y estimula la inversión y el cambio técnico.

De igual forma, menciona que esta doctrina de pensamiento propone ejecutar políticas conjuntas referidas a la tecnología y a la protección del medio ambiente. En el primer caso, aumentando la I+D (Investigación y desarrollo) para impulsar proyectos en las áreas de frontera (como el aeroespacio) para emplear con más eficiencia los recursos disponibles. En tanto, en un segundo punto, impulsar una reestructuración impositiva y arancelaria acordada y liderada por la triada para desalentar las actividades depredadoras de la naturaleza.

La Tercera Vía, según Aldo Ferrer, es una iniciativa concebida en el seno de la Unión Europea, es decir, en países capitalistas avanzados. Dentro de las características que menciona, reconoce que estos países cuentan con una relación simétrica con la globalización; vale decir, poseen fuertes sectores privados nacionales que conservan una posición dominante en la estructura productiva; su inversión extranjera directa es complementaria, no sustitutiva, de las empresas nacionales. A su vez, sus economías no registran brechas significativas en el contenido tecnológico de lo que exportan e importan y participan en los sectores más dinámicos del comercio mundial.

Simultáneamente, admite que muchos de estos países son acreedores internacionales netos o registran deudas externas de escasa significación relativa, con la excepción de Estados Unidos que puede endeudarse en su propia moneda, pues el dólar es la principal moneda de reserva internacional.

Correlativamente, precisa que la globalización de los mercados financieros también condiciona sus políticas económicas, además se trata de una fuente de “inestabilidad” de las disparidades de monedas y de las tasas de interés.

Asimismo, dice que se trata de Estados fuertes y con marcos regulares eficaces, donde el Estado nunca estuvo ausente en la defensa de la competencia y de los intereses de los

consumidores. Por consiguiente, no se destruyó al Estado como árbitro de las pujas sociales por la distribución del ingreso y el poder económico.

Otra característica que destaca de los países que promueven los valores de la Tercera Vía está que sus desigualdades sociales son relativamente moderadas. En ese ámbito, recalca que las políticas neoliberales contribuyeron a concentrar el ingreso en diversos países avanzados, particularmente en Estados Unidos. No obstante, también se preservaron pautas elementales de equidad que el capitalismo avanzado y las luchas sociales fueron desarrollando a lo largo de la historia. Todos esos países cuentan con coberturas sociales suficientes.

Por otra parte, subraya que sus instituciones políticas son consolidadas y estables. Pues, según analiza, son capaces de transar, dentro de las reglas del sistema democrático, los conflictos inherentes a sociedades pluralistas y abiertas, donde los niveles de corrupción están acotados por la transparencia del sistema.

Paralelamente, indica que uno de los rasgos que lo distingue tiene que ver con que el desarrollo de sus países es inherente al capitalismo avanzado. Vale decir, que en todo el mundo desarrollado han arraigado las fuerzas impulsoras del crecimiento. Entre ellos, el cambio técnico, ahorro y acumulación de capital, liderazgo empresario, elevación continúa de los niveles culturales y técnicos de la población, estabilidad institucional, equilibrios políticos y relaciones simétricas con la globalización del orden mundial. En tales condiciones, una mala política económica puede deprimir la tasa de crecimiento y generar desempleo, como ha sucedido a menudo bajo la hegemonía de la estrategia neoliberal, pero no llega a desarticular la estructura productiva ni las fuerzas básicas del crecimiento.

VI. Latinoamérica y la Tercera Vía

En su análisis, Aldo Ferrer hace hincapié en que en la región el paradigma neoliberal también entró en crisis. Según sus datos, la crisis de la deuda externa, de 1980, generó una baja en el PIB, y la tasa de crecimiento alcanzó apenas la mitad de la vigente antes de la crisis. Asimismo, desliza que ello llevó a un agravamiento de la concentración del ingreso, un aumento en los niveles de pobreza, un empinamiento del endeudamiento externo y se multiplicaron las condiciones de inseguridad generadas por el creciente malestar social.

Paralelamente, hace una comparación respecto a la brecha que separa los ingresos medios de América Latina respecto a los países avanzados. Es más, precisa que actualmente dicha relación entre el ingreso per cápita de Estados Unidos y el de América Latina es de 10 a 1. Por ende, a la hora de salir de una crisis a quien más le cuesta es a los países de la región, puesto que nuestro desarrollo es muy distinto al de los países industrializados.

Así, según su visión, el concepto de Tercera Vía no es aplicable a la realidad latinoamericana. Pues, para el economista, la región sudamericana debería avanzar hacia una estrategia distinta, de modo de iniciar un sendero distinto que genere desarrollo y bienestar e inserte a América Latina en la globalización como una comunidad de naciones capaz de decidir su propio destino en el orden mundial; vale decir, más autónoma.

Asimismo, complementa que las ideas de esta alternativa que se impulsó a fines del siglo XX, lo que hacen es enriquecer las perspectivas desde las cuales deber abordarse los problemas de nuestros países; poniendo énfasis en que su puesta en práctica en esta región requiere decisiones de una magnitud y una complejidad desconocidas en el mundo desarrollado. Así, insiste en que la transformación del estilo de inserción de América Latina en la globalización descansa en las decisiones propias.

Alonso, por su parte, reconoce la aceptación del libre mercado es una idea consensuada a escala mundial. Por eso y con la necesidad de reformular los sistemas impuestos durante esa época es que la Tercera Vía aparece como un camino “atractivo”.

Así, señala que hay diversas variables que “intervienen” en América Latina para asumir un planteo como el que propone la nueva izquierda europea. De este modo, indica que los países escandinavos tienen una tradición de más de cuatro décadas en la consolidación de un camino alternativo al capitalismo y al comunismo, pero aun en la actualidad les es difícil mantener los beneficios de su modelo de bienestar. Sin embargo, suelen ser mostrados como el modelo a alcanzar por las naciones que aspiran a seguir los postulados de la Tercera Vía.

No obstante, al igual que Ferrer, observa que en América Latina la situación aún más complicada que en el resto de Europa, debido a los límites que impone el endeudamiento interno y externo de los países. Además, la región cuenta con altos índices de desempleo y

una creciente marginación social. Por ende, estas coyunturas, conspiran contra la aplicación de la Tercera Vía.

De esta forma, resuelve que en un principio América Latina debería mirar hacia los países que poseen recursos propios y extensiones considerablemente como para generar una productividad que les permita equilibrar la balanza comercial y partiendo de esa base, intentar la instrumentación de alguno de sus postulados¹⁰³.

Algunos teóricos de la Tercera Vía sostienen que Brasil podría ser el país más adecuado para encarnar la nueva política en América Latina, puesto que presenta una izquierda relativamente fuerte, nucleada en el Partido de los Trabajadores (PT).

Sin embargo, Alonso plantea que Guiddens es más optimista con respecto a la posibilidad de que sus lineamientos se expandan en Latinoamérica. De hecho, considera que Argentina, Brasil y Chile son naciones capaces de asimilar los conceptos de la nueva tendencia nacida en Gran Bretaña. En ese sentido, al especificar su propuesta, califica como fundamental el desarrollo de las ideas de la “nueva izquierda” en un contexto regional en el cual la Argentina, Brasil y Chile trabajen en objetivos comunes políticos, económicos y sociales.

Sin embargo, según advierten algunos teóricos europeos, la “falta de independencia económica” que tienen las naciones de Latinoamérica, impediría la adopción eficaz de la Tercera Vía como modelo. No obstante, también estos pensadores tienen la expectativa de que, una vez afianzadas sus ideas en Europa, puedan concretarse en la región. Con esa premisa, en la reunión de la Internacional Socialista, representantes de las potencias europeas brindaron su apoyo decidido a los entonces candidatos presidenciales Fernando de la Rúa, y Ricardo Lagos.

Por su parte, Korzeniewicz y Smith, precisan que en América Latina es lugar común para rastrear tal cuestionamiento a la crisis de la "década perdida" de los ochenta y su impacto sobre los mecanismos de regulación estatal y los modelos de industrialización de posguerra.

De hecho, según observan, este cuestionamiento se habría cristalizado en el Consenso de Washington, el cual condujo a las medidas de ajuste estructural y reformas de mercado que caracterizaron a la región en los últimos años. Así, ponen énfasis en que una visión

¹⁰³ Alonso, Alejandro. *óp. cit.*, p. 73.

optimista acerca del futuro se produjo en la región y conllevó a diversos cambios que impulsaron una agenda de reforma sociales, de modo que se avanzó en procesos de democratización, de mejorar la transparencia y eficiencia administrativa del Estado, de erradicar la pobreza y atacar la desigualdad en Latinoamérica como pasos imprescindibles para promover un mayor crecimiento económico.

Igualmente, destacan que la experiencia de Chile en los noventa se acerca mucho a esta estrategia de camino medio. De hecho, el país a menudo ha sido destacado con cierta exageración como un modelo de "crecimiento con equidad" para ser imitado por otras naciones de la región. De esta forma, aseguran que hay una serie de características acercan a Chile al camino medio más que al superior. Entre ellos, su "éxito" en el crecimiento económico se debe en parte a las políticas autoritarias implementadas por el régimen militar del 73, y en gran medida a enclaves o mecanismos institucionales autoritarios, como reglas electorales que permiten una sobrerrepresentación de las minorías conservadoras; los senadores "designados" no elegidos en el Congreso Nacional; fuerte representación militar en un Consejo de Seguridad Nacional dotado de amplios poderes de fiscalización sobre las autoridades civiles, entre otros.

Pese a ello, los teóricos sostienen que la presencia de los partidos políticos "relativamente fuertes, con ciertos rasgos de participación neocorporativista más o menos institucionalizada de las cúpulas de las principales asociaciones empresariales y los sindicatos de los trabajadores", ha facilitado la negociación e implementación de políticas capaces de reducir significativamente la pobreza. No obstante, también observan que la desigualdad se mantiene muy por encima de los niveles previos a 1973, sin lograr cerrar las brechas sociales bajo la nueva democracia¹⁰⁴.

De acuerdo a Garretón, este acercamiento a esta doctrina en Chile se produjo con los gobiernos de la Concertación; Lula da Silva, en Brasil y Tabaré Vázquez, en Uruguay. Mientras tanto cree que las experiencias de Hugo Chávez, en Venezuela; Evo Morales, en Bolivia; y Rafael Correa, en Ecuador, corresponden a patrones más estrictamente izquierdistas, en tanto las de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se ubicarían en un plano intermedio, según expone.

¹⁰⁴ Korzeniewicz, Roberto y Smith, William. *óp. cit.*, p. 48

Según su visión, se trata de una “renovada izquierda” que estaría más por ampliar la democracia y generar “reformas” al modelo; más que por el cambio sistémico o la revolución. En consecuencia, revela que ella adhiere a un tipo de capitalismo más equilibrado, y, por lo tanto, más regulado, que mantuvo intactas muchas de las recomendaciones macroeconómicas en clave neoliberal¹⁰⁵.

En definitiva, detalla que el eje de las propuestas de reforma de la izquierda se orientaría hacia el “fortalecimiento de la eficacia política de la democracia representativa, como medio para concretizar las aspiraciones populares”. De igual forma, observa que ella carece de una intención de cambio sistémico, sin embargo, avanza hacia un discurso orientado a la mayor equidad y a una justa inserción en los escenarios de la globalización.

Así, menciona al Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil; al Partido de la Revolución Democrática (PRD) mexicano; al Frente Amplio de Uruguay y a la Concertación chilena. Pues, a su juicio, dichos partidos y alianzas albergan en su interior diversas tendencias y modos de llevar a cabo las políticas sociales y económicas, pero su principal debilidad radica, en su subordinación a las exigencias de la aritmética electoral, que las lleva a conformar alianzas con otras fuerzas políticas.

También entrevé que el progresismo en América Latina se desarrolló desde el campo principalmente de las izquierdas (aunque con presencia en muchos casos del centro). Por una parte, como un proceso de renovación del pensamiento de izquierda predominante en las décadas del sesenta y setenta; por otra, como respuesta a la ola mercantilizadora neoliberal; y, por último, como un proyecto de profundizar las democracias emergentes de las transiciones postautoritarias y dotarlas de un nuevo orden socioeconómico.

A juicio de Garretón, lo que tratan de conseguir estas administraciones es una nueva relación entre Estado-sociedad, lo que implicaría una serie de reformas estructurales orientadas a revertir las transformaciones de la sociedad implementadas por las políticas neoliberales o el Consenso de Washington y a generar una mayor injerencia estatal, social y política de la sociedad en la economía. También una mayor representación de las clases populares, y, finalmente, la profundización de las instituciones democráticas y la expansión de sujetos individuales y colectivos. En consecuencia, para el investigador esto involucra

¹⁰⁵ Garretón, Manuel Antonio. *óp. cit.*, p.47 y 48.

tres dimensiones fundamentales. Entre ellas, “la socioeconómica, con un componente utopista de tipo anticapitalista, orientada hacia la igualdad y la activación de actores y movimientos sociales; la política, orientada a la revaloración de la política y el fortalecimiento de una comunidad democrática de ciudadanos, y la cultural, que enfatiza la diversidad en sus variadas dimensiones, las libertades y la creatividad”¹⁰⁶.

VII. Caso chileno: discursos presidenciales

La socialdemocracia gobernó durante veinte con la Concertación en Chile y desde la década de los 90, todos los gobiernos de este bloque político se alinearon con la retórica impulsada desde Europa en relación a una Tercera Vía. De hecho, observamos un claro discurso de varios mandatarios chilenos poniendo énfasis en términos como la “igualdad”, “protección social”, “solidaridad” y “justicia social, que de una u otra forma venían a dar un nuevo aire a la política económica hegemónica dominante.

Así, en virtud de conocer más respecto a cómo los gobiernos de la Concertación promovieron los principales ideales del mensaje de la Tercera Vía en sus distintos programas de gobierno, expondremos los discursos más representativos de los mandatarios chilenos, desde 1990 hasta el 2010, con el propósito de ver cómo la retórica de esta doctrina caló hondo en el pensar de las administraciones que sucedieron al gobierno de facto de Augusto Pinochet.

i. Patricio Aylwin Azócar (1990-1994)

El abogado chileno se caracterizó por ser uno de los fundadores del Partido Demócrata Cristiano. Asimismo, ocupó la máxima magistratura en la Cámara Alta, entre 1971 a 1972. Su gran logro político fue llegar a la presidencia de Chile, siendo el primer mandatario democráticamente elegido tras el Golpe de Estado en Chile de 1973. Así, el mandato de Aylwin dio inicio al periodo conocido como la transición a la democracia y el primero de los cuatro gobiernos consecutivos de la Concertación de Partidos por la Democracia.

Entre sus principales discursos, resaltan:

Sesión del Congreso Pleno (lunes 21 de mayo de 1990)

JUSTICIA SOCIAL:

¹⁰⁶ *Ibíd.*, p. 67 y 68.

“En los últimos años, Chile ha experimentado un crecimiento económico y modernizaciones importantes en diversos sectores de la actividad nacional. Sin embargo, esta situación positiva coexiste con la presencia de desigualdades muy profundas. Si ellas persisten sin un pronto y efectivo avance para superarlas, corremos el riesgo de consolidar dos países distintos y antagónicos: uno, el Chile de los que tienen acceso a la modernidad y a los frutos del crecimiento; y otro, el de los marginados, socialmente excluidos de la vida moderna, convertidos en carga para la sociedad.

Es evidente que, para superar esa dualidad, la llamada política del “derrame” no constituye un camino viable ni eficaz. Que el crecimiento por sí mismo mejore la situación de los más destituidos puede tardar varias décadas. Y, como nos dijo Su Santidad Juan Pablo II, “Los pobres no pueden esperar”. Chile necesita una acción positiva del Estado para progresar hacia la justicia. Un imperativo moral exige avanzar hacia un Chile donde exista cada vez mayor justicia social.

Tenemos un compromiso solemne de hacerlo. Nuestras acciones durante estos meses son testimonio de ese compromiso, y no cejaremos en esta preocupación permanente por nuestros compatriotas socialmente postergados. Avanzar hacia una mayor equidad es también una condición de la estabilidad política y económica del país. Una sociedad atravesada por desigualdades socioeconómicas inaceptables para el sentimiento moral contemporáneo es el mejor sustrato para la exacerbación del conflicto político y su desenlace: el quiebre institucional y la opresión política consiguiente. Donde la injusticia social prevalece, no hay paz laboral ni confianza; empresarios y trabajadores se convierten en enemigos, con el consiguiente resultado de inestabilidad y estancamiento económico.

No podemos avanzar en el camino del desarrollo sin avanzar a la vez en el camino de la justicia social. Para crecer, necesitamos trabajo, disciplina, perseverancia, paciencia, voluntad de emprender y unidad, lo que sólo puede conseguirse en un clima de equidad en que todos se sientan partícipes, no sólo en el esfuerzo, sino también en los frutos del crecimiento. Avanzar en el camino de la equidad significa integrar cada vez a más y más chilenos en el esfuerzo del desarrollo. La pobreza, la escasa educación, la mala salud de tantos chilenos, equivalen a un desperdicio de energías, talentos y capacidades potenciales. Avanzar hacia una mayor equidad equivale a invertir en las personas, en el capital humano de nuestra patria. La justicia social nos beneficia a todos, no sólo a nuestros compatriotas socialmente destituidos o marginados. Inspirados en estos principios, y procediendo con criterios realistas, hemos definido los objetivos concretos que nos proponemos cumplir durante los próximos doce meses

*en los diversos sectores sociales, para avanzar eficazmente hacia la equidad a que aspiramos*¹⁰⁷.

DESARROLLO Y CRECIMIENTO:

“Para perseverar en el camino del desarrollo, los chilenos debemos trabajar, debemos ser emprendedores y disciplinados. Sería lamentable que, so pretexto de que llegó la democracia, el país cayera en una actitud fácil de esperararlo todo del Estado; que sobreviniera un clima de complacencia y de relajamiento.

En el mundo de hoy, Chile necesita ser competitivo. Ello requiere de imaginación y creatividad, pero también de paciencia, austeridad y constancia. Como nación, no podemos permitirnos caer en un estado de ánimo empequeñecido y mediocre, donde predomine la lasitud de los espíritus.

La democracia, el desarrollo y la equidad son desafíos constantemente renovados y no dádivas gratuitas. Necesitamos tanto un Gobierno como un país eficientes y modernos. Lo primero es responsabilidad nuestra. Lo segundo es responsabilidad de la sociedad. Ningún sector social puede soslayar esa tarea amparándose en un Estado benevolente. Para mi Gobierno, el motor primordial del desarrollo en esta época de la evolución de nuestro país reside en la empresa privada.

El rol del Estado ha experimentado una redefinición. Ello no sólo ha sucedido en Chile; es una tendencia mundial, que se manifiesta hoy con gran vigor aun en aquellos países de economías hasta ayer centralmente planificadas. El Estado estimulará el desarrollo utilizando los recursos públicos con la máxima eficiencia posible. Pero el desarrollo provendrá fundamentalmente de la capacidad, innovación y espíritu de empresa que el sector privado despliegue en sus actividades, tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales. Consecuente con este criterio, el Estado buscará regular la actividad de los mercados mediante normas generales, de aplicación universal, y se abstendrá de intervenciones puntuales, erráticas y frecuentes, cuyo único efecto es desorganizarlos e introducir elementos de ineficiencia que, al acumularse, terminan por detener el crecimiento.

Si hay imperfecciones importantes o ineficiencia de los mercados en la asignación de recursos, intervendremos a través de medidas correctivas que, en la medida de lo posible, deberán

¹⁰⁷ Patricio Alywin. (1990). Mensaje Presidencial. 9 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/19900521.pdf> Páginas 28 y 29.

persistir sólo por el tiempo que sea estrictamente necesario. No es tarea del Estado asegurar rentabilidad a empresas determinadas o a sectores específicos.

Su rol es garantizar un marco económico y político estable, que posibilite un desenvolvimiento normal de las actividades, sin más riesgo e incertidumbre que los propios de cada sector¹⁰⁸.

Sesión del Congreso Pleno (martes 21 de mayo de 1991)

JUSTICIA SOCIAL:

“Para este gobierno la justicia social es un imperativo moral. Repugna a la conciencia la visión de una sociedad que es capaz de prosperar mientras mantiene en su seno desigualdades sociales tan profundas como las existentes en nuestro país. Ciertamente en los últimos años Chile experimentó un crecimiento económico importante, pero los frutos de ese crecimiento se concentraron en unos pocos, sin beneficiar a los trabajadores ni a la multitud de compatriotas que viven en situación de pobreza.

No hemos llegado al gobierno simplemente para administrar ese estado de cosas, sino para procurar cambiarlo. Por ello, desde el comienzo de nuestra gestión iniciamos un vigoroso esfuerzo para comenzar a revertirlo. Pese a las limitaciones y trabas con que nos encontramos, hemos obtenido logros importantes, que constituyen el inicio de un proceso que integrará crecientemente a los trabajadores y a los pobres a los frutos del desarrollo.

Durante el año transcurrido desde que asumí la Presidencia de la República, no obstante la política de ajuste que fue necesario aplicar, los salarios reales aumentaron 7,2 por ciento, lo cual ha permitido que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo de que gozaban hace 20 años.

Por otra parte, la entrada en vigencia de la reforma tributaria, hecha posible por una actitud política responsable de la mayoría de la oposición, cuya aplicación generará mayores recursos fiscales, cercanos a los 600 millones de dólares, permitió aumentar el gasto social de manera importante, particularmente con relación a los subsidios masivos, que debemos mantener durante un largo tiempo para aliviar la situación de los más pobres. Más de 90 por ciento de los recursos adicionales obtenidos financió diversos programas sociales; entre ellos, el reajuste extraordinario de las pensiones de más de 70 por ciento de los jubilados de menores ingresos, y el aumento de las asignaciones familiares y del subsidio único familiar.

¹⁰⁸ Patricio Alywin. (1990). Mensaje Presidencial. 9 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: file:///C:/Users/ABC/Downloads/19900521.pdf Páginas 49 Y 50.

Con el mismo espíritu enfrentamos el grave problema social que significaba la existencia, hacia junio de 1990, de más de 320 mil deudores habitacionales del SERVIU, de los cuales 70 por ciento eran morosos. Esta situación repercutía negativamente en la operación del sistema habitacional, en los ingresos fiscales y, lo que es más importante, en la seguridad de las familias morosas. Para atender a este grave problema, se aplicó un programa de repactación global de deudas, que culminó en enero de este año. Con este programa, 137 mil 28 deudores terminaron de pagar sus deudas, asegurando la propiedad de sus hogares, y casi 100 mil celebraron convenios equitativos que le han permitido regularizar su situación.

Con el mismo criterio, se dispuso lo que se llamó la “renegociación de la deuda vencida de los pobres”, que permitió a más de 91 mil familias solucionar sus problemas de deudas morosas de los servicios de la luz y agua potable, muchas veces cortados, y a más de 300 mil pequeños propietarios regularizar su situación de contribuyentes de bienes raíces. Y tal acción no constituye un simple “perdonazo”.

Se trata de buscar soluciones de equidad que hagan posible, a los sectores más postergados, superar situaciones de emergencia y avanzar hacia mejores condiciones de vida.

El Gobierno ha definido su política hacia la pobreza a través del concepto de integración al desarrollo, que busca enfrentarla en todas sus dimensiones, lo cual exige una coordinación de Ministerios, servicios y reparticiones. Nuestro propósito es superar el asistencialismo estatal, alentando la participación de los afectados en la búsqueda de soluciones y estimulando el desarrollo de la pequeña y microempresa como los mejores caminos para reducirla.

A la vez, estamos dirigiendo esfuerzos especiales hacia los grupos más desvalidos: las mujeres pobres jefas de hogar, los jóvenes y los ancianos. Una de nuestras preocupaciones permanentes es que el gasto social efectivamente favorezca a quienes lo necesitan, y que ese beneficio se otorgue eficaz y eficientemente.

Con tal fin, se realizó en 1990 una encuesta de caracterización socioeconómica que permitirá evaluar de manera sistemática las políticas sociales e identificar las correcciones requeridas. Igualmente, se supervisó la encuesta CAS II, que evalúa el impacto de los diferentes subsidios sociales en el nivel comunal en todo el país.

Uno de los avances más significativos en esta materia ha sido la puesta en marcha del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), que apoya el propio esfuerzo de la gente por superar la pobreza. Ponemos así en práctica uno de los lemas de mi programa: “Ayúdate, que yo te ayudaré”. Conjuntamente con INDAP, la Comisión Nacional de Riego y los campesinos

organizados, el FOSIS está financiando pequeñas obras de riego, principalmente en las zonas más afectadas por la sequía, que benefician a 10 mil familias.

El Fondo está también financiando más de doscientos proyectos, referidos a microempresas urbanas y rurales, pesca artesanal, capacitación comunitaria, cuidado de menores, nutrición y prevención de salud. Junto con ello se realiza un programa de desarrollo de la pequeña producción, destinado a aumentar los ingresos y crear condiciones estables de trabajo para una parte importante de los pequeños productores. También se está trabajando en un programa de apoyo a la alimentación popular en Santiago y en la Quinta Región.

Merece mencionarse, además, un programa conjunto con ENAMI de ayuda técnica y crediticia a los pirquineros, y otro con la Comisión Especial de Pueblos Indígenas para auxiliar a ese postergado grupo de chilenos. En el fundamental ámbito de la cesantía juvenil, a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social se ha iniciado un Programa de Capacitación y Desarrollo de la Educación Técnica, destinado prioritariamente a jóvenes desempleados y que da especial importancia a los que padecen condiciones de marginalidad social. Se espera capacitar este año a alrededor de 15 mil jóvenes, utilizando una metodología que considera la capacitación simultánea en instituciones de enseñanza técnica y en empresas. En este mismo sentido, frente a la cesantía juvenil, en diversas regiones del país se desarrolla un programa piloto de oficinas municipales de colocación y, en forma conjunta, el Ministerio de Educación y MIDEPLAN estudian modalidades que permitan reorientar la educación media, dándole una utilidad laboral. 30 Estos criterios de equidad inspiran nuestras políticas sociales en los ámbitos laboral, de la salud, de la educación y de la vivienda, cuyas orientaciones y logros se exponen en la cuenta, parte que no leeré para no alargar demasiado esta exposición”¹⁰⁹.

Sesión del Congreso Pleno (jueves 21 de mayo de 1992)

PROGRESO ECONÓMICO

“Dentro del marco de una economía de mercado abierta hacia el exterior, en el que la iniciativa privada y el dinamismo empresarial juegan un rol preponderante, y el Estado cumple principalmente funciones de regulación y fomento sobre la base de reglas claras y estables, política que concita generalizado consenso nacional, el país ha experimentado en el último año importantes avances.

¹⁰⁹ Patricio Alywin. (1991). Mensaje Presidencial. 9 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/19910521.pdf> Páginas 26, 27, 28, 29 y 30.

Las cifras hablan por sí solas. Después de la etapa de ajuste que fue necesario cumplir en 1990, nuestra economía experimentó el año último un crecimiento del 6 por ciento. En el último trimestre, la desocupación descendió al 5 por ciento, lo que permite proyectar para el presente año la tasa promedio más baja desde 1973. Las exportaciones de 1991 llegaron a la cifra de 9 mil 48 millones de dólares, la más alta de nuestra historia. Merece destacarse que esta expansión ha ido unida a una notable diversificación y al importante aumento de las empresas exportadoras.

Durante 1991, los rubros principales fueron la minería, con 4 mil 470 millones de dólares; la agroindustria y agricultura, con 1 mil 650 millones de dólares; los productos del mar, con 1 mil 90 millones de dólares. A su vez, el turismo aportó alrededor de 700 millones de dólares a la generación de divisas. Por otra parte, las exportaciones no tradicionales aumentaron en un 30 por ciento respecto del mismo período del año anterior.

La inversión, que es factor fundamental en el proceso de crecimiento, alcanzó el último año al 18,8 por ciento del producto geográfico bruto, cifra substancialmente mayor que el promedio entre los años 1984-1989, que fue del 15,6 por ciento. Dentro de ese total, la inversión extranjera, que en 1990 concretó la cifra récord de 1 mil 100 millones de dólares y en 1991 repitió ese nivel de materialización, logró un nuevo récord histórico en cuanto a la nueva inversión autorizada, del orden de los 3 mil 400 millones de dólares.

No sólo el monto ha crecido, sino que también han aumentado el número de países que invierten, el número de proyectos aprobados y la magnitud de la inversión en sectores de mayor valor agregado. Todo esto es una clara evidencia de la confianza que el mundo tiene en las posibilidades de nuestra economía.

Este proceso de crecimiento ha ido acompañado de un claro éxito en el control de la inflación, que, desde el 27,3 por ciento, el año anterior, se redujo al 18,7 por ciento, y sigue mostrando una clara tendencia decreciente.

Este contexto permite plantearse con seriedad metas más ambiciosas para los próximos años, con la mira de incorporar a Chile al selecto grupo de países que presentan inflaciones anuales de un dígito. No necesito resaltar la importancia económica y social que tiene este esfuerzo.

Una inflación baja y controlada permite la consolidación de un clima de expectativas estables para los agentes económicos, disminuyendo las incertidumbres y riesgos al decidir sus inversiones y planificar sus actividades. Por otra parte, es garantía de estabilidad para las

familias que viven de un sueldo o un salario, liberándolas del temor de incertidumbre y penuria que significa la pérdida de su poder adquisitivo.

En relación con esta meta, el gobierno está haciendo su parte. Dentro de la limitación de recursos en que actuamos, hemos realizado un importante esfuerzo de ahorro público, que en 1991 alcanzó una tasa de 6,4 por ciento del Producto Geográfico Bruto. Ello contribuyó de manera importante a que el ahorro nacional se empinara al 19 por ciento de ese Producto, el nivel más alto obtenido en muchos años.

Quiero reiterar aquí el compromiso de mi gobierno con una política de austeridad y ahorro público para 1992 y 1993, que espero sea correspondido con un comportamiento similar por parte de los particulares.

El sector exportador ha manifestado preocupación ante la baja del valor del dólar. Frente a estas legítimas inquietudes, reitero el compromiso del Gobierno con la mantención y profundización de la estrategia de crecimiento basada en el aumento sostenido de nuestra capacidad exportadora.

La política cambiaria ha sido uno de los pilares de esa estrategia en el pasado y continuará jugando un rol muy importante en el futuro. Pero la capacidad exportadora no puede sustentarse sólo en el valor del dólar. Sería irresponsable de parte del Gobierno fomentar esa capacidad basándola en una ventaja comparativa proveniente de una sobrevaloración artificial de la divisa extranjera, política que se traduciría en pan para hoy y hambre para mañana.

El desafío que enfrentamos es elevar nuestra competitividad internacional a partir de mejoras significativas en la productividad de nuestra gente, en la modernización de nuestras empresas, en nuestra capacidad para identificar y adoptar innovaciones tecnológicas, únicas ventajas en el comercio internacional que la historia de las naciones ha demostrado sólidas.

Como país, debemos esforzarnos por transitar hacia una segunda fase de nuestro desarrollo exportador. Mi gobierno está activamente empeñado en poner las condiciones para este tránsito. Los empresarios, los trabajadores, las universidades, el país todo, deben coordinar y potenciar acciones y voluntades en pos de esa auténtica modernización de nuestra economía”¹¹⁰.

¹¹⁰ Patricio Alywin. (1992). Mensaje Presidencial. 9 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/19920521.pdf37>, 38, 39 y 40.

EL CAMINO DE LA EQUIDAD SOCIAL

“Hemos sostenido permanentemente que el crecimiento económico no basta por sí solo para derrotar la pobreza. En la medida en que los frutos de ese crecimiento se distribuyen muy desigualmente y no llegan a los sectores más postergados de la sociedad -lo que ocurre sobre todo en países como el nuestro, en que el ingreso medio por habitante es todavía bastante bajo-, la pobreza y aun miseria de muchos subsiste al lado de la prosperidad y hasta opulencia de otros, lo que constituye ya un grave escándalo que clama contra la justicia y es factor permanente de inestabilidad social.

Por eso nos propusimos, al asumir el gobierno, hacer todo lo posible por pagar lo que llamamos “la deuda social” acumulada en los años anteriores. En 1990 había en Chile sobre cinco millones de pobres y, de ellos, más de dos millones en situación de indigencia o extrema pobreza.

Un imperativo moral insoslayable exige consagrar esfuerzos prioritarios por solucionar este problema, mejorando las condiciones de vida y oportunidades para nuestros compatriotas pobres.

Es tarea difícil, que requiere de todos comprensión y solidaridad. Exige tiempo, porque no se trata simplemente de aumentar el poder de compra de los postergados sin tener debidamente en cuenta las posibilidades reales de la economía.

La experiencia demuestra que las políticas populistas son pan para hoy y hambre para mañana, terminando en dramáticos procesos que aumentan la pobreza. Convencido de lo dicho y motivado por una exigencia elemental de justicia, mi gobierno ha asumido como primordial esta tarea, implementando para ello un conjunto de políticas respecto de materia laboral; de atención preferente de las necesidades de salud, educación y vivienda; de integración al desarrollo, y de solidaridad con los grupos más vulnerables de la población”¹¹¹.

MEDIO AMBIENTE:

“¿Y qué pasa con nuestra tierra? Lo que sea en el futuro dependerá de lo que hagamos hoy de ella. Cierto es que en estos años hemos tomado conciencia de su valor y de la necesidad de cuidarla. Hemos creado una Comisión Nacional del Medio Ambiente y una Comisión Especial de Descontaminación del Área Metropolitana.

¹¹¹ Op. Cit. 53 y 54.

Hemos dictado normas sobre calidad del aire en las zonas rurales y sobre protección de nuestros recursos marítimos; estamos ejecutando obras de saneamiento de nuestras aguas servidas; exigimos evaluación del impacto ambiental en proyectos mineros e industriales; acabamos de presentar un proyecto de ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. ¡Nunca se hizo tanto entre nosotros para proteger el medio ambiente! Pero aún en varias partes nuestro aire nos asfixia, nuestras aguas están infectadas, las cuencas de nuestros ríos y nuestras laderas se erosionan, nuestros bosques suelen ser arrasados.

Con el objeto de dotar de una sólida base legal a las diversas acciones y políticas constitutivas de un proceso de desarrollo sustentable, someteré próximamente a la consideración del Congreso un proyecto de Ley Marco sobre Medio Ambiente.

Esta iniciativa sentará las bases institucionales de la gestión ambiental pública, cuyo principal instrumento ha de ser la Comisión Nacional del Medio Ambiente; consagrará modernos instrumentos para esa gestión, como la Evaluación del Impacto Ambiental; contemplará normas generales sobre manejo de recursos naturales y contaminación, y establecerá la responsabilidad civil de personas naturales o jurídicas por acciones u omisiones que produzcan daño al medio ambiente, como, asimismo, la responsabilidad del Estado por los daños derivados del incumplimiento de sus obligaciones ambientales por los órganos de la Administración.

El proyecto es fruto de un prolongado estudio y de consultas a los principales actores sociales, empresariales y políticos, y no dudo de que será objeto de vuestro análisis profundo y serio para lograr que el país cuente prontamente con este instrumento legal básico para la preservación de nuestro patrimonio nacional”¹¹².

Sesión del Congreso Pleno (viernes 21 de mayo de 1993)

MODERNIZACIÓN ECONÓMICA

“Dentro de este contexto, mi gobierno se ha esforzado en impulsar el proceso de modernización de nuestra economía, a través de acciones y programas en cuyas directrices y contenidos fundamentales hay en el país un alto grado de consenso: apertura al mundo, aplicación de mecanismos de mercado para orientar las decisiones económicas, rol protagónico de las iniciativas empresariales en el ámbito productivo y necesidad de contar con un sector laboral capacitado e integrado a las tareas del desarrollo.

¹¹² Patricio Alywin. (1992). Mensaje Presidencial. 9 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: file:///C:/Users/ABC/Downloads/19920521.pdfPágina 69 y 70.

Mediante un permanente diálogo con trabajadores y empresarios, el gobierno ha tenido en cuenta las visiones de los diversos actores sociales al ponderar las alternativas de política económica. En este marco, las políticas de desarrollo en que nos hemos empeñado han tenido por objeto crear las condiciones para modernización de la estructura productiva del país y darle apoyo; mejorar decididamente la calidad de la educación y las oportunidades de capacitación profesional; profundizar la inserción de la economía chilena en los mercados internacionales, y estimular la iniciativa privada y la acción de los mercados, respaldándolas con la actividad reguladora del Estado. Una economía abierta y con transparencia en el funcionamiento de sus mercados es el marco adecuado para el despliegue de la creatividad de las empresas privadas, principal motor del crecimiento económico. Sin embargo, le corresponde al Estado asumir un rol activo en el fomento de la modernización productiva”¹¹³.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

“Mi gobierno entiende que el desarrollo económico ha de ser sustentable. Ello exige la adecuada protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales renovables. No se trata sólo de crecer. Así como pensamos que el crecimiento debe realizarse sobre bases de justicia social, de manera que sus beneficios lleguen a la sociedad entera y especialmente a los sectores más postergados, del mismo modo sostenemos que el verdadero desarrollo supone la conservación de la naturaleza y de la calidad de la vida humana, por lo que el crecimiento debe realizarse también en forma que no dañe al medio ambiente.

El desarrollo de la sociedad industrial se ha traducido en graves deterioros de la naturaleza y del medio ambiente humano. La ecología ha puesto de relieve la magnitud y trascendencia de este problema, que con justicia preocupa cada vez más a la Humanidad, y especialmente a los jóvenes. En junio último se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, a la que tuve el honor de concurrir en representación de Chile, de la que surgió -entre otros acuerdos- la llamada Agenda 21, como programa de acción para que los gobiernos enfrenten los desafíos ambientales y de desarrollo en las próximas décadas.

Consecuente con ese programa y con los compromisos internacionales que Chile ha suscrito relacionados con la protección del medio ambiente, mi Gobierno se ha esforzado en llevar a efecto una política seria, realista y responsable en la materia. Esa política descansa en tres principios fundamentales: estabilidad, buscando no desalentar el desarrollo, mediante señales

¹¹³ Patricio Alywin. (1993). Mensaje Presidencial. 9 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: file:///C:/Users/ABC/Downloads/19940521.pdf31_y_32

claras, coherentes y sostenidas, y estableciendo criterios y orientaciones que conciten el más amplio consenso; gradualidad, incorporando la dimensión ambiental en plazos razonables, justos y posibles, y realismo, al considerar tanto la magnitud de los problemas ambientales, como la forma y la oportunidad en que ellos se abordan y los recursos e instrumentos con que se cuenta para enfrentarlos.

Sobre la base de estos criterios creamos la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que, empezando por recopilar todas las disposiciones sobre la materia dispersas en nuestras leyes y reglamentos y por hacer un inventario de los problemas ecológicos que afectan al país, elaboró un proyecto de ley de bases sobre el medio ambiente, el que fue presentado el año último al Honorable Senado, donde, luego de acucioso estudio, que me es grato destacar, fue aprobado en general.

Confío en que en el curso del presente año se convierta en ley de la República. Inspirado en el mismo espíritu, presentamos también el proyecto sobre Fomento Forestal y Protección del Bosque Nativo, cuyo estudio se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados. Aunque no ignoro las controversias que su texto suscita, confío en que, sobre bases que compatibilicen la conservación de nuestra riqueza forestal natural con su adecuada explotación económica -lo que considero perfectamente posible-, pueda también esta iniciativa ser despachada durante mi mandato.

Además de estos proyectos, el gobierno se ha empeñado en llevar adelante programas de saneamiento ambiental en diversos aspectos. Merece especialmente destacarse el importante trabajo realizado por la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana, gracias a cuyo esfuerzo inteligente y tesonero, con participación de los Ministerios respectivos, se han llevado a cabo, entre otras, las siguientes acciones: se oficializó la nueva norma de emisión para fuentes fijas y se creó el equipo técnico y humano a cargo de su fiscalización; entró en vigor la norma de emisión para vehículos livianos y se inició la producción y distribución nacional de gasolina sin plomo; se pavimentaron 187 kilómetros de calles y se mejoraron 41 kilómetros de red vial primaria; se construyeron cinco parques urbanos de áreas verdes en la Región Metropolitana; inició su operación el sistema de licitación de recorridos; se amplió la red de monitoreo del aire con dos estaciones móviles; se constituyó el programa de control de emisiones vehiculares en la vía pública; avanzó en un 80% la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Maipú y del colector interceptor del Zanjón de la Aguada; se entregaron equipos medidores de ruido a municipalidades y se capacitó a personal en tareas de control. Por otra parte, en este período se dictó un decreto que estableció normas

para las empresas que emitan gases sulfurosos, arsénico y partículas en todo el territorio nacional, y se creó la Comisión Interministerial de calidad del aire.

Conforme a sus 51 disposiciones, diversas empresas, entre otras Codelco y Enami, en el sector público, y Disputada de Las Condes, Molybmet, Refimet, Compañía Minera del Pacífico y El Indio, en el privado, han iniciado acciones de control de impacto ambiental y puesto en práctica proyectos para disminuirlo. Especial atención ha merecido al Gobierno la necesidad de abordar programas de descontaminación de aguas en nuestras ciudades y balnearios. En Valparaíso se ejecutan importantes obras que solucionarán definitivamente ese grave problema; en Valdivia, Llanquihue, Villarrica y otras ciudades se estudian proyectos para el mismo fin, que espero que puedan concretarse a la mayor brevedad”¹¹⁴.

LA TAREA DE LA JUSTICIA SOCIAL Y LA INTEGRACION NACIONAL

“El crecimiento económico y progreso que acabamos de reseñar, tan evidente en el país, no sería eficaz para derrotar a la pobreza si no fuera acompañado de políticas eficaces para hacer justicia social. En los años que precedieron al actual gobierno se vivió un severo desequilibrio entre los chilenos.

Unos lograron los beneficios del progreso hacia la modernidad, mientras otros permanecieron en situaciones de pobreza indigna. Pensamos que en la justicia e integración social reside la fuerza que el país requiere para progresar en forma estable. La democracia y la libertad adquieren pleno significado sólo cuando las personas cuentan con los elementos necesarios para participar creativamente en la sociedad. Tener una buena educación y seguridad de acceso a la salud, contar con un empleo estable y productivo y con habitación digna, son condiciones indispensables para la participación creativa de los ciudadanos y para el ejercicio efectivo de sus libertades.

La superación de la pobreza es, por consiguiente, objetivo primordial de mi Gobierno, hacia cuya consecución avanzamos decididamente. Las cifras son elocuentes al respecto. En el último año se crearon alrededor de 200.000 nuevos empleos y en los tres años de mi gobierno, más de 350.000. Esto, que significa seguridad del pan de cada día para otras tantas familias, ha permitido bajar la desocupación a menos del 5% de la fuerza de trabajo, la tasa más baja de los últimos veinte años.

¹¹⁴ Patricio Aylwin. (1990). Mensaje Presidencial. 9 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/19940521.pdf49>, 50 y 51.

En 1992, las remuneraciones registraron un aumento real de 4,5%. Si consideramos los tres años de gobierno, crecieron casi un 12%. Y el salario mínimo se incrementó, en el mismo período, en términos reales, un 27,8%. En lo que va corrido de este gobierno, la asignación familiar de los trabajadores que perciben rentas inferiores a \$ 100.000 subió aproximadamente un 60% real. A diciembre último, la totalidad de los pensionados, 1.253.267 personas, habían recibido el 10,6% de reajuste que se les dejó de otorgar en el Gobierno anterior.

Si a lo dicho agregamos el progreso que significan, para la calidad de vida de la gente, los mejores índices de salud, educación y vivienda y los programas de capacitación, podemos afirmar que en estos años se ha reducido la pobreza en 700.000 personas, y que a fines del presente año esa cifra se elevará a un millón. Si bien tengo clara conciencia de que recién estamos empezando y es mucho más lo que queda por hacer, puedo afirmar, con profunda convicción, que hemos iniciado una batalla frontal contra la pobreza en nuestra patria, y que estamos ganando esa batalla.

Los resultados descritos han sido posibles porque hemos implantado, con firmeza y perseverancia, políticas sociales inspiradas en los valores de la justicia y la solidaridad. Estas políticas, además de buscar la equidad en las relaciones laborales y de mejorar las posibilidades de acceso al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda para nuestros compatriotas, procuran, asimismo, atender las necesidades básicas de los sectores más modestos, que viven en indigencia o extrema pobreza.

A estos últimos grupos van dirigidos los programas asistenciales, que corresponden a subsidios en dinero, y subvenciones -subsidio único familiar, pensiones asistenciales de vejez e invalidez y subsidios de consumo de agua potable-, que beneficiaron el último año a 1.641.021 personas. Naturalmente, esto tiene un costo. El gasto en estos programas asistenciales se ha incrementado, desde 1990 hasta ahora, en un 28% real.

El año último hicimos un esfuerzo por concentrar mejor estos programas en quienes más los necesitan, para lo cual se eliminó la asignación familiar a los trabajadores de ingresos superiores a \$ 250.000, lo que permitió otorgar 100.000 subsidios únicos adicionales a familias en extrema pobreza. Desde 1989 a 1992, el gasto social del gobierno central -en salud, vivienda, previsión, educación, capacitación para el trabajo, Servicio Nacional de Menores, Fondo de Solidaridad Social, Instituto de Desarrollo Agropecuario y subsidios familiares- aumentó en 333 mil millones de pesos de 1992, es decir, en 920 millones de

dólares. Esta cifra representa bastante más de lo que se obtuvo anualmente gracias a la reforma tributaria, por lo que puedo afirmar, categóricamente, que se ha cumplido con creces la voluntad de destinar el aporte de esa reforma a financiar un mayor gasto social.

De estos antecedentes resulta indiscutible la necesidad de mantener, en lo fundamental, la actual estructura tributaria más allá del 31 de diciembre próximo, lo que junto con dar una señal clara de estabilidad a los inversionistas, sería expresión de que el país mantiene su compromiso colectivo con la equidad. Sería muy mal signo que por la vía de reducir impuestos que hoy día están absorbidos por la economía, la población entendiera que ese compromiso se debilita y que el país afloja su batalla contra la pobreza.

Junto con prorrogar en el tiempo la vigencia de la actual legislación tributaria, el gobierno estima oportuno proponer su perfeccionamiento. Quisiéramos introducir estímulos tributarios al ahorro de las personas. El ahorro es la base del crecimiento y el desarrollo. El país ha progresado notablemente en estos años, alcanzando niveles récords de ahorro; pero éste aún es insuficiente para un crecimiento sostenido como el que necesitamos. Junto con incentivar el ahorro, queremos aliviar la carga tributaria a las personas, particularmente a los grupos medios y a los profesionales. No nos parece, en cambio, que tenga ninguna justificación revisar el impuesto a las empresas. La tributación que actualmente pagan es baja si se la compara con la de países industrializados.

Tampoco las condiciones de las finanzas públicas recomiendan bajar el IVA en las actuales circunstancias. La prudencia y responsabilidad con que se han manejado nuestras finanzas públicas no sólo ha visto sus frutos en la reducción de la inflación, sino también en la razonable tranquilidad con que podemos enfrentar la actual recesión internacional y la caída del precio del cobre y de otros productos de exportación. Estamos convencidos de que es indispensable mantener esta política en el futuro”¹¹⁵.

ii. Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000)

El ingeniero es el cuarto hijo de los siete que tuvo Eduardo Frei Montalva, quien gobernó Chile entre 1964 y 1970. Es Demócrata Cristiano y gobernó en Chile en el periodo comprendido entre 1994 y 2000. Más adelante ocuparía el cargo como presidente del Senado entre 2006 y 2008.

Sesión del Congreso Pleno (sábado 21 de mayo de 1994)

¹¹⁵ Patricio Alywin. (1993). Mensaje Presidencial. 9 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/19940521.pdf> 51, 52, 53 y 54.

DESARROLLO ECONÓMICO

“Nuestro país ha conquistado en los últimos años una posición de privilegio en el marco de las economías en desarrollo. Ello constituye una base sólida para dar paso al Chile de oportunidades que todos aspiramos construir. Nos proponemos continuar y profundizar esta senda de desarrollo con equidad, en un marco estable. Los éxitos alcanzados en el pasado reciente nos obligan a redoblar nuestros esfuerzos en el futuro inmediato.

Durante este año pasamos por un proceso de ajuste económico que nos llevará a un crecimiento del orden de 4 por ciento y a una inflación estimada de alrededor de 11 por ciento. Sin embargo, los sacrificios de hoy constituyen una inversión para mañana. Seremos inflexibles en nuestra lucha contra la inflación, puesto que ella es el peor impuesto que se cierne sobre nuestros compatriotas que viven de un sueldo o de un salario. Esta tarea es de alta prioridad para mi gobierno. En estos dos meses ya hemos tomado medidas para atenuar el crecimiento del gasto.

No apelaremos al camino fácil de bajar la inflación por la vía de reducir el tipo de cambio, porque ello amenaza nuestro esfuerzo exportador. No habrá crecimiento económico sin una cuota de esfuerzo y sacrificio. Un mayor crecimiento sólo será posible en tanto seamos capaces de lograr sustanciales incrementos en el ahorro y la inversión del país”¹¹⁶.

MEDIO AMBIENTE

“La protección y mejoramiento del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales constituyen áreas prioritarias para la gestión de mi gobierno. Asumiremos las tareas ambientales, no sólo en el cumplimiento del mandato que la Constitución y la Ley de Bases del Medio Ambiente establecen, sino que, también, en el transcurso del próximo tiempo aplicaremos las siguientes medidas: Dotaremos al Estado de instrumentos jurídicos, económicos y administrativos eficaces para incorporar la dimensión ambiental en las políticas sectoriales.

Con este objetivo, el gobierno fortalecerá la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, y las respectivas Comisiones Regionales. Desarrollaremos y pondremos en marcha, en el curso del presente año, el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental dispuesto en la Ley de Bases del Medio Ambiente, junto con el reglamento que posibilitará la dictación de normas de calidad ambiental.

¹¹⁶ Eduardo Frei Ruiz Tagle. (1994). Mensaje presidencial. 10 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile
Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/19940521.pdf> Página 7 y 8.

Fortaleceremos la educación ambiental a través de mecanismos formales y no formales, para crear hábitos y conductas de acuerdo a una cultura ambiental en toda la población. En los próximos tres años, más de 1.200 monitores en todo el país van a ser capacitados con ese propósito. Promoveremos desde el Gobierno mecanismos para el desarrollo tecnológico ambientalmente sustentable.

Así, por ejemplo, estamos implementando un programa de subsidios de renovación tecnológica, a fin de lograr una reducción de entre el 60 y 70 por ciento del consumo de insumos industriales que afectan el ozono para el año 1996. Desarrollaremos mecanismos de consulta y participación de sectores productivos y ciudadanos en la elaboración de las políticas e instrumentos ambientales.

Hoy, el gobierno está consultando a dichos sectores en cumplimiento de esta tarea. Ella se verá reforzada por la creación, en los próximos meses, de un centro de comunicaciones, al amparo de la Conama y la adecuación e implementación de la Agenda 21, de Río, en nuestro país, por la vía de vincular a los agentes sociales con los temas ambientales contenidos en esa Agenda. Llevaremos a cabo un activo trabajo con el sector público que tiene competencias ambientales, cuyo objeto sea solucionar los problemas de diseño administrativo, de capacitación y de disposición de recursos materiales.

Para ello se cuenta con el inestimable apoyo de un Programa del Banco Mundial, ya en operación. Implementaremos un programa de control de la contaminación del agua y del aire. Para este efecto, se trabajará en la dictación de las normas y los estándares correspondientes.

Por otra parte, el Gobierno alentará al sector financiero a que se haga eco de las preocupaciones ambientales cuando los proyectos lo ameriten. Para ello, facilitará la reconversión tecnológica y el cumplimiento de las normativas por parte de las empresas, por la vía de líneas de crédito que permitan dichas inversiones. Apoyaremos la gestión ambiental del municipio.

Junto a esto, he dado instrucciones para el desarrollo de los instrumentos que sean necesarios para lograr una eficiente gestión y manejo de residuos urbanos, industriales y peligrosos. Usaremos de manera eficaz la energía. En este marco de planificación energética y en el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, en el curso de un año se preparará un inventario de gases relacionados con el efecto invernadero. Por último, mejoraremos y

fortaleceremos el sistema nacional de áreas silvestres protegidas, y el ordenamiento de zonas costeras y de definición de parques marinos”¹¹⁷.

Sesión del Congreso Pleno (domingo 21 de mayo de 1995)

POLÍTICAS SOCIALES DIRIGIDAS HACIA LOS GRUPOS Y ZONAS MÁS VULNERABLES

“Mi gobierno está empeñado en redoblar los esfuerzos para que los más pobres se beneficien en forma privilegiada del crecimiento económico. No queremos crecer simplemente para mejorar nuestras estadísticas y ser mejor considerados internacionalmente. Queremos crecer para generar más y mejores empleos. Queremos elevar la calidad de los empleos existentes, mejorar las condiciones de los trabajadores y que los más pobres puedan tener acceso a mejor educación y capacitación. El esfuerzo social del Gobierno se expresa en que el 70 por ciento del presupuesto de 1995, equivalente al 13 por ciento del Producto Interno Bruto, está dedicado al gasto social. Este es un esfuerzo de magnitud. Y cuando nos preocupamos de poner al día nuestros servicios públicos, nuestros sistemas de educación, salud, justicia y otros, es precisamente para que estos recursos permitan realmente que la gente más modesta reciba una atención digna y de calidad”¹¹⁸.

Sesión del Congreso Pleno (jueves 21 de mayo de 1998)

ANÁLISIS

“Por primera vez en muchas décadas, nuestro país tiene una estrategia para alcanzar el desarrollo: crecimiento sostenido para abrir paso a la equidad; inversiones en educación e infraestructura para preparar al país frente a los retos del mundo globalizado; nuevos mercados para los productos y los trabajadores chilenos, y una activa política social que busca crear oportunidades para la gente y reducir las desigualdades. Durante estos cuatro años hemos impulsado con perseverancia esa estrategia. La gente se ha esforzado y por eso el país progresa. Nuestra democracia evoluciona y por eso son más sólidas nuestras libertades. Chile se ha abierto al mundo y por eso nuestro propio horizonte se ha ensanchado. Hemos fortalecido nuestra iniciativa y mostrado voluntad de crecer (...) Crecimiento económico con mayor equidad social: como consecuencia de ella, el producto por habitante creció casi un 27 por ciento en los cuatro primeros años de mi Gobierno; mucho más que en todo el período del Régimen Militar. Por su parte, el consumo por persona aumentó un 32 por ciento, contra cero

¹¹⁷ Eduardo Frei Ruiz Tagle. (1994). Mensaje presidencial. 10 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/19940521.pdf> Páginas 31, 32, 33 y 34.

¹¹⁸ Eduardo Frei Ruiz Tagle. (1994). Mensaje presidencial. 10 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/19950521.pdf> Páginas 19 y 20.

por ciento en los 17 años que duró ese gobierno. Esto significa que las chilenas y chilenos tienen hoy mayores posibilidades de progresar sobre la base de su propio esfuerzo. Hay más trabajo, los salarios aumentan sostenidamente —17 por ciento en términos reales durante los últimos cuatro años— y la inflación ha dejado de erosionar el ingreso de los hogares. Yo sé que queda mucho aún por avanzar. Pero hemos encontrado el camino para hacerlo”¹¹⁹.

UNA INTENSA ACTIVIDAD PRIVADA

“Dentro de la estrategia de desarrollo que hemos venido siguiendo, el sector privado encuentra un clima propicio para desenvolver sus esenciales actividades. Su energía se despliega hoy con fuerza en la producción, en el comercio, en los servicios y en las finanzas, incluyendo sectores como el energético, las telecomunicaciones, el transporte, la minería, la construcción de obras de infraestructura vial, y próximamente también, de manera amplia y directa, los puertos, las empresas sanitarias y el transporte ferroviario. Y quiero anunciar lo siguiente. Primero, en el caso de los puertos, habiéndose ya completado la constitución de empresas autónomas en los puertos de Valparaíso, San Antonio, Talcahuano/San Vicente, Arica e Iquique, he dispuesto que a la brevedad se inicien las licitaciones de frentes de atraque en los tres principales puertos del país y en Arica, que deberán estar adjudicadas antes de fin de año. Además, antes de concluir 1998 habremos definido, por medio de una licitación internacional, el inversionista que tendrá a su cargo el desarrollo del megapuerto de Mejillones. En segundo lugar, en el caso de las empresas sanitarias, contamos con la ley, contamos con el reglamento, aprobado prontamente por la Contraloría. Por lo tanto, se procederá a abrir ESVAL al capital privado, para continuar con las empresas en la Sexta y Décima Regiones. En 1999 se agregarán EMOS y las siguientes empresas sanitarias del país. Con ello podremos cumplir las metas que nos fijamos cuando iniciamos el gobierno: 100 por ciento de cobertura de agua potable y alcantarillado en las ciudades, y 100 por ciento de cobertura de agua potable en los sectores rurales concentrados. De igual manera, comenzaremos a movilizar la inversión necesaria -superior a los 2 mil millones de dólares- para dar curso al tratamiento de aguas servidas, uno de los aspectos en que más está atrasado este país. Por último, con respecto a ferrocarriles, la licitación en la red sur -infraestructura y transporte de pasajeros- ya se ha iniciado con la entrega de las bases preliminares a todos los inscritos, y el proceso debe culminar en el último trimestre del presente año. Además, para

¹¹⁹ Eduardo Frei Ruiz Tagle. (1994). Mensaje presidencial. 10 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile
Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/19980521.pdf> Páginas 1, 2 y 3.

entonces se habrá iniciado la recuperación del tren suburbano de Santiago a Rancagua y del metro regional de Valparaíso, cuyos servicios mejorarán sustancialmente, favoreciendo a más de 9 millones de pasajeros que los usan en la actualidad”¹²⁰.

MEDIO AMBIENTE

“Para ser sustentable en el largo plazo, el desarrollo debe cuidar los recursos naturales y el medio ambiente. Mi gobierno se halla firmemente comprometido con esta visión: necesitamos el crecimiento como condición para el bienestar de la población; pero no habrá bienestar si el aire que respiramos es insalubre, si las aguas se encuentran contaminadas y las ciudades donde vivimos se transforman en basurales. Sé que muchos son escépticos y, por eso, cada vez que hacemos algo, o bien estiman que se paralizará el crecimiento, o bien nos acusan de sacrificar los equilibrios ecológicos. La verdad es que no podemos, no debemos ni nos vamos a dejar atrapar por ese dilema. De hacerlo, limitaríamos gravemente el crecimiento y el bienestar, renunciando con ello al desarrollo del país. Se trata, sin duda, de un desafío a mediano y largo plazos de grandes proporciones. Estamos adoptando todas las medidas a nuestro alcance. En pocos años se ha creado conciencia sobre la necesidad de proteger nuestros recursos naturales y el medio ambiente. Hemos puesto en pie una institucionalidad y dictado normas que nos permiten hacerlo. En enero pasado dimos a conocer nuestra política ambiental. La comunidad participa en la elaboración de los planes de descontaminación y en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Éste ha recibido para su estudio más de 500 proyectos de inversión, por un monto total de alrededor de 15 mil millones de dólares. Sólo con la activa colaboración ciudadana vamos a poder seguir avanzando. Quizás como en ninguna otra materia, es en ésta donde se medirá si podemos llegar a ser realmente una sociedad responsable y moderna. ¡Que nadie diga mañana que las condiciones medioambientales no mejoran si antes no ha puesto su propio esfuerzo al servicio de la comunidad!”.

iii. Ricardo Lagos Escobar (2000-2006)

Es un abogado, economista, académico, investigador y político chileno. Fue presidente de la República de Chile entre el 11 de marzo de 2000 y el 11 de marzo de 2006.

¹²⁰ Eduardo Frei Ruiz Tagle. (1994). Mensaje presidencial. 10 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile
Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/19980521.pdf> Páginas 17 y 18.

Discurso 08 de septiembre de 2008

(En él Lagos delineó sus cuatro grandes desafíos)

“Me pareció que después de la elección municipal debíamos tener un punto de partida para analizar las tareas que tenemos hacia delante. La elección municipal, obviamente, define quiénes van a ser los que nos gobiernen en la comuna, pero también la elección municipal tiene implicancias políticas. Esta elección municipal ratificó que la coalición de partidos que apoya al gobierno, interpreta la voluntad mayoritaria de los chilenos. Más allá de dificultades pasajeras, el pueblo de Chile entendió que la Concertación es la única fuerza capaz de dar sustentación, orientación y conducción a Chile. Y por eso esta tarde nos hemos reunido para renovar nuestro compromiso con Chile y para convertir el 52% de los votos en tareas concretas. Este respaldo es muy importante, y nuestra obligación ahora es hacer fecunda la mayoría que recibimos. Para ello tenemos que hacer múltiples tareas, que hemos definido en distintos momentos. Sin embargo, creo que ahora debemos poner énfasis en cuáles van a ser las tareas básicas para el próximo año. Pasada la elección, qué es lo que espera el país de nosotros”.

EMPLEO

“El crecimiento es el punto de partida de lo anterior, y nosotros hemos hecho las tareas bien; hemos sido capaces de que Chile crezca más de un 6%. Este año será un 5,8% y el año próximo será un 6,2%. Lo hacemos con responsabilidad, con seriedad fiscal, con cuentas en orden. Pero tenemos que seguir mejorando, por eso el proyecto para decir "No a la evasión tributaria" es tan importante. Y por eso yo le pido al parlamento, y sé que ustedes me van a apoyar, para que ahora, en este año en lo posible, despachemos el proyecto que hace que algunos malos chilenos no paguen sus impuestos. Hemos actuado con responsabilidad, y esto nos da autoridad moral para exigir de quienes tienen los recursos, que pueden adoptar las decisiones de inversión, que se sumen a este gran esfuerzo nacional. En este marco podemos avanzar gobierno, parlamento y los municipios que ustedes ahora encabezan. Es necesario aunar los esfuerzos y es necesario trabajar de una manera conjunta. Por eso, no me cabe duda que ustedes, desde el municipio, van a buscar también las formas y modalidades para poder hacer que todos los chilenos nos ayuden en estas tareas. Nuestra primera labor es empleo. Aquí vamos a concentrar todos los esfuerzos de Chile. Quiero llevar tranquilidad en dos sentidos: primero, para las personas, la seguridad que haremos todo lo que está a nuestro alcance para que cada chileno y chilena cuente con un empleo digno. Y para las empresas, la seguridad de contar con condiciones óptimas para ser más eficientes y productivas. Queremos

una recuperación vigorosa y sostenida. Enviamos un presupuesto que habla de crear 46 mil puestos de trabajo, a partir del crecimiento que tenemos proyectado para el año próximo. Eso creemos que será suficiente. Sin embargo, si las condiciones económicas no son suficientes para lograr las metas de tener una reducción drástica del desempleo, el gobierno está preparado para complementar e intensificar este esfuerzo. Y para ello crearemos un fondo de contingencia para el empleo que, de ser necesario, podrá gastar hasta 100 mil millones de pesos, y que deberá operar cuando el gobierno estime que la economía no está creando por sí sola suficientes puestos de trabajo. Es un tremendo esfuerzo, casi 200 millones de dólares, que van a estar destinados como un fondo de contingencia. Este fondo lo administrará el Ministerio del Trabajo y estará destinado, en particular, a los trabajadores jefes de hogar que hayan quedado cesantes. Se les dará un apoyo integral para que puedan obtener una ocupación estable en forma rápida y efectiva. Los recursos del fondo se van a orientar a la inserción laboral en distintas modalidades; en programas públicos, en empresas, en entrenamiento, en capacitación, en distintos incentivos a la contratación de personas jefes de hogar. Y queremos invitar también a participar en este programa a todos los actores que estén dispuestos a colaborar en esta lucha nacional contra la cesantía, incluyendo empresas, fundaciones, asociaciones empresariales, organismos no gubernamentales, municipios e instituciones educativas. Pero, junto con crear empleo, queremos acelerar el tranco en dos temas. Primero, un seguro de desempleo que tiene que traer tranquilidad a los trabajadores de Chile. Ayer estuve en una empresa y los trabajadores me preguntaron acerca del seguro de desempleo, porque tenían temor, como cualquiera, a perder el trabajo. El seguro de desempleo debemos resolverlo y aprobarlo en el parlamento este año. Y lo segundo, es que enviaremos a trámite legislativo la Reforma Laboral para poder avanzar, a lo menos, en dos temas fundamentales. Primero, un sistema laboral más equitativo y más justo, de acuerdo a las convenciones que han planteado en la OIT -la convención 87 y 98- que establecen mecanismos de prevención y sanción para las prácticas anti-sindicales. Queremos que exista la posibilidad de que el trabajador forme un sindicato, que no tema por ejercer su derecho sindical y no tema ser despedido porque hace uso de un derecho. Queremos, al mismo tiempo, modernizar nuestras relaciones laborales, conscientes de que es necesario avanzar con urgencia en buena parte de los temas pendientes y buscar modalidades de contratación más flexibles, particularmente entre jóvenes y mujeres. Pero esto sólo se puede hacer si tenemos como contrapartida sindicatos que defiendan los derechos sindicales”.

SALUD

“En términos de salud, quisiéremos decir que lo esencial es generar las condiciones para una reforma profunda, amplia y masiva de nuestro actual sistema de salud. Para ello queremos invitar desde ya a todos los chilenos, a los que participan en esta área y a los ciudadanos que son los consumidores, a un gran debate sobre el sistema de salud que queremos para Chile. Las claves de esta reforma son muy claras. Primero, cómo somos capaces de generar ahora entre nosotros un sistema de prevención adecuado. Durante tanto mucho tiempo hemos puesto más énfasis en cómo financiamos un sistema de salud acorde con lo que son las nuevas enfermedades y las nuevas situaciones que tenemos en este campo. La necesidad de la prevención es fundamental, más vale prevenir que curar. Y en ese sentido tenemos que avanzar. Lo segundo es que esta reforma de salud tiene que tener dos pilares fundamentales. En primer lugar, asegurarle a todos los chilenos que las enfermedades catastróficas no serán más una fuente de tristeza y de situación difícil en nuestros hogares. Segundo, tenemos que proponer un sistema solidario de financiamiento de la salud. No es posible pretender que en este ámbito Chile no sea solidario. Queremos un sistema de salud basado en la solidaridad entre todos. Estos elementos básicos van a tomar tiempo. La reforma de la salud la enviaremos al parlamento en el primer semestre del próximo año, luego de un intenso debate. Mientras tanto, con la misma fuerza que dijimos que íbamos a abordar el tema de las colas en los consultorios y lo hicimos, queremos ahora establecer a lo menos cinco temas fundamentales: Primero, en el 2001 ningún niño menor de 1 año, ni adulto mayor de 65, demorará más de 48 horas en ser atendido en un consultorio. Vale decir, se atenderá antes a las personas de mayor riesgo. Segundo, disminuirémos drásticamente los tiempos de espera para especialistas. Por eso, estamos dando nuevos recursos para tener más especialistas en los consultorios. Tercero, otorgaremos mayores fondos para una atención expedita en las urgencias, tanto en los consultorios como en los hospitales. Cuarto, estamos estableciendo un crecimiento muy grande en los programas de alimentación gratuita para los adultos mayores, que es una forma directa de apoyarlos donde más lo requieren. Y, finalmente, estableceremos un programa para mejorar el tratamiento y prevención de las enfermedades respiratorias. En estas cinco áreas concretas concentraremos los esfuerzos durante el 2001. Debemos tener para esa fecha terminado el proyecto e iniciado el debate de las nuevas bases del sistema de salud de Chile”.

EDUCACIÓN

“El tercer elemento tiene que ver con educación. Sabemos lo que hemos venido haciendo en educación, acá simplemente quiero señalar tres elementos básicos. Primero, en el nivel de educación pre-básica estamos aumentando en 40 mil los cupos de manera que los niños de

Chile puedan tener educación preescolar como corresponde. Nos hemos comprometido a tener 120 mil cupos durante estos 6 años; en marzo próximo, ya habremos cumplido con 40 mil de ellos. Segundo, nos parece indispensable mantener más niños en enseñanza media. No podemos darnos el lujo de tener jóvenes que no terminen su educación escolar. Para ello, iniciaremos un programa de retención que va a beneficiar a más de 240 mil alumnos. Vamos a crear becas y otro tipo de ayuda. Queremos que los padres nos ayuden, porque es fundamental que cada joven complete, al menos, 12 años de escolaridad. Y tercero, muy importante, vamos a hacer un cambio en el acceso a la educación superior en lo que dice relación con el apoyo que da el Estado. Queremos garantizar que los jóvenes tendrán acceso a estudios superiores, sin importar si tienen recursos para ello. Cada joven, luego de rendir la Prueba de Aptitud Académica, entrará automáticamente a un sistema en red que registrará la condición socio-económica de sus padres. Antes de ingresar a la universidad, de acuerdo a estos antecedentes, se le indicará qué aporte, beca o crédito fiscal le dará directamente el Estado. De esta manera, crearemos un sistema homogéneo y no ocurrirán las tremendas diferencias de hoy. Con el sistema actual, una misma familia, que gana 400 mil pesos al mes, obtiene beca en una universidad y no califica para tenerla en otra. Vamos a tener un sistema transparente, donde los jóvenes ingresarán todos su datos en Internet - en la red enlace del Ministerio -. A partir de eso, sabremos exactamente qué apoyo dar. Segundo, muy importante, el año próximo por primera vez estamos trabajando para dar apoyo tanto a los institutos profesionales como a los centros de formación técnica debidamente calificados. No sólo existirá ayuda para llegar a las universidades, sino también a los centros de formación técnica. De esta manera, espero que de aquí a tres años como máximo, todo joven que esté en condiciones de acceder por sus méritos a la educación superior va a tener los recursos indispensables para ello”.

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

“En cuarto lugar, quiero que el año próximo nos concentremos en tener un Estado al servicio de la gente. Nuestra tarea es que nuestro Estado sea más eficiente y más democrático. Se llega al Estado a servir y no a servirse. Esto significa que tenemos que hacer de él un instrumento más ágil, más transparente, más útil. Por esta razón, presentaremos al Congreso Nacional un proyecto de ley que consagre el estatuto de las empresas públicas, para garantizar la eficacia, efectividad, competitividad, transparencia en su gestión, protección de su patrimonio, compromiso con el medio ambiente y un servicio de excelencia. Así protegeremos el patrimonio de todos los chilenos. Junto con ello, hemos enviado al Parlamento un proyecto de nueva institucionalidad en el ámbito cultural, vamos a trabajar con nuevas propuestas en los

sectores de la regulación, fomento productivo, infraestructura, acción social, ciencia y tecnología. Sin embargo, junto con el estatuto de las empresas públicas, debemos ser capaces de avanzar en el estatuto de la dirección pública, que establecerá las condiciones especiales para el desempeño de los cargos de confianza, basado en compromisos explícitos de desempeño, duración limitada en los nombramientos, evaluación rigurosa de logros de los objetivos acordados. Y queremos aumentar la descentralización y poder llegar a lo menos a un 46% de inversión que se genere a partir de los gobiernos regionales y no del gobierno central. Debemos garantizar que el Estado está al servicio de la gente. La única garantía verdadera para ello es que sus instituciones reflejen la opinión de la gente, es decir, este gobierno quiere que exista más democracia. Para eso hay que seguir impulsando las reformas políticas por las cuales hemos luchado como Concertación durante largo tiempo. La voz mayoritaria de la ciudadanía tiene que reflejarse en autoridades con claros respaldos políticos. Tenemos para ello que cambiar nuestro sistema electoral, sin sacar cuentas mezquinas al momento de legislar. Una democracia sana y estable es una democracia donde las mayorías son mayorías y las minorías son minorías, y ambas están bien representadas. Por eso, quisiera llamar a todos los sectores del país a concretar un acuerdo de fondo, que nos permita tener una Constitución que nos interprete a todos, terminando de esta manera esta ya larga transición. Mi gobierno quiera avanzar en la supresión de senadores designados y vitalicios, por cierto, pero lo queremos hacer para que el Parlamento sea un reflejo de la voluntad mayoritaria y minoritaria de la ciudadanía. Y, por lo tanto, eso implica corregir y cambiar el sistema binominal. Ambas cosas están vinculadas entre sí. La supresión de senadores designados y vitalicios está vinculada a la modificación del sistema binominal. Seamos claros: queremos un Parlamento que refleje a Chile y eso lo hacemos, no sólo eliminando senadores designados y vitalicios, sino también con un sistema electoral justo, adecuado, democrático. No es justo un sistema donde 35% elige un diputado y el 65% elige el otro diputado; 65 no es igual a 35. Mi gobierno también quiere dar pasos en otros ámbitos que todos conocemos. Mecanismos de designación de tribunal constitucional, transformar el Consejo de Seguridad Nacional en un órgano asesor del Presidente y, por supuesto, restituir las facultades presidenciales en el nombramiento de los altos mandos de la defensa nacional. Creo que estamos maduros para esto; la reciente elección así lo demuestra. Una ciudadanía madura reclama una democracia de verdad y a eso debemos dedicarnos”.

CONCERTACIÓN DE PARTIDOS POR LA DEMOCRACIA

“Queridos amigos y amigas, quisiera ahora decir una palabra final respecto de la Concertación de Partidos por la Democracia. Dirigirme, a través de ustedes, a todos aquellos que son la esencia de la coalición. Creo que hemos aprendido dos lecciones. La primera, con tremendas responsabilidades para nosotros: somos la mayoría clara y nítida de Chile. El país nos apoya cuando hacemos las cosas bien, reconoce en nosotros la única alternativa real de conducción para Chile, como lo hemos venido haciendo en los últimos 11 años. La segunda es que los chilenos esperan de nosotros unidad y coherencia para avanzar. Unidad y coherencia para avanzar. No se trata de eludir el debate o el planteamiento de posiciones que son propias de toda democracia. La coalición está formada por partidos distintos, que tienen visiones diferentes y está bien que se expresen, pero una cosa es que se expresen visiones diferentes, colores distintos, como los colores del arco iris, y otra cosa es que, so pretexto de estas visiones diferentes, no haya unidad y coherencia en las tareas que tenemos por delante. Por cierto, tenemos un programa mucho más amplio que estos cuatro temas fundamentales que he subrayado hoy. Aquí no hay golpes de timón, porque tenemos un timón claro que va a llegar a buen puerto. Simplemente, tenemos que ser ahora coherentes y unitarios sobre estos temas para cumplir con nuestro destino. Nos necesitamos los unos a los otros. La gente quiere, por sobre todo, a la Concertación. Excúsenme si digo más allá y por sobre, a lo mejor, de los propios partidos que la integran. La Concertación es una herramienta fundamental, que nos permitió transitar de dictadura a democracia, y ahora nos permite mirar el horizonte en el largo plazo. Pero en la construcción de Chile todos están llamados, no sólo la Concertación. Todos los ciudadanos de este país tienen un lugar en cada una de las tareas que acabo de señalar. Todos los ciudadanos de este país tienen el derecho y la obligación de participar en la construcción de la grandeza de Chile. A eso, como Presidente, desde aquí los quiero llamar. Lo que planteé en la noche del domingo, lo quiero reiterar hoy. Trabajaré, por cierto, y trabajaremos como gobierno con todos y cada uno de los alcaldes y los gobiernos comunales que fueron elegidos el domingo pasado. Es lo que la ciudadanía espera de todos nosotros: gobierno, parlamento, municipio. Si trabajamos todos juntos vamos a poder mirar mejor el futuro y poder pensar que para el 2010, para el Bicentenario de la República, tendremos un país mejor. Sin embargo, mientras llegamos al 2010, hagamos bien las tareas del presente y por eso los he invitado, amigos y amigas, a compartir estas cuatro líneas gruesas que son las que nos va a permitir visualizar una agenda de trabajo para el 2001 por el bien de Chile y de los chilenos”¹²¹.

¹²¹ Ricardo Lagos Escobar. (2000). Discurso presidencial 8 de septiembre, de EMOL. Sitio web: <http://www.emol.com/noticias/todas/2000/11/01/37124/discurso-del-presidente-ricardo-lagos.html>

Mensaje Presidencial 21 de mayo 2001.

POLÍTICAS PARA LA EQUIDAD

“El sentido profundo de mi gobierno es hacer que el crecimiento económico llegue a todos; es hacer que la economía de mercado funcione, creando al mismo tiempo una red social que proteja a las personas del infortunio y entregue oportunidades a los que han sido discriminados”¹²².

MÁS OPORTUNIDADES PARA LOS PRIVADOS

“Estamos en condiciones de ofrecer al sector privado un conjunto de proyectos, que representan inversiones por más de 3 mil 500 millones de dólares, en los cuales podemos trabajar en conjunto. Se trata, por un lado, de inversiones en caminos, obras de riego, puentes y aeropuertos, a través del sistema de concesiones por más de mil millones de dólares sólo en el presente año.

A esto hay que sumar las concesiones ya anunciadas para todas las empresas sanitarias que restaban en manos del Estado, lo cual debiera atraer importantes inversiones privadas. Como ya se indicó, el Metro de Santiago iniciará la construcción de dos nuevas líneas, con una inversión superior a los mil millones de dólares. Próximamente, estaremos en condiciones de anunciar las líneas de Metro hacia el Norte y el Poniente de Santiago, donde se invertirán fundamentalmente recursos privados dada la rentabilidad de esos proyectos.

Estamos extendiendo el sistema de concesiones a la construcción y operación de recintos carcelarios, cinco de los cuales serán licitados antes de fin de año. Además, estamos estudiando su posible aplicación a la construcción de hospitales. Lo ocurrido anoche en la cárcel de Iquique nos ha conmovido a todos. Los planes existentes, a través de la construcción de las diez cárceles, implican doblar la superficie carcelaria en Chile. Esa es la única forma que tenemos de abordar a plenitud este tema. Es una tragedia que nos ensombrece a todos. Esas 26 personas fallecidas, son una invocación a la necesidad de tener que actuar con mucha mayor celeridad. Porque hoy tenemos los proyectos y las licitaciones en marcha, estamos en condiciones de responder. Lo que ocurre en Iquique, con 1700 reclusos en una cárcel con capacidad para 1000, no es -por desgracia- exclusivo de Iquique.

¹²² Ricardo Lagos Escobar. (2001). Mensaje Presidencial. 8 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile
Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/20010521.pdf> Página 5.

Esa es la urgencia de las tareas que tenemos por delante. Preasignaremos recursos por 80 millones de dólares para la construcción de escuelas que habían quedado en la lista de espera para la extensión de la jornada escolar, y permitiremos el adelantamiento de dichas inversiones con financiamiento privado.

En materia de vivienda también existe un espacio para la asociación público-privado. El Ministro de la Vivienda y Bienes Nacionales ha anunciado recientemente un programa extraordinario de construcción de 8 mil 500 soluciones habitacionales mediante subsidios PET y la construcción de viviendas básicas bajo el sistema llave en mano.

Contamos, en la actualidad, con una cartera de proyectos inmobiliarios disponibles para una inversión privada de más de mil 300 millones de dólares, a los cuales el Estado aportará los terrenos urbanizados. Con estos proyectos queremos contribuir al gran esfuerzo de inversión que Chile requiere. La cooperación público-privada es una condición para el desarrollo de nuestra economía y para el bienestar de todos los chilenos”¹²³.

Mensaje al país, 21 de Mayo de 2002

CHILE EN LA INSERCIÓN A LA GLOBALIZACIÓN

“Vivimos, en la era de la globalización, mi deber como presidente es trabajar para que Chile entre al mundo global, aprovechando al máximo sus oportunidades que se nos ofrecen, disminuir los riesgos y cuidar que los beneficios de esa globalización, esos beneficios se distribuyan equitativamente entre todas las familias. Chile es un país pequeño y lejano, siempre lo ha sido. Pero ni la lejanía nos debe empujar al aislamiento, ni lo pequeño de nuestro mercado hacia el proteccionismo. Mi gobierno no está disponible para políticas aislacionistas, ni proteccionistas, no importa las presiones que debemos enfrentar. Nuestro potencial de crecimiento económico está allá afuera, en los mercados internacionales. Hoy más del 64.5 % del producto de Chile está compuesto por lo que exportamos y por lo que importamos en bienes y servicios, es un país tremendamente abierto, por eso, nuestro destino está en la capacidad de competir allí. Para Chile, en consecuencia, la globalización no es una opción, es una necesidad y es una oportunidad. Querámoslo o no, ya vivimos en un mundo fuertemente entrelazado. Cuando los vientos internacionales son favorables, nuestro país

¹²³ Ricardo Lagos Escobar. (2000). Mensaje Presidencial. 8 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile
Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/20010521.pdf> Página 15 y 16.

recibe un impulso para avanzar más rápido; cuando la situación en el mundo es negativa, surgen fuertes obstáculos para nuestro desarrollo y bienestar”¹²⁴.

Discurso del Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar, 21 mayo 2003.

OBJETIVOS DE SU PROGRAMA

“Entre todos, señores y señoras diputadas, señores y señoras senadores, entre todos hemos construido una base firme para plantearnos tareas más exigentes. Sí, seis son ahora las tareas más exigentes: Uno, crecer a ritmos superiores. Dos, terminar con la extrema pobreza. Tres, asegurar el acceso a salud de los chilenos. Cuatro, proteger a nuestros hombres y mujeres de más edad, a los adultos mayores que crecientemente son parte más significativa de Chile, por el envejecimiento de nuestra población. Cinco, poner nuestra educación al nivel del siglo XXI. Seis, elevar nuestra integración tecnológica y científica al mundo del mañana. Para que nuestro país avance a tranco firme hacia el desarrollo, necesitamos alentar más inversiones nacionales y extranjeras; reforzar más las diversas formas de asociación entre Estado y el sector privado; estimular más el espíritu emprendedor de los grandes, medianos y pequeños empresarios; generar más espacios para la creatividad de nuestros trabajadores. Hoy se perciben signos de reactivación de nuestra economía, pero no hay que desmayar. Está bien que así sea, el esfuerzo da sus frutos, pero tenemos que seguir trabajando con más fuerza. Así, esos signos reactivadores tendrán que convertirse en crecimiento sostenido. Y el crecimiento tendrá que convertirse en bienestar para todas las familias chilena”¹²⁵.

Mensaje presidencial, 2004

UN PAÍS MÁS HUMANO

“Junto con crecer y modernizarnos, queremos un Chile que también sea más igualitario, más solidario, con mayor igualdad de oportunidades, con redes más eficaces de protección social. Sólo así tendrá sentido nuestro esfuerzo por el crecimiento y la modernidad. Sólo así nos acercamos cada día más al desarrollo.

No basta sólo con crecer si no hay políticas públicas claras orientadas a que ese crecimiento llegue a todos y todas. Los que tienen menos que reciban más, los que están más alejados que se sientan más cerca. Las regiones más alejadas que estén más cerca.

¹²⁴ Ricardo Lagos. (2002). Mensaje presidencial. 5 de mayo, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: [file:///C:/Users/ABC/Downloads/20020521%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ABC/Downloads/20020521%20(1).pdf) Página 3.

¹²⁵ Ricardo Lagos. (2003). Mensaje presidencial. 5 de mayo, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/20030521.pdf> Página 19.

Queremos, por sobre todas las cosas, hacer un Chile que sea cada día más humano, donde todos sean iguales en dignidad. Queremos crecer, pero que esos frutos lleguen a todas las familias de Chile. ¡Cuánto hemos avanzado en estos años!

Si ponemos nuestra mirada en el 20 por ciento más pobre de Chile, y vemos el cambio entre 1992 y el 2002, entre ambos censos, podemos apreciar cuánto ganamos en humanidad, en justicia social, y en mayor dignidad para cada uno de ellos. Si comparamos con 1992, el año 2002 se duplicó la cantidad de jóvenes en enseñanza media que pertenecen al 20 por ciento de las familias con ingresos más modestos, se triplicó la cantidad de jóvenes universitarios que pertenecen a ese estrato que están ahora en la universidad. Hoy día ese sector vive mejor, y sus hijos vivirán mejor. Tienen mayor y mejor acceso a los frutos del desarrollo. Esto es lo que hemos avanzado”¹²⁶.

Discurso Presidencial 21 de Mayo 2005.

MAYOR EQUIDAD

“Lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo: el crecimiento sólo tiene sentido si se transforma en mayor bienestar para todos los chilenos. Nuestra vocación política es nuestra vocación por la igualdad. Nos acompaña desde siempre. Por ello nuestros desvelos por la Reforma Educacional, la Reforma en la Salud, la Reforma Judicial, la Justicia Laboral, por mejorar empleos, por abrirnos al mundo. Hay quienes han repetido durante años que el crecimiento de la economía produce automáticamente la justicia social. ¡Cuánto se equivocan en estar esperando todos el así denominado chorreo!

El mercado distingue, discrimina según cuánto dinero tiene cada uno para consumir. Producir equidad y justicia social requiere de voluntad política, exige diseñar e implementar políticas públicas realistas, que hagan que los frutos del crecimiento se distribuyan entre todas las familias chilenas.

Esta es la esencia de nuestra acción de gobierno. La pobreza, mis amigos, es una espina que atraviesa el alma de toda una sociedad. Disminuir drásticamente la pobreza es un elemento central para combatir la desigualdad. En quince años de democracia hemos bajado la pobreza de un 38,5 a un 18,8 por ciento. Y la indigencia, de 12,9 a 4,7 por ciento. Creamos nuevos instrumentos para hacer frente a la pobreza extrema.

¹²⁶ Ricardo Lagos. (2004). Mensaje presidencial. 5 de mayo, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/20040521.pdf> Página 8.

Por eso el Programa Chile Solidario, que anunciamos en este Congreso Nacional hace tres años, sigue trabajando para hacer realidad nuestro sueño de terminar para siempre con la miseria en Chile. De las 225 mil familias que vivían en dicha condición, hoy 180 mil están incorporadas en el Programa Chile Solidario, y en el curso de este año habremos llegado a todos estos hogares para invitarlos a trabajar juntos con el propósito que toda familia chilena pueda desenvolverse sobre una base mínima de dignidad.

Pero reconozcámoslo: Chile sufre de una crónica desigualdad en la distribución de los ingresos provenientes del trabajo. La diferencia de ingresos entre el 20 por ciento más rico y el 20 por ciento más pobre es del orden de catorce veces. Esta distribución ha variado muy poco en los últimos 14 años y muy poco en los últimos 30 años. Responde a causas muy profundas que el país debe ir removiendo con voluntad, persistencia y entereza. Los cambios son lentos. Para mejorar esta situación no existen los atajos ni los caminos mágicos.

Por ello, la acción del Estado en capacitación, en educación, en salud, en previsión, en Justicia Laboral es tan importante. Gracias al esfuerzo de los gobiernos democráticos que me precedieron, del Presidente Aylwin y Frei en todas estas materias, gracias a la forma en que estos programas se han focalizado en los que más lo necesitan, esta desigualdad de catorce veces entre los ingresos más altos y los ingresos más bajos, se reduce a poco más de siete veces cuando tomamos en consideración todos estos otros elementos del gasto en educación, en salud, en subsidios, etcétera.

Entre 1990 y el 2004, el salario mínimo creció en términos reales en 70 por ciento. En 1990 la remuneración promedio de un profesor de escuela, por 44 horas, era de 272 mil pesos mensuales; hoy es de 699 mil pesos, creció un 157 por ciento. Estos son pasos importantes para disminuir la desigualdad. Es cierto, hemos trabajado por una mayor justicia en las relaciones laborales y hoy tenemos una Reforma Laboral, no como la hubiéramos querido, pero fue lo más que logramos obtener del Parlamento chileno.

Y tenemos también y nos propusimos crear un Seguro de Desempleo y ahí está. Hoy, más de tres millones de personas tienen Seguro de Desempleo. Y por ello quisiera aquí solicitar a este Congreso Nacional, que se apruebe en este año, antes de septiembre, el proyecto de ley que establece el procedimiento del juicio oral en los juicios laborales, y que lo pone en sintonía con lo que hemos hecho en la Reforma Procesal Penal y con los Tribunales de Familia. Es distinto un trabajador o un empresario yendo directamente donde un juez, hablándole al juez,

planteándole cuál es su problema, y que la resolución llegue pronto. Hoy día los juicios del trabajo sabemos cuánto demoran. Justicia que tarda, en el fondo es justicia denegada.

El año pasado aumentamos las pensiones mínimas y asistenciales para aquellos compatriotas mayores de 70 años. Este año me propongo enviar al Parlamento un proyecto de ley para resolver la situación de jubilación de aquellos funcionarios públicos que, en 1980, se vieron afectados por una legislación injusta. Muchos de estos trabajadores públicos fueron conminados a cambiarse a un nuevo sistema previsional, el de los fondos de pensiones.

Recuerdo la imagen de una enfermera, que comenté en Linares, que me dijo gano, año 1999, 90 mil pesos. Con el viejo sistema me iría con 80, con el que tengo ahora, me jubilo con 35. Ese es el problema que tenemos que abordar. Por ello, quiero hacer un anuncio importante. En base a un acuerdo con los propios trabajadores, se otorgará un incentivo al retiro por un monto de 50 mil pesos mensuales que se entregará de por vida para aquellos funcionarios públicos de rentas medianas o bajas y que estén obteniendo una jubilación muy inferior a los sueldos que actualmente reciben. ¡Esa es mi decisión!

Nos parece que es un deber moral ineludible de toda sociedad pensar y trabajar en función de quienes enfrentan las adversidades de la vejez sin los recursos necesarios. Debemos proponernos como país, como Chile que se quiere a sí mismo, que hacia el Bicentenario todos nuestros compatriotas de la tercera edad puedan tener una pensión digna. Chile seguirá creciendo. Parte de ese crecimiento tiene que estar destinado a mejorar el anuncio que hoy hago a ustedes’’¹²⁷.

DISCURSO TERCERA VÍA:

“En el marco de la economía global en transformación se ha venido registrando un importante debate sobre la dirección de los cambios y sobre cómo enfrentar los desafíos del nuevo milenio. A quienes somos socialistas demócratas nos interesa, en las palabras de Felipe González, compatibilizar la profundización de una economía global. Nos interesan valores cuya vigencia es aje al paso del tiempo, como la solidaridad, la equidad, la libertad. Pero, sin duda, también nos interesa la estabilidad, el crecimiento económico, la eficiencia y los equilibrios macroeconómicos.

De manera principal, preocupa la tensión que se observa en diversos lugares del mundo entre, por un lado, los avances de la economía de mercado, y por otro, la persistencia de un

¹²⁷ Ricardo Lagos. (2004). Mensaje presidencial. 5 de mayo, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/20050521.pdf> Página 8, 9 y 10.

estancamiento social. Hay quienes han propuesto una Tercera Vía –término de cuestionable utilidad teórica como camino para mantener la estabilidad macroeconómica y promover el crecimiento sustentable basado en los mercados libres, pero impulsando, al mismo, cambios sociales significativas, donde un Estado eficiente deberá continuar jugando un papel clave. Hemos leído con interés los planteamientos de varios líderes europeos sobre esta temática.

Un ensayo reciente de Tony Blair y Gerhard Schroder es iluminador al respecto, cuando allí plantean que la “función de los mercados debe ser complementada y mejorada por la acción política, pero no obstaculizada por ella”. Coincidimos con Blair y Schoeder cuando sostienen “queremos una economía de mercado” y un Estado activo en áreas claves como el empleo, la educación y la salud, y no un Estado que deviene “mero receptor pasivo”. En América Latina hemos venido desarrollando una reflexión sobre el socialismo democrático desde los años 80 a partir de una severa crítica a los “socialismos reales” pasado, después, por una renovación del pensamiento socialdemócrata a la luz de los cambios de la economía global, que ha derivado en una concepción balanceado de la relación entre Estado y mercado como enfoque decisivo para el desarrollo.

Por tanto, no es ni debiera ser tal debate sobre el nuevo pensamiento socialdemócrata un diálogo del Atlántico Norte, ya que estamos frente a una temática de alcance y relevancia global para todos quienes deseamos conjugar los ideales libertarios de la socialdemocracia con la eficacia económica buscada por todo gobernante para su gente.

Más aún, este debate es hoy posible a nivel mundial debido al fin de la Guerra Fría, puesto que en ese largo periodo de conflicto Este-Oeste la discusión sobre desarrollo se vio polarizada entre la ortodoxia capitalista más tarde neoliberal- y el estatismo planificador de la izquierda tradicional, lo cual dejaba escaso espacio para la opción socialista democrática.

El proteccionismo económico prevaleciente en el ámbito mundial en aquellos tiempos constituía otro importante obstáculo a la alternativa socialista democrática propuesta. Pero existen matices de diferencia entre el debate europeo y el latinoamericano.

Mientras en Europa los socialdemócratas buscan estimular un crecimiento que no deje de lado el papel del Estado en el desarrollo, poniendo énfasis en el fomento del empleo productivo, el avance tecnológico para una mayor competitividad, así como la necesidad de seguir garantizando los derechos ciudadanos al bienestar social, reestructurando el antiguo Estado de Bienestar, en América Latina se observa un debate similar pero con acento en la búsqueda de mayores niveles de equidad e integración social ante la persistente cristalización de

desigualdades sociales que originan legítimas movilizaciones y demandas populares en claro reclamo de todos aquellos que sufren la pobreza”¹²⁸.

iv. Michelle Bachelet Jeria (2006-2010)

Estudió medicina, sin embargo, se dedicó desde siempre a la política. Bachelet ostentó la primera magistratura del país entre el 11 de marzo de 2006 y el mismo día de 2010.

Mensaje presidencia, 2007.

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA ÉPOCA

“Nuestra economía está creciendo. Todos lo saben, el primer trimestre lo hicimos a un promedio de 5,9 por ciento y las proyecciones para el resto del año se sitúan entre cinco y medio y seis por ciento. Sube la inversión y la capacidad de crecimiento futuro. Suben los salarios reales. Y, lo más importante, estamos creando más y mejores empleos. Tenemos las cifras más bajas de cesantía de los últimos nueve años.

Nada de esto es casualidad. Por el contrario. Este es el fruto de la seriedad, de buenas políticas, de la mano firme en el timón. Estudios internacionales independientes y objetivos nos lo dicen día a día: Chile, uno de los países que más avanza en desarrollo humano; Chile, líder en superación de la pobreza; Chile, ejemplo en manejo macroeconómico; Chile, a la vanguardia de América Latina en índice social; Chile, país competitivo; Chile, país seguro; Chile, país conectado digitalmente. No lo estamos diciendo nosotros, lo dicen otros acerca de nosotros. Por algo Chile fue recientemente invitado a integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que reúne a los países más avanzados del mundo. Somos el primer país sudamericano en integrarse a este selecto grupo, junto a países de Europa, América del Norte, naciones del Asia Pacífico, como Japón, Corea y Australia. Logros como éste nos permiten evaluar en su justa medida dónde estamos. Sólo así, teniendo en cuenta exactamente dónde estamos, es que podemos avanzar hacia dónde queremos ir. No dejemos que el velo del pesimismo presente un país irreal”¹²⁹.

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

“Lo dije la noche en que gané las elecciones: consolidar las bases de un sistema de protección social, será la marca histórica de mi gobierno. El sistema de protección social tiene varios

¹²⁸ Alonso, Alejandro. *óp. cit.*, p.83, 84 y 85.

¹²⁹ Michelle Bachelet. (2007). Mensaje presidencial. 5 de mayo, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/20070521.pdf> Página 4.

componentes, como educación, previsión, salud, vivienda. Pero lo central del sistema, lo central de nuestra mirada, lo propio, es la concepción de derechos sociales para los ciudadanos. Quiero recalcar este punto. Al establecer derechos sociales para las personas, y sobre todo, no sólo establecerlos, sino lo más importante, garantizarlos efectivamente, lo que estamos haciendo es una definición del tipo de país en que queremos vivir. Decimos como sociedad que hay ciertos bienes públicos que queremos garantizar a cada ciudadano, para que tenga una vida más tranquila y con menos inseguridades. Y esto le permitirá desarrollarse plenamente y en el fondo, ampliar sus libertades”¹³⁰.

Mensaje 21 de mayo, 2008.

UN PAIS MÁS PRÓSPERO Y MÁS JUSTO

“Un logro central en estos dos años ha sido instalar el sistema de protección social como verdadero objetivo nacional. Nuestro propósito ha sido sentar las bases de un Estado social y democrático de derecho, que abandona el asistencialismo de las políticas sociales y que asume el enfoque de derechos de las personas.

Quiero decirlo sin ambages y con mucha satisfacción: Estamos cumpliendo a buen paso este compromiso. Chile está entrando en una nueva etapa en materia de derechos de las personas. Una nueva manera de entender la acción del Estado, gracias a las reformas que hemos ido implementando en los últimos años.

Y yo quiero en esto ser muy clara. Esto va más allá que una u otra medida. Ésta es una apuesta ética para mirar la política y el Estado. De escoger el tipo de sociedad en que queremos vivir. Donde entre todos decidimos, democráticamente, qué bienes públicos vamos a garantizar a cada persona y los asumimos como mínimos civilizatorios de nuestra sociedad. Elegimos si protegernos o descuidarnos. Si construir comunidad o vivir como una mera suma de individuos.

Por eso digo: El principal logro en esta materia es que todo Chile hable hoy el lenguaje de la protección social como un elemento propio de la identidad nacional. La expresión más concreta de la protección social en mi gobierno, la que declaramos como una de las reformas capitales de esta gestión es, sin duda, la Reforma Previsional. Y la Reforma Previsional constituye un logro histórico, orientado a valorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

¹³⁰ *Ibíd.*, p. 12.

Escúchenme bien la magnitud de este esfuerzo: Con la Reforma Previsional acabaremos con la indigencia y la pobreza en la tercera edad. Y este nuevo sistema de pensiones busca proteger y cuidar a todos los chilenos y chilenas. Por cierto, por tratarse de una reforma social fundamental es que nos hemos propuesto avanzar gradualmente, ayudando primero a las personas que más lo necesitan. En concreto, a partir de julio próximo comenzaremos a entregar las primeras pensiones básicas solidarias de vejez y de invalidez, así como el aporte previsional solidario. Y a partir de julio de 2009 entregaremos el bono por hijo a todas aquellas madres que cumplan con los requisitos contemplados en la ley.

Hemos cumplido paso a paso, plazo a plazo, el itinerario trazado cuando fui candidata a la Presidencia. Y gracias a esta reforma, por ejemplo, un matrimonio de adultos mayores que hoy sólo vive de una pensión asistencial de 48 mil pesos mensuales, recibirá, a partir de julio de 2008, una pensión de 60 mil pesos para él y otra para ella, o sea, 120 mil pesos mensuales como ingreso del hogar. Y a partir de julio de 2009, este ingreso aumentará automáticamente a 150 mil pesos mensuales. Por eso, yo quiero hacer aquí un reconocimiento.

Hace un año en este salón pedí el voto de los parlamentarios y parlamentarias para esta gran reforma. Y hoy quiero reconocer vuestro trabajo en nombre de todos los chilenos y chilenas que ahora van a contar con un sistema más justo y más seguro. Por eso digo: Gracias Congreso Nacional. Ustedes han cumplido con el gobierno y con Chile y hemos podido, de esta manera, dar un paso importantísimo en la dignidad de los adultos mayores de nuestro país. Pero también la Reforma Previsional es una muestra de lo mucho que podemos lograr cuando prima la unidad del país y el interés general. Pero el sistema de protección social no se agota con esta reforma. La protección que el Estado debe a sus ciudadanos comienza desde la cuna, e incluso desde la gestación.

Por ello creamos el sistema Chile Crece Contigo, el que este año llegará a todo Chile. A través de él, asumimos un enfoque intersectorial de protección a la infancia totalmente inédito en el país. Para fortalecer este enfoque, en el segundo semestre de este año enviaremos al Congreso un proyecto de ley para institucionalizarlo, para que asumamos que la infancia es una política permanente, es una política de Estado. Acompañamos el embarazo desde el primer control en el consultorio. Acompañamos a las madres y los padres en la difícil tarea de aprender a cuidar un hijo. Luego asistimos y promovemos la estimulación temprana de los bebés, de manera de potenciar todas sus habilidades emocionales y cognitivas desde los primeros meses de vida.

Permítanme una reflexión: A veces siento que esta tarea, que a mí como médico pediatra tanto me entusiasma, no recibe toda la atención política ni mediática que debiera. Lo he visto tantas veces, pero yo quiero insistir: Conozco tan bien la diferencia que puede significar un adecuado cuidado, una estimulación oportuna.

Es aquí, en estos primeros meses de vida, en donde nos jugamos gran parte de la superación de las inequidades de nuestra sociedad. Es por ello que hemos destinado los mayores esfuerzos y recursos a la habilitación de salas cuna y jardines infantiles. Y las cifras hablan por sí solas: Al iniciar mi gobierno el país contaba con 760 salas cuna públicas, tres mil 300 habrá este año. Más de cuatro mil 200 al finalizar mi mandato. Este año habilitaremos 900 nuevas salas cuna y 500 salas para niveles medios, es decir, niños entre dos y cuatro años de edad. A ello hay que sumar, por cierto, el financiamiento fiscal permanente para kinder y pre kinder. En suma, se trata del más grande esfuerzo que se haya hecho jamás por nivelar a nuestros niños desde la partida.

En el Mensaje del año pasado reafirmamos nuestra prioridad en la educación, prioridad que se ha expresado con hechos muy concretos. Hicimos el mayor esfuerzo financiero en la historia de Chile, al destinar en el presupuesto más de siete mil 600 millones de dólares a la educación. ¿Qué hemos hecho con estos recursos? Lo primero fue realizar el mayor aumento que se hubiera hecho en materia de subvención escolar. Además, aprobamos la ley de subvención preferencial y este año comenzaremos a aplicarla. Es difícil describir el impacto que va a tener esta ley. Con ella buscamos beneficiar especialmente a los estudiantes más vulnerables, que en su mayoría asisten al sistema público de educación.

Esta es una política concreta que apunta directamente al corazón de la desigualdad. Vamos a garantizar que los dineros que se destinan a educación se inviertan en educación. Y a eso apunta la Superintendencia de Educación y también, con ese fin, hemos constituido un equipo especial en el Ministerio de Educación para modernizar y digitalizar el sistema de pago de subvenciones.

Como lo hemos dicho anteriormente: ¡Con el dinero de los chilenos no se juega! Por otro lado, hoy estamos entregando dos millones 500 mil raciones alimenticias diarias, con lo cual ocho de cada diez estudiantes de establecimientos municipales reciben hoy alimentación de calidad en sus colegios. Además, a partir del año 2007, 28 mil estudiantes de escuelas y liceos rurales de todo Chile pudieron trasladarse sin problemas a sus establecimientos gracias al aporte público al transporte rural. Más adelante me referiré al tema del transporte en general.

Y este año, por primera vez, la totalidad de los estudiantes de liceos técnico-profesional del país –estamos hablando de más de 72 mil alumnos–, tendrá una beca para realizar su práctica profesional. Iniciamos esto el año pasado, donde becamos a 41 mil. Invertimos fuertemente en infraestructura y equipamiento. Cuadruplicamos el número de establecimientos donde realizamos obras como casinos, camarines, cocinas y muchas otras; hemos puesto especial atención en el equipamiento de establecimientos públicos de educación media técnico profesional. Y respecto de la PSU, quiero decir que a partir de ahora, será gratuita para todos los estudiantes de colegios públicos y particulares subvencionados. Y también de aquellos otros colegios en que los alumnos lo necesiten. Todo esto que reseño son avances concretos, que nos permiten enfrentar en mucho mejores condiciones los cambios fundamentales que hemos iniciado en el sistema educativo”¹³¹.

VIII. Análisis Actual

La investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP) de Chile, Sylvia Eyzaguirre, en un artículo de opinión denominado: *¿Dónde quedó la Tercera Vía?*, realiza un análisis actualizado respecto a la política chilena, cuestionándose dónde quedaron las nociones planteadas por los gobiernos concertacionista de la época de los 90, quienes tenían una clara alineación con los principios filosóficos que proponía esta corriente de pensamiento.

En su análisis expuesto en el portal del Centro de Estudios Públicos, publicado en abril de 2017, la investigadora plantea que esta posición política de una Tercera Vía acepta el libre mercado y el respeto por las libertades individuales, pero sin renunciar a los ideales de igualdad y emancipación, que se materializaron en un Estado de bienestar, que busca entregar protección social a todos los ciudadanos y, en particular, a los más necesitados.

De hecho, en su observación coyuntural, es enfática en señalar que en Chile la centroizquierda parece haber abandonado los valores de la Tercera Vía, puesto que la Nueva Mayoría –una coalición política chilena que agrupa a un conjunto de partidos de centroizquierda e izquierda, como el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, Partido Radical Social Demócrata, el Partido Por la Democracia, Partido Comunista, Izquierda Ciudadana y MAS, creada en 2013, en apoyo de la candidatura presidencial de Michelle Bachelet- “renegó” de la Concertación y se “erigió” como una alternativa de izquierda “sin bordes claros”, donde la socialdemocracia corre el riesgo de ser abandonada.

¹³¹ Michelle Bachelet. (2008). Mensaje presidencial. 5 de mayo, de Congreso Nacional de Chile Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/20080521.pdf>. Página 18, 19, 20 y 21.

Eso se puede observar también en los distintos cambios de gabinete que impulsó la mandataria chilena, donde por primera vez, en democracia, se removieron a dos titulares de Hacienda. El primero, al economista Alberto Arenas, por dar un giro bien hacia la izquierda a la economía chilena, impulsando diversas políticas económicas, como una reforma laboral y tributaria, que poco y nada gustaron a los empresarios locales, quienes pedían un cambio de rumbo sobre las políticas que se estaban gestando. Otro economista que pasó por esta cartera, pero con políticas mucho más del centro, fue Rodrigo Valdés, que renunció casi al término del mandato de Bachelet por las diferencias sustanciales que tenía con La Moneda respecto a materias claves, como el crecimiento y la inversión.

Ahora bien, respecto a los candidatos que aspiraban llegar a La Moneda en 2018; entre ellos, Alejandro Guillier, periodista y sociólogo, independiente; y Carolina Goic, de profesión trabajo social y parte de la Democracia Cristiana, menciona que ninguno defendió abiertamente la socialdemocracia como una alternativa para el futuro de Chile ni ha propuesto un rumbo distinto para la actual coalición.

Por su parte, declara que Alejandro Guillier oscila un día estrechando lazos con el Partido Comunista, y al otro día a la derecha de Lagos, criticando al actual gobierno. Carolina Goic, por su parte, no mostró una postura clara, por ende, observa que ella deseaba continuar con el rumbo de la Nueva Mayoría.

En relación a cómo observa a la actual coalición gobernante, Eyzaguirre destaca que ella “abandonó” el centro político, por lo cual, ninguno de sus partidos ni sus precandidatos parece preocupado por recuperarlo. En ese sentido, se replantea: “¿Qué pasó con la generación de los 90? ¿Sucumbieron ante el encanto de los jóvenes revolucionarios? ¿Qué pasó con esa izquierda moderna que creía en el mercado y en la justicia social?”¹³².

CAPÍTULO V: LOS ACTORES QUE AVIVARON EL MODELO

I. Así nace el proyecto concertacionista

La Concertación de Partidos por la Democracia comenzó su proceso de articulación política a partir de la dictadura; época en que el país sufrió de fuertes represiones militares y

¹³² Eyzaguirre, Sylvia. (2017). ¿Dónde quedó la Tercera Vía?. 1 de octubre 2017, de Centro de Estudios Públicos Sitio web: <https://www.cepchile.cl/donde-queda-la-tercera-via/cep/2017-04-04/153531.html>

también padeció de graves carencias económicas, al estar inmerso en una crisis financiera internacional, que dejó graves consecuencias en la sociedad de ese entonces.

Así, a partir del año 1983, el gobierno de facto del general Augusto Pinochet comenzó a enfrentar duras críticas, por lo que se comenzaron a gestar una serie de movilizaciones sociales. Una de ellas fueron las Jornadas de Protestas Nacionales, que ocurrieron el 11 de mayo de 1983 en las avenidas más céntricas del país, y serían replicadas hasta 1986. Esta fue convocada inicialmente por la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y apoyada por diversos grupos de la oposición política.

Bajo ese contexto, surgieron dos conglomerados políticos de oposición; el primero de ellos denominado Alianza Democrática (AD), que operó desde 1983 hasta 1987, y que articuló al sector más moderado de la izquierda; entre ellos, los partidos Demócrata Cristiano, Social Democracia, Radical, Unión Socialista Popular y Derecha Republicana; y el segundo fue el Movimiento Democrático Popular, que prevaleció desde 1983 hasta 1987, que funcionó como instancia de coordinación de la izquierda más radical, y estuvo compuesto por el Partido Comunista, PS Almeyda y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), más fracciones de la Izquierda Cristiana y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).

De este modo, la Junta Militar, presionada por las protestas callejeras, por la rearticulación política de la izquierda y por la crítica internacional, a partir de 1986, se vio forzada a iniciar un proceso de negociaciones en las que la Alianza Democrática participó como la contraparte más activa. Como consecuencia de este pacto, el gobierno militar aceptó llamar a plebiscito en 1988 para ratificar o rechazar la permanencia de Augusto Pinochet en el poder hasta 1997.

Así, en febrero de 1988, se fundó la Concertación de Partidos por el No y el 5 de octubre del mismo año se realizó el plebiscito acordado. En un universo de 7.435.913 votantes, el "No" ganó con un 55,99%, frente al 44,01% del "Sí". Tras el triunfo del "No", la Concertación de Partidos por el No pasó a llamarse Concertación de Partidos por la Democracia, y estuvo compuesta por el Partido Demócrata Cristiano (DC), el Partido Socialista, el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Radical Social Demócrata.

El objetivo de esta coalición debutante era llevar una lista parlamentaria y un candidato presidencial único para las elecciones del 14 de diciembre de 1989, donde el candidato de la Concertación, Patricio Aylwin (DC), ganó con un 55,17% de los votos. A partir de entonces, se sucedieron cuatro gobiernos concertacionistas. Al de Aylwin (1990-1994) le siguió el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos Escobar (2000-2006) y Michelle Bachelet Jeria (2006-2010).

Estas administraciones heredarían una institucionalidad política que consagraría un sistema semidemocrático, puesto que el régimen les transfirió un método que, en la práctica, generaba un empate técnico entre las dos fuerzas más representativas del país, como la Alianza por Chile, compuesta por Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI); y la fuerza oficialista de la Concertación. Fue lo que se denominó: sistema binominal. Pero que recientemente fue derogado en la última administración de Bachelet, al pasar a uno proporcional inclusivo.

Este método o empate técnico que generaba este sistema electoral hizo que ambas fuerzas llegarán al Congreso Nacional, no necesariamente siendo los que contarán con gran mayoría de sufragios, por lo que impedía que otros sectores de representación popular que sí las tenían pudieran hacerlo, con lo cual el sistema mantenía a las dos fuerzas hegemónicas en el Parlamento.

En definitiva, con el binominal no necesariamente ganaba el candidato que tuviera más votos, sino que quienes competían eran las listas, y la lista que obtuviera más votos era la que ganaba, no importando que el contrincante de al lado tuviese más votos. Así, durante más de dos décadas este sistema contribuyó a generar un Parlamento “equilibrado”, que también permitió continuar el modelo.

Según la óptica de Garretón, este “empate” impidió varias transformaciones, como el nombramiento de autoridades y miembros de diversas instancias del Estado (Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Consejo de Televisión), todo lo cual impide la real expresión de las mayorías y la soberanía popular. De igual forma, establece que otras de las cosas que heredó del régimen militar dice en relación al predominio de poderes fácticos,

como las Fuerzas Armadas, medios de comunicación, sectores empresariales, Poder Judicial, etc¹³³.

II. Partidos que lo componen y sus principales postulados

i. Partido Demócrata Cristiano (DC):

Esta coalición política fue fundada el 28 de julio de 1957, mediante la unión de la Falange Nacional, el partido Conservador Social Cristiano, el Partido Nacional Cristiano y un grupo proveniente del Agrario Laborismo. No obstante, sus orígenes se remontan desde finales del siglo XIX, con el nacimiento de la corriente social cristiana, que brota tras las consecuencias de la industrialización, sumado a la aparición de la “cuestión social”.

En Chile, a principios de la década de 1930, y con el país atravesando por las graves consecuencias sociales producidas por la crisis económica mundial, un grupo de jóvenes católicos, liderados por Bernardo Leighton, Eduardo Frei Montalva y Manuel Antonio Garretón Walker, asumieron los principios y valores planteados por la doctrina social de la Iglesia. Este grupo, muchos de ellos militantes del Partido Conservador, propusieron nuevas soluciones para los problemas sociales. Sin embargo, esto no fue bien acogido por dicha colectividad, que en ese momento formaba parte del gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932-1938), por lo cual, pasaron a formar parte de la disidencia, de modo que en 1935, fundaron la Juventud Conservadora, que posteriormente derivó en el Movimiento Nacional de la Juventud Conservadora, la cual fue presidida por Bernardo Leighton. Más tarde, en 1936, conformarían la Falange Nacional.

Más adelante, con la aglutinación del Partido Conservador Social Cristiano, Partido Nacional Cristiano y del grupo proveniente del Agrario Laborismo, que derivó en hoy se conoce como Democracia Cristiana, el liderazgo pasó a manos de los hombres de la Falange Nacional y del recién electo senador por Santiago, Eduardo Frei Montalva, quien comenzó a perfilarse como una figura presidencial. De hecho, el ascenso político de esta agrupación política se hizo de ver de forma inmediata, pues de un 9,4% en las elecciones parlamentarias de 1957 aumentaron a un 22,8% en la elección municipal de 1963. Es más, el partido obtuvo el triunfo de su candidato Eduardo Frei Montalva en las elecciones presidenciales bajo la consigna de una "Revolución en Libertad". Un año después, en las

¹³³ Garretón, Manuel Antonio. *óp. cit.*, p.181.

elecciones parlamentarias de 1965 la DC obtuvo el 43,6% de los votos, convirtiéndose en el partido más importante de Chile.

Dentro de los hitos políticos y económicos más importantes de este partido, fue la promoción de la Reforma Agraria, que buscó la modernización del mundo agrario mediante la redistribución de la tierra y la sindicalización campesina. Pues bien, para lograr este objetivo se promulgó una nueva Ley de Reforma Agraria N° 16.640 y la Ley N° 16.625 que permitió la sindicalización campesina. Así, sobre la base de estos dos instrumentos legales se expropiaron alrededor de 1.400 predios agrícolas, 3,5 millones de hectáreas, y se organizaron más de 400 sindicatos que sumaron más de 100 mil campesinos. Al mismo tiempo, comenzaron a producirse huelgas y tomas masivas de predios que polarizaron a la sociedad agraria chilena. De hecho, la derecha se sintió traicionada por esta reforma y la izquierda se vio obligada a radicalizar su discurso ante los avances de sus reformas. De igual forma, el partido enfrentó una división interna, debido a la salida de un grupo importante de militantes para fundar el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), en 1969. Al año siguiente, su candidato llegó tercero en la elección presidencial, lo que puso fin al periodo al sueño de continuar en el poder.

Más adelante, con la Unidad Popular de Salvador Allende, se generó una grieta al interior de la colectividad, donde un pequeño grupo de militantes fundó el Partido Izquierda Cristiana para apoyar el gobierno de Salvador Allende, pero la gran mayoría estuvo a favor de una alianza con la derecha para enfrentar a la Unidad Popular y el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Sin embargo, rápidamente la DC pasó a encabezar la oposición al régimen militar, liderando una alianza política con la izquierda que derrotó al general Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988. Al año siguiente, la Concertación de Partidos por la Democracia llevó al demócrata cristiano Patricio Aylwin Azócar a la presidencia de la República y el partido obtuvo en las parlamentarias el 26,6% de los votos. La buena gestión de la administración de Aylwin permitió que en la siguiente elección presidencial (1993) volviera a triunfar un militante del partido, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Es importante mencionar que desde sus comienzos la DC manifestó su apego e inspiración social cristiana, pero sin pretender realizar una política clerical ni menos imponer la creencia religiosa. En el documento “Doctrina del PDC”, emanado del IV Congreso

Nacional del PDC realizado en 1992, declaran que sus principios básicos se sustentan en los derechos de la persona humana, la promoción del bien común, la familia como la comunidad básica de la sociedad, la comunidad como ámbito solidario de personas, Estado social y democrático de derecho, la descentralización el fortalecimiento de la sociedad civil y el sentido de una economía humana, donde ponen énfasis en que el Estado tiene que sujetarse a dos principios complementarios. El primero es el principio de la solidaridad “que obliga al Estado a concurrir en ayuda de aquellos habitantes que transitoriamente o permanentemente se encuentran impedidos de satisfacer sus necesidades vitales. El segundo es el principio de subsidiariedad, que obliga al Estado a intervenir en el plano económico toda vez que sea necesario, porque el sector privado se resta a tal acción¹³⁴”, consignan.

ii. Partido Socialista (PS):

Partido político de izquierda, fundado el 19 de abril de 1933. Nació a partir de la fusión de varias agrupaciones socialistas que surgieron en el primer tercio del siglo XX chileno. Su base ideológica estuvo fundamentada en el marxismo, derivando desde la década de 1980 hacia la socialdemocracia. Es una de las más importantes fuerzas políticas de la izquierda chilena en el siglo XX. Formó parte de diversas alianzas como el Frente Popular, el Frente de Acción Popular y la Unidad Popular, que encabezó el gobierno con su militante Salvador Allende Gossens.

Según los datos que recoge el portal de la Biblioteca Nacional de Chile, denominado Memoria Chilena, los antecedentes del pensamiento socialista en el país se remontan a mediados del siglo XIX, cuando Francisco Bilbao y Santiago Arcos levantaron el discurso de la igualdad en la sociedad chilena, el cual tomó relevancia en el mundo obrero a principios del siglo XX. De igual forma, menciona que los ideales mutualistas, socialistas, anarquistas y comunistas, que se difundieron a través de la escritura y la voz de líderes como Luis Emilio Recabarren, también forjaron al impulso de esta doctrina. Por otra parte, el impacto de la revolución bolchevique, en Rusia, dio nuevos aires revolucionarios, que en la década del XX se identificaron con el movimiento comunista mundial, surgiendo el Partido Comunista de Chile.

¹³⁴ PDC. (1992). Doctrina del PDC. 27 de marzo, de Memoria chilena Sitio web: <http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/mc0023297.pdf>

El crack del 29 sumergió a los sectores populares y medios del país en una grave crisis que los llevó a simpatizar con las ideas socialistas, expresándose en la instauración de la breve República Socialista, de 1932. Así, la idea de fundar un partido político que uniera a los diferentes movimientos que se identificaban con el socialismo cristalizó en la fundación del Partido Socialista de Chile, el 19 de abril de 1933. El partido obtuvo rápidamente respaldo popular.

De hecho, en 1938 participó en la formación del Frente Popular, que se trató de una coalición electoral y política que rigió entre mayo de 1936 y febrero de 1941, y que estuvo integrada por los partidos Radical, Comunista, Socialista y Radical Socialista, y que llevó a la presidencia al radical Pedro Aguirre Cerda. No obstante, su participación en los gobiernos radicales fue intermitente, debido a los continuos conflictos con las políticas de la alianza gobernante. Esta situación acentuó las diferencias al interior de la colectividad, hasta provocar la división del Partido Socialista en varias facciones: el Partido Socialista Auténtico, el Partido Socialista de Chile y Partido Socialista Popular.

En 1957 se llevó a efecto el llamado "congreso de unidad", donde confluyeron las distintas facciones. Un año después, el socialista Salvador Allende, perdió estrechamente la elección presidencial ante Jorge Alessandri. No obstante, obtendría el triunfo presidencial en 1970.

En la década del ochenta las facciones socialistas resurgieron como activas opositoras al gobierno de Pinochet. Un sector, el de los llamados "socialistas renovados", en alianza con la Democracia Cristiana, logró una salida consensuada con el régimen militar. Esto permitió el restablecimiento de la democracia y también la participación de los socialistas en los cuatro últimos gobiernos de la Concertación. Este proceso también significó concretar la unidad del partido Socialista el 27 de diciembre de 1989, y que Michelle Bachelet ocupara en dos oportunidades la máxima magistratura, 2006 y 2014¹³⁵.

En su declaración de principios, del año 36, ponen énfasis en que el partido acepta como método de interpretación de la realidad el marxismo. En ese contexto, mencionan que la organización capitalista de ese entonces dividió a la sociedad humana en dos clases: una que se ha apropiado de los medios de producción y que lo explota a su beneficio; y otra

¹³⁵ Memoria chilena. (S/A). Partido Socialista de Chile. 18 de septiembre, de Biblioteca Nacional de Chile
Sitio web: <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3396.html>

clase que trabaja, que produce y que no tiene otro medio de vida que su salario. A su vez, hacen hincapié en que la clase capitalista estuvo representada por el Estado, que lo definen como un organismo de “opresión” de una clase sobre otra. Por ende, para ellos eliminándose las clases se desaparece el carácter “opresor” del Estado, limitándose a guiar, armonizar y a proteger las actividades de la sociedad¹³⁶.

Un estatuto del PS, publicado en 2003, uno de los tanto que fueron publicando en la medida que las coyunturas globales iban mutando, remarca que el Partido Socialista chileno:

“Se inspira en el humanismo socialista, que se nutre de las diversas expresiones del pensamiento crítico del capitalismo. Asume como método de interpretación de la realidad el marxismo crítico, enriquecido y rectificado por el avance de la cultura, la ciencia y el devenir social, recogiendo particularmente los aportes del pensamiento democrático radical, el cristianismo de izquierda y el racionalismo laico. Así también, hace suya la doctrina internacional de los derechos humanos. El PS es un partido popular y de izquierda, autónomo, democrático y revolucionario, en tanto persigue un cambio social profundo. El socialismo es la respuesta al neoliberalismo y al capitalismo globalizado. Luchamos por una radical profundización de la democracia, haciéndola participativa, por una economía solidaria al servicio de la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, una cultura de la libertad y una proyección de Chile en el mundo a partir de su condición latinoamericanista e internacionalista”¹³⁷.

iii. Partido por la Democracia (PPD):

El Partido por la Democracia (PPD) fue fundado el 15 de diciembre de 1987, a través del "Discurso de fundación del PPD" que Ricardo Lagos Escobar, uno de sus fundadores y su primer presidente, leyó en la ceremonia de constitución de este partido en el Círculo Español de Santiago.

Su origen se sitúa a mediados de la década de 1980, cuando la movilización política y social contra el régimen militar -principalmente de grupos de centro e izquierda- alcanzaba mayor intensidad.

¹³⁶ Partido Socialista. (1936). Programa Partido Socialista. 14 de marzo, de Biblioteca Nacional de Chile Sitio web: <http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0000542.pdf> Página 5.

¹³⁷ Partido Socialista. (2003). Estatuto del Partido Socialista de Chile. 23 de septiembre, de Partido Socialista Sitio web: file:///C:/Users/ABC/Downloads/Estatuto_PartidoSocialista_de_Chile.pdf

En aquel período surgió una división dentro del Partido Socialista de Chile, donde un sector más moderado propuso crear una coalición ‘instrumental’, cuyo propósito único sería reunir a la oposición en el plebiscito de 1988, y facilitar la pronta derrota del régimen militar. Ese partido se denominó Partido por la Democracia (PPD), y su primera directiva estuvo integrada por: Ricardo Lagos Escobar como presidente; Manuel Sanhueza y Armando Jaramillo Lyon como vicepresidentes; y por Jorge Schaulsohn Brodsky como secretario general. Más allá de su importante labor como aglutinador de las fuerzas de oposición, logró constituirse más allá de esta necesidad instrumental y alcanzó posicionarse en el espectro partidario del país, consiguiendo un importante número de militantes y jugando un rol destacado a fines del régimen militar. De hecho, uno de sus líderes, Ricardo Lagos Escobar, ocupó la principal magistratura del país en 2000.

Dentro sus principales lineamientos, que fueron publicados en su portal, destacan que el PPD, reconoce como elemento básico de todo su accionar político, la búsqueda de la plena democracia, fundada en el ejercicio de la soberanía popular. Por tanto, sostienen que todo poder político sólo tiene legitimidad cuando se origina en la voluntad del pueblo, plenamente expresada en elecciones libres, directas, secretas, competitivas e informadas, tanto de Presidente de la República, como de Congreso Nacional y de autoridades municipales.

De este modo, ponen énfasis en distintos tópicos. Entre ellos, la lucha para que los ciudadanos designen libre y periódicamente a sus gobernantes y para hacer exigible que estos entreguen el poder una vez expirado su mandato; que todo proceso electoral, incluido el acto del registro electoral, sea entregado a una autoridad independiente de los partidos políticos y del gobierno, sin perjuicio de la fiscalización que las fuerzas políticas organizadas puedan ejercer de acuerdo a sus funciones y atribuciones legales; también considera que es un elemento esencial de la democracia, la vigencia protección y profundización de los derechos humanos, por lo que hace suya la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus pactos complementarios y todos los tratados existentes que prohíben y condenan la tortura o la aplicación de tratos inhumanos y degradantes, incorporándolos como parte integrante de esta Declaración de Principios; propugna la vigencia de un régimen democrático sustentado en el derecho inalienable de los ciudadanos

a participar, sin exclusiones ni discriminaciones, en la vida política y para ello a asociarse en partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales; lucha por el ejercicio pleno de todos los derechos sociales de la población y para ello busca asegurar el acceso sin restricciones o discriminaciones a la salud, la educación y la vivienda, como forma eficaz de establecer los principios elementales de justicia social y equidad a que todos los chilenos tienen derecho; también considera como un principio fundamental de su accionar la protección de los recursos naturales y luchará por impedir su explotación irracional que amenace a las futuras generaciones, asignando una particular importancia a la preservación del medio ambiente, entre otros¹³⁸.

iv. Partido Radical Social Demócrata (PRSD):

Es un partido político fundado el 18 de agosto de 1994, a partir de la fusión del Partido Radical (que nace en 1863, producto de la división interna del Partido Liberal, que se generó tras la decisión de la directiva de la colectividad a establecer una alianza con el Partido Conservador, su antagonista histórico. Dada la organización de la fusión Liberal-Conservadora, miembros del liberalismo, decidieron dejar la tienda liberal y formar una nueva colectividad. Nació así el Partido Radical) y del Partido Social Democracia de Chile (fundada el 3 de agosto de 1971 producto de la división del Partido Radical, que por ese entonces formaba parte de la Unidad Popular. A pesar de denominarse como un partido de izquierda, actuó desde una postura crítica al marxismo y mucho más cercana a la socialdemocracia, cuestión que en la práctica lo definió como un movimiento de centroizquierda). Asume como propios los postulados del Partido Radical, fundado en 1863 y que en el siglo XX representó a los sectores medios reformistas.

En las últimas décadas del siglo XIX y durante todo el siglo XX, el Partido Radical fue uno de los actores más importantes de la historia política chilena. Su sello ideológico está marcado por su carácter reformista basado en las ideas como la libertad e igualdad de culto, su posición contraria al autoritarismo, la promoción de un Estado laico, reformas a la Constitución política, sufragio universal, voto femenino, entre otras, atrajo rápidamente a la clase media, que fue por muchos años su base de apoyo electoral más fuerte.

¹³⁸ Partido Por la Democracia. (2012). Declaración de principios. 12 de marzo, de PPD Sitio web: <http://www.ppd.cl/consejo-ideologico/declaracion-de-principios-3>

A comienzos del siglo XX, el radicalismo asumió rápidamente la nueva realidad social del país. A partir del reconocimiento de la cuestión social y las problemáticas que aquejaban a las clases populares, en la convención de 1905 el partido tuvo un vuelco, “declarando como política del partido la solidaridad social, la libertad individual en todas sus manifestaciones, sin más límite que el derecho y el orden público”.

En la década de los treinta, los radicales lograron importantes resultados electorales, y en el año 1936 se constituyeron junto al Partido Socialista, Partido Radical Socialista y Partido Democrático, en el Frente Popular. En octubre de 1938, esta coalición político-electoral logró un triunfo importante al resultar electo como Presidente de la República, el radical Pedro Aguirre Cerda. Más adelante, se sucederían los gobiernos de Juan Antonio Ríos entre 1942 y 1946, y el de Gabriel González Videla entre 1946 y 1952, ambos también militantes del partido.

Durante los años cincuenta y sesenta, el radicalismo bajó su adhesión electoral y su influencia social, aunque continuaba jugando un rol relevante en el sistema político chileno.

Entre 1970 y 1973, formó parte del proyecto de la Unidad Popular y del gobierno de Salvador Allende. Durante esa época y producto de la gran polarización social y política, sufrió un quiebre cuando algunos miembros decidieron desafiliarse del partido y formar un nuevo referente político, formando en 1970 Partido Democracia Radical, y en 1971 a la Izquierda Radical. Este último partido, en julio de 1973 pasó a denominarse Partido Social Democracia de Chile.

El 6 de agosto de 1994, el Partido Radical se fusionó con el Partido Social Democracia de Chile, dando paso al Partido Radical Socialdemócrata (PRSD), todo ello, habiendo superado las discrepancias que antes los separaron. A partir de ese momento, el partido se definió como democrático, racionalista, humanista y solidario, reconociendo sus fuentes ideológicas en el radicalismo del siglo XIX, la socialdemocracia europea y los movimientos reformistas latinoamericanos.

En efecto, su declaración de principios habla de “una colectividad laica, constituida por librepensadores y adherentes provenientes de una pluralidad de creencias y pensamientos que, desde su fundación en 1863, lucha por la libertad, la igualdad, la fraternidad, la

democracia y asume el socialismo propendiendo a la participación de las mayorías en la política, la economía y la cultura, bajo los principios universales del cambio permanente, del humanismo, el racionalismo, el laicismo y el respeto a la naturaleza. De conformidad con ello es multicultural, multiétnico, latinoamericanista y declara su oposición al sistema neoliberal que consolida los privilegios de una minoría. Formula un estado social y democrático de derecho, promotor del desarrollo y garante de las libertades civiles y los derechos sociales”¹³⁹.

III. Las elites empresariales

Así, en este entramado de sucesos, hemos presentado a los distintos actores que han dado origen a esta doctrina en el país, como los estudiantes de la Universidad de Chicago; apoyados por el mismísimo Milton Friedman; los militares, encabezados por Augusto Pinochet; y el conglomerado político de partidos que sucedió a la dictadura, como lo fue la Concertación, que ejecutó a la perfección este sistema, consolidándolo y dándole un aspecto de capitalismo con rostro humano, como muchos lo han reconocido.

Lo cierto que hay un actor de gran relevancia, que si bien hemos mencionado en las líneas que anteceden, en este apartado buscaremos ahondar en el perfil de las elites empresariales, y de qué modo ellas han intercedido en la política chilena mediante sus distintas intervenciones que lo que han buscado es robustecer el sistema económico heredado en pro de su desarrollo

De acuerdo a Manuel Gárate, el triunfo de Salvador Allende en 1970, así como la profundización del proceso de Reforma Agraria, iniciado por la DC y profundizado por el gobierno de la Unidad Popular, marcaron el fin de la vieja élite del siglo XIX, ligada a la posesión de grandes extensiones de tierra (latifundio) y a las actividades relacionadas con la minería.

Asimismo, plantea que este grupo social ya mostraba algunos signos de decadencia desde fines de la década de 1950, de modo que observa que la nueva elite que lo reemplazaría no sentía la antigua vinculación con el Estado.

¹³⁹ Partido Radical Social Demócrata. (S/A). Declaración de Principios. 11 de marzo, de Partido Radical Social Demócrata (PRSC) Sitio web: <http://www.partidoradical.cl/declaracion-de-principios/>

En ese sentido, señala que los jóvenes conservadores de fines de la década de 1960 no pretendían continuar una política defensiva de contención respecto de la izquierda y de los movimientos populares. Al contrario, decidieron pasar a la ofensiva cuando la oportunidad histórica estuvo a su favor. Pues bien, según analiza, esa situación ocurrió con el golpe militar de septiembre de 1973, de modo que para llevar a cabo su proyecto, contaron también con la ayuda de algunos grupos económicos, quienes apoyaron monetaria y comunicacionalmente con la elaboración de una estrategia de transformación económica

De acuerdo al investigador, la élite dirigente aún se concentra en Santiago y se educa en no más de diez colegios privados. Sin embargo, un 29% ya no proviene de este tipo de instituciones, lo cual muestra un aumento de aquellos miembros de las capas medias formadas fuera de las redes tradicionales elitistas. En otras palabras, una de cada tres personas que pertenecen a la denominada élite emergente no se formó en escuelas o colegios exclusivos y casi la mitad de ella corresponde a estudiantes universitarios de primera generación. De hecho, indica que solo un 27% de los más reconocidos líderes empresariales y profesionales de la sociedad chilena pertenece a las familias tradicionales de la oligarquía del siglo XIX.

Paralelamente, da cuenta que según distintos autores esta apertura de la élite a nuevos grupos ha sido el fruto de un aumento significativo de las alternativas educativas en el país a partir de la segunda mitad de la década de 1970, pero -sobre todo- de la implantación de una economía liberal. Pues, este tipo de modelo económico “favorece el mérito personal por sobre las consideraciones aristocráticas de tipo familiar, clientelista o relacionadas con la posesión de la tierra (latifundio)”.

Asimismo, sostiene que desde fines de la década de 1960, los miembros de la nueva élite emergente han preferido otras disciplinas (economía, ingeniería, administración de empresas) y carreras profesionales, dejando de lado los tradicionales estudios de derecho o arquitectura. Este nuevo grupo ahora elige carreras como ingeniería civil o medicina, las que -al menos en Chile- requieren de los más altos puntajes de ingreso en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y también de las mejores notas obtenidas en la educación secundaria.

A esto agrega que sus miembros poseen más años de estudio en el extranjero y valorizan más los posgrados, en lo cual superan largamente a la élite tradicional. La preocupación por el trabajo, también, contrasta con los ideales clásicos de la élite chilena, para quien el comercio y las profesiones liberales no estaban a la altura de aquellas tareas relacionadas con la política, la administración del Estado y el manejo de las grandes propiedades agrícolas.

En definitiva, detalla que la tendencia muestra que el núcleo tradicional de la élite se achica y crece la élite nueva. A esta última, se integran personas que ganan poder a través de sus méritos profesionales y sus éxitos en el mundo de la empresa y los negocios. En su mayor parte, no son herederos de grandes fortunas, sino más bien del esfuerzo de sus padres por brindarles una educación de calidad. Hoy no es posible encontrar miembros destacados de la élite que no tengan estudios universitarios, como sí ocurría hasta los años 1950. A su vez, también lanza que las cifras del estudio muestran que en el año 2004 el 97% de la élite poseía educación universitaria. Dentro de ellas, el 58% se educó en la Pontificia Universidad Católica (PUC); el 38%, en la Universidad de Chile, y el resto lo hizo en otras universidades chilenas o extranjeras.

A su juicio, la revolución económica iniciada en Chile a mediados de la década de 1970 por los Chicago y su alianza con los gremialistas, no solo transformó al país como nunca antes en su historia. Sino que también cambió la élite económica, pues abandonó los valores aristocráticos del origen y la tenencia de la tierra, suplantándolos por aquellos del éxito profesional y económico (lo que hoy se denomina espíritu emprendedor).

Paralelamente, dice que pese a que esta nueva élite le da preponderancia al mérito y al éxito individual, ello no la ha hecho más liberal en cuanto a sus posiciones respecto de la política y especialmente de la moral, de modo que la religión continúa siendo mayoritariamente católica, pero con un fuerte sesgo hacia el conservadurismo, lo cual la alejó -por al menos tres década- de la Iglesia Católica oficial. En ese sentido, dice que esa evidente paradoja entre un liberalismo económico exacerbado y un conservadurismo religioso y moral, constituye una de las singularidades de la transformación económica de Chile, y un

elemento de diferenciación de la élite económica local en relación a sus pares sudamericanos¹⁴⁰.

i. Su rol en la historia

Es importante destacar que las más importantes organizaciones empresariales del país se constituyeron antes de 1910, al celebrar el primer centenario de vida republicana. Entre ellas, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), fundada en 1838, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) que comienza a desempeñarse como grupo de interés en 1883, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) que nace también en 1883. Mientras que más adelante lo harían, en 1934, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que agrupó a la industria, agricultura, comercio mayorista y minorista, compañías mineras, empresas de transporte. Años después en 1953, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), reunió a las empresas de sector de la construcción.

En su investigación sobre Grupos de interés y Lobby en Chile, el periodista y cientista político chileno, Hernán Rodríguez Fisse, da cuenta que hasta 1964 los empresarios desarrollaron sus negocios impregnados de la ideología del liberalismo económico, sin embargo, en la práctica, ellos gozaban de un Estado protector de sus actividad. A ello le suma la visión de un economista, como Jorge Ahumada, quien señala que los empresarios chilenos eran pro-competencia, no obstante, sostenían una fuerte estructura monopolista en las principales actividades económicas del país; entre ellas, papeles y cartones, cristales, cemento, maderas, gas, molinos de trigo, textiles, cigarros, fósforos y cerveza.

Durante el gobierno de Frei Montalva se expropiaron 1.400 fundos, con una superficie de 3.600.000 hectáreas, que representaban el 40% del total de los latifundios. Dentro de esa cifra también se considera la expropiación de aquellas tierras no trabajadas, que estaban en manos de rentistas y no de empresarios, lo que generó el disgusto de este sector. Según comenta Rodríguez, la molestia de ellos no estaba solamente en la aplicación de la reforma agraria, sino que también en la sindicalización campesina, puesto que la consideraron una verdadera revolución.

¹⁴⁰ Gárate, Manuel. *óp. cit.*, p. 421-435

De igual forma, añade que el contexto ideológico de esos años no era de los más favorables para el sector privado, puesto que la sociedad de ese entonces no miraba con buenos ojos a quienes se dedicaban a la actividad empresarial, dado que el afán de lucro era visto de manera negativa en la sociedad, y, en consecuencia, el Estado debía privilegiar los controles de todo tipo, precios, créditos, comercio exterior, divisas. De esta modo, da cuenta que los empresarios vieron a esta administración con desconfianza, al poner trabas a su sector, por lo que muchos comenzaron a retirarse del escenario político de los grupos de interés empresariales, lo que permitió que este espacio sea ocupado por las organizaciones de los trabajadores, como la Central Única de Trabajadores (CUT), en el primer lugar, y, en grado menor, por las federaciones estudiantiles¹⁴¹.

Posteriormente, en 1970, el triunfo de Allende generó una gran incertidumbre a los empresarios locales dada las medidas que podría tomar su gobierno. Ellos, por su parte, habrían apostado por la candidatura del empresario Alessandri Rodríguez, quien habría gobernado entre 1958 -1964.

Rodríguez también plantea un punto importante que tiene que ver con el desempeño de la empresa periodística, quienes habrían tenido un rol de suma importancia a la hora de imponer una “campana del terror” en el país. A su juicio, se trató de una estrategia destinada a asustar a los votantes e impedir la primera llegada de un marxista, por la vía electoral, a la presidencia de un país. De hecho, admite que el informe del senador Franck Church al Congreso de los Estados Unidos dejó en evidencia los recursos aportados por empresas norteamericanas con intereses en Chile, primero para evitar la llegada de Allende al poder y segundo para precipitar su caída.

Según la Constitución de 1925, al Congreso Nacional le correspondía ratificar el triunfo de Allende al alcanzar en las urnas un poco más de un tercio de la votación (36.5%) y no el 50% más uno. Sin embargo, para lograr su validación, la DC, que era el partido mayoritario en ambas cámaras, elaboró un Estatuto de Garantías destinado a votar a favor de Allende, siempre y cuando él garantizara el respeto irrestricto a la Constitución y al estado de derecho. De esta forma, en ese documento los empresarios lograron incorporar algunas

¹⁴¹ Hernán Rodríguez Fisse. (2005). Grupos de interés y Lobby en Chile. Tesis de grado, 1, 141. 2 de agosto, De Universidad de Chile Base de datos. Página 39-41

garantías en cuanto al rol de la empresa privada. Durante su gobierno quienes ejercieron importante presión, fue la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), ya que su programa continuaba el proceso de reforma agraria, legado de la anterior administración.

De acuerdo a Rodríguez, los latifundistas a toda costa mostraron resistencia a la ocupación de sus tierras; solicitando ayuda de tipo, ya sea de parlamentarios que no pertenecían a la UP para presionar desde el ámbito político, a la prensa afín a su ideología para ganarse la opinión pública y a los tribunales de justicia para impedir la expropiación de los fundos. Otras medidas de Allende que no les gustó para nada a los corporativista chilenos tenían que ver con la estatización de la industria y el comercio, especialmente aquellos que representaban a los grandes empresarios, como la CPC, Sofofa, CNC y la Sonami, lo que generó una gran molestia en ellos.

“Los comerciantes detallistas y los transportistas, empresarios que personalmente laboran en sus pequeños talleres, almacenes y negocios varios, sus propios taxis, microbuses y camiones, fueron la punta de lanza de la defensa empresarial en su conjunto. Agrupados en la confederación de Dueños de Camiones, la Confederación del Comercio Detallista y la Pequeña Industria, la Confederación del Comercio Detallista y la Pequeña Industria, la Confederación de Dueños de Autobuses y Taxibuses, la Federación de Sindicatos de Chóferes de Taxis, se movilizaron activamente para culminar en el llamado “Paro de Octubre” de 1972. Esta huelga “puso de manifiesto y fortaleció la relación entre las organizaciones en conflicto y los dirigentes políticos del Partido Nacional y del movimiento gremialista de la Universidad Católica, e incluso con el movimiento de ultraderecha Patria y Libertad, nacido a comienzos del periodo”¹⁴².

Según argumenta, los estudiosos de la época señalada, coinciden que ello más que ser una defensa gremial, formó parte de un proceso político destinado a desestabilizar el gobierno de Salvador Allende y precipitar su caída. Posteriormente, la Junta Militar procedió, de manera casi inmediata a devolver a sus propietarios aquellos fundos y empresas que habían sido tomados por la fuerza o mediante decretos administrativo.

Más adelante, en el proceso del plebiscito, manifiesta que los empresarios vieron que si continuaba el régimen (votando SI) se les garantizaba la permanencia del modelo

¹⁴² Ibíd., p. 46 y 47.

económico. En caso contrario (triumfo del NO) podría ser derribada “la obra construida” por el régimen militar. Dentro de las organizaciones gremiales, la CPC, la Sofofa y la SNA, figuran como las más decididas defensoras y continuadoras del modelo económico implementado bajo el régimen militar.

De hecho, detalla que en el documento *Las Instituciones Empresariales ante el proceso de Transición a la Plena Democracia*, preparado por la CPC, se señala que el gremio apoya el avance democrático, siempre y cuando no se vuelva a 1973, todo dentro de la Constitución de 1980 y “nuestro apoyo estará a favor de quienes sustenten y compartan con nosotros los principios comunes de respeto a la libertades de emprender, a la propiedad privada de los medios de producción, a la acción subsidiaria del Estado, a la libertad de pensamiento, de trabajo y de asociación”¹⁴³.

Posteriormente, en noviembre de 1989, darían a conocer a la opinión pública el documento titulado *Libertad de emprender: condición para el desarrollo*, donde se sostiene la importancia de la propiedad privada para la economía, el rol subsidiario del Estado, la libertad de afiliación a los sindicatos, la autonomía del Banco Central, una democracia pluralista y estabilidad para el cambio de un gobierno a otro. A su vez, en el mismo documento, expresan su rechazo al aumento de los impuestos, la inamovilidad laboral y la negociación colectiva por áreas de actividades, y que no se elimine el régimen de renta presunta.

ii. La Concertación y los empresarios

Tras el triunfo de Aylwin los empresarios y sus distintas organizaciones asumen la defensa de la economía de libre mercado frente a las nuevas autoridades. Para ello, según explica Rodríguez, su estrategia consistió en estar presentes, a través de técnicos y especialistas, en las comisiones especiales del Congreso Nacional, para tener un seguimiento permanente de aquellos proyectos de ley en que estuvieran involucrados sus sectores. Pero en forma paralela se preocupan de acceder con sus demandas a las autoridades públicas tanto a ministros, subsecretarios, directores de servicios, como a sus equipos asesores.

“Sabem muy bien que en un régimen presidencial como el chileno, las iniciativas en materia de políticas públicas emanan del poder ejecutivo. Los mayores contactos de los empresarios se

¹⁴³ *Ibíd.*, p. 55.

realizan en los Ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo. Esta posibilidad de acceso, apertura y consultas con el sector privado, contrasta abiertamente con el que había ocurrido en el régimen militar, donde si bien había coincidencia en los objetivos económicos entre empresarios y gobierno, muchos de estos accesos estuvieron cerrados ¹⁴⁴.

Simultáneamente, reconoce que los temores de los empresarios se manifestaron de inmediato en uno de los temas conflictivos: la reforma tributaria de Aylwin. Para el gobierno entrante, la realización de los programas sociales tenía como condición previa un aumento de impuestos.

Lo cierto es que los empresarios en Chile desde esta época en adelante ejercieron un rol de suma importancia para la conducción política y económica de los distintos gobiernos. Y han sabido alzar la voz a la hora de frenar iniciativas y entrapar una serie de reformas en todo ámbito de estructuras.

Es más, en los últimos años el país ha sido testigo de cómo grandes grupos económicos han financiado las campañas políticas de distintos políticos. Hasta se han prestado para entregar boletas de honorarios truchas a fin de financiar campañas políticas por servicios inexistentes. Y lo han hecho para ambos bloques políticos, tal ha sido el caso Penta, que se refiere a un supuesto fraude al Fisco por parte de Empresas Penta o Grupo Penta (un holding empresarial con inversiones en las áreas de previsión, seguros, finanzas, salud, inmobiliaria y educación), mediante la utilización de facturas y boletas de honorarios “ideológicamente falsas” -emitidas materialmente de acuerdo a la ley, pero cuya justificación es falsa- que, entre otros aspectos, habrían permitido el financiamiento irregular de campañas electorales de varios políticos, la mayoría pertenecientes a la Unión Demócrata Independiente (UDI), correspondientes a la derecha. Y también el caso Soquimich, por la misma dinámica.

También se ha visibilizado cómo grupos económicos han puesto presión sobre algunos parlamentarios redactándoles normativas, para que sean ingresadas como indicaciones de los proyectos de ley, para que él salga a la medida del sector privado. ¿Cómo? Intercambiando financiamiento político. Un caso bastante conocido fue la ley de pesca aprobada durante la administración de Piñera, donde más adelante se conocería la presión

¹⁴⁴ *Ibíd.*, p. 62.

de distintos grupos empresariales para ajustar las leyes a la medida de los intereses de ellos¹⁴⁵.

En mi experiencia personal, trabajando en el Congreso Nacional, como periodista en los medios de comunicación donde me desempeñé, muchas veces me tocó presenciar la inquietud de distintos grupos empresariales, que eran convocados por los distintos parlamentarios en las comisiones donde se tratan los proyectos de ley.

Para graficar la situación, esto es así, conforme a artículo 65 de la Constitución del Chile, el Ejecutivo envía un proyecto de ley, que se le conoce como Mensaje, o bien las “mociones” pueden ser presentada por parlamentarios (no puede ser firmada por más de diez diputados ni más de cinco senadores) siempre y cuando no comprometa las materias que son de exclusividad del gobierno de turno, y esta, independiente de su urgencia: simple (el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en el plazo de 30 días; suma (el proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en el plazo de 15 días); y discusión inmediata (proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en el plazo de seis días), deberá ser analizada.

A modo de ejemplo, La Moneda envía un proyecto de ley que reforme el sistema previsional. Lo primero que hace la cámara revisora es informar al comienzo de la sesión su origen, con lo cual posteriormente se deriva a la comisión que será encargada de revisar la propuesta gubernamental o la moción, que siempre dependerá del tipo de urgencia que tenga el proyecto. En este caso supongamos que tenga “urgencia simple”, eso quiere decir que el proyecto pasa a la comisión, y en ella se invita a los distintos actores que tengan que ver con el proyecto a tratar para revisar las distintas opiniones.

En este caso, como ha sucedido, llegan a Valparaíso, donde se ubica el Congreso Nacional, o bien a Santiago, donde se sitúa el ex Congreso, los directores de las AFPs, sus abogados representantes, u otros especialistas en cuestión, y los parlamentarios escuchan las distintas opiniones o sugerencias respecto al proyecto en cuestión. Esto es pan de cada día en el Congreso Nacional y se trata de una agenda pública, donde las personas pueden acceder a

¹⁴⁵ Sepúlveda, Nicolás. (2017). Nuevas boletas de pesqueras: \$445 millones pagaron Lota Protein, Asipes y Blumar a políticos. 6 de mayo, de Ciper Chile Sitio web: Nuevas boletas de pesqueras: \$445 millones pagaron Lota Protein, Asipes y Blumar a políticos

ver la información en los respectivos sitios webs sobre las distintas comisiones y sus invitados.

No obstante, los últimos escándalos de corrupción en relación a la intervención del mundo privado en el financiamiento de campañas políticas, o bien, la presunta redacción de textos íntegros por parte de algunos grupos de interés a algunos parlamentarios para introducir indicaciones a los proyectos de ley (las indicaciones sirven para modificar los proyectos, es decir, cambiar artículos) llevaron a legislar sobre este ámbito.

Según cuenta Rodríguez, en la década de los 90 nadie hablaba de lobby, de hecho, era una palabra que solo círculos intelectuales la insinuaban y la que poco a poco comenzó a ser mencionada en los medios de comunicación que daban cuenta respecto a los grupos de presión que ejercían en la época en pos de garantizar la estabilidad de su rubro. Entre ellos, menciona a la empresa Iansa que pidió al gobierno de turno que moviera los hilos en el Gobierno para eliminar las salvaguardias (o sobretasas arancelarias) que favorecían a los importadores de fructosa, como embotelladores y productores de dulce. Otra que destaca es Mall Plaza que contrató a Tironi y Asociados con el propósito de proteger a sus locatarios impidiendo otros comercios en las inmediaciones. Y también a Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), que agrupa a las empresas comercializadoras de vehículos, que evitó el impuesto al diesel contratando a la oficina de Allamand y Schaulsohn¹⁴⁶.

Todo ello llevó a que en 1994 la Comisión de Ética Pública propusiera una agenda de transparencia y probidad, que contendría medidas para incrementar la integridad de la función pública del país. En 2003, durante la presidencia de Ricardo Lagos, se presenta el primer proyecto de ley que regula el lobby (boletín 3407). No obstante, el 2008 la presidenta Bachelet le introdujo un veto a la iniciativa que buscaba agregar como lobista a organizaciones sin fines de lucro, el que no prosperó. En 2008 un segundo proyecto de ley, por parte de la presidenta Bachelet (boletín 6189), apuntó sobre la regulación de la industria, cambiándose el sentido en el año 2012. Sería en 8 de marzo de 2014 que el presidente Piñera promulgaría la ley 20.730 y posteriormente la presidenta Bachelet dictaría el decreto número 71 Minsegapres que contendría el reglamento de la ley, entrando recién en vigencia el 28 de noviembre. El propósito de esta ley es regular la publicidad en la

¹⁴⁶ *Ibíd.*, p. 70 y 71.

actividad de lobby y demás gestiones que representen intereses particulares, con el objeto de fortalecer la transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado.

Así, la ley vigente (20.730) define al lobby, como gestiones o actividades remuneradas que realizan personas naturales o jurídicas chilenas o extranjeras, para promover, defender o representar cualquier interés particular y/o para influir en las decisiones de la autoridad. De igual forma admite, que si la actividad no es remunerada, será una gestión de intereses particulares.

IV. Políticas impulsadas por las cuatro administraciones

i. Primer periodo presidencial: Patricio Aylwin.

Según el análisis de Gárate, las nuevas autoridades económicas heredaron un modelo neoliberal que destacó por la apertura unilateral a los mercados, el cual alteró la estructura económica del país, trayendo consigo una acentuación de la especialización productiva tradicional; consolidando su carácter de país fuertemente exportador, específicamente de materias primas, como el cobre, de modo que abandonó la política industrial orientada a la sustitución de importaciones.

El debutante equipo económico contaba con una amplia mayoría de economistas vinculados a la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN), una institución académica, originada en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Católica (PUC), cuyo objetivo es el estudio de las políticas públicas y la economía política, en una perspectiva comparativa en las áreas del desarrollo y la democracia, en Chile y América Latina; la cual desarrolló las bases del programa económico del primer gobierno de la Concertación, y fue semillero de numerosas autoridades de los posteriores gobiernos democráticos, especialmente en las áreas de manejo macroeconómico y fiscal.

Esta nueva élite tecnocrática, nacida en los 70, evaluó y criticó las políticas implementadas por la dictadura militar, no obstante, ello no significó que su proyecto estuviera en directa oposición al modelo heredado. De hecho, el historiador menciona que ello tampoco se tradujo en la gestación de un modelo alternativo de desarrollo económico ni menos una versión actualizada del estructuralismo de la Cepal, sino que bien su discurso económico que se elaboró en 1987 fue más de continuidad que de cambio, incorporando políticas

sociales destinadas a legitimizar la economía de libre mercado en los sectores mayoritarios del país.

Así, el equipo económico de Aylwin contó con una amplia mayoría de economistas vinculados a Cieplan, encabezados por Alejandro Foxley, que quedó a cargo del Ministerio de Hacienda; siendo la excepción Carlos Ominami, quien encabezó el Ministerio de Economía, liderado mayormente por tecnócratas ligados al Partido Socialista. El primero de ellos, Alejandro Foxley estuvo influido por la escuela americana, pues había realizado un doctorado en la Universidad de Wisconsin; mientras que el segundo, Carlos Ominami, fue ex militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionara), militante del PS, y adscribía más a la escuela europea, dado que es doctor en Economía de la Universidad de París X. También trabajó en el programa de Relaciones Internacionales de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal).

Según da cuenta, durante todo el año 1989 Foxley había mantenido reuniones con distintos dirigentes y gremios patronales para convencerlos de que un gobierno de oposición no cambiaría lo esencial de las reglas del juego, manteniendo una economía de libre mercado, aunque con un nuevo énfasis en la acción reguladora y social del Estado. Otro punto que destaca es que el verdadero poder sobre la política económica y las finanzas del Estado quedaron radicados en Hacienda, pues, durante el régimen militar, el Ministerio de Economía se convirtió en un organismo fundamentalmente asesor y dedicado a producir estudios y análisis de coyuntura, además de diseñar políticas públicas en algunos sectores relacionados con la modernización estatal¹⁴⁷.

En consecuencia, fue el fundador de Cieplan, quien obtuvo el pleno control sobre la nueva política económica del país. En efecto, la solución que se propuso para romper con la ortodoxia monetarista del gobierno anterior, surgió de la idea de compensar los equilibrios macroeconómicos con un mayor gasto social. De igual forma, durante este periodo, se acuñó el concepto de crecimiento con equidad.

A juicio de Gárate, uno de los principales desafíos que tuvo el nuevo gobierno fue lograr la aprobación de una reforma tributaria, que requería de los votos de la oposición, conformada

¹⁴⁷ Gárate Chateau, Manuel *óp. cit.*, p. 304 -316.

por los partidos de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), ambos defensores del legado político constitucional y económico del régimen militar.

Dicha propuesta gubernamental era esencial para financiar el paquete básico de políticas sociales del gobierno, y para minimizar, en parte, las escuálidas cuentas fiscales que había legado el equipo económico anterior. Pues bien, el acuerdo se gestó con RN, pues la UDI se negó a participar de una negociación con las nuevas autoridades. En consecuencia, parte de la oposición (RN) aprobó la reforma bajo el argumento de que era una manera de pagar un precio mínimo por la legitimación del modelo económico.

A juicio de Gárate, esto le permitiría al gobierno de turno aplacar las demandas sociales, sin alterar mayormente la marcha de la economía, además de posicionar a RN como un partido con vocación negociadora y aspiraciones a disputar el centro político. Así las cosas, la reforma tributaria terminó por aprobarse en junio de 1990.

En la visión de Alejandro Foxley, economista, ingeniero, académico, investigador y miembro del partido Demócrata Cristiano, quien lideró la cartera de Hacienda entre 1990 y 1994, senador entre 1998 y 2006, y ministro de Relaciones Exteriores, entre 2006 y 2009, y quien escribiera el capítulo *Objetivos de la Política Económica del gobierno de Aylwin en Políticas económicas y Sociales en el Chile Democrático*, un compilado de diversos autores que hablan respecto a lo que sucedió en el campo de las políticas económicas y sociales durante la transición a la democracia, reconoce a fines de 1989 Chile comenzó a reorientar su estructura productiva hacia el sector externo, recuperando los niveles de inversión y mejorando su competitividad, lo que se tradujo en un significativo aumento de las exportaciones.

Según dice, este periodo de recomposición de la economía chilena se caracterizó también por un deterioro importante de los salarios reales, un fuerte aumento de la pobreza y las desigualdades y una sustancial brecha de productividad entre este sector exportador y el resto de la economía.

Así, apunta a que uno de los principales desafíos que tuvo la primera administración -donde él lideró las decisiones en lo que respecta a materias económicas- fue garantizar un

crecimiento sostenido en el largo plazo, y eso era posible mediante aumentos en la tasa de inversión e incrementos en la productividad.

Pues bien, de acuerdo a su diagnóstico, el crecimiento neto de Chile en la última administración había sido “mediocre”, registrando un 3,0% promedio anual, mientras que la tasa de inversión promedio en ese período no superó el 18% del PIB (17,9%).

En ese contexto, asegura que el país estaba sumergido en un proceso de incertidumbre, por ende, su principal propósito era reducirla, generando los consensos básicos respecto de las bases del sistema político y económico, y constituir una clase dirigente que consolidara un sistema democrático y un proceso de desarrollo estable.

Otro de los desafíos que querían estampar en esta administración era entregar el mensaje sobre que el “crecimiento y equidad social” no sólo no eran contrapuestos sino que debían avanzar juntos, potenciándose recíprocamente. Pues bien, cuando inició el gobierno de Aylwin, en marzo de 1990, definieron una nueva estrategia de desarrollo, a la que llamaron de “crecimiento con equidad” o de “crecimiento con justicia social”. Este nuevo énfasis en la estrategia de desarrollo apuntaba a compensar una debilidad.

En consecuencia, resume que este nuevo énfasis en la estrategia de desarrollo apuntaba a compensar una “debilidad” de la etapa anterior, en la cual se produjo una “modernización de la economía muy concentrada en algunos sectores”, lo que generó una “distribución desigual de los beneficios del progreso económico”. En efecto, reconoce que el desafío era reducir el rezago sufrido por determinados sectores que no habían podido incorporarse al proceso modernizador, de modo que apuntaba a un crecimiento sostenido bajo una estrategia de desarrollo hacia afuera, promoviendo el crecimiento de la productividad. Desde esta perspectiva, sostenía que “invertir en las personas era fundamental para garantizar un crecimiento sostenido en el largo plazo y para mejorar los niveles de competitividad”¹⁴⁸.

a) Programa de gobierno

El programa de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia, liderado por el DC, Patricio Aylwin, hace hincapié en distintas cuestiones, poniendo énfasis en lo relativo

¹⁴⁸ Foxley, Alejandro. (1995). Políticas económicas y Sociales en el Chile Democrático. Santiago: Cieplan. Página 11 y 12.

a las reformas constitucionales y las leyes políticas, de modo que pretendían, en primera instancia, forjar un acuerdo entre los distintos sectores, para así facilitar el camino a la democracia.

En esa línea, aspiraban a la plena democratización de las instituciones políticas, sociales y económicas, con pleno respeto por los derechos humanos, siendo esto último la base y fundamento del régimen democrático de su gobierno. En efecto, dentro de sus propuestas proponían la elección íntegra de un Congreso Nacional elegido por sufragio popular, a base de distritos plurinominales y de un sistema de representación proporcional corregido. Así, su planteo buscaba eliminar a los senadores designados y aumentar el número de diputados y senadores; garantía de un pluralismo político amplio y sanción a las conductas anti-democráticas; entre otros.

Entre paréntesis, es importante destacar que respecto al sistema proporcional representativo, recién en la última administración de Bachelet, con su Nueva Mayoría, pudo aprobar una normativa relativa a ello; en lo que respecta los senadores designados, eso fue modificado en la administración de Lagos.

A su vez, en el ámbito de los Derechos Humanos sostenían que estos constituían uno de los fundamentos de la construcción de una sociedad democrática. Por lo que instaban a protegerlos y promoverlos en todos los ámbitos de la vida nacional, de modo que se comprometían a la plena vigencia constitucional y legal de los derechos humanos, de forma que apuntaban a adecuar la legislación e instituciones existentes a los contenidos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración Americana y Pactos Complementarios.

En ese marco, también mencionaban distintas aristas a fin de resolver distintos acontecimientos que generaron profundo pesar en muchas familias; entre ellos, la libertad a los presos políticos, reparación a las víctimas, así como también, el reconocimiento y preservación por parte del Estado de los pueblos indígenas, valorizando su cultura y su carácter de pueblos integrantes del país, de forma que el Estado se encargará de reconocer en plenitud sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Por otra parte, en materia de medio ambiente, el gobierno de esa época se comprometía a garantizar en forma efectiva el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Paralelamente, también presentan nuevas propuestas en lo que respecta al Poder Judicial; seguridad del Estado democrático; nuevas políticas para la Defensa Nacional y Fuerzas Armadas; incorporación plena de la mujer y la protección de la familia; democratización y descentralización del país; y nuevas propuestas en lo relativo al área de la cultura y las comunicaciones¹⁴⁹.

Ahora bien, en el plano económico, destacan que la democracia para todos debe estar basada en el “crecimiento económico, la justicia social, la participación ciudadana, y la autonomía nacional”. Ante esto, subrayan que la reconstrucción de la democracia debe; ineludiblemente, ir acompañada de la superación progresiva de las extremas desigualdades que existían -y que siguen existiendo- en el país. Así, dentro de los criterios básicos exponen en el documento que aspiran a una economía que crezca de manera dinámica y, a la vez, una sociedad regida por un principio de “equidad”.

Del mismo modo, se comprometen a lograr la integración económica y social de todos los chilenos, promoviendo nuevas relaciones laborales que garanticen respeto, justicia y participación entre los diferentes actores económicos; estabilidad de las reglas del juego democráticamente elaboradas en materia de institucionalidad económica; respeto de los derechos económicos y sociales de todos, incluidos los de las minorías, estableciendo el carácter universal de tales derechos.

“Postulamos un rol conductor del Estado en la formulación de los grandes objetivos y metas nacionales y de las estrategias para realizarlos, en la regulación adecuada del proceso económico y como responsable principal y directo de las políticas encaminadas al logro de la justicia social, todo ello de acuerdo a los enunciados que presentaremos en este documento. Por lo tanto, reiteramos nuestra concepción de un Estado activo que configura una economía mixta en que sector público y sector privado se complementan adecuadamente (...) propiciamos una economía en que el Estado y la empresa privada en sus diversas formas cumplan sus funciones propias, dividiéndose las tareas con criterio de eficiencia y

¹⁴⁹ Concertación de Partidos por la Democracia. (1989). Programa de gobierno Patricio Aylwin (1990-1994). S/N, I, 39. 3 de octubre, De Biblioteca Nacional de Chile Base de datos. Páginas 3 a 11.

complementación, a fin de responder tanto al interés público como a la necesidad de preservar y dinamizar la iniciativa privada”¹⁵⁰.

Asimismo, precisan que esperan lograr una pertinente coherencia entre la política fiscal, monetaria, financiera y de comercio exterior, así como una política estatal “responsable” que permita preservar la estabilidad de la economía y evitar ajustes automáticos drásticos, ante fluctuaciones internacionales, como las que atravesó el régimen de facto que los antecedió.

Por otra parte, señalan que la política tributaria debe estar encaminada a recaudar en forma “equitativa”, y, al mismo tiempo, promover el crecimiento y la inversión; dar forma a un sistema tributario que privilegie el ahorro y sobre todo la inversión, que al mismo tiempo establezca la equidad entre sectores productivos y que permita al Estado disponer de recursos adicionales para hacer frente a las responsabilidades en materia de política social y de promoción del desarrollo. De igual forma, promueven la mantención de un tipo de cambio real que estimule eficientemente las exportaciones y la sustitución eficiente de importaciones; mantención de la tasa de interés dentro de niveles reales positivos.

Otro punto que hacen referencia es respecto a la política de precios, donde sostienen en que una “política económica eficiente” no hay lugar para políticas de control de precios, como ocurrió con el gobierno de Allende. Asimismo, ponen énfasis en que solo deben otorgarse subsidios estatales a sectores sociales de bajos ingresos, ramas de actividad económica o regiones, previa estimación de su costo y asignación explícita de los recursos públicos necesarios.

En lo relativo a la inversión y el ahorro, ponen sus fichas en distintos tópicos, haciendo hincapié en que para elevar la tasa de inversión anual al 20% del PGB urge aumentar el ahorro interno y limitar la transferencia de recursos al exterior por el servicio de la deuda externa.

De esta forma, proponen:

¹⁵⁰ Concertación de Partidos por la Democracia. (1989). Programa de gobierno Patricio Aylwin (1990-1994). S/N, I, 39. 3 de octubre, De Biblioteca Nacional de Chile Base de datos. Página 13.

- Mantenimiento de incentivos estables al aparato productivo derivados de las políticas económicas y de otros programas de acción.
- El perfeccionamiento de un sistema tributario que privilegie el ahorro y la inversión y que, al mismo tiempo, establezca la equidad horizontal entre sectores productivos en materia de tributación a las empresas.
- Gestación de un mercado de capitales orientado hacia el mediano y largo plazo.
- Desarrollo de formas institucionales privadas de ahorro e inversión vinculadas especialmente a la vivienda, la educación y la salud, para lo cual se recurrirá de preferencia a favorecer el ahorro de las familias orientado a través de las instituciones financieras que han estado cumpliendo con este tipo de funciones.
- Aseguramiento de que los fondos de las AFP se canalicen a la inversión.
- Promoción de los acuerdos con los sindicatos para destinar al ahorro una parte de los incrementos salariales reales (particularmente los que superen los incrementos de productividad) para ser canalizados hacia fondos de inversión, manteniendo la propiedad individual de los trabajadores sobre tales ahorros.
- Una política de austeridad en el gasto corriente que permita el desarrollo de la inversión que le compete al Estado.
- Una política de fomento a la inversión extranjera adecuada a los requerimientos del desarrollo nacional que se detalla posteriormente¹⁵¹.

En otro ámbito, referido al capítulo sobre fomento productivo y la inserción internacional, en el apartado de sector industrial, destacan que su desarrollo constituye un área de especial atención del programa económico social, donde el esfuerzo de potenciarlo deberá ser una tarea central del sector privado, complementado con las empresas públicas y mixtas, y el aporte privado extranjero. Así, apuntan que la política estatal deberá contribuir a promover las condiciones favorables, proporcionar la información básica necesaria, y resolver los problemas y dificultades que puedan presentarse en el campo de su competencia.

b) Medidas implementadas

En lo que respecta a los cambios en la estructura administrativa, sus principales transformaciones fueron la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan) que pasó a ser el

¹⁵¹ *Ibíd.*, p. 14 y 15.

Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan) –hoy Ministerio de Desarrollo Social de Chile- concebido como una instancia fundamental en la planificación e implementación de las políticas sociales. Como dependiente de este organismo, se creó el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), cuyo propósito es financiar proyectos productivos de sectores pobres y microproductores.

Asimismo, implementó la Comisión Nacional de Medio Ambiente; la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), que asumió la coordinación de las políticas del Estado en este ámbito. Tres años después, en septiembre de 1993, fue aprobada por el Congreso la Ley N° 19.253 de Pueblos Indígenas. Además, se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

En materia de educación y gestión económica, constituyó el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE), que básicamente impulsaba el perfeccionamiento de profesores, ayudaba a los adultos a completar su educación e incrementaba las raciones alimenticias escolares. En la educación superior (universidades tradicionales), se estimuló la elección democrática de sus autoridades, como rectores, decanos y directores.

En lo relativo a las relaciones internacionales, durante el año 1993, el gobierno llevó a cabo una intensa actividad, que derivó en una serie de acuerdos que estrecharon los nexos comerciales, científicos y tecnológicos. Además, firmó acuerdos de libre comercio y de complementación económica con algunos países, como Venezuela y Colombia.

En 1991 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron un tratado en el que se acordaba construir, a partir de 1994, el Mercado Común del Sur (Mercosur), con un programa de desgravación arancelaria que partiría en diciembre de ese año. Así, se le planteó la posibilidad a Chile de asociarse a esta iniciativa, dado que había priorizado como política exterior la apertura económica hacia América Latina, por ser el ámbito natural de integración. Sin embargo, a pesar de esta posición, Chile se abstuvo de ingresar, ya que existían diferencias muy significativas. Pero en 1994, se comenzó a flexibilizar y Chile empezó a estudiar nuevamente la posibilidad de establecer un acuerdo de integración. Finalmente, en 1996, se firmó el proyecto de acuerdo de libre comercio de Chile con el

Mercosur, en el cual se estableció un marco jurídico e institucional para la cooperación económica e integración física¹⁵².

c) Análisis de sus resultados

De acuerdo a Gárate, había muchas tensiones cuando asumieron las nuevas autoridades. Una de ellas era caer en políticas populistas, como ocurrió en aquella época con otros países de Latinoamérica, a ello también se sumó las presiones del empresariado local, y el efecto de las cifras “macroeconómicas positivas” del último trienio del régimen militar, pese a su evidente deuda en materia social. En ese sentido, las nuevas autoridades lo que menos querían era entrar en conflicto con los empresarios, la derecha política, los militares y el Poder Judicial, de modo que en ellos subyugó la prudencia y el esquivamiento de cualquier tipo de conflicto con estos estamentos.

“La cautela del gobierno quedó de manifiesto al evitar roces con las élites socioeconómicas, impidiendo una mejor política de distribución del ingreso por medio de nuevas reformas impositivas y laborales, o bien postergando otras relacionadas con los sistemas privados de salud, educación y pensiones. La contención de las demandas sociales estuvo en el centro de la estrategia del primer equipo económico concertacionista, por lo que los cambios de política social solo pudieron realizarse dentro de las reglas del modelo, es decir, mediante un enfoque gradualista, focalizado y no redistributivo. Los temas controvertidos debieron o bien postergarse o definitivamente negociarse en todos sus detalles con la oposición y el empresariado en lo que se llamó la ‘política de los consensos’, y más tarde ‘la democracia de los acuerdos’”¹⁵³.

En lo que respecta a los temas macroeconómicos, sostiene que el control de la inflación así como la disciplina fiscal de las autoridades económicas del primer gobierno de la Concertación, comenzaron a dar sus primeros frutos en 1991, donde el modelo de mercado fue adoptado, pese a la resistencia de algunos sectores.

Paralelamente, observa que la “política monetaria restrictiva” de los primeros meses había sido apoyada completamente por el presidente Aylwin, con lo cual se eliminaron los riesgos políticos y sociales al cual tanto temían los agentes del mercado. De esta forma, a partir de

¹⁵² Grupo Copesa. (S/F). Gobierno de Patricio Aylwin. ICARITO, 1, 1. 3 de septiembre, De ICARITO Base de datos.

¹⁵³ Gárate. *óp. cit.*, 324.

1991, el país se convirtió en un objetivo para los inversionistas extranjeros debido a las condiciones de estabilidad que estableció tanto el Ministerio de Hacienda como por el Banco Central.

Otro de los puntos que diferenció la política económica de la Concertación respecto del régimen militar, según el historiador, fue la necesidad de controlar el flujo de capitales. Según precisa, en 1991 se estableció un encaje (20%) sobre todos los ingresos de capitales, exceptuando la inversión extranjera directa, el cual solo fue eliminado 1998. Este funcionó como una suerte de impuesto para evitar la invasión de los llamados capitales “golondrinas” de corto plazo, asociados normalmente a la especulación.

Otra arista que menciona es respecto al gasto social por la vía de las nuevas asignaciones del presupuesto nacional. Esto, según reconoce, se hizo teniendo en cuenta la primera prioridad, la cual era la mantención de los equilibrios macroeconómicos dentro de un ambiente propicio a la iniciativa privada, puesto que el régimen dictatorial había recortado significativamente el gasto público, sobre todo en los programas sociales, con el fin de debilitar el peso del Estado en la economía y darle mayor libertad al sector privado. En ese sentido, lo que se promovió, a partir de 1990, fue aplicar un “programa de mitigación” de la deuda social heredada del régimen anterior, pero sin salirse del criterio de responsabilidad fiscal. Así, el 2% del PIB que otorgó la reforma fiscal de 1990 se destinó a este propósito¹⁵⁴.

Además, enfatiza que las altas tasas de crecimiento de la economía chilena entre 1990 y 1997 permitieron a los gobiernos de la Concertación aumentar significativamente la recaudación fiscal, llegando al superávit presupuestario, sin elevar la tasa impositiva ni menos insistir en el tema de la redistribución del ingreso, lo cual permitió aumentar significativamente el número y la cobertura de los programas sociales, pero sin alterar la enorme desigualdad que aún persiste en la sociedad chilena, y que incluso subió levemente durante el mismo periodo.

Por su parte, Garretón opina que el primer gobierno de la Concertación “tuvo éxito” en mantener los equilibrios económicos, “corrigiendo los costos sociales del modelo, especialmente en la cuestión de la pobreza, y evitar cualquier regresión autoritaria”. En esa

¹⁵⁴ *Ibíd.*, p. 326

línea, reconoce que la estrategia para lograr ambos objetivos fue la “gradualidad” en que se fueron sucediendo los cambios, y principalmente, la “política de acuerdos” que se fue gestando entre los distintos actores, la cual, según avizora, buscaba “mantener en su mayor integridad posible el legado socioeconómico y político de la dictadura”¹⁵⁵.

ii. Segunda administración: Eduardo Frei Ruiz Tagle

Eduardo Frei Ruiz-Tagle (militante del Partido Demócrata Cristiano) desde siempre estuvo vinculado a la política –su papá fue presidente de Chile entre 1964 y 1970- en 1989 fue elegido senador por Santiago Oriente, obteniendo la primera mayoría nacional. En 1992 fue nominado precandidato presidencial por la DC, compitiendo luego con Ricardo Lagos (del bloque PS-PPD) en las primarias internas de la Concertación. En 1993, se convirtió en el abanderado de todo el conglomerado para las elecciones presidenciales, con un 64% de los votos. En diciembre de este mismo año, ganó los comicios presidenciales, tras conseguir un 58% de los votos, encabezando el segundo mandato de la Concertación.

Según relata Garretón, lo que estaba en juego era cómo se enfrentaría la continuidad del gobierno de Aylwin, en el sentido de una transformación que apuntara al tema de la superación de la pobreza y de las desigualdades sociales. Si bien, en el discurso, su retórica apuntaba hacia ese eje, en la práctica, su administración optó por una visión economicista y tecnocrático-empresarial. De hecho, cuenta que la designación del economista Eduardo Aninat en la cartera de Hacienda fue considerada como el triunfo de una política más conservadora o neoliberal.

a) Iniciativas establecidas durante su mandato

De acuerdo a Lorena Núñez y otros autores, en su estudio denominado Los programas de gobierno de la concertación, sus iniciativas para cumplirlos y los resultados obtenidos, destacan que el gobierno de Eduardo Frei continuó con la política de consensos de su antecesor. Al mismo tiempo, mantuvo el modelo neoliberal el cual tuvo un fuerte desarrollo durante su gobierno. Dentro de sus objetivos fue generar un clima atractivo para los inversionistas y aumentar la tasa de crecimiento. Es más, el país experimentó una bonanza económica.

¹⁵⁵ Garretón. *óp. cit.*, 110.

Durante su gestión, Frei privatizó empresas estatales para obtener recursos adicionales y destinarlos a programas dirigidos a los sectores vulnerables. En tanto, los temas medioambientales y de crecimiento sustentable generaron posiciones encontradas, dado que su administración intentó conciliar ambas políticas con normas que no pusieran en riesgo proyectos de inversión a gran escala, como hidroeléctricas y forestales, y que aseguraran la estabilidad económica y la generación de nuevos recursos para los programas sociales. La instalación de grandes proyectos hidroeléctricos en zonas de asentamiento mapuche, sin embargo, provocaron la ruptura de los acuerdos entre organizaciones indígenas y el gobierno, y dio inicio a movilizaciones de reivindicación territorial que aún se mantienen.

En Educación, en tanto, su gobierno se propuso la extensión de la jornada escolar, lo que significó destinar importantes recursos del Estado a la ampliación y mejoramiento de la infraestructura escolar en la educación subvencionada pública y privada del país. Ello se hizo elevando los recursos económicos en el erario público, con el fin de aumentar el número de salas y dar cabida en jornada ampliada a todos los estudiantes en un mismo establecimiento. Su propósito fue aumentar las horas que el estudiante permanece en el liceo o escuela, elevando sus posibilidades de aprendizaje, beneficiando tanto a los establecimientos municipales como particulares subvencionados. Asimismo destinó recursos al fortalecimiento de la profesión docente (se puso en marcha una política sostenida de aumento de sus ingresos mediante reajustes anuales superiores al alza del IPC) y al Proyecto Montegrando, consistente en la conformación de una red de liceos que desarrollaban programas especiales para mejorar su servicio educacional y su capacidad de innovación¹⁵⁶.

Su gobierno se enfocó principalmente al desarrollo macroeconómico del país: se estrecharon las relaciones económicas con otros países, Chile se integró al Mercado Común del Sur (Mercosur), se impulsaron avances en infraestructura a través de acuerdos entre privados y el Estado. Además se realizó la reforma educacional y se dio inicio a la reforma procesal penal.

¹⁵⁶ Núñez, Lorena y varios autores. (2012). Trabajo descriptivo sobre los programas de gobierno de la concertación, sus iniciativas para cumplirlos y los resultados obtenidos. (Tesis de grado), 1, 185. 7 de junio, De Universidad Academia de Humanismo Cristiano Base de datos. Página 56

La meta del crecimiento económico, vinculada estrechamente al fortalecimiento del comercio exterior chileno, llegó a convertirse en la más fuerte prioridad del gobierno de Eduardo Frei. Los resultados, en términos macroeconómicos, fueron altamente exitosos. Chile logró un crecimiento económico del 8,2%, el más alto de la región; la inflación descendió de un 8,9% en 1994, a un 8,2% en 1995, una tasa de ahorro de un 27,3% del Producto Interno Bruto. La balanza comercial siguió arrojando saldos cada vez más favorables. Los retornos en divisas ingresadas al país también crecieron en forma inesperada. Así, de los 11.450 millones de dólares alcanzados en 1994, aumentaron en 16.039 millones en 1995, debido al alto precio de cotización del cobre, la celulosa y la harina de pescado.

En forma paralela, se innovó en materias de infraestructura y de obras públicas. Entre las iniciativas llevadas a cabo se destacó la apertura al sector privado para la construcción y operación de carreteras, puertos, terminales aéreas, etc., a través de un sistema de concesiones que garantizaron la modernización. Entre los numerosos proyectos iniciados por el Ministerio de Obras Públicas destacaron el término de la construcción del túnel El Melón y la construcción de la Línea 5 del Metro.

En lo que respecta a políticas de comercio exterior, la administración de Frei se dedicó a buscar nuevos socios comerciales. Con los países integrantes del Nafta o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmó tratados de libre comercio con Canadá (1996) y México (1998). Además, en 1999, se firmó tratados con Centroamérica. En 1996, Chile suscribió un convenio en calidad de miembro asociado con el Mercado Común del Sur, Mercosur, así como un acuerdo marco para asociarse con la Unión Europea (en enero 1999). Además, pasó a integrar el Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico, APEC e ingresó a la Organización Mundial de Comercio.

b) Evaluación de medidas.

Garretón dice que esta segunda administración destinó sus esfuerzos en potenciar el crecimiento económico, creando los sustentos para una economía de mercado, libre de regulaciones estatales. Al mismo tiempo, mantuvo un equilibrado gasto fiscal, generando superávits cercanos a los obtenidos por economías asiáticas. Llevó a cabo una política de

expansión de exportaciones, situando a Chile entre los países con mayor superávit comercial de la región: 9,5%¹⁵⁷.

“Se registraron aumentos a nivel del PIB, coeficientes de formación de capital y tasas de ahorro. En términos de indicadores macroeconómicos, Chile tuvo un desempeño superior al resto de América Latina, sobre todo luego de las crisis registradas en 1973, 1975 y 1982. Como consecuencia de la elevada formación de capital y la estabilidad macroeconómica, las tasas de empleo aumentaron hasta 1998. Este buen desempeño macroeconómico se deterioró a partir de 1998 por influencia de la crisis asiática, que repercutió principalmente en la capacidad productiva y, por consiguiente, en la situación laboral y la tasa de inversión. A pesar de ello, la capacidad de producción siguió expandiéndose gracias a las medidas de inversión tomadas durante la década del noventa”¹⁵⁸.

De igual forma, detalla que su gobierno promovió la integración comercial de Chile al mundo mediante acuerdos de cooperación económica en la región y tratados de libre comercio (TLC) con naciones como Canadá, México y algunos países de Centroamérica. Asimismo, se promovió la incorporación de Chile al Mercosur, a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y a la APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). Sin embargo, también aclara que los principales TLC que se gestaron durante el gobierno de Frei, se firmaron en la administración de Ricardo Lagos, y fueron con Estados Unidos y con la Unión Europea.

En lo que respecta a los temas de pobreza, Garretón asegura que hubo un descenso constante, ya que en 1990 la población bajo la línea de la pobreza a nivel nacional ascendía a 36,6%, en tanto, en 1998 había caído a 21,7%. No obstante, observa que la red de seguridad social siguió siendo insuficiente y las brechas de desigualdad se mantuvieron.

“En 1996 el ingreso promedio del quintil superior de ingresos fue casi catorce veces mayor al del quintil inferior. Asimismo, muchos trabajadores sufrieron la precarización de sus condiciones de trabajo, flexibilización, fragmentación, inseguridad del empleo, trabajo temporario y subcontrataciones. Se modificó la naturaleza de la problemática del empleo, ya que se pasó a cuestionar sus condiciones y su calidad”¹⁵⁹.

¹⁵⁷ Garretón. *óp. cit.*, 112

¹⁵⁸ *Ibíd.*, p. 111

¹⁵⁹ *Ibíd.*, p. 113.

En relación a los resultados en términos macroeconómicos, dice que también fueron “exitosos”, logrando encabezar el crecimiento económico en Latinoamérica durante 1995 con 8,2%, el más alto de la región; descenso de la inflación desde 8,9% en 1994 a 8,2% en 1995; tasa de ahorro de 27,3% del PIB. El desempleo disminuyó y los gastos públicos sociales por habitante se expandieron. El desempleo promedió 7%, a pesar de la crisis económica asiática.

No obstante, una de las críticas más fuertes era respecto a su aceptación a una estrategia de desarrollo y un modelo económico que rendía frutos importantes en términos de progreso material. Hacia fines de 1998 comenzó a agudizarse la preocupación por la desigualdad en la distribución del ingreso, al publicar el Banco Mundial cifras que situaban a la economía chilena como una de las más desiguales de América Latina

iii. Tercera Administración: Ricardo Lagos Escobar

El abogado chileno se enfrentó a otros cinco candidatos a la presidencia de Chile en las elecciones del 12 de diciembre de 1999. Ricardo Lagos fue una figura emblemática del antipinochetismo durante la dictadura. De hecho, fundó el Partido Por la Democracia (PPD) y fue fundamental en la campaña del NO, que buscaba terminar con la dictadura.

Fue ministro de Educación, durante el gobierno de Aylwin, y ministro de Obras Públicas durante el mandato de Frei, siendo reconocido por la opinión pública, dado que impulsó un sistema de concesiones viales, con amplia participación del sector privado, que invirtió alrededor de 2 mil millones de dólares en diferentes proyectos.

El eslogan de su campaña “Crecer con igualdad” se ajustó a la contingencia económica de la época, cuando el país recién estaba saliendo de la llamada “crisis asiática”. Por primera vez en Chile y según lo dispuesto por la constitución de 1980, se realizaron elecciones presidenciales de segunda vuelta. Casi empatado en la primera vuelta con Joaquín Lavín Infante, quien representó al conglomerado derechista “Alianza por Chile”, con algo más de 47% de los votos cada uno, Lagos enfrentó a su rival en el balotaje con un nuevo eslogan: “Chile mucho mejor”.

Lavín había sido Alcalde de Santiago durante dos períodos consecutivos y su gestión tuvo amplia aprobación por parte de la ciudadanía, a la vez que una gran cobertura mediática.

Las encuestas de la época señalaban una elección estrecha. El candidato derechista apeló a los deseos de la gente de ver nuevas caras en el gobierno y recalcó la novedad de su propuesta con el eslogan “Súmate al cambio”. También se presentaron a la carrera presidencial Arturo Frei Bolívar con el eslogan “Uno como usted”, apoyado por el partido Unión de Centro-centro e independientes; la candidata comunista Gladys Marín, con el eslogan “Por un Chile de verdad”; Tomás Hirsch, por el Partido Humanista, tras el eslogan “Con la fuerza de lo humano”; y Sara Larraín, que no tuvo lema de campaña.

En el segundo enfrentamiento, el porcentaje de votos obtenidos en la primera vuelta por estos candidatos fue mayoritariamente para el candidato de la Concertación. Finalmente, el 16 de enero de 2000, y por un estrecho margen de menos de tres puntos porcentuales, Ricardo Lagos Escobar ganó las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el tercer Presidente de la República de Chile después de retornada la democracia y en el presidente número cuarenta y seis de la historia republicana del país¹⁶⁰.

a) Contexto político y social

De acuerdo a Sebastián Covarrubias en *Gerencia Pública Económica: el Gobierno de Ricardo Lagos Escobar*, las características más relevantes de este periodo es la existencia de una marcada “estabilidad macroeconómica” y, a la vez, la persistencia de un “estancamiento económico”, derivación de un período recesivo iniciado durante la administración Frei Ruiz-Tagle, dado los efectos de la Crisis Asiática, respecto del cual las primeras señales de recuperación comienzan a darse en los primeros meses del año 2003.

Según menciona, en ese periodo por primera vez en catorce años, cae el Producto Interno Bruto, que se situó en un -1,1%. Lo anterior se vio acompañado de un déficit público que implicaba que el gobierno saliente de Frei había gastado más de lo recaudado. En consecuencia, se incrementó el desempleo y alcanzó su punto cumbre en el tercer trimestre de 1999 cuando bordeó los 14 puntos porcentuales. En ese marco, el nombramiento de Nicolás Eyzaguirre, en la cabeza del Ministerio de Hacienda, y José de Gregorio, en la

¹⁶⁰ Núñez, Lorena y varios autores. (2012). Trabajo descriptivo sobre los programas de gobierno de la concertación, sus iniciativas para cumplirlos y los resultados obtenidos. (Tesis de grado), 1, 185. 7 de junio, De Universidad Academia de Humanismo Cristiano Base de datos. Páginas 67 y 68.

cartera de Economía, fue bien recibido en el ámbito empresarial dada su vasta trayectoria¹⁶¹.

b) Su proyecto político

Su programa de gobierno puso énfasis en la conquista del “progreso con igualdad”, destacando que durante muchos años nuestro país tuvo altas tasas de crecimiento, que sin embargo, no permitieron la construcción de una sociedad más justa. Así también, reconoce que el contexto político y social que le tocó atravesar -tras la crisis internacional- lo único que generó es inseguridad a las familias, de modo que sostienen que una de las prioridades de los chilenos es apostar por liderazgos que asegure crecimiento e igualdad¹⁶².

“Sabemos que la igualdad no puede ser creada artificialmente por el Estado. Pero tampoco nace automáticamente del mercado. El Estado y el mercado son sólo instrumentos para apoyar la dignidad humana. Para ello el gobierno debe cumplir sus responsabilidades como garante de los derechos sociales básicos de las personas. Un gobierno que presta una atención preferente a los débiles y a los que más necesitan. Un gobierno con sentido de su autoridad. Exigente consigo mismo y con el país. Que se apoya en la gente y que la respalda para que pueda salir adelante. Crecer con igualdad plantea nuevas exigencias en materia de reforma de salud, adaptación de la educación para el nuevo milenio, protección familiar, seguridad para las personas y la nación, plena integración de la mujer, cuidado del medio ambiente y humanización de las ciudades, combate al centralismo, desarrollo de una cultura libre, mayor democracia y participación y un crecimiento económico que provea más y mejores empleos. Estos son los compromisos de la candidatura de Ricardo Lagos”¹⁶³.

En ese sentido, admiten que dentro de las primeras acciones que se llevarán a cabo irán focalizadas en la creación de empleos, y el término de la desprotección de la familia chilena a la enfermedad y el desempleo, mediante la rápida aprobación de una legislación con una clara orientación solidaria.

De esta forma, uno de los primeros capítulos que tiene su programa de gobierno está focalizado al ítem de crecimiento económico con “más y mejores empleos”. Dentro de este,

¹⁶¹ Covarrubias Besa, Sebastián. (Julio 2004). Gerencia Pública Económica El Gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Documentos de Facultad, 8, 43. Página 18 y 19.

¹⁶² Lagos Escobar, Ricardo. (1998). Programa de gobierno: para crecer con igualdad. S/N, 1, 28. 12 de septiembre, De Programa de gobierno Base de datos.

¹⁶³ Ricardo Lagos Escobar. (1998). Programa de gobierno: para crecer con igualdad. S/N, 1, 28. 12 de septiembre, De Programa de gobierno Base de datos. Página 1 y 2.

Lagos se propone “construir confianzas” y “redes de cooperación” con distintos actores de la sociedad, de modo que Chile sea un país desarrollado que sea capaz de ofrecer igualdad de oportunidades a todos sus habitantes. En ese sentido, como primera instancia, se proponen “recuperar el alto y sostenido nivel de crecimiento”, concentrando así sus esfuerzos en la creación de nuevos empleos que permitan distribuir en forma más justa los frutos del desarrollo, y disminuir la concentración del poder económico y sus consecuencias.

Al mismo tiempo, fija una serie de criterios para la prosperidad social. Entre ellos, la promoción de relaciones laborales, para que sean más modernas y justas; una conducción económica que fomente el diálogo entre los actores del desarrollo; mejoramiento de la distribución del ingreso; apoyo a las pymes; capacitación de los trabajadores; impulso del crecimiento con igualdad, que supone una inflación baja y controlada; déficit moderado de la cuenta corriente y un tipo de cambio competitivo que colabore con el esfuerzo exportador; apoyo a la función estabilizadora de la política monetaria y fortalecimiento anticíclico de la política fiscal, garantizando la plena autonomía del Banco Central; reducción de la evasión y la elusión, eliminando exenciones injustificadas y fortaleciendo la equidad de la estructura positiva, así como su contribución a una eficiente asignación de recursos; utilización de incentivos tributarios para promover un crecimiento ambiental equilibrado; fortalecimiento de la base empresarial privada, que la califica como “la principal fuente de crecimiento y de empleo”; apoyo de la vocación empresarial y la capacitación laboral; aumento del acceso a la información y la transferencia tecnológica; mayor acceso al crédito a las pymes; abrir nuevas oportunidades de progreso, reduciendo a ocho días el tiempo requerido para crear una empresa¹⁶⁴.

A su vez, también establecen otra serie de medidas, como la creación del programa “Servicio Joven” para aumentar las oportunidades de empleos y capacitación de la juventud; establecimiento de sistemas de protección del trabajador cesante, y su apoyo en la reinserción en el trabajo; incremento de la competitividad exportadora de la economía chilena con más inversión en conocimiento, innovación y producción limpia; desarrollo de fondos de innovación tecnológica; profundización de la inserción de Chile en la economía

¹⁶⁴ Ricardo Lagos Escobar. (1998). Programa de gobierno: para crecer con igualdad. S/N, 1, 28. 12 de septiembre, De Programa de gobierno Base de datos. Páginas 3 y 4

global, abriéndola hacia el Mercosur y el impulso del Libre Comercio de las Américas bajo el principio de regionalismo abierto; modernización de ProChile con la participación del sector privado. De igual forma, apuestan por el mejoramiento de la infraestructura, de modo de aumentar la calidad de vida e incrementar la competitividad de Chile en el mundo. Pues bien, será un programa de concesiones que se buscará incrementar la viabilidad en rutas¹⁶⁵.

También pone énfasis en cuestiones relacionadas con la educación, salud, incorporación de la mujer, seguridad para la familia, respeto a los derechos de los niños y jóvenes, cuidado de los adultos mayores, mayores oportunidades a las personas con discapacidad, protección del medio ambiente, seguridad ciudadana, mayor descentralización y participación, modernización de la justicia, reforma del Estado, nuevo trato para los pueblos indígenas, entre otras aristas.

De acuerdo a Núñez y los otros autores, Ricardo Lagos quiso caracterizar su gobierno como uno cercano a la gente, diseñando una política de puertas abiertas. De hecho, su primera acción fue abrir las puertas de La Moneda (sede de gobierno) al público, tras casi 30 años de acceso restringido.

Por su parte, Garretón apunta a que él se planteó como el presidente de las reformas. Asimismo, propuso alcanzar alianzas estratégicas con todos los actores del desarrollo, con el objeto de ofrecer igualdad de oportunidades a todos los chilenos de cara al Bicentenario. Desde el punto de vista económico, proyectó mantener los niveles de crecimiento y concentrar el esfuerzo en la creación de empleos que permitieran distribuir de manera justa los frutos del desarrollo, y de este modo disminuir la concentración del poder económico y sus consecuencias, promoviendo relaciones laborales modernas y justas¹⁶⁶.

c) La puesta en marcha de su gobierno

Pese a que comenzó con varios problemas económicos derivados de la llamada “Crisis Asiática”, su administración se propuso incentivar la economía y frenar el desempleo, que ya alcanzaba cifras cercanas al 11%.

El primer Mensaje del Presidente Lagos al Congreso Nacional, leído el 21 de mayo del 2000, dio cuenta cuáles serían las claves de la estrategia económica de la naciente

¹⁶⁵ *Ibíd.*, p. 4.

¹⁶⁶ Garretón. *óp. cit.*, 130.

administración: el logro del desarrollo, asumir la revolución tecnológica y el avance en infraestructura y servicios que permitan al país insertarse plenamente al mundo globalizado.

Para ello, se fijó el desafío de lograr tasas de crecimiento de un 7% para el período 2001-2006, empezando con una expansión de un 6%. También se planteó revertir el déficit fiscal dejado por su antecesor.

En una nota de prensa realizada por el periodista chileno Claudio Garrido, denominada *Las políticas del gobierno de Lagos que profundizaron la concentración económica* realizada en época que el ex mandatario buscaba aspirar a su segunda elección presidencial, la cual fue bien recibida por el mundo empresarial, pero no así con su conglomerado político de la centro izquierda; hecho que derivó a que la Nueva Mayoría, de Michelle Bachelet, se desintegrara por diversas cuestiones, como por ejemplo, las distintas aspiraciones de los candidatos a La Moneda, lo cual repercutió en la renuncia de Ricardo Lagos, tras no conseguir el apoyo del Partido Socialista, quien prefirió optar por el independiente, Alejandro Guillier.

En ese marco, son varios los planteamientos que formula el profesional, apoyado de diversas fuentes, que versan en relación a que al ex gobernante chileno realizó varias obras que agasajaron al empresariado. Así, menciona que durante su período en La Moneda, se consolidaron las políticas en obras públicas mediante concesiones. El fuerte desarrollo en autopistas e infraestructura pública, vino de la mano con la incorporación de varios capitales extranjeros, principalmente españoles, para proyectos viales, mineros y carcelarios, quitando protagonismo al Estado y generando importantes ganancias a las empresas. De hecho, señala que por esta misma razón, el entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville, llegó a decir del ex Mandatario que “mis empresarios, todos lo aman”.

Además, destaca que durante el gobierno de Ricardo Lagos se creó y desarrolló el Plan Transantiago, una de las políticas públicas con “peores resultados” de los últimos años, también desarrollada principalmente mediante concesiones.

También impulsó el Crédito con Aval del Estado, que permitió el acceso a la educación superior a muchos jóvenes a costa de un prolongado endeudamiento del cual se beneficia la

banca. “Ricardo Lagos ocupó la consigna del “crecer con igualdad” de la mano del endeudamiento de miles de familias”, afirma en su nota, Gabriel Iturra, quien fuera vocero de la Confech y presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central. “Su gobierno fue uno de los más privatizadores de la historia de Chile, se aumentó la tasa donde las empresas generaban licitaciones con el Estado sin pagar ningún impuesto. Durante su gobierno, también, se concesionaron las carreteras”, señala.

Por otra parte, el economista de la Fundación Sol Marco Kremerman, precisa en dicho artículo que el Crédito con Aval del Estado (CAE) es un ejemplo de una serie de políticas públicas que disminuyen el rol del Estado, aumentan la desigualdad social y tienden a consolidar la concentración económica en pocas empresas, una práctica en la que han colaborado todos los gobiernos de la Concertación. “Existe una serie de profundizaciones, por ejemplo con los todos los tratados de libre comercio que sin duda han generado que en Chile se siga manteniendo y profundizando altos niveles de concentración, que explica que muchos sectores productivos dos, tres o cuatro empresas como máximo concentren el noventa por ciento de la participación de mercado”.

El economista agrega que la vía que se está siguiendo es la de una consolidación de un modelo neoliberal instaurado por la dictadura y que no tiene intención de ser cambiado: “El modelo que hoy día tenemos, es un modelo que no se ha cambiado en ningún ápice de su fundamento, que está totalmente sincronizado con la constitución de 1980, que tiene ese ADN. Las políticas diseñadas e implementadas en los distintos gobiernos de la Concertación, en el gobierno de Lagos en particular, son políticas que no generan ningún rasguño a la filosofía del modelo neoliberal que tiene Chile”¹⁶⁷.

d) Reforma a la salud

Ciertamente una de las políticas mejor evaluadas fue la reforma que se llevó a cabo en el ámbito de la salud. Cabe recordar las Isapres (Instituciones de Salud Previsional) fueron creadas durante el gobierno militar y su propósito fue reformar el sistema chileno de salud, que hasta entonces era principalmente público. Sin embargo, no toda la población podía

¹⁶⁷ Garrido, Claudio (2016). Las políticas del gobierno de Lagos que profundizaron la concentración económica. 2 de agosto, de Radio Universidad de Chile Sitio web: <http://radio.uchile.cl/2016/07/15/las-politicas-del-gobierno-de-lagos-que-profundizaron-la-concentracion-economica/>

acceder a él, dado que se trataba de un sistema más exclusivo, donde se debían -y deben- destinar importantes fondos para una atención “de calidad”.

De acuerdo a Garretón, el sistema implementado durante la dictadura contribuyó a acentuar la segmentación del sistema de salud chileno. Por este motivo, los gobiernos de la Concertación, en su afán por extender los derechos sociales, decidieron promover una serie de medidas para mejorar el sistema de ese entonces. Por eso, una de las primeras iniciativas que se concretaron entre 1990 y 1995 fue el aumento del presupuesto en salud. Al mismo tiempo, se mejoraron los contratos entre los prestadores privados de salud y sus cotizantes, a partir de un compromiso de gestión entre el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y los servicios de salud. A partir de estas reformas, el sistema de salud chileno pasó a ser mixto, esto es, con participación de los sectores público y privado en materia de seguros, financiamiento y entrega de los servicios de salud¹⁶⁸.

Así, según la visión de Garretón, la gestión Lagos decidió convertir la reforma del sistema de salud en la acción emblemática de su mandato. En ella se planteó la estrategia central de modificar la estructura legal del sistema de salud, con el objetivo de promover una mayor “equidad y solidaridad”, dado que el sistema anterior al Auge (Acceso Universal de Garantías Explícitas en Salud, promulgado durante su administración), adolecía de serie de dificultades. Entre ellas, un alto grado de inequidad en el acceso a los servicios de salud expresados en el sistema Isapre-Fonasa; fuertes deficiencias en la gestión de los establecimientos hospitalarios públicos, expresadas en ineficiencia y descoordinación entre redes nacionales y regionales; falta de regulación del subsistema privado; inadecuación en el modelo de atención construido en base al binomio madre-hijo y a las enfermedades infectocontagiosas; inflexibilidad para adaptarse a los cambios epidemiológicos; y, finalmente, insuficiencia en el volumen de financiamiento del subsector público.

Según comenta, los orígenes de la reforma al sistema de la salud se remontan a 1999, cuando en plena campaña presidencial, el entonces candidato de la Concertación, Ricardo Lagos, se comprometió frente a los actores del sistema de salud a avanzar y encabezar una reforma del mismo.

Durante su promulgación, en agosto de 2004, Lagos, señaló:

¹⁶⁸ Garretón. *óp. cit.*, 132.

"(La nueva ley) refuerza el derecho de las personas para acceder a la salud, más allá de lo que sea su situación económica. Aquí hemos sido persistentes durante todo este debate y hemos logrado un hecho inédito: esta legislación hace que la salud sea un derecho exigible para los chilenos y chilenas (...)"Se establecen garantías explícitas, en donde se señala claramente cuáles son los compromisos que adquiere el Estado, la sociedad chilena, acceso, oportunidad, calidad y protección financiera. Y si estos compromisos no se cumplen, pueden ser exigidos. Esto es lo importante: nunca más queremos que exista el temor a la enfermedad, porque no sabemos si nos van a atender y si nos atienden, no sabemos cómo podemos pagar"¹⁶⁹.

e) Análisis de sus medidas implementadas

De acuerdo a Garretón, entre los años 2000 y 2005 el nivel de crecimiento promedio fue de 4,4%, que fue inferior al resto de las administraciones que le antecedieron. Por ejemplo, Aylwin anotó 7,8%, y Frei 5,5%. Esto, dado que debió enfrentar las secuelas de la crisis Asiática que golpeó fuerte a nuestro país al ser un país tan dependiente de la economía asiática. De hecho, precisa que durante su gobierno se registró una de las más altas tasas de desocupación alcanzadas por los gobiernos de la Concertación (que promediaron 8,8%). Es más, observa que lo que más se aumentó fueron los empleos ligados al sector público, empleos de emergencia y en el rubro de servicios personales y comerciales.

En otra arista, dice que el proceso de apertura económica, la inserción en la globalización a través de tratados comerciales con prácticamente todos los bloques del mundo, Estados Unidos y la Unión Europea y al final de su mandato incluso con China, llevó a la reducción de los gravámenes aplicados a los bienes de capital, los bienes intermedios y los bienes de consumo. En consecuencia, apunta que esta reducción arancelaria fue el factor que contribuyó a la expansión de la inversión productiva en los dos últimos años del periodo de Lagos.

Otro punto que menciona es la alta inversión en infraestructura, financiada en parte con el gasto público y el sistema de concesiones. A su vez, destaca los notables avances en infraestructura, como la expansión del metro y de la red de carreteras a lo largo del territorio nacional y el diseño del Transantiago.

¹⁶⁹ Radio Cooperativa. (2004). Presidente Lagos promulgó el Plan AUGE en consultorio de Santiago. 2 de agosto, de Radio Cooperativa Sitio web: <http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/auge/presidente-lagos-promulgo-el-plan-auge-en-consultorio-de-santiago/2004-08-25/185512.html>

Ahora bien, en lo que respecta al plano de las políticas sociales, menciona la reforma de la salud; el programa Chile Solidario, plan de políticas y medidas de atención y promoción directa de las familias en indigencia; reforma educacional, que llevó la escolaridad obligatoria a doce años. No obstante, también observa que las metas de la igualdad y de alcanzar la sociedad desarrollada, estuvieron lejos de cumplirse. Pese a ello, indica que su gobierno culminó con altos niveles de aprobación debido a sus logros en crecimiento e infraestructura, inserción internacional y políticas sociales, como también la valoración de la autoridad presidencial y de su connotación republicana¹⁷⁰.

Según expone Garretón, una de las principales visiones críticas sobre el gobierno de Lagos ha sido expuesta por el economista Hugo Fazio, quien sostiene que la gestión Lagos significó la profundización del modelo económico neoliberal, dados el fuerte impulso a la apertura económica y comercial, la renuncia a un proyecto nacional y el incremento de los niveles de desregulación y concentración económica.

Simultáneamente, manifiesta que la identificación con el modelo se habría iniciado con los nombramientos de Nicolás Eyzaguirre en el Ministerio de Hacienda, cuya permanencia en la cartera es la más larga de la historia de Chile y de José de Gregorio, demócratacristiano también de perfil tecnocrático, como ministro de Economía y Minería, y además designado como presidente de la Comisión Nacional de Energía. Y se habría intensificado, a partir de diversas nominaciones en el Banco Central, que establecerían la correlación de fuerzas para la definición de la política macroeconómica. A su vez, añade Fazio, según exhibe Garretón, que la gestión presidencial se destacó por buscar permanentemente acuerdos con el empresariado y mantener estrechas relaciones con sus centros de estudios¹⁷¹.

iv. Cuarta administración: Michelle Bachelet

El 15 de enero de 2006, en segunda vuelta electoral y con el 53.49% de los votos, la socialista Michelle Bachelet se convierte en la primera mujer electa Presidenta en la historia republicana del país. Antes también marcó un precedente al ser designada titular de Defensa, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo en el país y en Sudamérica. Es médico de profesión, médico cirujano, pediatra y epidemióloga de la Universidad de Chile.

¹⁷⁰ Garretón. *óp. cit.*, p. 132.

¹⁷¹ *Ibíd.*, p.141.

Bachelet es hija de Ángela Jeria y del ex general de la Fuerza Aérea Alberto Bachelet - quien dirigió la Dirección de Abastecimiento durante los últimos meses del gobierno de Allende y que falleció de un infarto, en 1974, cuando estaba en prisión después del golpe militar.

Con la restauración de la democracia, en 1990, se incorporó al Servicio de Salud Metropolitano Occidente como epidemióloga y luego a la Conasida. Juntamente, fue consultora de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia de Cooperación Técnica alemana (GTZ). Desde 1994 fue asesora del Ministerio de Salud en temas de Atención Primaria y en gestión de Servicios de Salud. Desde marzo de 1994 hasta julio de 1997, se desempeñó como asesora de la Subsecretaría de Salud. En 1996 asistió a un curso en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y en Defensa Continental. Gracias a su buen rendimiento obtuvo una beca Presidente de la República para estudiar en el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, EE.UU. durante 1997, junto a 35 militares y algunos civiles de todas las Américas. Esa especialización le permitió incorporarse a su regreso como asesora del Ministro de Defensa.

Lagos durante su mandato la designó ministra de Salud, con dos desafíos: mejorar la atención primaria, con la meta explícita de poner fin a las filas de espera en una plazo de tres meses; y por otro, preparar una gran Reforma de la Salud. Para lo primero, estableció un sistema de solicitud de horas por teléfono, incrementando, además, las atenciones médicas y dentales, logrando una cobertura garantizada en 24 horas a los menores de un año y mayores de 65 años. Por primera vez, los consultorios abrieron sábados y domingos durante los meses de invierno y se extendió el horario de atención hasta las 20 horas. Se aumentaron los SAPU y las salas IRA (Infecciones Respiratorias Agudas) para la atención de los niños con este tipo de dolencias y se innovó con salas ERA para los adultos. Con el desarrollo del programa Vida Chile en todas las regiones del país dio un fuerte impulso a la Promoción de la salud. Y con la creación del Consejo asesor de Investigación en Salud (Conis) se impulsaron proyectos de investigación científica útil a la salud pública.

Posteriormente, en 2002, Lagos la designó ministra de Defensa Nacional, convirtiéndose en la primera mujer en ese cargo en la historia de Chile y de América Latina. Ejerció el cargo

hasta el 1° de octubre del 2004, para dedicarse de lleno a su candidatura presidencial respaldada en prácticamente todas las encuestas de opinión. Al salir del ministerio se dedicó de lleno a la campaña municipal, acompañando a los candidatos a alcaldes y concejales de la Concertación en el país. Después de la elección, fue proclamada candidata a la Presidencia de la República por los partidos PPD y Socialista. El 15 de enero de 2006, en segunda vuelta electoral y con el 53.49% de los votos, Michelle Bachelet se convierte en la primera mujer electa Presidenta en la historia republicana del país¹⁷².

f) Programa de gobierno

Su programa de gobierno titula en su primera página “estoy contigo” y en su introducción menciona que se realizó en base a una reflexión y una consulta ciudadana, que reúne diversos planteamientos y requerimientos de la población, poniendo énfasis en que su proyecto se enfocará en cinco áreas temáticas que reflejan las prioridades del futuro gobierno, como lo son: una nueva red de protección social, condiciones para un salto al desarrollo, un programa para mejorar la calidad de vida de los chilenos, el combate contra la discriminación y la exclusión, y un nuevo trato para los ciudadanos en todos los aspectos de la acción pública.

En el apartado “proteger a nuestra gente” manifiesta que durante muchas décadas los chilenos han soñado con la idea de “cruzar el umbral del desarrollo”, en ese sentido destaca que para poder crecer, también se requiere mayor libertad y más justicia e igualdad. Enfatizando que la desigualdad es el principal escollo que la sociedad debe enfrentar para poder ser un país desarrollado.

“Crecer con igualdad ha sido el lema bajo el cual la Concertación ha luchado desde sus orígenes y es el objetivo que nos ha mantenido unidos mucho después del fin de la dictadura. Crecer con igualdad ha sido la estrategia de desarrollo que ha impulsado a los tres gobiernos de la Concertación. Este objetivo se ha traducido en la prioridad que los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos asignaron a las políticas sociales y en el empeño que

¹⁷² Icarito. (S/A). Michelle Bachelet Jeria. 2 de septiembre, de Copesa Sitio web: <http://www.icarito.cl/2010/03/237-8966-9-bachelet-jeria-michelle.shtml/>

pusieron en prevenir la inestabilidad económica que perjudica a los más pobres y a la clase media”¹⁷³.

De esta forma, apunta que los gobiernos de la Concertación “triplicaron el gasto social” entre 1990 y 2005, llevándolo a representar el 70% del gasto público total, transformándolo en políticas sociales. En efecto, remarcan que el gobierno de Patricio Aylwin concentró sus esfuerzos en recuperar los beneficios sociales que habían sido restringidos durante la dictadura y reconoció la existencia de grupos vulnerables como sujetos de la política social. El gobierno de Eduardo Frei impulsó reformas fundamentales en la educación y la administración de la justicia. Y el gobierno de Ricardo Lagos transformó políticas sociales en derechos, a través del seguro de cesantía, el sistema Chile Solidario y el Plan Auge.

Así, manifiestan que el Estado es fundamental para luchar contra las desigualdades, de modo que para generar mayor equidad, este tiene que aplicar sus recursos con eficiencia y exigir esfuerzo y compromiso de sus autoridades y funcionarios. “Un Estado burocrático y lento, vulnerable a las presiones de los grupos de interés o soberbio ante a la ciudadanía, es incapaz de reducir las desigualdades. Un Estado eficaz y honesto es un componente imprescindible en la construcción de un país más justo”¹⁷⁴.

En este mismo capítulo hace hincapié en distintas cosas que tienen que ver respecto a las políticas educacionales, de salud, laborales, inclusión laboral de las mujeres, empleo juvenil, perfeccionamiento del seguro de cesantía, capacitación laboral, entre otras.

Ahora bien, en lo que respecta a la temática respecto a “el salto al desarrollo” hace hincapié en políticas fiscales y financieras; en el rol de las pymes, las políticas para el impulso de ellas; y el desarrollo de un ecosistema de emprendimiento e innovación. De igual forma, pone énfasis en una serie de cuestiones relativas a una nueva política ambiental; y también relativas a cada sector económico de gran relevancia para Chile, como es el caso de la minería; seguridad ciudadana; deporte y recreación; y reformas al Estado, entre otros ítems.

¹⁷³ Michelle Bachelet Jeria. (18 de octubre 2005). Programa de gobierno de Michelle Bachelet. Programa de gobierno, 1, 102. El Mercurio, De El Mercurio (emol, especiales) Base de datos. Página 9

¹⁷⁴ *Ibíd.*, p. 10.

g) Su programa en marcha

Garretón dice que el gobierno de Bachelet, en una primera etapa, se caracterizó por no lograr imponer una agenda clara que diera cuenta respecto a qué quería proponer, en relación al Estado de protección. Además, fue sorprendido por una serie de movilizaciones planteando temas o problemas no considerados en el programa, a la cual se le conoció como la “revolución pingüina”, que fue una movilización, liderada por estudiantes secundarios, que se inició a los pocos meses que asumiera la cuarta administración concertacionista, la cual tuvo gran impacto en toda la sociedad chilena y caló hondo, haciendo una reflexión profunda a la sociedad de ese entonces sobre el modelo económico que regía y cómo los distintos gobiernos lo avalaban sin hacer mayores modificaciones estructurales que cambiaran el sistema.

Según el sociólogo, las principales demandas de los estudiantes se orientaron a generar cambios profundos en la estructura normativa (cambiar la Ley Orgánica Constitucional heredada de la dictadura) y en la gestión del sistema. De modo que lo que buscaban era lograr garantizar un papel activo del Estado, reducir los mecanismos de mercado y mejorar la calidad de la educación y la equidad dentro del sistema.

En respuesta, la administración bacheletista creó un Consejo Asesor formado por un representante de los diferentes sectores del sistema educativo con el fin de promover una reforma, el cual entregó un informe diagnóstico con propuestas en diciembre del mismo año, que se tradujo en la elaboración del proyecto de Ley General de Educación (LGE) para reemplazar a la Ley Constitucional (LOCE). Luego de largos debates parlamentarios, el gobierno, arrinconado por la derecha opositora, por las Iglesias y los agentes privados de educación, forzó a los partidos de la Concertación a aprobar una ley en la que se cedía frente a la oposición en cuestiones emblemáticas, relativas al lucro en la educación, el papel de la educación pública y la estructura misma del sistema educacional. A juicio de Garretón, la nueva ley significó algún grado de mejoramiento de la cuestión educacional, ámbito que desde esas movilizaciones pasó a ser prioritario en la opinión pública¹⁷⁵.

Luego observa un segundo tiempo en su administración que estuvo marcado por el impulso del sistema de protección social, en diversas áreas, que consideró también una reforma al

¹⁷⁵ Garretón. *óp. cit.*, 144 y 145

sistema previsional, puesto que una de las principales críticas a este sistema -heredado de la dictadura- apuntaban a que precisamente a su esencia, giraba en torno del sistema de capitalización individual y el marco desregulado en que se crearon las AFP, lo que cercenó derechos previos de los trabajadores.

Según el investigador, la reforma previsional de Pinochet se caracterizó por cuatro elementos principales: la capitalización individual, a través de una cuenta en que se depositan las cotizaciones de cada trabajador; la administración privada de fondos, a través de las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP), que junto con recaudar las cotizaciones realizan inversiones con ellas; la libertad de elección por el trabajador contribuyente tanto de su AFP y del posible traslado de una a otra, como de los fondos de inversión o del tipo de pensión que se va a recibir, y la “solidaridad de base” como la definía el principal impulsor de la reforma, el ministro José Piñera, consistente en una pensión mínima, de vejez, invalidez y muerte¹⁷⁶.

Es por esto que en un principio el objetivo principal de los sectores críticos fue la eliminación del sistema de capitalización individual (AFP) y el regreso a uno contributivo solidario, que es el que sustenta principalmente los sistemas previsionales en todo el mundo. Para estos sectores, el imperativo de la reforma era reparar la injusticia original del sistema impuesto por la dictadura. Para ello la ex mandataria derivó esta propuesta en una comisión de expertos, denominada Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional, que si bien avanzó en varios puntos, no consensuó una propuesta concreta respecto a este sistema heredado; de hecho, hasta el día de hoy sigue vigente en Chile.

Así, a fines del año 2006, la presidenta Bachelet presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma del sistema previsional basado en las recomendaciones de su comité de expertos y correspondió al Congreso Nacional analizar, en el curso del proceso legislativo, la iniciativa legal de modificación presentada por el Ejecutivo. El 11 de marzo de 2008 Bachelet firmó el decreto que promulgaba la Ley N° 20.255 de reforma del sistema previsional chileno. Dicho marco legal creó un Sistema de Pensiones Solidarias que beneficia a quienes no lograron ahorrar lo suficiente para financiar su pensión digna; también está orientada para quienes no tienen ahorros previsionales e integran el grupo más vulnerable de la población,

¹⁷⁶ *Ibíd.*, p. 150.

quienes gradualmente accederían a una Pensión Básica Solidaria (PBS); y, por último, para aquellos que hayan cotizado en algún sistema previsional, pero de manera insuficiente, donde el Estado entrega un suplemento para incrementar la pensión, denominado Aporte Previsional Solidario (APS) y, de esa forma, asegurar un monto máximo a recibir.

Según el sociólogo, ella modificó ciertos aspectos, pero mantuvo la esencia de un sistema de pensiones contributivas (y por tanto la continuidad con la matriz neoliberal) administrado por empresas privadas y basado en la capitalización individual.

“En la formulación de la reforma previsional se mantienen los rasgos básicos de lo que fueron las políticas de los gobiernos de la Concertación en materia del modelo socioeconómico heredado de la dictadura. Primero, la presencia contradictoria de un sentido ético y valórico para transformar la sociedad enfrentado al temor o incapacidad de afectar los intereses económicos y financieros de las élites económicas; predominando al final una visión pragmática en que se imponen los criterios del Ministerio de Hacienda. Segundo, la oposición cerrada de la derecha a todo proyecto que altere el statu quo, lo que lleva a negociaciones en que no pueden modificarse los núcleos duros del mismo. En este caso, la mantención de un sistema privado sin una institución estatal en el ámbito. Tercero, los cambios significativos en beneficio de los sectores pobres o vulnerables no van acompañados de una transformación estructural del sistema”¹⁷⁷.

Como un punto adicional al comentario de Garretón, observamos que la sociedad chilena de a poco ha comenzado a visibilizar esta problemática. Es más, en los últimos años, ya sin un miedo inminente de que puedan ser callados por grupos militares o de poder, han surgido distintas opiniones críticas respecto a estas cuestiones, ya sea en el ámbito educativo, de acceso a la salud, o de previsión social. Puesto que antes la población en general no entreveía –o muchos no entendían- los cambios estructurales que se hicieron en el sistema durante la dictadura. Esto, por la poca información sobre cómo operaría el sistema. Hoy, en cambio, se ve una ciudadanía mucho más empoderada y que es capaz de sacar la voz en temas ambientales, educativos, de descentralización, laborales, entre otros.

Es importante consignar que en el anterior sistema de pensiones existía un sistema de Cajas de Previsión, en la cual los trabajadores cotizaban de acuerdo a la rama de la industria a la

¹⁷⁷ *Ibíd.*, p.160.

cual pertenecían. Ellas operaban de acuerdo al método que se conoce hoy como "de reparto", y se basaba en descontar una imposición a los trabajadores que pertenecían a ella, para así pagar la pensión de los jubilados de dicha caja. Según cifras, para el año 1968 existían en Chile cerca de 30 cajas previsionales, las cuales operaban por medio de más de 2.000 leyes de la República. Cada año el Congreso despachaba distintas leyes para normar, establecer o fijar pensiones para grupos o personas en particular, o bien para el sistema en general. Es así como por ejemplo el año 1968 se publicaron 1234 leyes previsionales.

En efecto, al cambiar el sistema (antes estatal) muchos fueron trasladados al sector privado sin siquiera consultar su opinión o mostrar un acuerdo respecto a este decreto que permitía el funcionamiento de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son las instituciones financieras privadas encargadas de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones. El sistema las consideraba "necesarias" lograr la capitalización individual, que se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos para sostener una pensión cuando decida jubilar.

No obstante, con el sistema impuesto, todos trabajadores dependientes están obligados por ley a cotizar en el Sistema de Pensiones, con el fin de ahorrar para la pensión de vejez. En este caso es el empleador el que descuenta el 10% de la renta imponible, el que va de manera íntegra a la cuenta del sistema de capitalización individual. A esto se suma la comisión que cobra la AFP (1,20% promedio) por administrar los fondos, más el valor del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (1,41%). El sistema también da la posibilidad de cotizar a trabajadores independientes y a aquellas personas que no reciben ingresos, como es el caso de jóvenes, dueñas de casa o mujeres que deseen recibir el Bono por Hijo. Es lo que se conoce como Afiliación Voluntaria. Las cotizaciones de los trabajadores dependientes son pagadas mensualmente por el empleador, mientras que las cotizaciones de trabajadores independientes y de afiliados voluntarios las debe pagar el cotizante o un tercero (cónyuge, padres, hijos).

Es así que en el país no existen mayores alternativas a este sistema -las hay, pero mayormente las utilizan las personas de mayor poder adquisitivo, que son las que ofrece las empresas de seguro (seguro APV), o bien, benefician a la población de más bajos ingresos, como el pilar solidario (para personas que nunca cotizaron en su vida), Instituto de

Previsión Social (IPS); también están aquellas que benefician a un sector de la sociedad, como a los uniformados con la Caja de Previsión de Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección de Previsión de Carabineros y Gendarmería (Dipreca)-.

Por eso, en los últimos años se ha fortalecido el debate respecto al modelo de país que Chile pretende apostar, y que definiría al país con el próximo presidente que llegue a La Moneda en 2018.

En ese sentido, llama la atención lo sucedido en las elecciones que dieron por finalizado las dos décadas de gobiernos concertacionistas, donde la ciudadanía decidió abandonar los postulados de la centroizquierda y decidió apostar por la centroderecha de Sebastián Piñera. Más adelante lo volvería hacer por Michelle Bachelet, en 2014, quien llegaría a La Moneda con un discurso mucho más social y una alianza de varios sectores de izquierda, como es el Partido Comunista, que buscaría avanzar en distintos ámbitos. Entre ellos, la gratuidad de la educación (que caló hondo en su primer mandato, al ser exigido por multitudinarias marchas de estudiantes) la cual fue otorgada al 50% de la población con menos recursos en el país, tras el aumento presupuestario; y también reformas en distintos ámbitos, por ejemplo, el Código de Aguas, que hoy entrega derechos de perpetuidad, impulsándose un cambio que vaya orientado a concesionar por 30 años dichos derechos. Dicha reforma sigue entrampada en el Congreso tras la campaña del terror que impulsan los rubros que exigen que sus derechos no sean removidos sobre ellas.

De igual forma, durante su último mandato, cuyo bloque político se denominó Nueva Mayoría, otra vez la ciudadanía mostraría su descontento respecto al tema de la previsión social, que llevó a que la mandataria enviara en un tiempo récord tres propuestas al Congreso sobre una “reforma constitucional que crea un Consejo de Ahorro Colectivo”, un “proyecto que introduce cambios regulatorios al sistema de capitalización individual” y un “proyecto que crea un nuevo ahorro colectivo, aumenta la cobertura del sistema de pensiones y fortalece el pilar solidario”. Ninguna de ellas alcanzó a ser aprobada durante su administración. Pero eso queda para otro análisis.

h) Apreciación de resultados

Según observa Garretón, la última administración de la Concertación realizó “cuantiosos avances en materia de protección social y agenda de género”. De igual modo, mantuvo

políticas macroeconómicas y políticas sociales de carácter neoliberal, con algunas modificaciones, en general, respondiendo a presiones y movilizaciones sociales y paliando los efectos de la crisis internacional con los recursos ahorrados del cobre; creó instancias de expresión de la sociedad civil para resolver conflictos y consensuar políticas públicas; insertó más a Chile en el contexto latinoamericano.

“Sin embargo, hay dos grandes déficits en el período. Por un lado, y esto fue permanente en los gobiernos de la Concertación, no fueron superadas las dos grandes herencias de la dictadura que encierran a Chile en una época postpinochetista sin el salto a la sociedad democrática del bicentenario: la institucionalidad política cuyo eje es la Constitución y que permite el veto de la derecha, sector civil de apoyo de la dictadura, y un modelo económico intrínsecamente desigualitario, que impide la labor dirigente y redistributiva del Estado. Por otro, y esto es particular del gobierno de Bachelet, por primera vez se produjeron escisiones importantes en la coalición de gobierno y, por primera vez, la coalición de la Presidenta perdió las siguientes elecciones presidenciales, lo que es sin duda un fracaso político”¹⁷⁸.

CAPITULO VI: EVALUACIÓN DE SUS POLÍTICAS

I. Análisis de sus medidas

El 11 de marzo de 2010, la Concertación dio cierre a casi dos décadas de gobierno, tras la victoria del candidato presidencial de la coalición de centroderecha, Sebastián Piñera. Ciertamente el legado de sus gobernantes marcó un hito en la historia del país, dado sus avances en políticas sociales y económicas, y también por el sello de sus mensajes.

De hecho, en lo que respecta a la evaluación ciudadana, las encuestas de opinión dan cuenta que la mayoría de los chilenos valoró la tarea realizada por las cuatro administraciones, siendo altamente evaluadas la gestión del presidente Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, quien inmediatamente, después del término del gobierno de Piñera, asumió por segunda vez el liderazgo de La Moneda.

En efecto, el desempeño de las cuatro administraciones fue bien visto por los chilenos dada la estabilidad política y social; el fortalecimiento institucional; y crecimiento económico sostenido, pese a que en el transcurso de las administraciones de Frei y Lagos se debió

¹⁷⁸ Garretón. *óp. cit.*, 161.

blindar al país frente a las crisis económicas y financieras internacionales que sacudieron a los mercados asiáticos.

VARIABLES MACROECONÓMICAS CLAVES, 1974-2009

	Pinochet	Concertación	Aylwin	Frei R.	Lagos	Bachelet
	1974-89	1990-2009	1990-93	1994-99	2000-05	2006-09
Crecimiento del PIB (%)	2,9	5	7,7	5,4	4,3	2,9
Crecimiento de las exportaciones (%)*	10,7	7,2	9,6	9,7	6,3	2,4
Tasa de inflación (%)**	79,9	7	17,7	6,1	2,9	4
Tasa de desempleo (%)***	18	8,7	7,3	7,5	10,7	8,7
Salario real (1970=100)	81,8	129,8	99,8	123,4	140	153,6
Tasa de inversión neta (% del PIB en \$2003)****	4,5	12,9	10,7	14,2	11,7	15,1
Superávit fiscal efectivo (% del PIB)	0,3	1,7	1,9	1,2	0,6	4
Superávit fiscal estructural (% del PIB)*****	n.d	0,7	0,4	0,8	0,7	0,4
Crecimiento de la población	1,6	1,3	1,8	1,5	1,1	1

Fuente: Tomado de Ffrench-Davis (2008), basado en Banco Central, DIPRES e INE.

*Tasas acumulativas anuales de crecimiento del PIB y de las exportaciones

**Diciembre a diciembre.

***Promedio anual de tasas de inflación y desempleo; incluye los programas de empleo de emergencia.

****Tasa de inversión bruta menos la depreciación del capital.

***** Estimación oficial que utiliza como base el PIB tendencial, lo que implica subestimar el PIB potencial y el ingreso tributario estructural.

PIB PER CÁPITA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR HOGARES, 1974-2009 (TASAS

ANUALES DE CRECIMIENTO REAL, %)

	Crecimiento PIB per cápita (1)	Razón Q5/Q1 (2)	Índice de GINI (3)
1974-81	1,5	15,1	51,9
1982-89	1,2	20,2	56,7
1990-91	4	18,5	56,3
1992-1995	7	13,7	50,9
1996-1998	4,3	15,9	53,2
1999-2009	2,2	15,3	52,8
1990-2009	3,6	15,4	52,8

Fuente: Basado en Ffrench-Davis (2008, capítulo I) y en Cuentas Nacionales del Banco Central. La columna (1) está basada en series a precios constantes del año 2003. Las columnas (2) y (3) están basadas en la Encuesta de Ocupación y Desocupación de la Universidad de Chile para Santiago.

II. Resultados sociales

El economista y ex militante del Partido Socialista, Gonzalo Martner, quien hoy se desempeña como director del Centro de Políticas para el Desarrollo (CPD) de la Universidad de Santiago de Chile, en la primera parte del libro de Santiago Escobar, escrito en conjunto con varios autores, denominado *En Chile en la Concertación* habla respecto de Algunos resultados de la política social chilena desde 1990 donde pone énfasis en varios aspectos.

Uno de sus primeros planteos habla sobre “imposición” de un modelo de desarrollo “liberal-autoritario”, que estuvo focalizado en la “liberalización del mercado de bienes y de capitales”, una relación salarial “desregulada e informalizada” y un modelo productivo de “empresa jerárquica” y centralizadora en pocos conglomerados de gran tamaño y de micro y pequeñas empresas precarizadas, donde la fuente de crecimiento fueron básicamente las exportaciones. Todo ello se dio en un contexto de “estancamiento de consumo promedio y de disminución del gasto público”, así como “la privatización parcial o total de los servicios sociales de educación, salud y pensiones, de modo que estos procesos deterioraron la distribución del ingreso del consumo”.

Luego, a partir de 1990, dice que la estrategia de crecimiento “con equidad” tuvo importantes resultados. Entre ellos, “duplicó el crecimiento” del período de dictadura y “redujo” la brecha con los países desarrollados, acompañado de un mejoramiento de la magnitud y del impacto de las políticas sociales.

En ese sentido, revela que la agenda de la Concertación buscó avanzar en distintos tópicos, pero su prioridad fueron los temas sociales, como también en restablecer moderadamente la presión tributaria existente en la década de 1980; hacer más competitivo y regular con mayor intensidad el mercado de bienes y los monopolios naturales, y modificar en parte el modelo productivo a nivel de la empresa, aumentando el costo del despido y formalizando el mercado de trabajo¹⁷⁹.

Así, destaca que los elementos principales de la nueva política económica y social aplicada, han sido:

¹⁷⁹ Escobar, Santiago y varios autores. (2009). *En Chile en la Concertación* (414). Santiago, Chile: Friedrich-Ebert-Stiftung. Páginas 159 y 160.

- Una política de superávit fiscal (en la década de 1990) y de superávit fiscal estructural anticíclico (desde 2000), complementada con la creación, gracias a los excedentes fiscales, de fondos de garantía de pensiones, de estabilización social, de combustibles, con un leve incremento del gasto público del 20,4% del PIB en 1990, al 21,2% en 2008.
- Disminución desde el 50% al 40% y luego su mantención del tramo más alto del impuesto a la renta (de las personas); el aumento del 10% al 17% del impuesto a las utilidades (Primera categoría/ empresas); la aplicación más tarde de un royalty minero (2005), luego de graves pérdidas tributarias por un largo período de sustancial subtributación de la minería privada, no abordada por las autoridades económicas en nombre de la promoción de inversiones en el sector, y el aumento del IVA desde un 16% a un 19%, lo que junto a la disminución de la evasión ha redundado en un incremento de la presión tributaria (18,6% del PIB en 2008, contra 13,8% en 1990).
- Apertura comercial unilateral (rebajas sucesivas del 20% al 6% del arancel parejo) y luego múltiples acuerdos de libre comercio, primero con América Latina y Canadá en los años 1990 y luego con Estados Unidos y la Unión Europea en 2003, con cláusulas laborales y ambientales, y posteriormente con diversos países asiáticos.
- Una política concertada de ingresos: reajuste de salarios públicos, la fijación del salario mínimo y asignaciones familiares negociados anualmente con agrupaciones sindicales.
- Fortalecimiento de algunas de las regulaciones sobre el sector privado, por ejemplo, fijación tarifaria en lo que se refiere a servicios básicos.
- Construcción de espacios de colaboración público-privada, especialmente en el sistema de concesiones de obras públicas y servicios sanitarios. Esto, según Martner, ha permitido realizar importantes inversiones financiadas privadamente en base a los ingresos futuros constituidos por las tarifas pagadas por los usuarios y no ya por los impuestos generales, con un efecto distributivo no medido presumiblemente positivo, dada la composición por estratos de ingresos del consumo de los hogares.

- Fortalecimiento del acceso a la educación, mediante la reforma educacional y su fuerte incremento de infraestructuras e insumos educativos; la jornada escolar completa y la educación obligatoria de 12 años; los programas de reforzamiento de la enseñanza en lectoescritura y matemáticas; la ampliación de los sistemas de becas para educación superior y el fortalecimiento de los sistemas de capacitación de jóvenes y adultos, que ha permitido lograr incrementos en la productividad del trabajo, aunque se mantenga un sistema excesivamente segmentado de educación y formación profesional.
- Una reforma en salud que otorga mayor énfasis a la salud primaria y preventiva y establece progresivamente garantías exigibles por toda la población con un sistema de acceso en condiciones de calidad, oportunidad y cobertura financiera con copagos restringidos para los principales problemas de salud en una primera fase, y para la mayoría de ellos en etapas sucesivas.
- Construcción progresiva de un sistema de protección social a grupos excluidos, con capacidad de impactar en la estructura de ingresos y de proveer garantías crecientes a la población más vulnerable a la hora de enfrentar la enfermedad, la cesantía y la vejez¹⁸⁰.

Ante esto, el economista asegura que el bloque centroizquierda logro dinamizar la actividad económica mediante un mayor crecimiento de la demanda interna tanto en inversión como en consumo.

Según su análisis, entre 1973 y 1989, el crecimiento fue impulsado por las exportaciones y la inversión, mientras en promedio el consumo de los hogares y del gobierno permaneció estancado, especialmente desde 1982, con consecuencias negativas para el bienestar de una mayoría de la población. En cambio, a partir de 1990, precisa que el crecimiento se debió al consumo de los hogares, que experimentó una mejoría considerable al elevarse sistemáticamente durante un período prolongado y a una tasa que ha permitido más que duplicar.

Agrega, también, que este crecimiento del consumo es incluso levemente superior a la del PIB, en contraste con su estancamiento previo, generando un patrón de comportamiento

¹⁸⁰ *Ibíd.*, p.161, 162 y 163.

más equilibrado entre los grandes componentes de la demanda agregada. De igual forma, admite que el consumo de gobierno (y con él el gasto en educación y salud) también se recuperó sustancialmente, aunque con tasas de expansión promedio moderadas e inferiores al crecimiento del gasto global y del consumo de los hogares.

No obstante, a partir de 2006, hubo un comportamiento mucho más dinámico del consumo de gobierno. Mientras entre 1973 y 1990 la inversión creció menos, a precios constantes, que las exportaciones –lo que también ocurrió en la década de 1990– desde el año 2000 la formación de capital se incrementó a un alto ritmo anual promedio, superior al de las exportaciones, manteniendo el consumo de los hogares un buen ritmo de crecimiento, especialmente desde 2006 en adelante. A juicio del economista, con sus políticas formuladas se configuró un cambio en el modo de crecimiento de la economía, que dejó de depender casi exclusivamente de las exportaciones y la inversión.

**GASTO SOCIAL DEL PAÍS, EN RELACIÓN AL RESTO DE LOS PAÍSES DE LA
REGIÓN ES PAÍSES DE AMÉRICA LATINA**

	Gasto público social en países de América Latina (a)			
	Per cápita en dólares del 2000		% del PIB	
País	1990/1991	2005/2006	1990/1991	2005/2006
Argentina	1103	1587	18,1	18,8
Brasil	604	917	18,1	23
Chile	380	719	12	12,4
Cuba	864	1220	27,6	33,2
Guatemala	49	123	3,7	7,7
Honduras	80	152	7,5	11,4
México	355	724	6,5	10,6
Nicaragua	45	95	6,6	11,1
Paraguay	45	121	3,2	8,7
Uruguay	820	1370	16,8	20,9

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2007.a) Incluye el gasto público en educación, salud, nutrición, seguridad social, trabajo y asistencia social, vivienda, agua y alcantarillado.

Paralelamente, sostiene que las reformas neoliberales implementadas durante la dictadura, dejaron un preocupante grado de pobreza y de desigualdad distributiva. De hecho, dice que la encuesta de ingresos de 1987 indicaba que un 45,1% de la población se encontraba en situación de pobreza, y que la distribución del ingreso había experimentado un importante retroceso respecto de la década del setenta.

Por eso, a juicio de Martner lo que urgía entre los concertacionistas fue “reestablecer el nivel del gasto social”, que había experimentado una fuerte caída en la década de 1980, de modo que se llevaron a cabo importantes reformas en todo ámbito de estructuras; como el establecimiento del seguro de desempleo en 2002; la reforma de la salud en 2004 y la reforma del sistema de pensiones y de protección a la infancia en 2006.

Pues bien, para el economista, todas estas medidas fueron configurando progresivamente un sistema de protección social. Dentro de ellas, destaca al Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), creado en 1990, cuyo propósito fue financiar –en todo o en parte– proyectos y actividades de desarrollo mediante fondos concursables. Trabaja en comunas y territorios focalizados por su alto grado de concentración de pobreza y/u otros índices de exclusión social.

Posteriormente, en 1994, se crea el Programa Chile Barrio, el cual buscaba erradicar los campamentos y otorgar subsidios asociados. En esa línea, Martner indica que el Fosis diseñó un Programa de Reinserción Laboral y Empleo, que apoyó iniciativas de emprendimiento económico individual para mejorar los ingresos de personas pobres de diferentes segmentos de edad. Así, a partir de 2001, este organismo inició en cuatro regiones un programa piloto de apoyo psicosocial denominado Puente, entre las familias y sus derechos, que atiende a cada grupo familiar en su hogar, con un método y sistema de seguimiento estandarizados, por un período de dos años.

En 2002, bajo el mandato de Lagos, se crea el sistema Chile Solidario que atendería a todo el universo de extrema pobreza detectado hasta ese momento: 210.000 familias y 15.000 adultos mayores solos, sin previsión social, es decir, alrededor de 850.000 personas en situación de pobreza extrema, según lanza el economista. A partir de esa fecha, el Programa Puente, del Fosis con las municipalidades, se convirtió en la puerta de entrada al sistema de protección social Chile Solidario. Según revela, su aplicación se extendió a todo el país,

abarcando 332 comunas en convenio con igual número de municipios. A partir del año 2003, los diferentes programas del Fosis fueron actualizados para atender preferentemente a las familias incluidas en el dispositivo de Chile Solidario y cumplir con las 53 condiciones mínimas establecidas por el Programa Puente, cuyo cumplimiento les significa dejar atrás las condiciones de pobreza extrema en que vivían al momento de ser contactadas e invitadas a participar en el Programa.

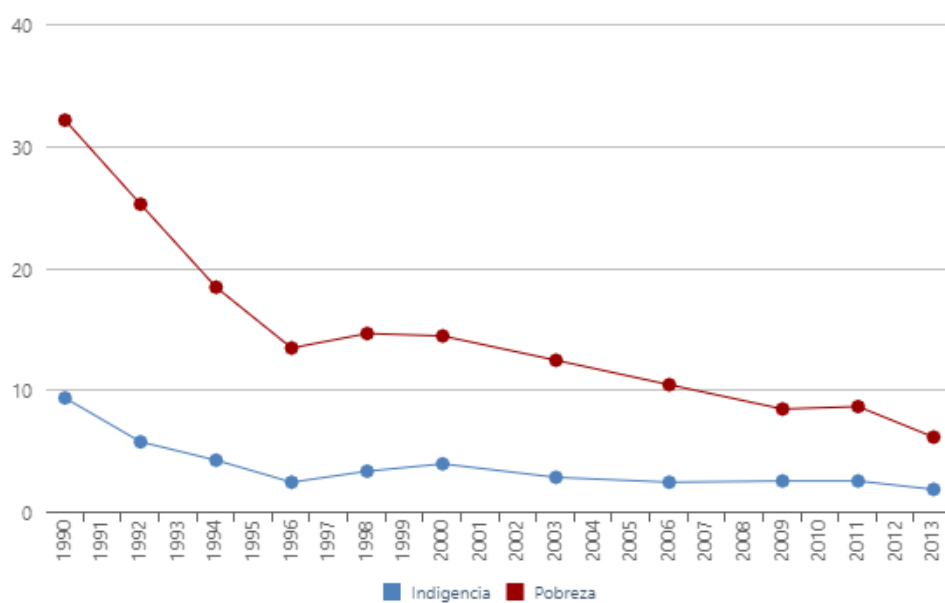
Consecutivamente, en 2004, se promulgó la Ley de Chile Solidario, que consideró que las familias participantes del Programa Puente reciban por tres años un apoyo del Estado consistente en subsidios específicos e incentivos para mantener las metas logradas por las familias. En esa línea, Martner precisa que los recursos se traspasaban a los beneficiarios de los programas a través de organismos ejecutores especializados, quienes se adjudicaban los recursos “mediante procedimientos transparentes y claramente normados, siendo el principal las licitaciones públicas, las cuales se calendarizan regionalmente”.

En esa línea, el economista expone que el primer paso de este programa fue seleccionar a familias de extrema pobreza –en base a la información de la Ficha CAS y luego la Ficha de Protección Social que aplican los municipios– e invitarlos a incorporarse. En una primera etapa, participan en el Programa Puente y se comprometen a trabajar con un/a profesional del área social denominado “apoyo familiar”, el cual los acompañaba durante 24 meses. Asimismo, añade que el gobierno entrega un Aporte Solidario (bono monetario) –de carácter decreciente– a las mujeres jefas de hogar y/o a la pareja del jefe de familia. Después de los 24 meses en el Programa Puente, éstas recibían un Bono de Egreso durante tres años, por un monto equivalente a un Subsidio Único Familiar mensual.

En forma paralela al Programa Puente, dice que también las familias recibían en forma preferencial los subsidios monetarios tradicionales del Estado. Entre ellos, el Subsidio Único Familiar (SUF, creado en 1980), para los niños y niñas menores de 18 años; Pensión Asistencial de Vejez (PASIS, creada en 1980), para los mayores de 65 años, reemplazada por la reforma de pensiones a partir de 2008; Pensión Asistencial de Invalidez (creada en

1980) para quienes corresponda; Subsidio de Agua Potable (SAP, creado en 1992), para cubrir el 100% de la cuenta hasta 15 metros cúbicos de consumo mensual¹⁸¹.

POBREZA Y DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN CHILE



Fuente: Cepal¹⁸²

¹⁸¹ *Ibíd.*, p.161, 162 y 163.

¹⁸² Cepal. CEPALSTAT | Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas

III. Ámbito laboral

En relación al funcionamiento del mercado de trabajo, Martner detalla que el gobierno de Patricio Aylwin encareció el despido, aumentando la indemnización de un mes por año trabajado, desde un tope de 5 a uno de 11 meses.

Asimismo, cuenta que en el gobierno de Ricardo Lagos se estableció un seguro de desempleo y se mejoraron las condiciones de formación de sindicatos y de negociación colectiva. A su vez, el desempleo disminuyó hasta 1997, pero luego se deterioró como consecuencia de una política macroeconómica que amplificó en exceso los efectos de la crisis asiática de 1998-99, y recuperarse recién a partir de 2004, acompañando el ciclo económico en un rango de 7,5 -10% de la fuerza de trabajo.

De igual forma, expone que se pasó de 4,45 millones de ocupados a 6,45 millones, con dos millones de empleos creados entre 1990 y 2007. La tasa de participación laboral de mujeres también aumentó, pero de forma considerable: lo hizo de 33 a 43% entre 1990 y 2006, siendo la de hombres de 73%. El empleo en actividades de baja productividad disminuyó de 39% a 31%, lo que revela un retroceso de las actividades informales en el país¹⁸³.

IV. Resultados redistributivos

De acuerdo a Martner, ellos son el “talón de Aquiles” del desempeño económico-social de la Concertación, dada las múltiples iniciativas que quisieron llevar adelante, pero no pudieron por distintos motivos.

Es más, advierte que ante la necesidad de forjar consensos para el despacho de las leyes se llegó a “compromisos muchas veces inconvenientes” para el interés general.

Dentro de ellos menciona la no modificación suficiente de la ausencia de derecho efectivo a la negociación colectiva de los asalariados, especialmente a nivel superior a la empresa; la aprobación de algunas normas de regulación de las tarifas de servicios básicos que han permitido elevadas utilidades a los prestadores privados; la persistencia de normas poco efectivas de control ambiental que afectan la calidad del aire y de las aguas; la aceptación en 1993, a cambio de la mantención de la reforma tributaria de 1990, del “financiamiento compartido” en la educación que agravó la segmentación escolar; la no modificación de la

¹⁸³ *Ibíd.*, p.180.

ley que otorga subsidios a las escuelas privadas sin contrapartidas suficientes en materia de derecho a la educación y fragmenta la educación pública en municipios que poco pueden o logran ocuparse de ella; la no modificación, sino parcialmente en 2005, de la política de concesiones mineras prácticamente sin pago por el uso del recurso; la mantención de las cuotas de pesca sin licitación ni pago adecuado por el uso de los recursos del mar; la disminución injustificada en 2001 del impuesto a la renta de los más ricos a cambio de un reforzamiento de la fiscalización de la evasión tributaria; el abandono en 2005, a cambio de la aprobación del régimen de garantías en salud, del fondo de compensación de riesgos entre sistemas de seguros de salud.

Simultáneamente, también advierte que prevalecieron diferentes convicciones en la propia coalición de gobierno respecto a la magnitud de la política redistributiva necesaria para lograr grados significativos de inclusión social. Por una parte, estuvieron quienes no otorgaron importancia alguna a la disminución de la brecha distributiva; y, por otra, había quienes creían necesario establecer un Estado democrático y social de derecho con un sistema de impuestos-transferencias sustancialmente mayor al existente para acortar dicha brecha. A su juicio, todo lo anterior explica que en Chile aún persistan dichas desigualdades.

V. Apertura comercial

En su análisis denominado *Trayectoria del capitalismo neoliberal en Chile*, el antropólogo Matías Calderón afirma que los diversos gobiernos de la Concertación continuaron y profundizaron el modelo económico neoliberal implementado en la dictadura. A su juicio, el modelo heredado dejó de ser percibido como resultado de un orden dictatorial ilegítimo, y se le concibe como una “estrategia legítima y beneficiosa para alcanzar el tan anhelado desarrollo”¹⁸⁴.

Una de esas estrategias fue la apertura comercial –aún en curso- que tuvo Chile con el mundo, pero fue una apertura bien distanciada del comercio regional. Vale decir, se trata de un proceso que se extiende desde que Pinochet decidió retirarse del Pacto Andino -(hoy Comunidad Andina, que se trata de un organismo regional constituido por 4 naciones:

¹⁸⁴ Matías Calderón Seguel. (2008). *Trayectoria del capitalismo neoliberal en Chile*. Tesis de grado, Extracto, 23. 2 de agosto, De Universidad Academia de Humanismo Cristiano Base de datos. Página 7.

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), dada las incompatibilidades entre las políticas económicas que tenía el país en ese entonces con este bloque- hasta la firma de diversos TLC que se llevaron a cabo durante la democracia con los partidos de la Concertación.

En la práctica, la estrategia tradicional ISI (Industrialización basada en la Sustitución de Importaciones) es reemplazada por la apertura de la economía a las importaciones, lo que implicó la reducción de las barreras existentes al ingreso de bienes importados al país. En efecto, después del 73, disminuyeron significativamente las tarifas a las importaciones y prácticamente se eliminaron las barreras no arancelarias, de modo que esto contribuyó a eliminar el régimen de comercio exterior existente previamente.

Así, el país comenzó su estrategia comercial a través de la apertura unilateral en la década de los ochenta. Durante el año 1988, rebajó su arancel de 20% a 15% parejo para todos sus productos. Luego, en la década de los 90, Chile complementa la apertura unilateral con acuerdos internacionales económicos bilaterales y multilaterales. En 1991 lo rebaja del 15% al 11%. En 2003 se termina de concretar una nueva rebaja en el arancel consolidado chileno el cual llega a un 6%. Como resultado de la estrategia de apertura comercial llevada a cabo en las décadas pasadas. A julio de 2012 el país contaba con 22 acuerdos comerciales con 60 países¹⁸⁵.

En consecuencia, todo lo anterior constituyó una simplificación para la actividad importadora, de modo que los chilenos de hoy acceden a una innumerable cantidad de productos del extranjero y a precios bastantes accesibles, dado que muchos de esos artículos llegaron pagando un impuesto mínimo.

De hecho, en el gobierno de Piñera se aprobó una reforma tributaria que permite que ellos aterricen con un arancel cercano a cero, en desmedro de la hoy casi inexistente actividad industrial. Esto dado la aplicación de estas políticas que mayormente golpearon a la industria nacional; entre ellas, de calzado, textiles, o artículos, pues les es imposible poder competir con productos que se producen a nivel industrial en países más avanzados. Cabe destacar que todos los Tratados de Libre Comercio de Chile fueron sancionados por ambas cámaras legislativas en el Congreso Nacional.

¹⁸⁵ Cea, Gonzalo. (2012). Impacto de la suscripción de TLC en la exportación de productos manufacturados de Chile. Tesis de grado, 1, 88. 7 de junio, De Universidad de Chile Base de datos.

**TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC) SANCIONADOS DURANTE EN LA
CONCERTACIÓN**

PAÍS	AÑO DE VIGENCIA	PRESIDENTE
Canadá	5 de julio, 1997	Eduardo Frei Ruiz Tagle
México	31 de julio 1999	Eduardo Frei Ruiz Tagle
Costa Rica	14 de febrero 2002	Ricardo Lagos
El Salvador	14 de febrero 2002	Ricardo Lagos
Guatemala	14 de febrero 2002	Ricardo Lagos
Honduras	14 de febrero 2002	Ricardo Lagos
Nicaragua	14 de febrero 2002	Ricardo Lagos
Unión Europea	1 de febrero 2003	Ricardo Lagos
EE.UU	31 de diciembre 2003	Ricardo Lagos
Corea del sur	1 de abril 2004	Ricardo Lagos
EFTA	1 de diciembre 2004	Ricardo Lagos
China	23 de diciembre 2006	Michelle Bachelet
Panamá	7 de marzo 2008	Michelle Bachelet

Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon)

Así, en esta lógica del modelo, la existencia de tarifas -o barreras- a las importaciones genera desincentivos en contra de la producción de bienes para el mercado externo. Por ende, la liberalización comercial modifica los precios relativos (que expresa la relación de cambio de un bien por otro) y estimula a los productores nacionales a elaborar bienes exportables (donde posea ventajas comparativas).

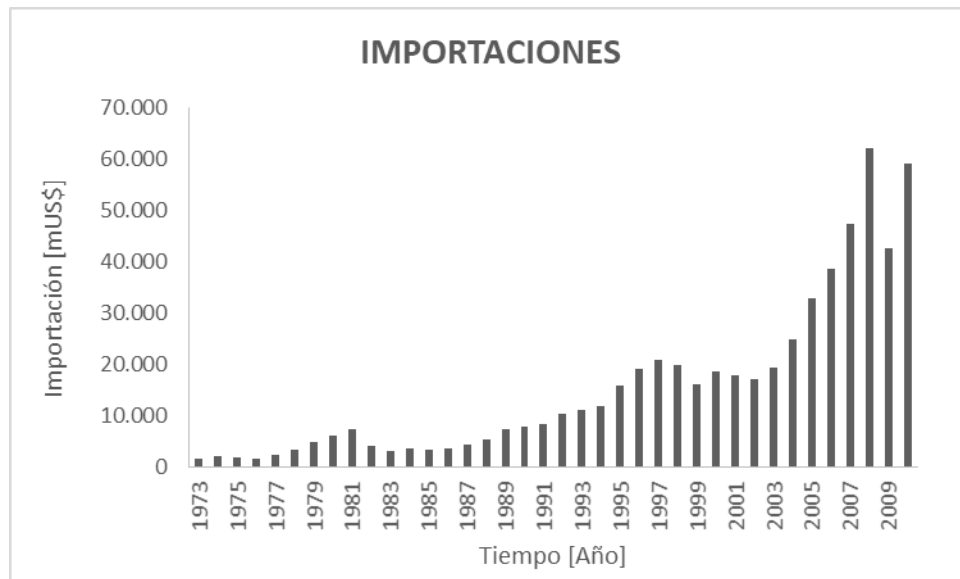
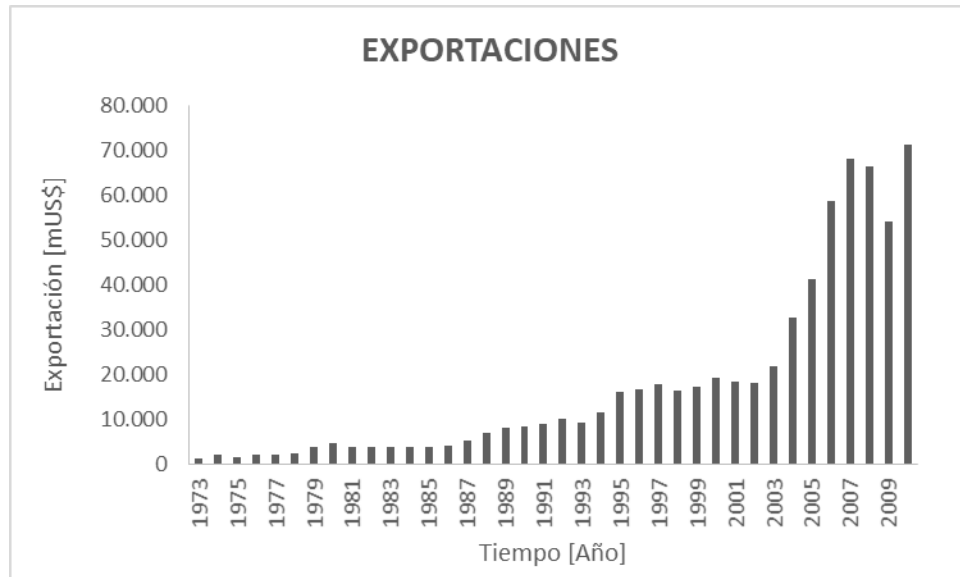
En el caso de Chile, el principal commodity exportable es el cobre, siendo el mayor componente de la canasta exportadora del país. En efecto, históricamente las exportaciones mineras han constituido en el motor de crecimiento de la economía chilena. Por eso, en línea de lo anterior, los TLC llegarían a asegurar un mejor acceso a los envíos chilenos, de modo que ellos han pasado a ser el componente central de la política comercial chilena.

EVOLUCIÓN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DESDE 1973 A 2010

RÉGIMEN MILITAR			CONCERTACIÓN		
AÑOS	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	AÑOS	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES
1973	1.309	1.447	1990	8.373	7.742
1974	2.151	2.016	1991	8.942	8.207
1975	1.590	1.708	1992	10.007	10.183
1976	2.116	1.655	1993	9.199	11.134
1977	2.186	2.417	1994	11.604	11.820
1978	2.460	3.243	1995	16.024	15.900
1979	3.835	4.708	1996	16.627	19.097
1980	4.705	6.145	1997	17.870	20.800
1981	3.837	7.318	1998	16.323	19.853
1982	3.706	4.094	1999	17.162	15.962
1983	3.831	3.171	2000	19.210	18.465
1984	3.651	3.654	2001	18.272	17.799
1985	3.804	3.229	2002	18.180	17.146
1986	4.191	3.436	2003	21.664	19.322
1987	5.303	4.396	2004	32.520	24.794
1988	7.054	5.304	2005	41.267	32.735
1989	8.078	7.233	2006	58.680	38.406
			2007	67.972	47.164
			2008	66.259	62.024

2009	54.004	42.571
------	--------	--------

Fuente: exportaciones e importaciones (million current US\$): Figures for 1870-2010 are from Díaz, Lüders, and Wagner (2016)¹⁸⁶.



¹⁸⁶ Base de datos de historia económica de América Latina. (S/A). Exportaciones e importaciones chilenas. 7 de septiembre, de Moxlad Sitio web: <http://moxlad-staging.herokuapp.com/home/es>

Pues bien, como se da cuenta en los gráficos, las exportaciones y las importaciones registraron un importante aumento durante las dos décadas que gobernó la Concertación, reflejando algunas bajas importantes en el periodo dada la crisis financiera asiática que atravesó el país en el 97. De hecho, como se puede observar, en 1990 las exportaciones fueron de US\$8.373 millones y las importaciones de US\$7.742 millones. En cambio en 2010, al finalizar la última administración de este bloque de izquierda, alcanzaron los US\$71.029 millones, y los US\$58.956 millones, respectivamente. Vale decir, los envíos crecieron 748% y las importaciones, un 661%, durante las dos décadas.

VI. Inversión extranjera directa

La inversión extranjera de capitales también penetró de manera nunca antes vista en Chile, convirtiéndola en parte esencial de su estrategia de desarrollo. De hecho, en estos últimos años se observan varias políticas orientadas al mercado, que han creado importantes oportunidades para los inversores foráneos, de modo que ellos reciben un trato similar a los nacionales en casi todos los sectores y el ambiente de negocios es considerado muy bueno según diversos indicadores. Simultáneamente, existe un amplio consenso político sobre las ventajas de la inversión extranjera.

En Chile, la Inversión Extranjera está regulada por un conjunto de normas jurídicas que provienen de distintas fuentes, entre ellas la Constitución Política, leyes y tratados internacionales.

Un estudio de Leticia Garbi, denominado *Legislación de inversión extranjera: un análisis crítico y comparativo de Chile y Brasil*, da cuenta entre 1930 y 1940 la mayor parte de las inversiones extranjeras provenían de los Estados Unidos, y se dedicaban en especial a la minería, y en menor medida del Reino Unido, que se dedicaba a los servicios, como ferrocarriles, electricidad y teléfonos. De igual forma, reconoce que a mediados de los años 70 en la región no era bien visto la inversión extranjera. Es más, admite que muchos países adoptaron medidas para protegerse, puesto que se consideraban que ellos podían “afectar a la soberanía económica y política del país¹⁸⁷”.

¹⁸⁷ Garbi, Leticia. (2016). *Legislación de inversión extranjera: un análisis crítico y comparativo de Chile y Brasil*. Tesis de grado, 1, 118. 3 de mayo, De Universidad de Chile Base de datos

No obstante, Chile avanzaría en línea opuesta. Hugo Fazio en su libro *La transnacionalización de la economía chilena*, da cuenta que la propia Constitución política le concede protecciones muy relevantes al capital extranjero. En ese sentido, ella norma en base de que “los movimientos de capitales hacia y desde Chile, no pueden obstaculizados”. De hecho, se puede observar un importante crecimiento en los últimos años, registrándose un aumento explosivo en 1999¹⁸⁸.

“El significativo que el nuevo récord registrado en Chile se haya producido en un año en que el movimiento de capitales hacia los países en desarrollo se contrajo por la crisis vivida en la economía mundial, la economía chilena sufrió una prolongada recesión y, adicionalmente, se vivía un periodo electoral, que determinados actores trataron de presentar como generador de incertidumbres para el capital extranjero. Las explicaciones de este elevado flujo residen, en primer lugar, en los altos niveles de rentabilidad que el capital extranjero ha alcanzado en la economía chilena desde que comenzó a ingresar de nuevo masivamente en 1986; luego, en la caída en el valor de los patrimonios bursátiles, que les permitió apoderarse de activos en condiciones extraordinariamente ventajosas; y tercero, en el impulso que continuaron proporcionado los procesos privatizadores, llevados hasta el final de su mandato por el presidente Frei”¹⁸⁹.

El Informe 1998 sobre La Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe, preparado por la Cepal, da cuenta que Chile fue uno de los principales receptores de los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en la región, registrando ingresos, desde 1996, en torno a los US\$5.000 millones anuales, siendo la minería el sector que concentró la mayor cantidad de IED, básicamente de cobre y oro, que atrajo casi el 50%, principalmente orientados al desarrollo de nuevos proyectos durante el periodo de análisis.

De igual forma, dicho estudio identifica las principales orientaciones estratégicas de los inversionistas extranjeros basado principalmente en la explotación de recursos naturales destinados a la exportación, pues su interés se ha centrado en la producción de commodities; y por otro lado, también de actividades emergentes, como por ejemplo, la búsqueda de acceso a segmentos del mercado nacional o regional de alto potencial de crecimiento, principalmente en servicios y en algunas actividades manufactureras. En

¹⁸⁸ Fazio, Hugo. (2000). *La transnacionalización de la economía chilena*. Santiago: Lom Ediciones. P.20

¹⁸⁹ *Ibíd.*, p. 21.

algunos casos, incluso la búsqueda de elementos estratégicos (know how) a través de asociaciones o alianzas con empresarios locales¹⁹⁰.

INVERSIÓN DIRECTA CAPITALES

RÉGIMEN

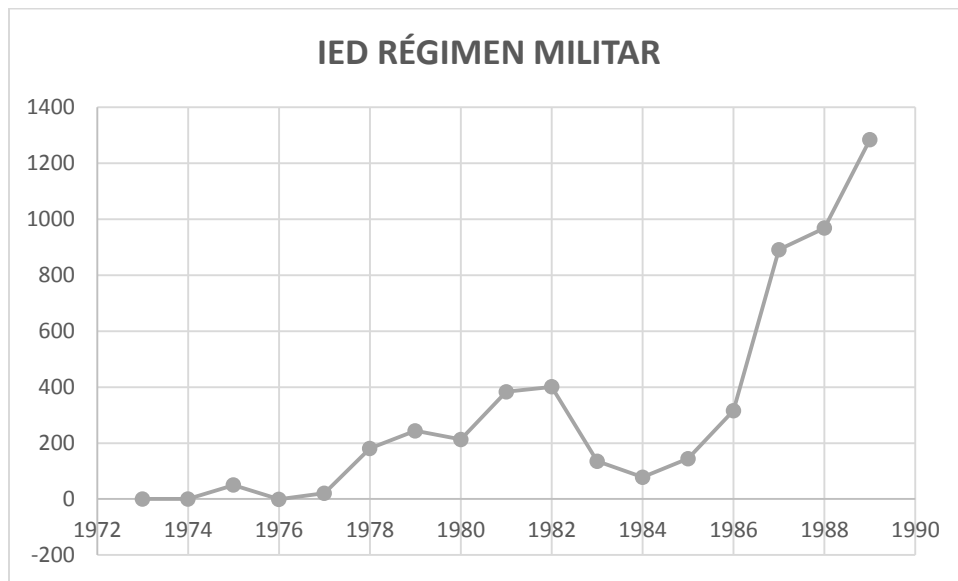
MILITAR

CONCERTACIÓN

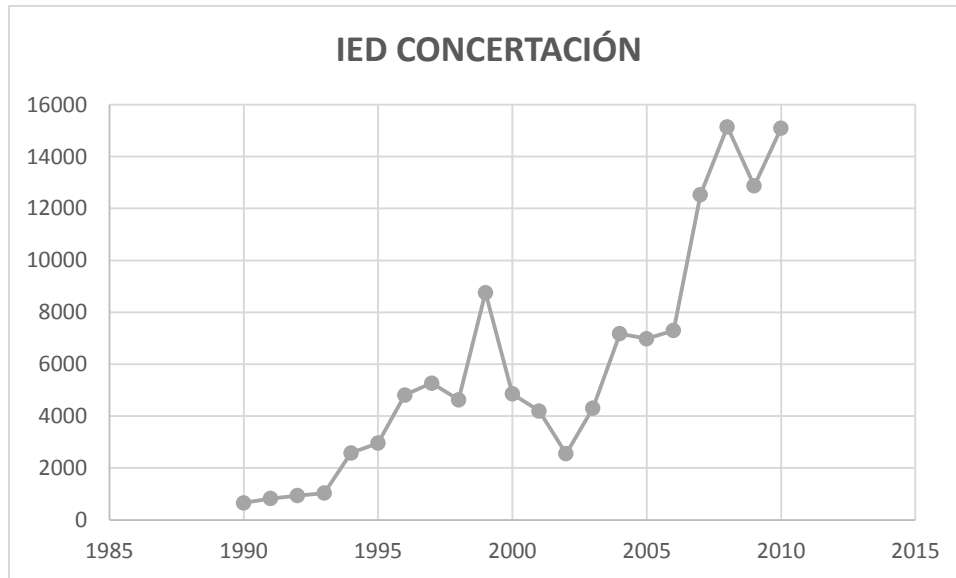
Años	IED	Año	IED (US\$M)
1973	-	1990	661
1974	-	1991	823
1975	50	1992	936
1976	-1	1993	1.034
1977	21	1994	2.582
1978	181	1995	2.957
1979	244	1996	4.815
1980	213	1997	5.271
1981	383	1998	4.628
1982	401	1999	8.761
1983	135	2000	4.860
1984	78	2001	4.200
1985	144	2002	2.550
1986	316	2003	4.307
1987	891	2004	7.173
1988	968	2005	6.984
1989	1284	2006	7.298
		2007	12.534
		2008	15.150
		2009	12.874
		2010	15.095

¹⁹⁰ Cepal. (S/A). Chile: mayor diversificación en los ingresos de inversión extranjera directa. 2 de abril, de Cepal Sitio web: <https://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/4262/notachile.htm>

Fuente: Foreign Direct Investment (million current US\$): Figures for 1900-1950 are from ECLAC (1964), US FDI only. Figure for 1900 corresponds to 1897. Figures for 1975-2010 are from IMF IFS (2011)¹⁹¹



¹⁹¹ Base de datos de historia económica de América Latina. (S/A). Exportaciones e importaciones chilenas. 7 de septiembre, de Moxlad Sitio web: <http://moxlad-staging.herokuapp.com/home/es>



Como observamos, la inversión extranjera directa ha desempeñado un rol de suma importancia en la economía de Chile desde fines del siglo XX, en función de las transformaciones que ha experimentado el país. Es más, durante la primera parte de la década de 1990 los flujos alcanzaron un promedio anual de US\$1.500 millones, para luego cerrar las dos décadas de administración con US\$15 mil millones.

Según una investigación del Departamento de Economía -Facultad de Ciencias Sociales de U. de la República de Uruguay, denominado Informe de país: *Chile Políticas hacia el capital extranjero 1990–2014*. Proyecto: Transnacionalización y desarrollo económico en América Latina, reconocen que a comienzos de la década de 1990, se consolidó el clima para la inversión extranjera, principalmente debido a la existencia de indicadores macroeconómicos positivos en la economía chilena, junto con el restablecimiento del sistema democrático.

En esa línea, admiten que atrajeron recursos financieros a nuevos sectores, tales como la agroindustria, celulosa y papel, de inversionistas poco comunes en el ámbito latinoamericano. Entre ellos, de Nueva Zelandia, Australia, Arabia Saudita, etc; y las inversiones hacia las actividades tradicionales, en particular la minería, encontraron

condiciones apropiadas para iniciar un ciclo de grandes inversiones que se extendió durante prácticamente todos los años noventa¹⁹².

“Es relevante destacar que uno de los mayores mecanismos de entrada de inversión extranjera directa durante los últimos años de la década del 80 y primer año de los 90 fue el mecanismo de conversión de deuda-capital. En 1985 el gobierno dictatorial estableció un programa para convertir endeudamiento externo en activos internos, en un contexto de una elevada deuda de Chile que era equivalente a 1,3 veces el PBI, involucrando un servicio financiero anual de US\$ 1.900 millones y transferencias netas a la banca comercial acreedora que alcanzaba a 5% del PIB. Se trataba de un programa de capitalización de deuda, en virtud del Capítulo XIX del Compendio de Normas de Cambios Internacionales de Chile, que estaba disponible para los residentes en el extranjero y diseñado para convertir el endeudamiento de mediano y largo plazo de residentes en Chile con bancos extranjeros. Estos últimos podían usar directamente sus pagarés representativos de préstamos o venderlos con un descuento en el mercado secundario internacional¹⁹³”.

En esa línea, el estudio muestra que la minería fue el sector que generó mayor interés para los inversionistas extranjeros. Es más, entre 1990 y 1995 concentró el 58% de los flujos totales de IED. Por otro lado, las manufacturas representaron el 15% del flujo total de IED, estando vinculadas a la industria de transformación de recursos naturales (agroindustria, alimentos y, papel y celulosa).

Después, hacia finales de la década del 90, la masiva llegada de IED hacia actividades de servicios comenzó a definir un renovado patrón de la presencia de las empresas transnacionales en la economía chilena, de modo que el sostenido repunte de las inversiones destinadas a las actividades de servicios se enfocó especialmente en el sector financiero, las telecomunicaciones y energía, según precisan. Como consecuencia, en el período 1996-2000, la minería, si bien mantuvo los grandes volúmenes de inversión, perdió protagonismo relativo.

A su vez, el análisis evidencia que dadas las fusiones y adquisiciones de empresas privadas nacionales por parte de compañías extranjeras (particularmente energéticas) y la

¹⁹² Departamento de Economía – Facultad de Ciencias Sociales de U. de la República de Uruguay. (S/A). Informe de país: Chile Políticas hacia el capital extranjero 1990–2014. Proyecto: Transnacionalización y desarrollo económico en América Latina, 1, 55. 3 de agosto, De Universidad de la República de Uruguay Base de datos.

¹⁹³ *Ibíd.*, p. 12.

privatización de algunos activos estatales en el área de las empresas sanitarias que se manifestaron en el sub-período 1996-2000, los servicios atrajeron 64% de los flujos de IED, en especial en las áreas de electricidad, gas y agua (27% del total) y el sector financiero (20%). Como resultado de esta dinámica y a diferencia de los años anteriores, en un porcentaje importante, las inversiones directas correspondieron a transferencias de propiedad y no contribuyeron a la ampliación de la capacidad productiva del país. Además, el sector manufacturero concentró poco más del 10% de los ingresos de IED.

Según su apreciación, la modificación en la orientación sectorial de las inversiones también provocó un cambio en el origen geográfico de los flujos. De este modo, exponen que en la primera mitad de la década de los noventa, dos tercios de los recursos provinieron de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y sólo un 15% se originó en la Unión Europea. En el período 1995-1999, en cambio, los flujos provenientes de Norteamérica fueron sólo un 37% del total, mientras que los de la Unión Europea llegaron a un 45%. Dentro de Europa el mayor inversor fue España, país que aportó un 30% de los flujos del período a través de importantes adquisiciones de empresas chilenas de servicios²⁹ (la expansión de Endesa España en Chile es el ejemplo más claro).

Ante esto, el análisis destaca que ello responde a la expansión del sector eléctrico del país (privatizado tempranamente en los años ochenta). Endesa España adquirió mediante operaciones consecutivas el control de Enersis y Endesa Chile, por más de US\$3.500 millones, y en 2000 AES Corp. (ET con sede en Estados Unidos) adquirió Gener, por 1.300 millones. Así, en sólo dos años las estrategias de expansión regional de las principales transnacionales transformaron de manera significativa la estructura de propiedad del sector eléctrico chileno (capital nacional vs. capital extranjero), según reconocen.

De igual forma, establecen que otro sector que recibió cuantiosas inversiones extranjeras es el de las telecomunicaciones, puesto que durante los años noventa grandes transnacionales del sector utilizaron a Chile para evaluar su expansión al resto de la región, de modo que el país recibió fuertes inversiones en distintos segmentos de las telecomunicaciones a lo largo de toda la década. Como resultado de este proceso en el año 2000 se encontraban establecidos en el sector importantes operadores como Telefónica España, Telecom Italia y la estadounidense BellSouth.

La banca fue otro sector que mencionan en este análisis, dado que experimentó una intensa penetración por parte de instituciones españolas, como el Banco Santander y el Banco Central Hispano, la que se sumó a la presencia de instituciones de Norteamérica como los estadounidenses Citibank, Chase Manhattan y BankBoston, y el canadiense Bank of Nova Scotia, entre otros bancos extranjeros.

Chile se configuró a fin de esta década como la cuarta economía receptora de IED (en términos absolutos) en América Latina, luego de Brasil, México y Argentina.

Ahora bien, respecto a la segunda década, admiten que el 2002, el ingreso de IED bajó abruptamente a medida que llegó a su término el ciclo de los megaproyectos mineros y se redujo el número de adquisiciones en servicios. No obstante, reconocen que Chile siguió siendo el país de mayor estabilidad macroeconómica en Sudamérica y paulatinamente se recuperaron los niveles de crecimiento e inversión. Dentro de los sectores que mayormente se asignaron los recursos están: minería; industria manufacturera; comercio; electricidad, gas y agua, construcción, transporte; agricultura, ganadería, pesca y silvicultura; establecimientos financieros, seguros y bienes, entre otros¹⁹⁴.

VII. Educación de mercado

La educación también desempeñó un papel clave en lo que respecta a la libertad del individuo a elegir en qué institución educativa puede proseguir sus estudios. Hoy en Chile la actividad educativa también rige bajo las leyes del mercado. De hecho, crear una universidad es muy accesible para cualquiera que quiera hacerlo, pues no se exige ningún monto mínimo de capital, sino que basta con realizar una escritura pública en una notaría y dejar una copia de ésta en el Ministerio de Educación (Mineduc)

La respuesta a la facilidad de montar un negocio en base a algo tan delicado como es la educación está en la Ley General de Educación: el artículo ocho garantiza que “el Estado tiene el deber de resguardar la libertad de enseñanza”, que “incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Esto significa que el Mineduc no puede negarle a nadie el registro de una institución del área. Eso sí, puede rechazarla si no

¹⁹⁴ *Ibíd.*, p. 15-20

cumple algún requisito, para lo cual debe revisar la solicitud y dar respuesta en 90 días. Si se corrigen las fallas, el registro pasa al Consejo Nacional de Educación¹⁹⁵.

Es importante mencionar que la “libertad de enseñanza” se mantuvo durante los mandatos de la Concertación. Esto, porque la herencia de Pinochet dejó establecida una ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, conocida como LOCE, que fue publicada en el Diario Oficial el 10 de marzo de 1990, donde su artículo 3°, establecía que el “Estado tiene, asimismo, el deber de resguardar especialmente la libertad de enseñanza”. Posteriormente, con las masivas manifestaciones que ocurrieron durante la primera administración de Bachelet, se modificó la ley LOCE, para pasar a una Ley General de Educación (LGE), pero sin embargo, en su artículo 8, mantuvo la libertad de enseñanza, precisando que ello “incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”, dando así cabida a que muchas más instituciones impulsaran negocios en base a ello.

Es más, la gran cantidad de instituciones de Educación Superior que obtuvo su autonomía durante la década del 90 hizo necesaria la implementación de un sistema que evaluara la calidad con posterioridad a la autonomía, y diera, en definitiva, un marco regulatorio que congregara todos los mecanismos de aseguramiento de la calidad.

Así, en 1999 nació la Comisión Nacional de Acreditación de Prepago (CNAP) con el fin de diseñar y proponer un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior y de conducir procesos experimentales de acreditación, entendiéndose esto como la evaluación de la calidad de ellas. Posteriormente, en 2006, se estableció un sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior y creó la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que reemplazó a CNAP, y se estableció como un organismo público de carácter autónomo, que es encargado de verificar y promover la calidad de las Universidad, Institutos Profesionales, y Centros de Formación Técnica.

En lo que respecta a la educación pública, la Constitución de 1980 reemplazó la “atención preferente del Estado en educación”, por un “Estado Subsidiario”, haciendo hincapié en la libertad de enseñanza y la libre elección de los padres. En 1981 un Decreto de Fuerza de

¹⁹⁵ Equipo de prensa. (2013). Fácil y barato: el proceso para fundar una universidad privada en Chile. 5 de marzo, de Radio Biobio Sitio web: <http://www.biobiochile.cl/noticias/2013/02/20/facil-y-barato-el-proceso-para-fundar-una-universidad-privada-en-chile.shtml>

Ley (DFL), en su artículo 4, determina que se determina la subsidiaridad del Estado al: determinar la gradual disminución del Aporte Fiscal Directo (AFD) a las universidades; instaurar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), y la incorporación del Crédito Fiscal Universitario (CFU). Con lo cual, los estudiantes chilenos pasan directamente a ser sujetos de crédito bancario. En 1994 un decreto lo volvería a modificar, mediante la ley 19.287, creándose el Fondo Solidario de Crédito Universitario, que está pensado en aquellos alumnos matriculados en la educación superior que no pueden financiar sus estudios.

Posteriormente, aparecerían otros tipos de financiamiento, como el Crédito con Aval del Estado (CAE), creado en 2005, que consiste en un la entrega de un crédito otorgado por el sistema financiero de la instituciones de la educación superior (IES), para alumnos que ingresan a primer año en algún establecimiento acreditado, también dirigido para alumnos con dificultades económicas.

VIII. Libertad de elección: la salud

Al igual que el sistema educativo, la Junta de Gobierno en su artículo 1° de la ley 19.350, establece que “el ejercicio del derecho constitucional a la protección de la salud comprende el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y a aquéllas que estén destinadas a la rehabilitación del individuo, así como la libertad de elegir el sistema de salud estatal o privado al cual cada persona desee acogerse”. De modo que nuevamente el principio de libertad prevalece como transable en el mercado.

Matías Goyenechea, cientista político, director de la Fundación Creando Salud, y Danae Sinclair, médica en especialización de psiquiatría, directora de la Fundación Creando Salud, en su artículo denominado *La privatización de la salud en Chile*, basan su análisis bajo dos premisas:

- a. La primera es relativa al tema de la libertad de elegir dónde y con quién atenderse, que en cierta forma sólo se cumple para aquellos que pueden pagarla. No obstante, para el resto de los chilenos la libertad de elección se traduce en una negación del derecho a la salud.
- b. Un segundo eje que ponen énfasis es respecto a que el Estado es siempre un aparato “ineficiente”. Bajo ese enfoque, es que para ellos surge el principio del “Estado subsidiario” y también la política de destinar enormes cantidades de recursos

públicos a las aparentemente más eficientes “soluciones privadas”. Que, a juicio de ellos, el sistema no genera soluciones más “eficientes” desde el punto de vista de las personas que necesitan atención, sino desde los intereses de las empresas que lucran con los derechos sociales.

Asimismo, aseguran que la salud privada ha tenido un “boom extraordinario” en Chile, donde, por una parte, se montó un sistema privado de aseguramiento de la salud, de donde surgen las llamadas Isapres; y, en paralelo, se incentivó la expansión de una extensa red de prestadores privados, tales como clínicas, laboratorios, etc., y donde, según observan, su crecimiento muchas veces fue “a expensas de dineros públicos” que se traspasan mediante convenios, como el GES (plan de Garantías Explícitas en Salud, ex AUGE) y otros mecanismos.

Asimismo, reconocen que durante el gobierno de Ricardo Lagos se inició lo que se llama “la integración vertical”, modelo a través del cual los prestadores (clínicas) y los aseguradores (Isapres) pertenecen al mismo dueño¹⁹⁶.

En ese sentido, ponen como ejemplo el caso de “Empresas Banmédica”, holding controlado por el grupo Fernández-León y empresas del Grupo Penta (Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín). Este holding es dueño de dos Isapres, Banmédica S.A. y Vida Tres, las cuales controlan un 26% del mercado, con casi 400 mil cotizantes y 360 mil cargas. Empresas Banmédica además es dueña de una gran cantidad de clínicas y prestadores de salud, donde destacan la Clínica Santa María, Clínica Dávila, Vidaintegra, Clínica Alameda, Clínica Vespucio, Clínica Biobío, Clínica Ciudad del Mar y HELP (también tienen porcentajes importantes en más clínicas nacionales e internacionales), destacando que las utilidades durante el 2011 de este holding alcanzaron más de \$43.000 millones.

Así, explican que en este modelo de negocios los “costos” de las Isapres son las ganancias de las clínicas, y estas a su vez están aumentadas por los traspasos de fondos públicos. Finalmente el dinero permanece en el holding.

“La ausencia de regulación del fenómeno durante los gobiernos de la Concertación -y la concentración económica que se ha generado- encuentra una posible explicación en los

¹⁹⁶ Goyenechea, Matías y Sinclair, Danae. (2013). La Privatización de la Salud en Chile. Políticas Públicas, 6, 52.

intereses transversales a toda la élite política en el negocio de la salud. Por poner sólo algunos ejemplos, entre 1994 y 2002 Integramédica contó en su directorio con el primer superintendente de Isapres del país (1990- 1994), Héctor Sánchez, como socio fundador, el cual actualmente es director ejecutivo del Instituto Salud y Futuro, de la Universidad Andrés Bello. Álvaro Erazo (PS), ex ministro de Salud (2008) y director de Fonasa (2000-2006) y Cesar Oyarzo (DC), también ex director de Fonasa (1994) y actual gerente de Integramédica (prestadora perteneciente al grupo) son ambos miembros del directorio del holding Cruz Blanca Salud. Por otro lado, La Asociación de Isapres, tiene contratos con la consultora Imaginación, ligada al ex ministro Enrique Correa (PS). Además, la Asociación de Isapres nombró al ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei, Eduardo Aninat (DC), como su presidente en diciembre de 2006, cargo que mantuvo hasta junio de 2010. Luego fue reemplazado por Hernán Doren, más cercano al oficialismo, quien fue director de la Isapre Consalud y presidió varias entidades vinculadas a la Cámara de la Construcción”¹⁹⁷.

A su vez, señalan que el negocio de las Isapres se trata en asegurar la selección de riesgo, que es un mecanismo en el cual seleccionan a sus afiliados, de modo que buscan maximizar su margen de utilidad al utilizar uno de los aspectos positivos de los seguros, vale decir, la capacidad de poder “predecir el comportamiento del riesgo a enfermar de la población” (en este caso de su cartera de afiliados). En la práctica, lo que hacen es identificar a los grupos más propensos a enfermar, cobrándoles más por sus planes de salud y así cada individuo compensa a la Isapre por asegurar su riesgo a enfermar. Es lo que ellos le llaman la “selección de riesgo”, que se realiza mediante las “tablas de factores de riesgo” la cual busca captar a todo individuo que le genere un beneficio económico (rico y sano), y tratará por todos los medios de expulsar a los que generen mayores costos (pobre y enfermo).

A juicio de ellos, es así como se consolida la segregación del sistema, que la comparan con el sistema educacional, donde se alza otra libertad, la de enseñanza, para crear un sistema donde hay escuelas para pobres y escuelas para ricos.

IX. Privatización: el caso del agua

Dentro del plan económico de los Chicago Boys la dictadura estableció, en 1981, un nuevo Código de Aguas que señala en su Artículo 5º: "Las aguas son bienes nacionales de uso

¹⁹⁷ *Ibíd.*, p. Goyenechea 38.

público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas"¹⁹⁸, siendo este el que se transa en el mercado hoy en día.

i. Problemática del asunto

Uno de los principales escollos que vive la sociedad chilena es en relación a la escasez hídrica, tras el uso irracional de los recursos naturales por parte de empresas mineras, forestales e hidroeléctricas, quienes –en mayor medida- son los culpables de la sequedad de ríos y napas subterráneas que abastecen de agua potable a sectores rurales y comunidades indígenas, siendo estas últimas las más afectadas por la escasez de agua, provocando emergencias agrícolas y hasta la muerte de sus animales.

Un ejemplo de ello lo constituyó la comunidad de Caimanes, un pueblo ubicado en la IV Región de Chile, el cual luchó por más de una década por sus derechos hídricos, dado que la minera del Grupo Luksic (Minera Los Pelambres) dejó sin agua toda una zona, luego de agotar los recursos hídricos y crear 3 relaves: El Chine, Los Quillayes y El Mauro, este último en Caimanes. Tras una larga disputa el pueblo de Caimanes fue favorecido por el fallo de la cuarta sala de la Corte Suprema del 21 de octubre de 2014 que exigía a la minera la devolución de las aguas del estero el Pupío tal como estaban antes de ser usadas por la Minera Los Pelambres.

Otro caso se constituye en 2005 cuando la DGA reconoció “daño por desecación” de Pampa Lagunillas, territorio de la comunidad aymara Cancosa, ubicada en la comuna de Pozo Almonte. En aquel lugar se ubican bofedales y vegas, ecosistemas de humedales de la prepuna andina que alberga gran biodiversidad y representa el sustento de la actividad agrícola y ganadera tradicionales de aquella comunidad. Estos territorios de propiedad ancestral fueron declarados Áreas de Desarrollo Indígena, según consta en el Decreto Supremo N°67 del año 2001, del Ministerio de Planificación y Cooperación. Sin embargo, esto no evitó las instalaciones para la extracción de aguas subterráneas de BHP Billiton para el proyecto minero Cerro Colorado, desecando el lugar y provocando la migración de gran parte de los pobladores hacia centros urbanos, en busca de trabajos asalariados.

¹⁹⁸Ley Chile. (1981). Código de Aguas. 10 de octubre, de Biblioteca del Congreso Nacional Sitio web: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5605>

Es más, en un artículo de prensa de la periodista Natalia Figueroa, publicado en el portal web de Radio Universidad de Chile, denominado *Privatización del agua: la causa de la crisis sanitaria detrás de los aluviones*, da cuenta de otro hecho puntual que sucedió tras el retraso de las labores de Aguas Andinas (dueña de derechos de aguas) para reponer el suministro de agua potable en las 33 comunas que se vieron afectadas por los aluviones que ocurrieron en la zona cordillerana -en febrero de 2017- en la Región Metropolitana, volvió a abrir nuevos cuestionamientos a la gestión de esta empresa que controla la producción y el tratamiento de las aguas en la región.

Dentro de su artículo expone distintas fuentes que critican el Código. Uno de ellos es el ingeniero agrónomo y representante del Movimiento por la Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la protección del Medio Ambiente (Modatima), Rodrigo Mundaca, quien asegura que “Chile es el único país del mundo que tiene privatizada tanto las fuentes como las gestiones del agua”.

En ese marco, la profesional indica que esto tiene sus antecedentes desde 1981, cuando se aprobó el Código de Aguas que estableció el carácter privado de los derechos de uso. Luego, en 1998, durante la administración de Eduardo Frei, se promulgó la ley 19.549 que modificó el régimen jurídico de la empresa sanitaria Aguas Andinas para iniciar su privatización, oportunidad que se mantuvo el 30% de la propiedad de uso público, algo que posteriormente, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se liberalizó al mercado al 100%. Finalmente, antes de terminar su mandato, Sebastián Piñera consumó las ventas de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso (Esva), de Bío Bío (Essbio), de Los Lagos (Essal) y de Aguas Andinas. Esta última empresa es controlada en un 50% por el grupo español Agbar, en un 13% por el grupo Luksic a través del Banco Chile y en un 10% por el Banco Itaú, entre otros inversionistas. Cifras que reflejan el negocio de un derecho humano que el Estado de Chile no garantiza. “Los intereses en mercantilizar este recurso, cada vez más escaso, son muchos y transversales entre los sectores políticos. Los vínculos entre las empresas sanitarias y los parlamentarios, también lo son”¹⁹⁹.

¹⁹⁹ Figueroa, Natalia. (2017). Privatización del agua: la causa de la crisis sanitaria detrás de los aluviones. 3 de marzo, de Radio Universidad de Chile Sitio web: <http://radio.uchile.cl/2017/02/28/desde-la-dictadura-a-pinera-el-camino-de-la-privatizacion-de-aguas-y-la-crisis-del-recurso/>

ii. Normativa vigente

Como sosteníamos, el actual marco legal e institucional que rige el uso y manejo de los recursos hídricos en Chile, está establecido en la Constitución política de 1980 y detallado en el Código de Aguas de 1981, estrechamente vinculado a la instauración del modelo neoliberal.

Así, la forma en que se llevó a cabo el proceso de privatización del agua fue a través del otorgamiento de derechos de aprovechamiento gratuitos y a perpetuidad a quien los solicite. Pues bien, de acuerdo a Matías Guerrero y Camila Cifuentes del Observatorio de Problemáticas Ambientales (OPA) en su artículo de opinión *Conflictos de agua en Chile: causas políticas de un problema ecosistémico*, los derechos quedaron clasificados como consuntivos, cuando el titular tiene el derecho de consumo de aguas sin que estas puedan reutilizarse superficialmente (por ejemplo, minería y agricultura), y no consuntivos, cuando el caudal debe ser devuelto al río (por ejemplo, centrales hidroeléctricas)²⁰⁰.

Por lo tanto, dicen que el Código no fijó límites a la concesión de derechos de uso, no estableció costos por la mantención o tenencia del recurso y no retiraba la concesión por no uso del agua (este último punto fue modificado el año 2005). Asimismo, este sistema disoció la propiedad del agua del dominio de la tierra en la que se encuentra, con la única condición de que no existiese un derecho previamente constituido.

“La Asamblea General de las Naciones Unidas establece en el año 2010 que el agua es un derecho humano básico e incurre en un abuso de derecho quien no lo destina a un aprovechamiento efectivo y beneficioso para la comunidad. Sin embargo, el Código de Aguas no establece prioridades entre diferentes usos del agua, dejando aquellas determinaciones a los particulares y al mercado, de modo que el consumo humano no es prioritario frente a otros usos. Además, se dejó al Estado sin mayores atribuciones de intervención y regulación del funcionamiento de este recurso y a las personas sin herramientas jurídicas para solicitar su derecho básico de acceso al agua”²⁰¹.

²⁰⁰ Guerrero, Matías y Cifuentes, Camila. (2013). “Conflictos de agua en Chile: causas políticas de un problema ecosistémico.” En: *El Mostrador*, 12 de octubre del 2013. Versión online: <http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2013/11/02/conflictos-de-agua-en-chile-causas-politicas-de-un-problema-ecosistemico/>

²⁰¹ Guerrero, Matías y Cifuentes, Camila. (2013). “Conflictos de agua en Chile”

iii. Mercado de las aguas

Respecto del mercado del agua, es importante reconocer que se ha configurado un verdadero monopolio, ya que el 90% de los derechos no consuntivos son propiedad de sólo tres grupos económicos: Endesa (empresa española), AES-Gener (empresa estadounidense) y Colbún (del grupo Matte). Inclusive, más de un 90% de las empresas sanitarias son privadas, constituyendo así el sistema tarifario de agua potable más caro de América Latina.

Asimismo, cabe destacar que de los cerca de 25 mil derechos de aprovechamiento de aguas entregados por la Dirección General de Aguas (DGA) en todo el país, los mayores se registran en el caso de las aguas superficiales y gran parte de ellas están en manos de grandes empresas, como también de asociaciones de canalistas en regiones puntuales.

La lista la encabeza la región de Aysén. Endesa lleva la delantera indiscutida con derechos por 3.212,640 m³/s. Otras empresas hidroeléctricas como AES Gener, Colbún y otras destacan también en el catastro de la DGA. Asimismo, hay mineras como Codelco y Escondida, además de empresas del rubro forestal como CMPC, según la información entregada por la repartición estatal dependiente del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Así, está el mapa hoy (según un catastro de 2008) replicado por Revista EI, y elaborado por Diario Financiero²⁰².

Región de Antofagasta:

- Codelco, derechos por 4,121 metros cúbicos por segundo (m³/s).
- Minera Escondida -de propiedad de BHP Billiton-, posee 1,919 m³/s
- Enaex, la firma de explosivos del grupo Sigdo Koppers, posee 1,506 m³/s.

Región de Coquimbo:

- Canalistas del Embalse Recoleta son punteros, con 39.400,010 m³/s.

Región de Valparaíso:

- Minera Valparaíso -perteneciente al grupo Matte- resalta con 30 m³/s.
- Hidroeléctrica Guardia Vieja, con 64,111 m³/s.

Región Metropolitana:

²⁰² Diario Financiero. (2008). Quiénes son los “dueños del agua” en Chile. 3 de agosto, de Revista EIE Sitio web: <http://www.revistaei.cl/2008/03/17/chile-quienes-son-los-duenos-del-agua-en-chile/>

- Grupo Matte, con CMPC, con 67 m3/s.
- Eléctrica AES Gener, con 113,395 m3/s.
- Chilectra, con 45 m3/s
- Sanitaria Aguas Andinas, con 25,580 m3/s

Región del Maule:

- Agua Endesa
- Colbún
- AES Gener

Región del Biobío:

- Endesa, con 558, 290 m3/s
- Alberto Matthei e Hijos, con 102 m3/s.

Región de Aysén:

- Endesa -que junto con Colbún pretenden levantar cuatro centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, que sumarían una capacidad superior a los 2.000 MW-, lleva la delantera con derechos por 3.212,640 m3/s.

Magallanes.

- Salmones Multiexport.

iv. Defensa del modelo

Sobre la defensa que ha tenido este modelo de otorgamientos, la institucionalidad pública ha dado a conocer los resultados alcanzados en el sector sanitario urbano de Chile:²⁰³

- Coberturas de agua potable: 100% con servicios continuos (24 horas) y cumpliendo la normativa de calidad.
- Cobertura de saneamiento: 98% en alcantarillado y 82% de tratamiento de aguas residuales.
- El 95% de la población urbana (14 millones de habitantes) con servicios de operadores privados. (El país se divide en 15 regiones y en general existe una empresa por región).
- Se aplican tarifas eficientes y de autofinanciamiento: Tarifa media por m3 1,3 US\$ por m3: considera agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

²⁰³ Espinosa Sarria, Magaly. (2015). "Regulación del sector sanitario en Chile." En: *Superintendencia de Servicios Sanitarios*, 12 de octubre 2015. Versión online: http://www.siss.gob.cl/577/articulos-7758_recurso_1.pdf

- Sistema de subsidio directo a las familias pobres.
- La privatización ha permitido el aumento en las coberturas de tratamiento de aguas servidas.
- El modelo sanitario desarrollado en Chile presenta importantes avances que superan ampliamente las metas de coberturas definidas por organismos internacionales.

v. Efecto lobby

En el Parlamento chileno hoy en día existen una decena de iniciativas importantes para modificar el Código de Aguas y alrededor de doce que pretenden realizar un cambio en la Constitución, la mayoría elevando a rango constitucional el dominio público de las aguas. Michelle Bachelet, en su segundo mandato, se mostró dispuesta ante el Congreso Pleno hacer modificaciones a dicho Código, sin embargo, se encontró con detractores de la propuesta que buscan mantener sus derechos otorgados por el Estado hace más de 30 años.

En concreto, la iniciativa gubernamental –ingresada como indicación a un proyecto que ya estaba siendo estudiado por la Cámara Baja- incluye un cambio de concepción para el otorgamiento de los nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, pasando de ser un derecho perpetuo, a un derecho con una extensión temporal limitada a un máximo de 30 años, que siempre se prorrogará, a menos que la Dirección General de Aguas (DGA) acredite el no uso efectivo del recurso.

Dicha propuesta está siendo estudiada en el Congreso, sin embargo, aunque en el último tiempo ha manifestado su interés por su aprobación, la discusión sigue detenida hace bastante tiempo. Ello demuestra el lobby que están haciendo los detractores de la iniciativa y el poco consenso que hay en el país para avanzar en esta problemática.

De hecho, en entrevista con el portal Ciper, Patricio Crespo, presidente de la Sociedad Nacional de la Agricultura, sostiene sobre dicha temática: “el Estado es absolutamente incapaz de hacerse cargo de nada en esta materia. No tiene experiencia, no tiene gente y estaría abandonando una cultura de siglos acumulada en pequeños, medianos y grandes empresarios agrícolas que han hecho de esta administración de aguas un lujo que es admirada en todo el mundo. La gente que viene a Chile y examina con ojo profesional, no con ojo político. Se admiran de que al Estado no le cuesta un peso regar anualmente 1 millón 400 mil hectáreas, con todo lo que ello implica: construcción, limpieza,

mantención”²⁰⁴. De igual forma, es importante destacar la campaña del “terror” que han hecho desde distintos sectores para no retomar el debate, haciendo mención que el Estado sería el peor administrador de ellas.

CAPÍTULO VII: ¿POR QUÉ SE DECIDIÓ CONTINUAR EL MODELO?

I. Contexto mundial

En una columna de opinión al diario electrónico El Mostrador, denominada *Por qué los gobiernos de la Concertación continuaron las políticas neoliberales*, el sociólogo chileno, Jorge Álvarez Chuart, asegura que la ciudadanía cuenta con innumerables demandas en lo relativo a educación, salud y otras prestaciones sociales que no fueron resueltas durante los 20 años que gobernó la Concertación. Más aún, tratándose de un conglomerado de centroizquierda.

En esa línea, sostiene que las respuestas en base a ello apuntan a aspectos tales como: “se avanzó en la medida de lo posible considerando la fragilidad de la democracia recién alcanzada” o “la oposición a los gobiernos de la Concertación no habría apoyado iniciativas en esa línea”.

No obstante, el investigador plantea dos cosas distintas respecto a ello. Lo primero hace una revisión al contexto histórico en que asumió el primer gobierno de la Concertación; pues estuvo precedido por el término del socialismo en los países de la órbita Soviética, hecho que impregnó todos los acontecimientos de la época y cuyos sucesos visibles fueron la instalación de la Perestroika -movimiento político iniciado por el último gobernante de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachov, para reformar la economía y el sistema político de la URSS, durante el año 1987- y la caída del muro de Berlín a fines de 1989.

Así, enfatiza que meses antes que volviera la democracia y asumiera la Concertación en Chile, en el mundo se observaba “como triunfaba el capitalismo por sobre el socialismo, o lo que es similar, el mercado derrotaba al Estado”. De este modo, argumenta que se comenzó a construir un ambiente ideológico que impregnaba a todos los sectores y que acuñaba como discurso “el mercado lo hace mejor que el Estado (...) o sino miren lo que

²⁰⁴ “Poner en duda la certeza jurídica de los derechos de agua es un error”. En: Ciper Chile, 12 de octubre. Versión online: <http://ciperchile.cl/2014/08/13/%E2%80%9Cponer-en-duda-la-certeza-juridica-de-los-derechos-de-agua-es-un-error%E2%80%9D/>

pasó en los países socialista”, discurso que incluso se instaló en un importante segmento de la izquierda chilena, de la denominada “izquierda renovada” grupo que abrazó sin escrúpulos las leyes del mercado.

En ese contexto, plantea que un gobierno nuevo, como el de la Concertación, difícilmente asumiría devolverle al Estado servicios sociales que habían sido traspasados al sector privado, ya que los medios de comunicación, los círculos intelectuales y los economista de la época; tanto como Chicago Boys, como los de Cieplan, proponían una línea contraria, haciéndose parte del discurso. Así, asegura que más que asumir el Estado acciones o servicios hacia la ciudadanía, se siguieron traspasando servicios estatales al sector privado, siguiendo la misma línea de lo que hacían los países emergentes en todo el mundo.

Sin embargo, apunta que esta tendencia ideológica se empezó a desplomar el año 2007 con la conocida crisis financiera de Estados Unidos y de Europa, denominada “crisis subprime”, donde el mercado financiero -sin regulaciones- prácticamente hizo quebrar las economías de los principales países desarrollados, lo que contagió a gran parte del mundo, y donde se tuvo que recurrir al Estado de cada país para que inyectara grandes cantidades de recursos a la economía, a fin de salvarla de una eventual bancarrota.

Según la visión del sociólogo, el “péndulo regresaba a su otra posición, desprestigiando al mercado y valorando el rol del Estado como motor del bienestar de las personas. En este sentido, no es casualidad que recién el año 2008 la Concertación, en el Gobierno de Michelle Bachelet, iniciara políticas donde el Estado asumía mayor protagonismo”²⁰⁵.

Garretón, por su parte, sostiene que lo que hizo la Concertación durante sus dos décadas fue la búsqueda de “correcciones” parciales de los modelos socioeconómico y político en un sentido progresista, por medio de un método político de acuerdos con la entonces oposición de derecha. Así, a través de esta estrategia, asegura que se “mejoró” sustantivamente la situación heredada de la dictadura, pero, al mismo tiempo, se consolidaron los rasgos

²⁰⁵ Álvarez, Jorge. (2011). Por qué los gobiernos de la Concertación continuaron las políticas neoliberales. 4 de junio, de El Mostrador Sitio web: <http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2011/09/15/por-que-los-gobiernos-de-la-concertacion-continuaron-las-politicas-neoliberales>

fundamentales del modelo neoliberal. Según su visión, el proyecto histórico de la Concertación quedó sin realizarse²⁰⁶.

De igual modo, comparte un mismo diagnóstico respecto a su par Álvarez -sobre la alternativa hegemónica que era el neoliberalismo en ese entonces- dado que se generalizó la idea de que no había modelo alternativo posible y solo era viable introducir paliativos o correcciones a esta doctrina.

Asimismo, coincide en que la caída de los socialismos en los países centrales y la derrota de los movimientos revolucionarios en la periferia, especialmente en América Latina, que generó que esta doctrina se impusieran como dominante en el pensamiento de los distintos gobiernos de la región. No obstante, las resistencias sociales, políticas, culturales e intelectuales fueron conformando otras alternativas, algunas de las cuales, aunque manteniendo grandes diversidades, fueron denominadas progresismo o nuevas izquierdas²⁰⁷, que surgen en respuesta a este sistema, los cuales asimilaron, al menos en el discurso, la propuesta europea de la socialdemocracia o la Tercera Vía.

II. Situación local

Otra segunda cuestión que pone énfasis Álvarez dice relación a la situación económica del país, ya que el año 1990 las arcas fiscales no contaban con reservas de divisas. Es más, sólo existían deudas (un 44,8% del PIB era la deuda pública de Chile). De hecho, el debutante gobierno concertacionista tuvo que efectuar un “pacto social” con la oposición para abordar un aumento de impuestos que permitiera incrementar en algo los recursos de las precarias prestaciones de salud y educación.

De este modo, observa que durante esa época el país no tenía muchos recursos para proponer “más al Estado”, cosa que duró varios años, sumado a ello al bajo precio de nuestro principal commodity, que es el cobre.

Por ende, en su percepción, si los gobiernos concertacionistas se proponían efectuar nuevas obras debía ser con la participación del sector privado, ya que las posibilidades de invertir del Estado no eran muy buenas. Más aún con una política fiscal que mantenía férreamente los equilibrios macroeconómicos. De este modo, las carreteras o autopistas, aeropuertos,

²⁰⁶ Garretón. *óp. cit.*, 10.

²⁰⁷ *Ibíd.*, p. 17 y 18.

recintos penitenciarios, etc., se hicieron con la inversión del sector privado. En otras palabras, dice que “aunque la Concertación hubiera querido traspasar servicios sociales que administraban los privados hacia el Estado, difícilmente hubiera podido”.

Paralelamente, añade que en 2006 la situación de estrechez cambió drásticamente, cuando el precio de la libra de cobre subió sobre los US\$3, y prosiguió aumentando, lo cual permitió obtener reservas de divisas y engrosar las arcas fiscales a niveles nunca antes vistos. De hecho, asegura que la primera administración de Bachelet “prescindió” del sector privado en la inversión de bienes públicos²⁰⁸.

Por su parte, el cientista político chileno, Carlos Huneeus, en su libro *La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet*, da cuenta que mucho se ha argumentado que la decisión de la continuidad tienen que ver, por una parte, con que uno de los legados del régimen autoritarios, como los senadores designados, le habría impedido a la Concertación impulsar los cambios institucionales en el Congreso Nacional al no contar con la mayoría requerida para impulsar los cambios²⁰⁹.

En Chile, la institución de los senadores designados, junto con la de senador vitalicio (solo dos ex-presidentes llegaron a ostentar este cargo: Augusto Pinochet y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Esta norma fue eliminada con las reformas constitucionales del año 2005, de Lagos) fue creada en la Constitución de 1980, la cual permitía la elección de 9 parlamentarios: 4 de ellos eran escogidos por el Consejo de Seguridad Nacional (4 ex comandantes en jefe –uno por cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros); 3 por la Corte Suprema; y 2 por el Presidente de la República (un ex ministro de Estado y un ex rector de universidad estatal o reconocida por el Estado).

Dicha institución tuvo existencia constitucional hasta el 2006, cuando fue eliminada del texto. Así, dentro de ellos, en el periodo legislativo que menciona el autor quedaron establecidos por la Corte Suprema, los independientes Ricardo Martín y Carlos Letelier; Ejército, el independiente Santiago Sinclair; por la Armada, el independiente Ronald McIntyre; por Carabineros, el independiente Vicente Huerta; Contraloría General de la

²⁰⁸ Álvarez., *óp. cit.*,

²⁰⁹ Carlos Huneeus. (2014). *La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet*. Santiago: Taurus.

República, la independiente Olga Feliú; Rector de la Universidad Austral, el RN William Thater; y ministro de Estado, el UDI Sergio Fernández.

En línea con lo referente a la profundidad del modelo, Huneeus sostiene que el equipo económico de Aylwin tomó la decisión de continuar el modelo casi de forma “voluntaria” por considerarla como la más “conveniente para lograr los objetivos de crecimiento y de generación de empleo, necesarios para alcanzar la estabilidad social que consolidaría a la democracia, pues otorgaría seguridad a los empresarios para seguir invirtiendo”, según reconoce.

A su vez, admite que por ese tiempo los economistas de Cieplan tenían miedo que se les pudiese generar un conflicto con los sindicatos, pese a que ellos habían quedado bastante debilitados durante el régimen que los antecedió. Más aún teniendo en cuenta la experiencia de sus vecinos, con Raúl Alfonsín (1983-1989), que debió enfrentar una dura oposición de los sindicatos, hasta el punto de hacer inviable su política de estabilización económica y que llevaría la derrota de su partido en las elecciones presidenciales de 1989, llegando incluso a tener que entregar el poder antes del fin del periodo constitucional. De hecho, detalla que las relaciones que los investigadores del Cieplan sostenían con el ministro de Economía argentino, Juan Sourrouille, acentuaron la preocupación de que Chile siguiera ese camino. Pero también da cuenta de que la situación de Chile era muy distinta a la de Argentina, cuya democratización estuvo dominada por el conflicto histórico entre peronistas y radicales.

Según evidencia en su investigación, Edgardo Boeninger, quien se desempeñó como ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres) en el periodo de Aylwin, en su libro *Democracia en Chile: lecciones para la gobernabilidad*, el programa económico-social de la Concertación consideraba ir “moderadamente hacia la izquierda”, de modo de “evitar el rechazo o la desconfianza de la clase media propietaria” y de quienes aspiraban a incorporarse en ella.

De igual modo, apunta que el programa estipulaba “un bienestar duradero para todos los sectores de la sociedad sólo podrá ser asegurado mediante un proceso de crecimiento económico dinámico y sostenido”, sin perjuicio de señalar también que la estabilidad de la

democracia requiere de una creciente igualdad en el acceso de oportunidades y beneficios para el desarrollo”.

Por otra parte, sostiene que el programa económico-social de la Concertación reflejó un cambio profundo de su partido, con la aceptación explícita de la economía de mercado y del rol de la empresa privada²¹⁰.

No obstante, para llegar a la democracia se estableció un largo recorrido que conllevó una serie de consensos en diversos ámbitos. En ese trayecto, comenta que hubo dos procesos que vinieron a encontrarse en los años posteriores del periodo autoritario:

- 1) la formación paulatina y la consolidación posterior de una oposición transformada finalmente en coalición política:
- 2) la institucionalización y desarrollo del proyecto político y económico del régimen militar. Sumado ambos dos, dice que se llevó a cabo el esperado fenómeno de la “reconstrucción de los consensos básicos”.

Así, se impulsó el restablecimiento de las confianzas personales y políticas entre los “enemigos” de ayer, que era, a su juicio, condición necesaria para revertir la polarización ideológica del 60. Por ende, la idea era avanzar hacia un consenso en relación a la economía, al descartarse tanto el proyecto socialista de planificación central y estatización de los medios de producción, como el comunitarismo o socialismo comunitario, como una alternativa de un orden económico para el país.

“Esta convergencia parcial en relación al orden económico, situada a nivel de principios generales, del concepto de economía mixta con aceptación de un rol significativo para la empresa privada y el mercado, fue suficiente, sin embargo, para sustentar en ese plano a las primeras expresiones orgánicas de convergencia política opositora, la Alianza Democrática. Aún más, este avance, aunque modesto en apariencia, facilitó o al menos no fue obstáculo para la instancia fundacional de reconstrucción de los consensos básicos a nivel nacional, el Acuerdo Nacional de 1985, el que, mirado en retrospectiva, sumó lo que hoy constituye la Concertación y el sector liberal conductor de Renovación Nacional”²¹¹.

²¹⁰ Boeninger, Edgardo. (1997). Democracia en Chile: lecciones para la gobernabilidad. Santiago: Andrés Bello. Página 365 y 358.

²¹¹ *Ibíd.*, p.368.

Pues bien, según observa, la plataforma económica de la Concertación por el No y con mayor profundidad y precisión, el programa de la candidatura de Aylwin, fueron los hitos que sustentaron la gestación de acuerdos nacionales. Así, las propuestas de su programa “comprometieron un marco para el orden económico que tuvo como propósito reducir el temor y la desconfianza del empresariado, y de la clase media propietaria”.

CONCLUSIONES

La historia reciente del país está estrechamente vinculada al golpe de Estado del '73, puesto que los economistas que apoyaron al régimen militar, muchos de ellos egresados de la Universidad de Chicago, impulsaron una profunda reforma económica²¹² que derribó todo lo que se había construido hasta ese entonces, siendo uno de los primeros países del mundo

²¹² Según Ffrench-Davis, las principales reformas llevadas a cabo fueron: eliminación de los controles de precios; liberalización del mercado financiero (tasas de interés y asignación de crédito); liberalización de los flujos internacionales de capitales; reducción del sector público; introducción de restricciones a las empresas públicas; privatización del sistema de pensiones y de parte del servicio nacional de salud; devolución de empresas y tierras expropiadas a sus antiguos propietarios; privatización de empresas públicas tradicionales; la supresión de derechos sindicales, y la reforma tributaria, que eliminó algunas distorsiones aunque favorecía discrecionalmente a ciertos sectores (al exportador, por ejemplo, se le devolvió el IVA).

en instalar lo que se conoce como neoliberalismo, que también se impuso en otros países de la región, a través de gobiernos de facto, como es el caso de Argentina y Uruguay. Más adelante sería replicado de forma democrática en países como Inglaterra, Estados Unidos, de la Unión Europea, y también por diferentes naciones de Latinoamérica.

Lo cierto es que la debutante doctrina económica realizó una considerable alteración en todo orden de estructuras, posicionando al mercado como eje central de la vida de las personas, buscando con ello que todo se rija en torno a las leyes de este.

Así, Chile le dio la bienvenida a la apertura comercial, facilitando el comercio exterior, disminuyendo trabas burocráticas y reduciendo tasas arancelarias; le hizo un guiño a los capitales extranjeros para que lleguen a invertir al país, entregándoles ciertas garantías constitucionales; reformó al sistema previsional, eliminando el de reparto e imponiendo uno de capitalización individual, donde los ahorros de las personas ahora se invierten en las empresas que cotizan en la bolsa de comercio de Santiago, vale decir, sus ahorros pasaron a convertirse en instrumentos del mercado financiero que se transan diariamente. También privatizó empresas estatales y generó una aguda transformación en el ámbito educacional (disminución del aporte fiscal a las Ues estatales, con la meta de que se autosustenten financieramente). En otras palabras, las universidades dejaron de ser gratuitas y se estableció un tipo de financiamiento con apoyo estatal.

Todo lo anterior bajo una nueva Constitución Política, aprobada por un plebiscito nacional en 1980 (aunque este se realizó sin registros electorales) que estuvo contenida en 120 artículos y 29 disposiciones transitorias, y que actualmente rige para una serie de áreas, como nacionalidad, derechos, Congreso Nacional, Poder Judicial, Banco Central, Servicio electoral, entre otras. En efecto, dentro de esta Carta Magna también se estableció un sistema binominal²¹³, que permitió que los dos bloques de mayor representación llegaran al

²¹³ Es importante mencionar que el sistema binominal se modificó, pasando a uno “proporcional” que debutó en las últimas elecciones parlamentarias de 2017, donde varios independientes pudieron ser electos, siendo el caso más emblemático el del Frente Amplio, una coalición política conformada por partidos y movimientos políticos de izquierda, liberales y ciudadanos que se plantean superar la dicotomía del bipartidismo chileno, conformada por la Nueva Mayoría (sucesores de la Concertación) y Chile Vamos (de la Alianza por Chile). Muchos de ellos son jóvenes políticos que buscan cambios importantes en todo ámbito de estructuras. De hecho, dos de sus fundadores fueron las caras visibles de los movimientos estudiantes de 2011, como Gabriel Boric y Giorgio Jackson. Su candidata presidencial, la periodista Beatriz Sánchez, alcanzó el tercer lugar con un porcentaje superior al 20% de votos.

Congreso Nacional, dado que el método establecía una especie de empate técnico, que, en la práctica, terminó por afectar a las minorías independientes. En consecuencia, el modelo económico pudo perdurar en el tiempo.

El triunfo del NO, en el plebiscito de 1988, le daría la posibilidad a la Concertación de Partidos por la Democracia gobernar por dos décadas, siendo representado por cuatro administraciones distintas, que destacaron por gobernar en función de un reformismo gradualista, que buscó enlazar las políticas de libre mercado con políticas sociales, bajo la consigna de crecimiento con “equidad”.

En efecto, los diferentes gobiernos de la centroizquierda consolidaron el modelo neoliberal de desarrollo económico heredado del régimen anterior, a través de distintas iniciativas legales, que fueron respaldadas por el Congreso Nacional, y también por la misma continuidad, en el sentido de no hacer modificaciones sustanciales. Entre ellas:

- Una potente apertura comercial, que consistió en la sanción de diversos Tratados de Libre Comercio (TLC) con distintos países del mundo, disminuyendo trabas burocráticas para su ingreso, y también con la fijación de un arancel de 6% (hoy está cercano a 0%), que generó un importante flujo comercial.
- Promoción de normativas claras y “eficaces”²¹⁴ para la llegada de inversionistas extranjeros, mayormente conocido como flujos de inversión extranjera directa (IED). Pues, durante esa época aterrizaron en el país importantes grupos económicos, para invertir en distintas áreas estratégicas, como por ejemplo, en el sector minero, servicios, electricidad, gas y agua, sector manufacturero, transporte y telecomunicaciones, comercio, construcción y agricultura y pesca, de modo que se avanzó en un marco legal que buscó simplificar los procesos de inversión.
- Se mantuvo el sistema previsional heredado del régimen anterior, dado que no se impulsó ninguna iniciativa legal para reformar el sistema²¹⁵.
- Durante sus mandatos se amplió la oferta educativa de instituciones privadas de educación superior, consolidándose la educación de mercado. De hecho, hoy en día

²¹⁴ Lo “eficaz” porque Chile es uno de los países de la región que en los últimos años ha concentrado el mayor ingreso de capitales extranjeros. Es más, en el periodo de la Concertación se ve una interesante alza de ella.

²¹⁵ Es importante aclarar que se avanzó en políticas que incluyeron a los sectores postergados, creando una nueva institucionalidad para ellos.

es muy fácil emprender en el negocio de la educación superior en Chile. Esto, dado que la Ley General de Educación (antes LOCE) garantiza en su artículo 8 que “el Estado tiene el deber de resguardar la libertad de enseñanza”, que “incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”, que, en la práctica, significa que el Ministerio de Educación (Mineduc) no puede negarle a nadie el registro de una institución del área²¹⁶. Asimismo, las universidades del Cruch (Consejo de Rectores) continuó siendo subsidiada por el Estado, a través del Aporte Fiscal Directo (AFD). No obstante, gran parte del financiamiento sale del bolsillo de los propios estudiantes, que muchas veces debieron endeudarse con la banca privada para poder acceder a la educación.

- En el ámbito de la salud, también la Constitución garantizó la “libertad de elegir”, vale decir, lo que se ampara es el derecho a hacer negocios con ella y no el derecho de la población a una vida sana, con lo cual se aumentó la cantidad de prestadores privados en la salud; manteniendo el sistema: “El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo (...) Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado” (Artículo N°9 Constitución 1980).
- Las aguas continuaron teniendo derechos perpetuos, tal como lo consigna el Código Civil de 1981, decretado por el régimen militar. Además, los servicios básicos de agua fueron privatizados durante los gobiernos de Frei y Lagos.

Son varias las aristas que podríamos seguir mencionando respecto al mantenimiento del mercado libre y la economía abierta bajo los gobiernos democráticos. Paralelamente, observamos que la Concertación se caracterizó por un manejo macroeconómico serio; de responsabilidad fiscal; y de un gasto social controlado, en el sentido en que no se avanzó en reformas estructurales profundas.

A nuestro juicio, la persistencia en el modelo fue continuado por factores locales y externos, los internos dicen más bien relación al acuerdo sostenido entre las fuerzas políticas que abandonaban el régimen, y que accedieron al plebiscito, quienes instaban a la

²¹⁶ Eso sí, puede rechazarla si no cumple algún requisito.

continuidad y no al cambio; también por la presión generada por los empresarios, que no querían perder parte de lo que se había “avanzado”, de modo de no volver a la época que antecedió al régimen; y el en marco internacional, porque el modelo estaba en pleno auge en distintos países del mundo, y, en cierta forma, comenzaba a dar resultados positivos para las arcas fiscales.

Respecto a los actores que avivaron el modelo, por una parte, señalábamos que las elites empresariales delinearon y continúan marcando el rumbo de la economía y política chilena. De hecho, en los últimos años se ha podido entrever cómo muchos grupos comerciales han financiado campañas políticas, su intenso lobby que ejercen en el Parlamento para hacer “dormir” iniciativas legales, o cómo han intercedido directamente con los congresales para establecer leyes a la medida de ellos.

Por otra parte, la oposición de ese entonces, denominada Alianza por Chile, es una acérrima defensora de la economía de libre mercado; ella pertenece a la centroderecha, y, en gran medida está constituida por los mismísimos Chicago Boys, también por militares, y por gran parte de las elites empresariales. Son un grupo político bastante conservador. Ellos se han destacado por la política de los consensos, en el sentido de ajustar las normativas legales en favor de las clases que ellos representan. Así, el empate técnico que se generaba en el Parlamento, por el antiguo sistema binominal, hacía que sí o sí debiesen llegar a un acuerdo para conseguir el quorum requerido y sancionar algún tipo de iniciativa legislativa.

Otro aspecto que distinguió a los gobiernos de la Concertación fue su énfasis en las políticas sociales, y su ímpetu en reducir la pobreza y la desigualdad. Si bien se avanzó a pasos agigantados en diversos tópicos, reduciéndola, dando una solución a las personas para sus pensiones, aumentando los programas sociales, o ampliando la cobertura en salud, entre otras medidas; gran parte de sus propuestas orientadas a garantizar “mayor igualdad” o “justicia social” quedaron solo en el discurso, dado que no hicieron reformas estructurales, de tipo “retroexcavadora”²¹⁷, para avanzar hacia un cambio de paradigma, pues mantuvieron intactas las bases del modelo, llegando, inclusive, a profundizarlo.

²¹⁷ En 2014, el senador Jaime Quintana, del PPD, miembro oficialista, acuñó este concepto. Su frase textual fue: "nosotros no vamos a pasar una aplanadora, vamos a poner aquí una retroexcavadora, porque hay que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura". Sus dichos fueron

Esto último se puede entrever dado que no se hizo ningún cambio en la Constitución de 1980, salvo pequeños matices, como la eliminación de los senadores designados, entre otros. No obstante, el principio de libertad figuró como inalterable, hasta el día de hoy.

De ahí a decir que se trató de un neoliberalismo “reformado”, o más bien, de un neoliberalismo “corregido”, como lo menciona uno de nuestros autores consultados, pues los cuatro mandatarios de la Concertación siguieron los lineamientos de la doctrina de Friedman, pero con un acento en lo social.

Ahora bien, entendiendo a la Tercera Vía como una propuesta que cobró mayor fuerza en Europa, y que buscó avanzar hacia la utilización del centro político para incentivar políticas radicales de profundización de la democracia, centrando sus lineamientos en tópicos como justicia social, distribución del ingreso y seguridad social, podemos deducir que el bloque socialdemócrata hizo eco de este discurso.

De hecho, lo plasmó en cada uno de sus Mensajes presidenciales que dieron cada año frente al Congreso Pleno en Valparaíso, donde hacían especial énfasis en su voluntad de avanzar en algunas de las pautas que establecía esta doctrina filosófica de pensamiento. Por ejemplo, en lo que respecta a los temas ambientales, que antes no había mayor conciencia sobre estas temáticas, de fortalecimiento democráticos de las instituciones, de educación de calidad, o de cómo enfrentarnos ante la globalización, de la importancia del capital privado, entre otras cosas.

En definitiva, creemos que la Concertación sí realizó una gran tarea en reinstalar formas democráticas en el país, incorporando más a la ciudadanía, por ejemplo, en lo que son los comités técnicos para abordar una ley de alta complejidad, como fue en su momento la reforma a la educación, reforma a las Isapres o al sistema de previsión social, donde cada

rechazados por gran parte del oficialismo (Nueva Mayoría), provocaron el repudio generalizado en la Alianza, y en gran parte del empresariado, al dar cuenta cuáles eran los planes políticos que sostenía el conglomerado oficialista de Bachelet en su segundo mandato. La frase es hoy muy utilizada, y ciertamente se observa como la clase política -en su conjunto- rechazó los dichos del parlamentario.

administración de turno convocó a los sectores más representativos y con la expertise del tema para abordar dichos tópicos.

Pero, también, hay muchos otros temas pendientes que resolver, como descentralizar al país, puesto que aún la decisión de designar a la autoridad de cada región, como los intendentes y gobernadores, son tomadas por el Ejecutivo, y no por la ciudadanía, salvo los Core (Consejeros regionales) que comenzaron a ser electos desde el 2013 cuando entró en vigencia la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional.

Además, sostenemos, que la Concertación mostró un evidente compromiso en avanzar hacia dar mayores garantías sociales, pero, en cierta forma, quedó plasmado solo en su retórica discursiva comunicacional, en el sentido de lo simbólico, más que en una política concreta. Pues, en la teoría, simuló cambios en el modelo, pero, en la práctica, su política avanzó hacia mayor apertura comercial, privatizaciones, educación de mercado, concesiones viales, y consolidar el mercado de la salud.

Frente a esto, creemos que hoy estamos ante un completo cambio de escenario en el país, donde entrevemos a una sociedad evidentemente dividida respecto al modelo de país que quiere seguir. Sin embargo, hay algo latente y es que la mayor parte de la ciudadanía, cada vez más empoderada, insta cambios en orden de una educación de calidad y equitativa, una reforma al sistema previsional, y más oportunidades laborales, que evidentemente será materia que deban establecer las nuevas autoridades que aterrizarán en La Moneda en 2018.

ANEXOS

I. Entrevista a Rolf Lüders

Rolf Lüders, ex ministro de Pinochet y profesor de Economía de la U. Católica:

“LA CONCERTACIÓN PROFUNDIZÓ LA INSERCIÓN DE LA ECONOMÍA CHILENA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES”

Rolf Lüders fue parte del grupo de economistas que impusieron el modelo económico que rige en Chile. Entre 1982 y 1983, dirigió como biministro de Hacienda, y de Economía del régimen militar. Destaca que el área de lo social ha sido el mayor cambio de orientación que ha tenido el modelo.

-¿Cómo describe el modelo que ustedes instauraron en el país?

-El modelo que se empezó a implementar en Chile a partir del pronunciamiento militar en septiembre de 1973, es el de una economía social de mercado, por sus características similares a la economía alemana de posguerra. Lo social de la expresión se refiere al tipo de intervención estatal, que en nuestro caso es subsidiaria. Y esta subsidiaridad se entiende esencialmente como la acción estatal –si costo efectiva- de corrección de fallas de mercado. Mientras duró el régimen militar en Chile (1973-1989) esta acción subsidiaria del Estado se entendió principalmente como la regulación orientada a perfeccionar el buen funcionamiento de los mercados, la provisión de bienes públicos, y la generación de las condiciones necesarias para que exista igualdad de oportunidades para todos. En la práctica, esta última acción se concentró en la focalización del gasto social, como educación, salud, vivienda pública y pensiones mínimas, en los segmentos de menores ingresos de la población.

-¿Cómo continuó el modelo la Concertación?

-En línea con la tarea iniciada por el régimen militar, la Concertación profundizó la inserción de la economía chilena en los mercados internacionales mediante un agresivo programa de rebajas de aranceles de importación, de acuerdos de libre comercio - incluyendo aquellos con EE.UU. y la Unión Europea-. De hecho, hoy el arancel promedio efectivo es de 0,9 por ciento, con lo que Chile es una de las economías más abiertas del orbe, y de liberalización prácticamente total de los flujos de capitales extranjeros. También se privatizaron la mayor parte de las empresas estatales de gran tamaño aún en manos del Estado en 1990; exceptuando a Codelco, la gran empresa productora de cobre chilena; ENAP, la petrolera estatal; y el Metro. Al mismo tiempo, se usaron las concesiones de obras públicas para realizar un ambicioso y exitoso programa de modernización de la infraestructura vial del país, que le cambió la cara.

-¿Cuál fue el mayor cambio de orientación de él?

-Se produjo en el área social y se fue acentuando a lo largo de los cuatro gobiernos de la Concertación. Se alteró el tipo de subsidiaridad aplicada, desde un enfoque orientado exclusivamente a igualar oportunidades mediante gasto social focalizado en los segmentos de población de bajos ingresos, a uno de subsidiaridad positiva. El objetivo de ésta fue permitir que cada uno de todos los chilenos llegara a tener los medios educacionales, de salud, de vivienda, etcétera, que les permitiera realizarse plenamente, lo que en la práctica

significó una fuerte expansión del gasto social para beneficio también de buena parte de la clase media.

-¿Cómo evalúa los resultados de estas políticas?

-Las reformas iniciadas por el régimen militar y las profundizadas y ampliadas por la Concertación, han dado resultados que no es posible sino considerar, objetivamente, como espectaculares. Así se reconoce internacionalmente, a pesar de que en Chile parecieran minimizarse esos logros. En efecto, el PIB per cápita, en comparación con los líderes mundiales en la materia, se ha más que duplicado desde los años 1970 y hoy el país puntea a la región al respecto. En materia de educación, Chile –después de haber sido del montón- indiscutiblemente tiene los mayores niveles de calidad y cobertura de América Latina. La lista de indicadores similares es interminable y quizás lo único que habría que agregar es que, a pesar de la significativa baja en los niveles de pobreza y de la persistente pero moderada tendencia a la reducción de la desigualdad, medida por el coeficiente Gini, en este siglo tal desigualdad –calculada en base a los ingresos monetarios, como normalmente se hace- sigue siendo relativamente alta en comparación con aquella de los países desarrollados. No sucede lo mismo, sin embargo, si se consideran además la tributación y los bienes y servicios provistos directamente por el Estado.

-¿Cómo observa el nuevo bloque político de Bachelet, denominado Nueva Mayoría?

-La Nueva Mayoría es nostálgica (y sus bases están en) la fracasada economía chilena de los años 1960 y comienzos de los 1970 en Chile y/o se inspira en algunos de los elementos de los sistemas, también fracasados, imperantes en algunos de los países de Europa Oriental de la posguerra, tal como lo acaba de reconocer implícitamente la misma mandataria en El Salvador. Hasta el momento las propuestas concretas de reforma de la Nueva Mayoría –que sin duda afectan a la libertad de escoger ciudadana- han sido muy resistidas, a menudo incluso por simpatizantes de la antigua Concertación, y están afectando notoriamente la tasa de crecimiento económica de Chile. Peor aún, después de décadas de un proceso exitoso de reconciliación nacional, estas reformas –no tanto por sus objetivos, sino por los medios propuestos- han vuelto a polarizar la opinión pública del país.

-¿Qué cambios habría que replantearse en nuestro modelo, tras el bajo desempeño económico que se ha visto en los últimos años?

-Lo que no hay que hacer para mitigar el ciclo –y, sin embargo, pareciera estar sucediendo- es vulnerar la regla fiscal y adoptar medidas que rigidicen, en vez de flexibilicen, el mercado laboral. Tampoco corresponde adoptar lo que se denominado tradicionalmente como políticas industriales, eso es, escoger a algunas industrias y subsidiarlas. Esto último sería aplicar la doctrina de la sustitución de importaciones, que tan nefastos efectos tuvo en Chile, al revés. No obstante, hay al menos dos medidas -coherentes con los principios de una economía social de mercado- que se podrían adoptar para disminuir la vulnerabilidad de Chile al ciclo económico. La primera consiste en fomentar ciertas acciones orientadas a aumentar la productividad a mediano y largo plazo de los insumos productivos, para facilitar así el desarrollo de actividades no basadas en recursos naturales, entre las que cabe destacar un aumento del apoyo estatal a la educación y la capacitación, y la eliminación de las barreras que hoy existen al desarrollo de la energía, por ejemplo. La segunda medida se basa en reducir los incentivos para expandir la producción de cobre a mediano y largo plazo, por ejemplo, mediante una sobretasa al actual royalty, por supuesto sólo aplicable a los nuevos yacimientos o a los aumentos de la tasa de extracción de los existentes. Esta última proposición no es gratis, pero es posible que la población valore en mayor grado una economía más estable, aunque resulte ser ligeramente menos productiva.

II. Entrevista a Gabriel Salazar.-

Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia y académico de la U. de Chile:

“EN CHILE SE HA IDO PROMOVRIENDO UNA CULTURA CONSUMISTA, DE COMPETITIVIDAD SOCIAL, INDIVIDUALISTA E INSOLIDARIA”

El destacado historiador nacional, Gabriel Salazar, hace hincapié en todos los gobiernos de la Concertación fueron profundizando el modelo económico heredado del régimen militar. Asimismo, hace una crítica en relación a la posición marginal que han dejado al sector industrial, dado que hoy nuestra economía depende fundamentalmente de la exportación de commodities y de los vaivenes económicos de China.

-¿Cómo observa el modelo económico chileno?

-La Concertación de Partidos por la Democracia ha profundizado el modelo económico neoliberal, legado por los Chicago Boys y Pinochet, por cuanto aceptó – festivamente- la masiva llegada del capital financiero internacional, entre 1993 y 1996, dado que adquirió, a bajo precio, la mayoría de las grandes empresas estatales que la tiranía militar vendió a precios irrisorios a grupos económicos chilenos, por ejemplo, las vinculadas a la siderurgia, la energía hidroeléctrica y las sanitarias; lo mismo que las empresas creadas ad hoc -como las que controlan los fondos previsionales y los de la salud-, manteniendo la legislación librecambista permisiva y abierta dejada por esa tiranía, como la base de la política económica de crecimiento. Asimismo, también siguió profundizando dicho modelo mediante la privatización de los recursos acuíferos, sobre todo en las zonas mineras del norte del país; lo mismo que las semillas y las zonas forestales, tales como las plantaciones para la exportación y se fue destruyendo el bosque nativo.

-¿Y en apertura económica?

-La Concertación firmó más de 24 tratados de libre comercio con cerca de 60 países distintos, lo que ha significado amarrar por largo tiempo la dependencia chilena del mercado internacional, en base a tratados de difícil y engorrosa revocación.

-¿Cómo se posiciona el sector industrial frente al neoliberalismo dominante?

-Este sector -que fue prácticamente destruido por Pinochet, se ha mantenido en una posición marginal, de modo que la economía chilena depende fundamentalmente de la exportación de commodities (sobre todo del cobre) y de los vaivenes económicos de China. La actual caída del precio del cobre (de 4,3 dólares la libra a 2,4) está provocando una severa contracción económica, ya que el país no exporta manufacturas con valor agregado. Al mismo tiempo, ha amparado la tendencia de los empresarios vinculados al retail -eje del actual sistema, que ya copó el mercado interno- a invertir sus enormes ganancias fuera del país, en lugar de hacerlo dentro, como en emprendimiento productivos.

-¿De qué forma la educación y la salud se insertan en este modelo?

-Se ha impuesto la mercantilización en áreas sensitivas del desarrollo social, como son la educación y la salud. A su vez, se ha ido promoviendo una cultura consumista, de competitividad social, individualista e insolidaria, particularmente en el sistema educacional.

-¿Cuál es su evaluación de este sistema?

-El éxito aparente de él se debe a la dudosa estabilidad del sistema político ('democrático'), la inundante oferta de créditos de consumo e hipotecarios lanzada por las grandes tiendas y los bancos. De hecho, hay 24 millones de tarjetas de crédito para una población activa de 6.5 millones, y el crecimiento de una deuda per cápita que en los quintiles 1 y 2 de la población, vale decir, los más pobres -que redondea hasta 9 veces el ingreso anual- se ha logrado una reducción de la pobreza material, desde un 35 % a un 14 %. Cabe consignar que el excepcional precio del cobre del período 2000-2014, le permitió al Estado disponer de grandes recursos para modernizar la infraestructura material de las ciudades y las carreteras, al paso que se producía un boom de la industria constructora de viviendas y oficinas. Hoy, todo ello es amenazado por la caída del precio del cobre y el alza inusitada del dólar con respecto al peso chileno.

III. Entrevista a Patricio Navia

Patricio Navia, cientista político chileno:

“TODOS LOS GOBIERNOS DESDE EL RETORNO DE LA DEMOCRACIA FUERON DE CONTINUIDAD DEL MODELO NEOLIBERAL”

El destacado cientista político y profesor de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Nueva York, además de escritor de varios libros de la realidad chilena, como Las grandes alamedas: el Chile post Pinochet; El gobierno de Ricardo Lagos la nueva vía chilena al socialismo, reconoce que los gobiernos de la Concertación ahondaron en el modelo heredado.

-¿De qué forma los gobiernos de la Concertación han profundizado el modelo económico de la dictadura?

-La profundización y mejora del modelo de libre mercado que se ha dado en Chile desde 1990 se evidencia en todos los ámbitos. Hoy hay un porcentaje superior de niños en particulares subvencionados que en 1990, cuando terminó la dictadura. Lo mismo ocurre con estudiantes en educación superior. La consolidación de la educación privada en Chile se ha dado desde 1990. En otros ámbitos ocurre lo mismo: el porcentaje de chilenos en el sistema de pensiones privado, AFP, se ha incrementado desde 1990. Las concesiones

privadas de infraestructura se han consolidado a partir de 1990. En ámbitos como inversión extranjera o tratados de libre comercio, el crecimiento se ha dado a partir del retorno a la democracia en 1990. Es verdad, no obstante, que el modelo tiene ahora un componente social que antes no existía. De ahí que sea correcto referirse a él como modelo social de mercado y no solo modelo de mercado. Como lo definiera Patricio Aylwin, es capitalismo con rostro humano.

-¿Cuáles, a su juicio, han sido las reformas más representativas de esta herencia?

-El foco de los gobiernos democráticos ha sido puesto en que el mercado es eficiente para generar riqueza, pero el Estado debe ir en ayuda de los que menos tienen para reducir la pobreza y a la vez debe establecer un sistema de regulación que permita proteger los derechos de los consumidores. Eso no siempre se ha hecho bien, ni de forma suficiente, pero las principales reformas al modelo económico han ido por el lado del papel de proveedor del Estado y de su papel regulador.

-¿Cuál de ellos promovió más medidas neoliberales?, ¿por qué?

-Todos promovieron distintos tipos de reformas neoliberales. Todos fueron construyendo a partir de lo que hicieron gobiernos anteriores. Sería injusto decir que uno promovió más reformas neoliberales que otros. EL Presidente Frei promovió las privatizaciones y las concesiones de infraestructura en su gobierno. El gobierno del Presidente Lagos impulsó con fuerza los acuerdos de libre comercio y también consolidó el modelo de las concesiones. El gobierno de Bachelet hizo una reforma de pensiones que ayudó a consolidar el sistema de las AFPs. Las reformas educacionales de todos los gobiernos de la Concertación ayudaron a reducir todavía más el lugar e influencia de la educación estatal.

-¿A qué responde el que ellos le hayan dado continuidad a este modelo? ¿Ha sido exitoso?

-Ha sido exitoso en reducir la pobreza y generar crecimiento. Eso es incuestionable. No ha sido exitoso en reducir la desigualdad. No ha aumentado la desigualdad, contrario a lo que dicen algunos críticos. Pero tampoco ha sido capaz de reducirla sustancialmente. La desigualdad en Chile solo ha disminuido de forma marginal, aunque hay mucho menos pobreza y más inclusión que nunca antes en la historia del país.

-El gobierno de Piñera ¿cómo se posiciona frente a este escenario? Sigue la misma línea de los anteriores periodos

-En términos generales, sí. Podría decirse que el gobierno de Piñera fue el quinto gobierno de la Concertación. O bien podríamos decir que todos los gobiernos desde el retorno de la democracia fueron de continuidad del modelo neoliberal implementado por la dictadura de Pinochet, pero con rostro humano y con democracia. Ahora bien, el gobierno de Piñera también quiso poner un sello de mayor eficiencia, que no siempre funcionó. De hecho, muchos de los escándalos en esa administración tuvieron que ver con problemas de mala gestión y con innumerables conflictos de interés que redujeron la capacidad del Estado de regular adecuadamente a los mercados.

-¿Cómo observa las medidas impulsadas por Bachelet en un inicio?, tras el deterioro económico de los últimos años: ¿Es posible hablar hoy de un giro hacia lo mismo que había antes?

-Bachelet llegó al poder con un discurso ambiguo que combinaba promesas de reformas y transformaciones profundas y algunas declaraciones que hacían pensar que su gobierno promovería cambios más graduales. Desde un inicio, esa ambigüedad se ha impuesto y la crisis actual responde a que todos han quedado decepcionados. El gobierno de Bachelet no ha impulsado todas esas transformaciones profundas que prometió, pero sí ha impulsado cambios y generado expectativas de cambios mayores que han asustado a los inversionistas y han deprimido el consumo. Como nadie sabe bien hacia dónde quiere avanzar Bachelet, la economía chilena se ha frenado mucho más allá de lo que debió haber sido el negativo efecto del enfriamiento de las economías de los países emergentes.

IV. Consulta vía mail a Alfredo Jocelyn-Holt.

Al ser consultado vía mail sobre esta temática, el destacado historiador y académico de Universidad de Chile, Alfredo Jocelyn-Holt, cuenta lo siguiente:

“Lo crucial desde un punto de vista político es que, sí, el modelo neoliberal ha sido mantenido desde que terminó la dictadura por gobiernos como los concertacionistas que supuestamente estaban en su contra, y, es más, fueron elegidos para cambiarlo, o así algunos interpretaron su mandato ciudadano. Con todo, se mantuvo e incluso se profundizó. Respecto a ello caben varias posibilidades:

- (1) Su mantención fue condicional a que hubiese "transición" a gobiernos plenamente civiles (se trataría, por tanto, de un acuerdo o pacto al menos tácito).
- (2) No habría existido otra alternativa mejor o imaginable según quienes tomaron la decisión de prolongarlo (el modelo anterior estaba agotado y no se le podía hacer revivir).
- (3) Se optó por hacer reformas graduales (más "sociales") porque en éstas y otras materias el país está dividido y no existiría consenso para hacer una reformulación total (ocurriría lo mismo con respecto al modelo político o constitucional).
- (4) El modelo habría contado con apoyo de concertacionistas quienes tendrían un discurso público y otro más técnico y/o privado terminando por prevalecer lo segundo. No las únicas posibles explicaciones y, en caso alguno, incompatibles unas con otras.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

- ALONSO, ALEJANDRO. (2001). *La Tercera Vía: Falacia o alternativa*. Buenos Aires: Longeseller.
- ARRIZABALO MONTORO, XABIER. (1995). *Milagro o quimera: la economía chilena durante la dictadura*. Madrid: Los libros de la catarata.
- BOENINGER, EDGARDO. (1997). *Democracia en Chile: lecciones para la gobernabilidad*. Santiago: Andrés Bello.

- CASTRO, SERGIO. (1992). *El Ladrillo: Bases de la política económica del gobierno militar chileno*. Santiago: Centro de Estudios Públicos (CEP).
- DÉLANO, MANUEL, TRASLAVIÑA, HUGO. (1989). *La herencia de los Chicago Boys*. Santiago: Ornitorrinco.
- ESCOBAR, SANTIAGO Y VARIOS AUTORES. (2009). *En Chile en la Concertación*. Santiago, Chile: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- FAZIO, HUGO. (2000). *La transnacionalización de la economía chilena*. Santiago: Lom Ediciones.
- FERRER, ALDO (1999). *De Cristóbal Colón a Internet: América Latina y la globalización*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- FOXLEY, ALEJANDRO. (1995). *Políticas económicas y Sociales en el Chile Democrático*. Santiago: Cieplan.
- FRIEDMAN, MILTON. (1966), *Capitalismo y libertad*, Madrid: Rialp
- FRIEDMAN, MILTON. (1980). *La libertad de elegir*. Barcelona: Grijalbo
- FFRENCH-DAVIS, RICARDO. (2003). *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: tres décadas de política económica en Chile*. Santiago: LOM ediciones.
- GÁRATE, MANUEL (212). *La Revolución capitalista de Chile (1973-2003)*. 2ª ed. Santiago: Universidad Alberto Hurtado.
- GAUDICHAUD, FRANCK (2015). *Las fisuras del neoliberalismo maduro chileno*. 1a ed. - Buenos Aires: CLACSO.
- GARRETÓN, MANUEL ANTONIO. (2012). *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010*. 1º Edición, Santiago: Editorial Arcis-Clacso-Prospal
- GUIDDENS, ANTHONY. (1999). *La tercera vía: la renovación de la socialdemocracia*. Madrid: Taurus Ediciones.
- HUNEEUS, CARLOS. (2014). *La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet*. Santiago: Taurus.
- KLEIN, NOEMI. (2007). *La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre*. Barcelona, España: Paidós Ibérica.
- LARROULET, CRISTIÁN Y OTROS AUTORES. (2011). *Reformas económicas e instituciones políticas: la experiencia de la Misión Klein-Saks en Chile*. Santiago de Chile: Universidad el Desarrollo.

- LAWNER, MIGUEL; SOTO, HERNÁN; SHATAN, JACOBO. (2008). *Salvador Allende: presencia en la ausencia*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- LÜDERS, ROLF. (2015). *Milton Friedman: La vigencia de sus contribuciones: Metodología, Teoría y Política Económica*. Santiago: Ediciones UC.
- RAPAPORT, MARIO (2013). *En el ojo de la tormenta: la economía política argentina y mundial frente a la crisis*. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- WEBER, MARX. (1979). *El político y el científico*. Madrid: Alianza, 5ª ed.
- 50MINUTOS.ES. (2016). *La Guerra Fría: El largo conflicto que dividió al mundo en dos bloques*: 50Minutos.es.

INFORMACIÓN EN LÍNEA

- CEPAL. *Chile: mayor diversificación en los ingresos de inversión extranjera directa*. Cepal. Sitio web: <https://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/4262/notachile.htm>
- EDUCAR CHILE. (2012). Modelo económico de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). 4 de septiembre, de Ministerio de Educación. Sitio web: <http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=217194>
- ESPINOSA SARRIA, MAGALY. (2015). *Regulación del sector sanitario en Chile*. En: Superintendencia de Servicios Sanitarios, 12 de octubre 2015. Versión online: http://www.siss.gob.cl/577/articles-7758_recurso_1.pdf
- GÓMEZ LEYTÓN JUAN CARLOS GÓMEZ. (2007). *Chile: 1990-2007 Una Sociedad Neoliberal Avanzada*. 20 de agosto, de Universidad ARCIS. Sitio web: <http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/21/2104-GomezLeyton.pdf>
- GRUPO COPESA. (S/F). Gobierno de Patricio Aylwin. ICARITO. <http://www.icarito.cl/2009/12/407-6200-9-gobierno-de-patricio-aylwin-199019947.shtml/>
- ICARITO. (S/A). Michelle Bachelet Jeria. 2 de septiembre, de Copesa. Sitio web: <http://www.icarito.cl/2010/03/237-8966-9-bachelet-jeria-michelle.shtml/>
- MEMORIA CHILENA. (S/A). Partido Socialista de Chile. 18 de septiembre, de Biblioteca Nacional de Chile. Sitio web: <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3396.html>
- MEMORIA CHILENA. (2017). Convenio UC - Chicago. 16 de mayo, de Biblioteca Nacional de Chile. Sitio web: <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-93003.html>

REVISTAS ACADÉMICAS

- CALVENTO, MARIANA. (2006). *Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación con las temáticas sociales y sus efectos en América Latina*. Revista de Ciencias Sociales Convergencia: Toluca.
- COVARRUBIAS BESA, SEBASTIÁN. (Julio 2004). *Gerencia Pública Económica El Gobierno de Ricardo Lagos Escobar*. Documentos de Facultad.
- GOYENECHEA MATÍAS Y SINCLAIRE, DANAE. (2013). *La Privatización de la Salud en Chile*: Políticas Públicas.
- GÓMEZ LEYTÓN, JUAN CARLOS (2006) “*Ciudadanía en los tiempos del libre mercado*” en León Aravena, Javier y otros (editores): *Discursos y Practicas de Ciudadanía*. Chile: Ediciones Universidad del Bío Bío.
- KORZENIEWICZ, ROBERTO PATRICIO Y WILLIAM C. SMITH. (2000). *Los dos ejes de la tercera vía en América latina*: en Colombia Internacional.
- THORNLEY, A. (2003). *El Caso Británico: del Thatcherismo a la Tercera Vía*: Urban.

TESIS DE GRADO

- CALDERÓN SEGUEL, MATÍAS. (2008). *Trayectoria del capitalismo neoliberal en Chile*. Tesis de grado. De Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Base de datos.
- CEA, GONZALO. (2012). *Impacto de la suscripción de TLC en la exportación de productos manufacturados de Chile*. Tesis de grado, 1, 88. 7 de junio, De Universidad de Chile Base de datos.
- GARBI, LETICIA. (2016). *Legislación de inversión extranjera: un análisis crítico y comparativo de Chile y Brasil*. Tesis de grado, 1, 118. 3 de mayo, De Universidad de Chile. Base de datos.
- GAVILÁN CAMPOS, FRANCISCO. (2013). *Antecedentes del neoliberalismo en Chile (1955-1975): el autoritarismo como camino a la libertad económica*. Santiago. Tesis de grado. Universidad de Chile. Facultad de Derecho.
- NÚÑEZ, LORENA Y VARIOS AUTORES. (2012). *Trabajo descriptivo sobre los programas de gobierno de la concertación, sus iniciativas para cumplirlos y los resultados obtenidos*. Santiago, Tesis de grado. De Universidad Academia de Humanismo Cristiano Base.
- RODRÍGUEZ FISSE, HERNÁN. (2005). *Grupos de interés y Lobby en Chile*. Santiago. Tesis de posgrado. Universidad de Chile.

PROGRAMAS DE GOBIERNO

- CONCERTACIÓN DE PARTIDOS POR LA DEMOCRACIA. (1989). *Programa de gobierno Patricio Aylwin (1990-1994)*. Biblioteca Nacional de Chile.
- BACHELET JERIA, MICHELLE. (2005). Programa de gobierno de Michelle Bachelet. Programa de gobierno. El Mercurio, (emol, especiales) Base de datos.
- PROGRAMA BÁSICO DE GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR. Candidatura Presidencial de Salvador Allende.

EDITORIALES

- Editorial: “Frenando el factor inflacionista fiscal”, El Mercurio, 08-08-1959, p. 3. Citado por: Soto, Á., El Mercurio y la difusión del pensamiento político económico liberal 1955-1970, Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, 2003.

REPORTAJES PERIODÍSTICOS

- FIGUEROA, NATALIA. (2017). *Privatización del agua: la causa de la crisis sanitaria detrás de los aluviones*. Radio Universidad de Chile Sitio web: <http://radio.uchile.cl/2017/02/28/desde-la-dictadura-a-pinera-el-camino-de-la-privatizacion-de-aguas-y-la-crisis-del-recurso/>
- GARRIDO, CLAUDIO. (2016). Las políticas del gobierno de Lagos que profundizaron la concentración económica. 2 de agosto, de Radio Universidad de Chile Sitio web: <http://radio.uchile.cl/2016/07/15/las-politicas-del-gobierno-de-lagos-que-profundizaron-la-concentracion-economica/>
- KORNBLUH, PETER. (2010). *Las inéditas cintas de Nixon sobre Chile y Allende: El lenguaje del imperio*. 15 de agosto, de Ciper Chile Sitio web: <http://ciperchile.cl/2010/06/30/las-ineditas-cintas-de-nixon-sobre-chile-y-allende-el-lenguaje-del-imperio/>
- SEPÚLVEDA, NICOLÁS. (2017). Nuevas boletas de pesqueras: \$445 millones pagaron Lota Protein, Asipes y Blumar a políticos. 6 de mayo, de Ciper Chile Sitio web: Nuevas boletas de pesqueras: \$445 millones pagaron Lota Protein, Asipes y Blumar a políticos

NOTICIAS PRENSA

- DIARIO FINANCIERO. (2008). Quiénes son los “dueños del agua” en Chile. 3 de agosto, de Revista EIE Sitio web: <http://www.revistaei.cl/2008/03/17/chile-quienes-son-los-duenos-del-agua-en-chile/>

- EQUIPO DE PRENSA. (2013). Fácil y barato: el proceso para fundar una universidad privada en Chile. 5 de marzo, de Radio Biobio Sitio web: <http://www.biobiochile.cl/noticias/2013/02/20/facil-y-barato-el-proceso-para-fundar-una-universidad-privada-en-chile.shtml>
- EQUIPO DE PRENSA RADIO COOPERATIVA. (2004). Presidente Lagos promulgó el Plan AUGE en consultorio de Santiago. 2 de agosto, de Radio Cooperativa Sitio web: <http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/salud/auge/presidente-lagos-promulgo-el-plan-auge-en-consultorio-de-santiago/2004-08-25/185512.html>

COLUMNAS DE OPINIÓN

- ÁLVAREZ CHUART, JORGE. (2011). *Por qué los gobiernos de la Concertación continuaron las políticas neoliberales*. 4 de agosto, de El Mostrador Sitio web: <http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2011/09/15/por-que-los-gobiernos-de-la-concertacion-continuaron-las-politicas-neoliberales/>
- BRUNNER, JOSÉ JOAQUÍN. (2015). “Ideologías políticas: de la Concertación a la Nueva Mayoría”. 12 de junio 2016, de El Libero Sitio web: <http://ellibero.cl/opinion/ideologias-politicas-de-la-concertacion-a-la-nueva-mayoria/>
- EYZAGUIRRE, SYLVIA. (2017). *¿Dónde quedó la Tercera Vía?. 1 de octubre 2017, de Centro de Estudios Públicos*. Sitio web: <https://www.cepchile.cl/donde-queda-la-tercera-via/cep/2017-04-04/153531.html>
- GUERRERO, MATÍAS Y CIFUENTES, CAMILA. (2013). *Conflictos de agua en Chile: causas políticas de un problema ecosistémico*. En: El Mostrador, 12 de octubre del 2013. Versión online: <http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2013/11/02/conflictos-de-agua-en-chile-causas-politicas-de-un-problema-ecosistemico/>
- SOTO PÉREZ, CARLOS (2013). “40 años de modelo neoliberal en Chile”. Radio U. de Chile, <http://radio.uchile.cl/2013/10/07/40-anos-de-modelo-neoliberal-en-chile/>.

MENSAJES Y DISCURSOS PRESIDENCIALES

- ALYWIN, PATRICIO. (1990). Mensaje Presidencial. 9 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile. Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/19900521.pdf>
- ALYWIN, PATRICIO (1991). Mensaje Presidencial. 9 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile. Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/19910521.pdf>
- ALYWIN, PATRICIO (1992). Mensaje Presidencial. 9 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile. Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/19920521.pdf>

- ALYWIN, PATRICIO. (1993). Mensaje Presidencial. 9 de septiembre, de Congreso Nacional de Chile. Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/19940521.pdf>
- FREI RUIZ TAGLE, FREI. (1994). Mensaje presidencial. 10 de septiembre, de Congreso Nacional. Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/19940521.pdf>
- LAGOS ESCOBAR, RICARDO (1998). Programa de gobierno: para crecer con igualdad. De Programa de gobierno. Base de datos. Biblioteca Nacional.
- LAGOS ESCOBAR, RICARDO (2000) Discurso presidencial 8 de septiembre, de EMOL. Sitio web: <http://www.emol.com/noticias/todas/2000/11/01/37124/discurso-del-presidente-ricardo-lagos.html>
- LAGOS ESCOBAR, RICARDO. (2001). Mensaje Presidencial. 8 de septiembre, de Congreso Nacional. Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/20010521.pdf>
- LAGOS ESCOBAR, RICARDO. (2002). Mensaje presidencial. 5 de mayo, de Congreso Nacional. Sitio web: [file:///C:/Users/ABC/Downloads/20020521%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ABC/Downloads/20020521%20(1).pdf)
- LAGOS ESCOBAR, RICARDO. (2004). Mensaje presidencial. 5 de mayo, de Congreso Nacional. Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/20040521.pdf>
- BACHELET, MICHELLE. (2007). Mensaje presidencial. 5 de mayo, de Congreso Nacional de Chile. Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/20070521.pdf>.
- BACHELET, MICHELLE. (2008). Mensaje presidencial. 5 de mayo, de Congreso Nacional. Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/20080521.pdf>.

ARCHIVOS PARTIDOS POLÍTICOS

- PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO (PDC). (1992). Doctrina del PDC. de Memoria chilena. Sitio web: <http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/mc0023297.pdf>
- PARTIDO SOCIALISTA (PS). (1936). Programa Partido Socialista. Sitio web: <http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0000542.pdf> Página 5.
- PARTIDO SOCIALISTA (PS). (2003). Estatuto del Partido Socialista de Chile. Sitio web: <file:///C:/Users/ABC/Downloads/Estatuto PartidoSocialista de Chile.pdf>
- PARTIDO POR LA DEMOCRACIA. (2012). Declaración de principios. 12 de marzo, de PPD Sitio web: <http://www.ppd.cl/consejo-ideologico/declaracion-de-principios-3>
- PARTIDO RADICAL SOCIAL DEMÓCRATA. (S/A). Declaración de Principios. Sitio web: <http://www.partidoradical.cl/declaracion-de-principios/>

BASE DE DATOS

- CEPAL. CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas

- Base de datos de historia económica de América Latina. (S/A). Exportaciones e importaciones chilenas. 7 de septiembre, de Moxlad Sitio web: <http://moxlad-staging.herokuapp.com/home/es>
- DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA – Facultad de Ciencias Sociales de U. de la República de Uruguay. (S/A). *Informe de país: Chile Políticas hacia el capital extranjero 1990–2014. Proyecto: Transnacionalización y desarrollo económico en América Latina*, 1, 55. 3 de agosto, De Universidad de la República de Uruguay. Base de datos.

ENTREVISTAS

- ENTREVISTA A GABRIEL SALAZAR, HISTORIADOR CHILENO Y PREMIO NACIONAL DE HISTORIA.
- ENTREVISTA A CON ROLF LUDERS, EX CHICAGO BOYS, Y ES MINISTRO DE HACIENDA Y ECONOMÍA DE PINOCHET.
- ENTREVISTA CON EL POLITÓLOGO CHILENO, PATRICIO NAVIA.
- CONSULTA A ALFREDO JOCELYN-HOLT.